Gaceta del Senado

Año I	Legislatura LXI	Martes 8 de diciembre de 2009	*No. 66* **TOMO III**

C O N T E N I D O TOMO III

INICIATIVAS DE CIUDADANOS SENADORES

558 Del Sen. Santiago Creel Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

566 Del Sen. Alfonso Elías Serrano, a nombre propio, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a Ley General de Población

577 Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

668 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 89, 90, 115 y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

680 Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales

689 De los Senadores Carlos Lozano de la Torre y Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal

691 De los Senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley del Banco de México, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la Ley de Instituciones de Crédito

695 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud

698 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social

703 De los Senadores Rosalinda López Hernández, José Luis Máximo García Zalvidea y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

705 Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

712 Del Sen. Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

716 Del Sen. Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

718 Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 165 de la Ley Federal del Trabajo

721 Del Sen. Eduardo T. Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

728 Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 192 y se reforma el artículo 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

733 De los Senadores Federico Döring Casar y Minerva Hernández Ramos, la que contiene proyecto de decreto por el que se anexa un Capítulo IV al Título Cuarto en Gasto Federalizado, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

740 Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

744 Del Sen. Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

750 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal y de la Ley de Aguas Nacionales

772 De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS SENADORES

796 Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar se les condonen los adeudos pendientes a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur

799 Del Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal un Informe con respecto al status y manifestaciones de impacto económico y regulatorio que guarda el *"Anteproyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería"*

802 De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, José Luis García Zalvidea y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones

803 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chiapas y al Procurador General de Justicia de ese estado a esclarecer el asesinato del ciudadano, Mariano Abarca Roblero

805 De los Senadores Luís Alberto Coppola Joffroy y Santiago Creel Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer la práctica en la República Mexicana de "La Charrería" y las cabalgatas en los Estados de la República

809 De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones realizadas en materia de supervisión y vigilancia de aquellas instituciones de asistencia social dedicadas a la atención de personas que padecen alcoholismo o farmacodependencia

810 Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para exhortar y solicitar al Ejecutivo Federal frene el alza indiscriminada de precios de los productos de la canasta básica

812 De los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Sebastián Calderón Centeno y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explicar el decreto publicado el 17 de noviembre del 2009 en el que se indica el cambio de topónimo de "Isla Cerralvo" por "Isla Jacques Cousteau"

815 Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas a transparentar y garantizar la

impartición de justicia y el apego a la legalidad en el caso de diversas personas pertenecientes al municipio de Oxchuc, Chiapas

816 Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a no incluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil

818 Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar los hechos de agresión ocurridos en contra de un grupo de extranjeros cubanos asegurados en la delegación migratoria del estado de Querétaro

820 De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas inmediatas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad, en particular en la región costera e insular del estado de Campeche

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE FEDERALISMO

823 Convocatoria a la segunda sesión de trabajo de la comisión a celebrarse el próximo jueves 10 de diciembre.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS SENADORES

DEL SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.



SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
P r e s e n t e s.

SANTIAGO CREEL MIRANDA, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**, al tenor de la siguiente

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S:

Durante los últimos años México ha avanzado, de manera constante, en la democratización de su sociedad a través de diversos mecanismos que tienden a acercar a los ciudadanos con sus representantes.

Una forma de seguir abriendo espacios para la ciudadanización de la vida pública es otorgarle un nuevo derecho a las personas para que puedan tener acceso directo a la información relevante de los partidos políticos.

Esta iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a quienes estén interesados en conocer todo lo relativo al manejo de recursos y a las principales decisiones internas de los partidos políticos. Este acceso que se plantea sería directo por parte de las personas al partido político sin que el Instituto Federal Electoral funja como intermediario para proporcionar esa información.

La presente propuesta parte de la premisa de que la transparencia y el acceso a la información –como ejes rectores de la rendición de cuentas–, robustecen los vínculos existentes entre ciudadanos y partidos políticos, al hacerse pública su vida interna, particularmente en lo que respecta al manejo de sus recursos y de los acuerdos y resoluciones que tomen sus órganos de dirección.

No podemos soslayar el hecho de que existe una percepción de alejamiento, incluso de descontento por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos por su falta de rendición de cuentas efectiva, ocasionada, entre otras cosas, por la carencia de un mecanismo oportuno que permita transparentar lo que ocurre en su vida interior.

La "Encuesta Sentir Ciudadano" publicada en septiembre de este año –tirada por la Fundación Este País, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico Autónomo de México–, califica un 5.8 (en una escala del uno al 10), el funcionamiento de la democracia en México. Además refleja que el 60.1 % de las personas encuestadas tienen la percepción de que los partidos políticos no los escuchan. Igualmente, el 47.2% de los encuestados no se siente representado por su diputado federal.

También hay que tomar en cuenta que los índices de participación ciudadana en las elecciones intermedias, que son aquellas, en donde los partidos políticos ejercen mayor liderazgo en el resultado de las elecciones, la participación de los ciudadanos ha ido disminuyendo. En el año de 1997 el nivel de participación fue de 57.02%, mientras que en las últimas elecciones del año 2009 fue de 44.5%. Es decir, los niveles de participación han disminuido en más de 12 puntos en un poco más de una década.

Asimismo, en las últimas elecciones federales del pasado 5 de julio de 2009, surgieron diferentes movimientos sociales que plantearon la anulación o abstención del voto, a través de lo que se conoció como el voto blanco. En los comicios recientes, el 5.8% de los electores a nivel nacional decidió anular su voto. Sin embargo, en la capital del país, el porcentaje subió a más del doble y llegó a superar el 10%.

Habrá que recordad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al referirse a los partidos políticos, en su artículo 41, los define como entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática. En este sentido es que los partidos reciben prerrogativas del Estado mexicano, para el apoyo de sus actividades, que se financian de las contribuciones que aportan los ciudadanos con el pago de sus impuestos.

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Instituto Federal Electoral tendrá un presupuesto de 8 mil 631 millones de pesos, de los cuales la mayor parte será destinada al financiamiento de los partidos políticos y habrá que tomar en cuenta que no es un año de elecciones federales.

En consecuencia con lo anterior, es en este doble carácter que los partidos como entidades de interés público y como receptores de recursos públicos, deben de transparentar su vida interior y hacerla accesible a todas las personas, siendo los partidos, sujetos obligados directos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La presente iniciativa de reforma debe ser analizada como una continuación de los avances de transparencia y rendición de cuentas que México ha emprendido en diversos ámbitos de su vida institucional. Así, con la reforma electoral de 1996, la organización de los procesos electorales dejó de ser una función a cargo del Poder Ejecutivo Federal y, desde entonces, se depositó en un organismo autónomo, ciudadanizado e imparcial.

Posteriormente, en el año de 1999 se reformó el texto de la Constitución para incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, como el organismo de fiscalización facultado para revisar, auditar y fiscalizar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos federales, que por cierto contempló aquellos que manejan los partidos políticos, aunque hasta este momento dicho organismo no ha ejercido esa facultad.

Asimismo, en el año 2002 el Poder Legislativo expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual hace posible que los ciudadanos ejerciten su derecho a la información.

El principio de máxima publicidad de la información del Estado mexicano es ahora la regla y no la excepción. En consecuencia, los mexicanos tienen hoy acceso expedito a los documentos y a la información que, por definición, debe ser –y es– pública; es decir, la información es de los ciudadanos y las excepciones a la publicidad se restringen a cuestiones que deben reservarse por motivos de interés público, de seguridad nacional o de protección de datos personales.

Por su parte, la LX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Constitución en materia electoral, así como la expedición de diversas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008, respectivamente–. Tales cambios se orientaron, entre otros fines, a transparentar la actuación de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y medios electrónicos de comunicación, en aras de mayor equidad en la competencia electoral.

En dichas reformas se establecieron, entre otras cosas, la reducción de recursos públicos destinados a los partidos políticos, se configuró un nuevo esquema de acceso a los medios de comunicación y, con el objeto de brindar una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el origen, monto y destino de los recursos que utilizan los partidos, se eliminaron el secreto bancario, fiduciario y fiscal.

En particular, la reforma electoral de 2008 introdujo una primera generación de obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de cualquier interesado. Entre otras, se establecen la obligación de hacer público lo siguiente:

- Sus documentos básicos;
- Las facultades de sus órganos de dirección;
- Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de candidatos a cargos de elección popular;
- El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales;
- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se referidos en el punto anterior, y de los demás funcionarios partidistas;

- Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto Federal Electoral;
- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;
- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;
- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
- Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña y el dictamen que el Consejo General del Instituto en que los haya aprobado; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
- Las resoluciones que emitan los órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;
- Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto Federal Electoral; y,
- El listado de fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico permanente del partido político.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos legislativos, los partidos políticos no son sujetos directamente obligados de brindar a las personas la información que soliciten, ya que es solo a través del Instituto Federal Electoral que pueden tener acceso a ella.

La presente iniciativa obliga a los partidos políticos a que sean directamente los obligados de proporcionar esa información a quien lo solicite. Además, aparte del catálogo de aquello que deben de informar que se estableció en la anterior reforma, ahora con este nuevo planteamiento se añaden los siguientes conceptos que también tendrán la obligación los partidos de informar:

- Cualquier información relativa a la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos utilizados para actividades ordinarias, de precampaña y campaña.
- Los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas;
- El listado de aportantes ordinarios y de precampaña y campaña electoral, ya sea en especie o en efectivo;
- Los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular;
- Los informes que los partidos políticos tengan que rendir con motivo de sus obligaciones estatutarias;
- Los convenios de participación que los partidos políticos celebren con las organizaciones de la sociedad civil;
- Los acuerdos y resoluciones que emitan los órganos de dirección de los partidos políticos, a nivel nacional, local y municipal;
- Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos, así como los responsables de enlace y comités de información; y,
- El listado de las organizaciones sociales que cada partido declare como adherentes o similares, así como el listado de sus dirigentes.

En tal virtud, la presente iniciativa pretende incluir a los partidos políticos como sujetos plenamente obligados de los principios, obligaciones y disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como se explicita en el texto del artículo 1°, así como en el artículo a 3°, fracción IX bis y XIV, inciso f) del proyecto de Decreto. Asimismo, se establece que serán los propios comités ejecutivos de los propios partidos políticos nacionales los responsables de brindar la información en coordinación con las unidades de enlace que al efecto se creen.

También se adiciona un artículo 7 bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el cual se establece que información deben de poner los partidos políticos a disposición del público. Esta nueva propuesta toma en cuenta lo que ya disponía el artículo 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que determina qué información tiene carácter de pública, pero además, se añadieron nuevos conceptos como fue precisado anteriormente.

Por otro lado, también se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que los ciudadanos, como se precisó con anterioridad, puedan acudir directamente ante los propios partidos políticos, sin la intermediación del Instituto Federal Electoral, a requerir información, lo cual tendrá como consecuencia que exista un vínculo más estrecho entre el ciudadano y los partidos políticos, al tiempo que se podrá ejercer un nuevo control social de fiscalización respecto de sus actividades.

Igualmente, de aprobarse la propuesta de reforma a la fracción II, del Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se exceptuará de este nuevo derecho la información relativa al secreto fiscal, bancario y fiduciario, que está reservada de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.

Por otro lado, se propone agregar un nuevo artículo 60 bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el que se establece que los recursos de revisión y reconsideración que se promuevan deberán ser interpuestos directamente ante el Instituto Federal Electoral, y no ante las propias entidades responsables que en este caso son los partidos políticos.

Con este procedimiento se aprovechará la estructura administrativa del Instituto Federal Electoral y, por otro lado, se brindará un mayor grado de seguridad jurídica a las personas interesadas en obtener información, en la protección de su derecho frente a los partidos políticos.

De modo semejante, la modificación que se plantea al primer párrafo y a la fracción primera del artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que será el Instituto Federal Electoral, quién tendrá la obligación de emitir disposiciones, que reglamentarán la actividad de los partidos políticos en cuanto a: las unidades administrativas responsables de publicar la información; las unidades de enlace; el comité de información; los criterios y procedimientos de clasificación y conservación de información reservada y confidencial; los procedimientos de acceso y rectificación de datos personales, de los partidos políticos.

Por otro lado, en consecuencia con las modificaciones planteadas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es necesario reformar algunas disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, se propone adicionar la fracción V), del inciso C), del numeral primero del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer la obligación por parte de los partidos políticos de incluir en sus estatutos la creación de las unidades de enlace y de los comités de información respectivos.

Por lo tanto, se propone también reformar el artículo 41, fracciones segunda y sexta del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los

ciudadanos puedan acudir y solicitar directamente la información a los partidos políticos. Igualmente se establece la obligación por parte de los partidos políticos de publicar en su página electrónica la información que debe hacerse pública de acuerdo con esta iniciativa.

Por lo tanto, se plantea derogar la fracción cuarta del artículo 41 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues ya no es necesario establecer el procedimiento para que los ciudadanos, a través del Instituto Federal Electoral, obtengan la información de los partidos políticos.

Por otro lado, se reforma el inciso k) de la fracción primera del artículo 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se establece que constituyen infracciones de los partidos políticos, el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, tanto en el Código electoral como en otros ordenamientos aplicables en materia de transparencia, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por último, en el articulado transitorio se establece de forma específica que se otorgará un plazo de seis meses tanto a los partidos políticos como al Instituto Federal Electoral, para hacer las adecuaciones normativas y administrativas correspondientes.

Asimismo, se establece que los procesos en materia de transparencia que se presenten antes de las adecuaciones normativas, se regirán por las disposiciones actuales hasta su conclusión.

Las nuevas obligaciones a cargo de los partidos políticos resultan plenamente compatibles con el espíritu que ha animado al legislador ordinario –como también al Poder Revisor de la Constitución– respecto de la rendición de cuentas en torno al uso y destino de los recursos públicos y privados, ordinarios y de precampaña y campaña electoral, y en general, respecto de los acuerdos y resoluciones que tomen sus órganos de dirección.

El México democrático del siglo veintiuno no merece menos que partidos políticos transparentes; sujetos al imperio de la ley, y cuyas dirigencias asuman responsablemente la delicada tarea de administrar eficazmente su patrimonio y sobre todo los recursos públicos que la ciudadanía les confía, rindiendo cuentas puntuales de su actuación y de sus decisiones.

A la luz de lo anterior, con objeto de edificar una democracia más representativa, más efectiva, genuinamente orientada al bien común, capaz de generar más dividendos sociales y, al mismo tiempo, más transparente y más responsable frente a los ciudadanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1°, 11, 14 fracción II 61, primer párrafo y fracción V), y se adicionan los artículos 3°, fracciones IX bis y XIV, inciso f), recorriéndose el actual para quedar como inciso g), artículo 7 bis. y 60 bis , todos ellos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- *La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, cualquier otra entidad federal, así como los partidos políticos, en su calidad de entidades de interés público.*

Artículo 3°.- *…*

I. a IX. …

IX bis. Partidos políticos: entidades de interés público, con registro ante el Instituto Federal Electoral, cuyo fin es promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional.

X. a XIII. …

XIV. Sujetos obligados:

a). a e). …

f). Partidos Políticos, a través de sus comités ejecutivos nacionales.

g). Cualquier otro órgano federal;

XV. …

Artículo 7 bis.- *Los partidos políticos tendrán la obligación de poner a disposición del público, además de la información establecida en el artículo 42 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo siguiente:*

I. Cualquier información relativa a la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos para actividades ordinarias, de precampaña y campaña electoral.

II. Los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas;

III. El listado de los aportantes ordinarios o de precampañas y campañas políticas, ya sea en especie o en efectivo;

IV. Los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular;

V. Los informes que los partidos políticos tengan que rendir con motivo de sus obligaciones estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias, o en su caso, por la autoridad electoral;

VI. Los convenios de participación que los partidos políticos celebren con las organizaciones de la sociedad civil;

VII. Los acuerdos y resoluciones que emitan los órganos de dirección de los partidos políticos, a nivel nacional, local y municipal;

VIII. Los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos, a nivel nacional, estatal y municipal, tanto en periodo ordinario como en precampaña y campaña electoral, así como de los responsables de las unidades de enlace y comités de información, y;

IX. El listado de las organizaciones sociales que cada partido declare como adherentes o similares, así como el listado de sus dirigentes, y;

Artículo 11.- *…*

Con independencia de los informes a que hace referencia el párrafo anterior, cualquier ciudadano podrá solicitar directamente a los partidos políticos la información a que se refiere el artículo 7 bis de esta ley.

Artículo 14.- *…*

I. …

II.- Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal, con excepción de lo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos;

III. a V. …

…

…

***Artículo 60 bis.-** Por lo que respecta a los partidos políticos, el recurso de revisión y el recurso de reconsideración serán interpuestos directamente ante el Instituto Federal Electoral y para tal efecto, se seguirán las mismas reglas establecidas en el presente capítulo, en lo que resulte aplicable y, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley a los partidos políticos, será sancionado en los términos que disponga la legislación federal electoral.

***Artículo 61.-** El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos y los Partidos políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta Ley. En el caso de los Partidos políticos, los reglamentos o acuerdos respectivos, serán emitidos por el Instituto Federal Electoral.*

…

I.- Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que se refieren los artículos 7 y 7 bis, por lo que hace a los partidos políticos;

…

…

…

…

V.- El procedimiento de acceso a la información, incluso un recurso de revisión, según los artículos 49 y 50, y uno de reconsideración en los términos del artículo 60, salvo en el caso de los partidos políticos, que se ceñirán a lo establecido en el artículo 60 bis de esta ley;

…

…

***ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforman los artículos 41 párrafos segundo y sexto y 342 numeral primero, inciso K), se adiciona un fracción V), del inciso c), del numeral primero del artículo 27 y se deroga el párrafo cuarto del artículo 41, todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:*

Artículo 27.

1. Los estatutos establecerán:

a) a c). …

I a IV. …

V. Las unidades de Enlace y Comités de Información ante quien se tramitarán las solicitudes de información pública, de conformidad con lo establecido en esta Código y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

d) a g). …

Artículo 41.

1. …

2. Las personas tendrán acceso a la información de los partidos políticos a través de sus Unidades de Enlace y Comités de

Información respectivos, mediante la presentación de solicitudes específicas;
3. …
4. (Se deroga)
5. …
6. Los partidos políticos estarán obligados a publicar en su página electrónica la información especificada en el presente capítulo, así como la establecida en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo que resulte aplicable.

Artículo 342.
1. …
a) a j). …
k). El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente código u otros ordenamientos aplicables en materia de transparencia y acceso a su información;
l) a n). …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO.- Los Partidos Políticos y el Instituto Federal Electoral tendrán un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para hacer las adecuaciones normativas y administrativas que fueran necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.

CUARTO.- Las solicitudes de información y todos los procedimientos administrativos derivados de ellas, que hubieren iniciado antes de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, se regirán por las normas vigentes en el momento de su presentación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 1º días del mes de diciembre de dos mil nueve.

DEL SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO, A NOMBRE PROPIO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y A LEY GENERAL DE POBLACIÓN.



SEN. ALFONSO ELÍAS SERRANO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, A CARGO DEL SENADOR ALFONSO ELÍAS SERRANO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

CC. Presidente y Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Presentes.-

El suscrito, **ALFONSO ELÍAS SERRANO**, Senador del Estado de Sonora, a nombre propio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a Ley General de Población, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto establecer un marco jurídico de avanzada para la protección de los menores migrantes que son repatriados a sus lugares de origen a través de las fronteras norte y sur de nuestro país, sin la compañía de un familiar adulto, con base en los principios del interés superior del niño, la reunificación familiar y el respeto pleno a sus derechos humanos.

Esto, mediante la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley General de Población, para crear, por un lado, un catálogo especial de derechos que deben respetar las autoridades mexicanas a los menores migrantes no acompañados, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia; y, por otro, un procedimiento específico, digno, ordenado, ágil y seguro, para la repatriación de este grupo vulnerable, que tenga como primordial finalidad la protección integral del menor y su reintegración al seno familiar.

Lo anterior, en atención al marcado incremento que se ha presentado en los últimos años en el número de niñas, niños y adolescentes que son repatriados a través de ambas fronteras de nuestro país sin la compañía de sus familiares.

Cifras oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto Nacional de Migración (INM), revelan que en los últimos siete años se ha duplicado el número de menores migrantes que son repatriados anualmente de Estados Unidos a México, y de México a diversos países centroamericanos.

Tan sólo en los últimos tres años (de 2007 a octubre del 2009), el gobierno federal reporta 106 mil 445 niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados a sus países de origen, de los cuales 59 mil 864 no contaban con la compañía de un familiar adulto, correspondiendo la cantidad de 49 mil 697 a menores migrantes no acompañados que fueron regresados de Estados Unidos a México, y 10 mil 167 a los menores sin compañía que fueron devueltos de México a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

Y si bien los menores migrantes son considerados como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad a nivel mundial, dentro de este grupo quienes enfrentan los mayores riesgos, son los menores migrantes que luego de ser asegurados por las autoridades migratorias son devueltos solos a sus países de origen, y más en el caso de niñas y jovencitas que en los últimos tres años han superando el 25% del total de repatriaciones de menores no acompañados.

De acuerdo a estudios de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos de los migrantes, los menores repatriados no acompañados se enfrentan ante dos escenarios tan pronto son regresados a sus países de origen: O son víctimas de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas, el tráfico de enervantes y el crimen organizado; o se ven orillados a sobrevivir en las calles o a laborar en condiciones infrahumanas en las ciudades fronterizas, quedando expuestos a enfermedades, accidentes, adicciones y grupos delictivos locales.

Por tal motivo, a partir del 2006 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido más enfática en sus señalamientos con relación a las condiciones por las que atraviesan los migrantes en la frontera sur de nuestro país.

En su estudio sobre refugiados denominado “Protección a los Niños Separados y No Acompañados en el Flujo Mixto de la Frontera Sur de México” del 2006, y posteriormente en su informe “México 2006-2007: Migración y Desarrollo Humano”, la ONU ha resaltado la alta peligrosidad del cruce fronterizo del sur de México, particularmente de mujeres y niños, quienes tiene que enfrentar “inclemencias del tiempo, falta de alimento y agua, accidentes, abusos de la policía y de los 'coyotes', maltratos, agresiones sexuales y ataques de grupos delictivos organizados, como traficantes de personas y asaltantes”.

En el 2008 la ONU confirma esta aseveración a través del informe de su relator especial en Guatemala, destacando que los menores migrantes no acompañados en la frontera México-Guatemala, son los que presentan mayor riesgo de ser “víctimas de abusos, tales como robos, accidentes, violencia, embarazos no deseados y contagio de enfermedades”.

En marzo del 2009, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, misión México, reitera lo anterior al reportar que

"la migración transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas", afectando en mayor medida a mujeres y niños migrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en un comunicado de agosto del 2009, califica a la frontera sur de México como "el centro neurálgico de las redes de traficantes y de tratantes", y señala que en esta región se ubica uno de los principales puntos de abuso a migrantes y de violencia relacionada con el crimen organizado.

En este mismo año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) añade una cifra alarmante, al indicar en un reporte que "más de 10 mil niños centroamericanos son explotados sexualmente en su tránsito por México", lo cual se suma al señalamiento que posteriormente hiciera el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), en el sentido de que "más de 20 mil migrantes centroamericanos son privados ilegalmente de su libertad anualmente en México".

Por lo que se refiere a la frontera norte de México, un estudio presentado en septiembre del 2009 por la CNDH, denominado "Políticas letales, muros mortales", da cuenta de las situaciones por las que atraviesan los menores migrantes en su intento por internarse y asentarse en los Estados Unidos, así como de los peligros que enfrentan una vez que son asegurados y regresados a México por las autoridades migratorias de ese país.

El informe documenta casos de menores de edad que son usados por bandas criminales como conductores de vehículos cargados de gente, sustancias ilícitas y contrabando, con el objeto de evadir las severas sanciones previstas para estos delitos en la legislación penal estadounidense. Esto - señala el estudio -, presenta graves peligros para los menores, lo que confirma el dato de que uno de cada cinco niños que pasa de contrabando nunca llega a contactar a sus familiares que lo esperaban.

El estudio de la CNDH, agrega que en los últimos años se ha reportado una tendencia a la alza en el número de cuerpos de niños encontrados sin vida en el cruce fronterizo México-Estados Unidos, por lo que las autoridades consulares estiman que los menores de edad tienen 3.4 veces más probabilidad de morir en un accidente en su trayecto hacia su lugar de destino en la territorio estadounidense, que cualquier otro grupo de migrantes.

Por otro lado, un estudio de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión encontró que en el 2008 más de 13 mil 500 menores migrantes repatriados de los Estados Unidos hacia nuestro país, permanecieron en las ciudades fronterizas por donde fueron regresados, la mayoría de ellos sobreviviendo en las calles en condiciones precarias, en donde son prácticamente acorralados por las peligrosas redes de delincuentes que operan en la frontera.

Este hallazgo se corrobora con los datos oficiales sobre los lugares de origen de los menores repatriados, pues el 81% de estos menores no son originarios del municipio por donde son regresados a México, en tanto que un 77% de estos menores no son siquiera residentes del Estado por donde fueron reinternados.

La situación anteriormente descrita ocurre particularmente en estados como Sonora, ya que a través de sus fronteras son regresados anualmente más del 40% del total de los menores migrantes no acompañados, de los cuales tan sólo 1 de cada 10 es originario o residente de esta entidad federativa, presentándose un fenómeno similar, aunque en menor medida, en el resto de los estados del norte y noroeste de México.

Es por ello que los gobiernos locales han creado programas, destinado recursos y construido albergues, para la atención a menores repatriados con el objeto de vigilar su resguardo y reestablecimiento físico, ubicar a sus familiares y lograr su regreso sano y salvo a casa.

Destaca dentro de estos programas, el llamado "Camino a Casa" que opera actualmente en el Estado de Sonora, mismo que en los últimos 5 años ha atendido a cerca de 35 mil niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados, hasta lograr su reintegración familiar en sus lugares de origen o residencia.

Por su parte, el gobierno federal ha presentado avances importantes en materia de protección de menores migrantes repatriados; esto a partir del 2007, periodo a partir del cual las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos de los migrantes, comenzaron a endurecer sus posturas con relación al trato que se les había venido dando en nuestro país a los menores migrantes repatriados, en ambas fronteras mexicanas.

Así, en marzo de 2007, México estableció la mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes no acompañados, integrada por dependencias y entidades del gobierno federal y organismos internacionales como la UNICEF, la OIM, la ACNUR, para evaluar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las medidas y mecanismos para garantizar los derechos y la protección de los menores migrantes.

En noviembre del 2007, el Instituto Nacional de Migración creó la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs), para asegurar la protección de los derechos de la niñez migrante no acompañada en las fronteras norte y sur de México, habiéndose designado hasta la fecha más de 240 oficiales de este tipo.

En abril del 2008, organizaciones internacionales como OIM y ACNUR, en conjunto con el INM, llevaron a cabo una capacitación para los agentes del Sistema DIF de Tapachula, Chiapas, y para los OPIs recién nombrados en materia de derechos de los menores migrantes no acompañados.

En septiembre del 2008, el INM y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron un acuerdo con UNICEF para la instalación de módulos de atención especial para niños, niñas y adolescentes dentro de estaciones migratorias ubicadas en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

En abril del 2009, a pocos días de la visita a México del presidente de los Estados Unidos, el gobierno mexicano logró que se pusieran en marcha los 30 acuerdos migratorios que operarían las autoridades migratorias de la Unión Americana en la frontera con nuestro país para la repatriación y expulsión de indocumentados mexicanos, mismos que incluyeron reglas especiales, aunque diversas y dispersas, para menores de edad no acompañados.

En julio del 2009, México se adhirió a los lineamientos aprobados en la Conferencia Regional de Migración, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de repatriación en los países del Continente Americano, siendo estos lineamientos una aproximación inicial de lo que pudiera ser un marco jurídico protector de los derechos de los menores migrantes.

En octubre del 2009, la Secretaría de Gobernación publicó las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, en las que por vez primera se contienen las condiciones mínimas que deben observar las estaciones migratorias cuando por alguna razón se llegue a alojar en ellas a menores de edad.

Y en noviembre del 2009, el INM anunció el lanzamiento de un programa conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para mejorar la infraestructura física de las estaciones migratorias en la frontera norte, y proveer asistencia básica a los migrantes, incluyendo alimentación, albergue y llamadas gratuitas a sus familiares.

De manera particular, en las dos Legislaturas del H. Congreso de la Unión que he tenido oportunidad de integrar (la LX y la LXI), el Senado de la República ha dado muestra de su compromiso con los migrantes, particularmente con aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como el caso de las mujeres y los niños.

Es así como en diciembre del 2006, esta Honorable Asamblea aprobó un punto de acuerdo presentado por el suscrito, mediante el cual se proponía enviar un exhorto al Ejecutivo Federal para asignar mayores recursos a los programas de atención a menores migrantes, particularmente de aquellos que son repatriados sin la compañía de sus familiares, quedado el acuerdo en los siguientes términos:

“En virtud de la tendencia a la alza de menores repatriados de Estados Unidos de América a México, y el alarmante incremento de niños, niñas

y jóvenes mexicanos que son regresados a nuestro territorio separados de sus familias, el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que fortalezca con recursos suficientes los programas federales, estatales y municipales de atención a menores migrantes".

De igual forma, en noviembre del 2007, aprobamos una legislación de avanzada en materia de protección a las víctimas del delito de trata de personas, incluyendo por vez primera en la legislación mexicana una disposición específica para la repatriación de menores migrantes, en este caso, para aquellos que resultasen ser víctimas de la trata de personas, que a la letra dice:

Artículo 20 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.- "A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, las autoridades deberán formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de que las personas víctimas de este delito cuenten con un retorno protegido a su país de origen o a aquel en donde tengan su residencia permanente. Asimismo, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil podrán colaborar con las autoridades para que los procesos de repatriación se lleven a cabo de acuerdo con lo previsto en los ordenamientos aplicables en la materia".

En julio del 2008, luego de enérgicos señalamientos de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y civiles de los migrantes, modificamos la legislación migratoria para despenalizar la inmigración ilegal a México, al reformarse los artículos 118, 125 y 127 y derogarse los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124, de la Ley General de Población.

Y el 1º de diciembre de este año, aprobamos un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular al gobierno federal a reforzar la vigilancia respecto del cumplimiento de los derechos de los menores migrantes repatriados, en los términos siguientes:

"PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar la vigilancia del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Migración para que informe sobre las acciones realizadas a favor de niñas, niños y adolescentes migrantes".

No obstante lo anterior, del análisis de los reportes e informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Oficina Internacional para las Migraciones y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, citados todos ellos en la presente iniciativa, se detecta que aún queda un largo camino por recorrer en México en materia de respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son repatriados sin la compañía de sus familiares.

En primer término, aún persiste la observación dada desde el 2006 por la ACNUR en el sentido de que **en la legislación mexicana no existe un sistema de protección específico para los menores migrantes no acompañados** que garantice el respeto de los principios del interés superior del niño, de la salvaguarda plena a sus derechos humanos, y de la reunificación familiar.

Esta misma recomendación se reitera en el informe presentado en agosto del 2009 por el relator especial para México y Guatemala sobre los derechos humanos de los migrantes, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual se señala que una de las principales deficiencias que identifica en el Continente es la falta de disposiciones específicas para los niños en las leyes, políticas y programas de migración.

El Relator Especial reporta que "en la mayoría de las leyes de migración no se refleja una perspectiva de los derechos de los niños, ni se establecen disposiciones específicas relacionadas con ellos… las políticas y los programas deberían garantizar la protección de los niños frente al internamiento y la deportación, y las leyes sobre migración deberían contener disposiciones concretas encaminadas a satisfacer las necesidades y los derechos de los niños en estas circunstancias".

En informe diverso de marzo del 2009, presentado por la misión a México de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, se reconocen los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en cuanto a la protección de los derechos humanos

de los niños migrantes, pero a la vez se destacan las siguientes **deficiencias**:

- No existe un sistema uniforme a nivel federal o en los distintos estados para proteger a los niños migrantes. A nivel federal, el trato que dan a los migrantes las autoridades de migración y la forma de aplicar los procedimientos de aseguramiento y repatriación varían de una oficina regional a otra. Y a nivel local, cada gobierno local aplica sus propios procedimientos, asigna recursos diferenciados, y atiende a los menores migrantes a través de distintas instituciones con personal que no necesariamente se encuentra preparado para atender menores en riesgo.

- Los refugios y las estaciones migratorias actuales no garantizan la protección de los menores en la medida necesaria, ya que no disponen de atención sicológica ni de programas de reintegración o rehabilitación social, no garantizan el derecho del menor a comunicarse con sus padres o consulado, sólo proporcionan un mínimo de cuidados médicos, y no cuentan con personal plenamente capacitado en la protección de niños migrantes.

- Los oficiales de protección de la infancia que existen actualmente, debieran ser independientes del Instituto Nacional de Migración, ya que su posición como funcionarios de migración debilita su capacidad para abogar en nombre de los niños bajo su cuidado.

- Aunque las autoridades de los estados están realizando esfuerzos para hacer volver a los niños a sus lugares de origen, existen deficiencias en las investigaciones de las autoridades locales que no permiten garantizar que los menores estarían regresando a un entorno seguro.

- Tampoco existen señales claras de que los menores sean trasladados hasta sus hogares en forma segura y con la garantía de que en el trayecto serán solventadas sus necesidades básicas.

En por estas razones que, quienes tenemos la alta responsabilidad de actualizar el marco jurídico nacional, debemos promover las reformas necesarias para actualizar la legislación nacional a los instrumentos y recomendaciones internacionales en materia de protección de los derechos de los menores migrantes.

En este sentido, existen convenciones internacionales que contemplan lineamientos aplicables a los niños y niñas separados de sus padres, tales como la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo.

De la misma manera, organizaciones como UNICEF, la ACNUR, Cruz Roja Internacional, el Comité de Rescate Internacional, World Vision International, Save the Children UK, entre otras, han emitido directrices específicas sobre niñas y niños no acompañados y separados, así como sobre niños y niñas refugiados.

En fechas recientes, los países de la Conferencia Regional de Migración, integrada por Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México, han mostrado su voluntad de ajustar la actuación de sus autoridades migratorias a procedimientos específicos para la repatriación de menores no acompañados, aunque a la fecha aún no se tiene noticia de que en sus legislaciones nacionales se hayan plasmado los derechos y procedimientos previstos en estos lineamientos no vinculatorios.

La nota común de todos estos instrumentos, directrices, recomendaciones o buenas prácticas internacionales, es que sugieren una serie de derechos especiales que deben respetar las autoridades migratorias de todos los países a los menores migrantes no acompañados, así como un procedimiento específico, digno, ordenado, ágil y seguro para la repatriación de estos menores, siempre con la finalidad primordial de proteger al menor y reintegrarlo al seno familiar.

Dentro del grupo de **derechos básicos del menor migrante no acompañado,** estos instrumentos proponen:

- Que los países garanticen refugio temporal donde se provea alimento, asistencia médica y sicológica, educación, vestido, asesoría legal y acceso a instrumentos de comunicación.

- Que las autoridades migratorias informen al menor de sus derechos y situación legal, y que aseguren que los menores serán entrevistados por personal especializado, referentemente de una autoridad distinta a la migratoria, y únicamente con el objeto de identificar al menor, conocer su lugar de origen o residencia, ubicar el paradero de sus familiares y detectar sus necesidades de atención médica y sicológica.

- Incluir el derecho a no ser separado de otros familiares menores de edad, el derecho a comunicarse con sus familiares y con el consulado de su país, y el derecho a ser reintegrado al seno familiar en su país o lugar de origen o residencia en forma ágil y segura.

- Garantizar la protección y asistencia del gobierno del país o entidad de origen o residencia del menor, y la coordinación entre las autoridades de los gobiernos nacionales o estatales involucradas en la repatriación y reintegración familiar del menor.

En cuanto al **procedimiento especial que debe seguirse para la repatriación de un menor migrante no acompañado**, los instrumentos, directrices, recomendaciones y buenas prácticas internacionales, sugieren lo siguiente:

- Trasladar de inmediato al menor a un refugio temporal donde se le proveerá de alimento, asistencia médica y sicológica, educación, vestido, enseres para aseo personal, asesoramiento jurídico y acceso a comunicación telefónica.

- Informarle al menor del motivo de su aseguramiento, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a los que tiene acceso, y de cómo ponerse en contacto con el consulado de su país.

- Notificar al consulado del país de origen o residencia del menor, el domicilio donde se ubica el menor, y las condiciones en las que se encuentra.

- Entrevista al menor por parte de personal especializado en la protección de la infancia, para conocer sus necesidades particulares de atención médica y psicológica, su identidad, país de origen o residencia, y la ubicación de sus familiares.

- Iniciar la búsqueda de familiares adultos del menor, en coordinación con el consulado del país de origen o residencia y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil debidamente registradas.

- De decretarse la repatriación del menor por la autoridad migratoria, debe notificarse al consulado correspondiente con tiempo suficiente para el adecuado recibimiento del menor en su país de origen o residencia.

- Traslado del menor a su país de origen o residencia, en transporte adecuado, con alimentación y atención médica hasta su destino final, y bajo el cuidado de personal especializado para la protección y atención del menor durante el trayecto.

Adicionalmente, los organismos antes señalados proponen que los gobiernos nacionales ofrezcan alternativas jurídicas y/o humanitarias a la repatriación, a todo menor migrante no acompañado que sea victima de delitos contra la salud, trata de personas, corrupción de menores, y pornografía infantil, entre otros, o que no cuente en su país de origen o residencia con las condiciones que garanticen su seguridad, salud y bienestar personales.

El Estado Mexicano ha dado, sin duda, pasos importantes en materia de protección de menores migrantes que son repatriados sin compañía.

El gobierno de nuestro país ha celebrado acuerdos con los distintos países de Norteamérica y América Central en este tenor; los estados fronterizos han creado programas para garantizar el regreso sano y salvo a casa de los menores

migrantes, y el gobierno federal ha venido mejorado las instalaciones y los procedimientos particulares para la repatriación de menores no acompañados.

Pero es necesario dar el siguiente salto. Debemos elevar a rango de Ley los derechos básicos que toda autoridad en México debe respetar a nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes en su regreso a casa, y debemos actualizar nuestra legislación migratoria, para convertirla en una ley de avanzada en la que se contemple un procedimiento especial para la repatriación de los menores no acompañados, siendo así ejemplo a nivel internacional.

Por ello, es que la presente iniciativa propone modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer un capítulo especial en el que se contemplan los derechos específicos que deben respetar las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno a los menores migrantes no acompañados, siguiendo la pauta marcada por los instrumentos, directrices, recomendaciones y buenas prácticas internacionales apuntadas en párrafos anteriores.

Estos derechos especiales serían aplicables a los niños que son repatriados de Estados Unidos a México, en lo que corresponde a su trayecto de la frontera norte hasta sus lugares de origen; así como a los niños que son repatriados de México a Centroamérica, en lo que corresponde a su repatriación por parte de las autoridades mexicanas.

De igual forma, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley General de Población, para instaurar un procedimiento específico para la repatriación de menores migrantes que no cuentan con la compañía de un familiar adulto, señalando paso a paso las acciones que debe seguir la autoridad migratoria en este proceso, en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales que fueron debidamente señaladas en la presente exposición de motivos.

El Senado de la República ya ha dado muestra de su compromiso con los migrantes, particularmente con aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como el caso de las mujeres y los niños.

Es tiempo de poner a México a la vanguardia de la defensa y protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables.

Por ello debemos seguir trabajando en estos temas, más aún cuando está bajo el ámbito de responsabilidad de esta Asamblea, el poder dar cumplimiento a la principal recomendación de las Naciones Unidas en materia migratoria: Legislar a favor de uno de los grupos más vulnerables a nivel mundial, el de los menores que son repatriados sin la compañía de un familiar adulto.

Es con base en lo expuesto con anterioridad que se presenta la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Artículo Primero.- Se adiciona un Capítulo Décimo Cuarto, integrado por los artículos 42 bis. y 42 ter., de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

"**Capítulo Décimo Cuarto**
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados

Artículo 42 bis.- Para efectos de esta ley, se considera niño, niña o adolescente migrante no acompañado, a todo menor que 18 años que haya sido expulsado o repatriado hacia territorio mexicano por parte de las autoridades migratorias de un país distinto al de su nacionalidad o residencia, o se encuentre en proceso de expulsión o repatriación hacia su país de nacionalidad o residencia por parte de las autoridades migratorias mexicanas, y que en cualquiera de estos casos no cuente con la compañía de un familiar adulto debidamente identificado.

Para el cumplimiento de los derechos previstos en el presente Capítulo, el Gobierno Federal promoverá la adopción del Programa Nacional

para la Protección de Menores Migrantes Repatriados No Acompañados, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social.

Artículo 42 ter.- Independientemente de los demás derechos que reconoce y otorga esta ley, los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, tienen derecho a:

I. Refugio temporal para su seguridad física y el respeto a sus derechos humanos, en el que deberá proveérseles, además de albergue, lo siguiente:

a) Alimentación balanceada acorde a sus necesidades;
b) Asistencia médica y psicológica;

c) Educación y oportunidades de recreación;

d) Vestido adecuado a las condiciones climatológicas del lugar;

e) Instalaciones y enseres básicos para su aseo e higiene personal, garantizando la separación de hombres y mujeres en tales instalaciones;

f) Acceder a comunicación telefónica para contactarse con sus familiares, gobierno de su país de nacionalidad o residencia, o gobierno de la entidad federativa o municipio en el que se encuentren sus familiares;

g) Asesoramiento jurídico y, en su caso, asistencia consular, y

h) Los demás que determine el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la autoridad migratoria nacional, y los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

II. Ser informados de sus derechos y situación legal, con un lenguaje que les sea comprensible, de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Cuando el menor no hable o entienda el idioma español, deberá facilitársele a un traductor o intérprete.

III. No ser separados de los otros menores que integran su grupo familiar.

IV. Comunicarse con sus familiares y/o con el gobierno de su país de nacionalidad o residencia, o bien, con el gobierno de la entidad federativa o municipio en el que se encuentren sus familiares.

V. Protección y asistencia consular a los menores migrantes de nacionalidad distinta a la mexicana, para lo cual la autoridad migratoria nacional deberá comunicar de inmediato al país de nacionalidad o residencia del menor no acompañado, la ubicación del refugio temporal y la condición del menor.

En el caso de menores migrantes no acompañados de nacionalidad mexicana, tendrán derecho a protección y asistencia del gobierno de la entidad federativa o municipio en el que se encuentren sus familiares, para lo cual la autoridad migratoria y/o el gobierno estatal de la entidad fronterizo a través del cual se interne el menor, deberá comunicar al gobierno del Estado en el que habite la familia del mismo, la ubicación de la custodia y la condición del menor.

VI. Ser entrevistados por personal especializado en la protección de la infancia plenamente capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, a efecto de obtener la información necesaria tendiente a:

a) Identificar al menor;

b) Conocer su país de nacionalidad o residencia, o bien, su estado o municipio de origen o residencia;

c) Ubicar el paradero de sus familiares, y

d) Detectar sus necesidades particulares de atención médica y psicológica.

VII. Ser reintegrado al seno familiar en su país de nacionalidad o residencia, o bien, en su estado o municipio de origen o residencia.

VIII. Un procedimiento de expulsión o repatriación digno, ordenado, ágil y seguro, basado en los principios a que se refiere el artículo 3o de la presente Ley, así como en los de reunificación familiar y protección integral del menor.

IX. Transporte adecuado y seguro para el traslado al país de nacionalidad o residencia, o bien, al estado o municipio de origen o residencia, para su reintegración al seno familiar.

Durante el trayecto los menores tendrán derecho a que se les cubran sus necesidades básicas de alimentación y atención médica. Los menores serán acompañados en todo momento del traslado por personal especializado en la protección de la infancia plenamente capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo Segundo.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 35; un párrafo segundo al artículo 73; una fracción III, al artículo 76, y un artículo 125 bis., a la Ley General de Población, para quedar como siguen:
"Artículo 35.- …

Cuando las autoridades de migración consideren que la expulsión o repatriación conlleva riesgos para un niño, niña o adolescente no acompañado por algún familiar adulto debidamente identificado, éste será admitido provisionalmente, mientras la Secretaría de Gobernación ofrece alternativas jurídicas y/o humanitarias temporales o permanentes a la repatriación.

De igual forma, serán admitidos provisionalmente, los menores migrantes no acompañados, cuando la autoridad cuente con indicios de que la internación de los mismos a territorio nacional se relaciona con la comisión de delitos contra la salud, trata de personas, secuestro, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual y lenocinio.

Artículo 73.- …

La autoridad de migración se auxiliará del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y de los gobiernos de los estados y municipios, en el desahogo del procedimiento de expulsión o repatriación de niñas, niños y adolescentes no acompañados, previsto en la presente Ley.

Artículo 76.- …

I a II.- …

III. Coordinar acciones con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los gobiernos de los estados y municipios, para garantizar el respeto de los derechos de los menores migrantes no acompañados, previstos en el presente Ordenamiento y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 125 bis.- El procedimiento de expulsión o repatriación de niñas, niños o adolescentes no acompañados, garantizará el respeto de los derechos previstos por la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El menor será trasladado a un refugio temporal para su seguridad física y respeto a sus derechos humanos, en el que se le proveerá de alimento, asistencia médica y psicológica, asesoramiento jurídico, oportunidades de educación y recreación, vestido, y acceso a comunicación telefónica.

Cuando por alguna circunstancia excepcional los niños, niñas y adolescentes no acompañados por algún familiar debidamente identificado, lleguen a ser alojados en una Estación Migratoria, en tanto se le traslada a un refugio que cumpla con las características a que se refiere el párrafo anterior, deberá asignárseles en dicha Estación un espacio específico para su atención, distinto al de alojamiento de los adultos, y la autoridad deberá respetar en todo momento los derechos para los menores

migrantes no acompañados previstos en el presente Ordenamiento y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Se le informará al menor del motivo de su aseguramiento, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a los que tiene acceso en el refugio o estación migratoria, y de cómo ponerse en contacto con el consulado de su país.

III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del menor, la ubicación del refugio o estación migratoria donde se encuentra el menor, así como las condiciones en las que se encuentra el mismo.

IV. Personal especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al menor con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares, y sus necesidades particulares de atención médica y psicológica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes, al igual que las organizaciones no gubernamentales debidamente registradas, podrán estar presentes en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal del menor.

V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del menor, y con el auxilio de las organizaciones internacionales y no gubernamentales correspondientes, se procederá a la búsqueda de familiares adultos del menor.

VI. Una vez resuelta la situación migratoria del menor y, en caso de decretarse la expulsión o repatriación, se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para el adecuado recibimiento del menor en su país de nacionalidad o residencia.

VII. El acto de devolución del menor a su país de nacionalidad o residencia, se realizará conforme a lo siguiente:

a) En horas y puntos oficiales de internación adecuados para proteger la integridad física y la seguridad del menor y el total respeto a sus derechos humanos;

b) Por medio de transporte adecuado y seguro, evitando trayectos prolongados y agotadores, y garantizando la alimentación y atención médica por el tiempo que demore el traslado;

c) Con la supervisión de personal especializado en la protección de la infancia, plenamente capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual acompañará a los menores desde la salida de territorio mexicano hasta su entrega formal a la autoridad competente de su país de nacionalidad o residencia.

VIII. Cuando derivado del procedimiento previsto en el presente artículo, se detectase que la expulsión o repatriación conlleva riesgos para el niño, niña o adolescente migrante no acompañado, el gobierno mexicano ofrecerá alternativas jurídicas y/o humanitarias temporales o permanentes a la repatriación, de conformidad con las convenciones y tratados internacionales y la legislación federal aplicable.

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: El Ejecutivo Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, asignarán los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercero: El Ejecutivo Federal y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, crearán el Programa Nacional para la Protección de Menores Migrantes Repatriados No Acompañados y expedirán las normas

administrativas que se requieran para dar cumplimiento al presente Decreto, en un término de 120 días hábiles.

ALFONSO ELÍAS SERRANO
SENADOR POR SONORA

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 03 días del mes de diciembre de 2009.

DEL SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.



SEN. CARLOS SOTELO GARCÍA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

Senador **CARLOS SOTELO GARCÍA**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.
Reforma Integral de la Legislación en Materia Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La reforma democrática del marco jurídico que sustenta el actual modelo de comunicación masiva en México es, sin lugar a dudas, la reforma de mayor trascendencia y, pone a prueba, como ninguna otra, la voluntad e independencia del Poder Legislativo.

La presente iniciativa responde al compromiso asumido por el Senado de la República ante la sociedad mexicana.´

Atendiendo a los términos en que fue dictada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 4 de julio de 2007, se aprobó la conformación de un Grupo de Trabajo, con el propósito de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.

Conforme al programa de trabajo aprobado también por la Junta de Coordinación Política, la misión específica del Grupo Plural consistió en elaborar una iniciativa de reforma integral al régimen de los medios electrónicos de comunicación, que sería presentada al pleno del Senado para su discusión y aprobación.

Se impone la revisión y actualización integral del régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, para garantizar su función de servicio público, esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia; asimismo, para que el poder mediático no desplace ni sustituya al poder político y, en cambio, siempre quede subordinado al derecho, al interés público y al servicio de la sociedad.

El libre mercado no garantiza por sí sólo las funciones social, cultural, económica y política que han de cumplir las telecomunicaciones y la radiodifusión en una sociedad democrática y plural. Por ello, la reforma jurídica que se somete

a consideración tiene como columna vertebral la garantía de los derechos fundamentales.

Es claro que las libertades de expresión, información y prensa consagradas en los artículos 6º y 7º constitucionales, incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que puedan difundir ideas y comprenden de manera especial a los medios masivos de difusión como son la radio y la televisión. Toda legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión debe tener como uno de sus objetivos centrales el respeto al derecho a la libertad de expresión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo entendió y declaró inconstitucionales varios preceptos de la Ley Federal de Radio y Televisión porque, entre otras razones, contravenían las disposiciones constitucionales que consagran una libertad que ha sido considerada como "un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática". Muchos de los argumentos que elaboraron los ministros y ministras giraron en torno a los diversos aspectos de este derecho, así como del derecho de igualdad y no discriminación.

La sentencia de la Suprema Corte acudió en varias ocasiones a los instrumentos internacionales de derechos humanos para fortalecer las posiciones y argumentos que se presentaron, así como para enriquecer los fundamentos jurídicos en los que los ministros y ministras basaron sus consideraciones. Ahora es el turno del Poder Legislativo quien tiene la posibilidad no sólo de remediar aquellos conceptos que la Suprema Corte ha declarado inválidos de la reforma de la Ley de Radio y Televisión, sino, además, de incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresión.

Al elaborar el proyecto se ha cuidado que la nueva legislación respete y se ajuste a la doble vertiente del derecho a la información, que incluye una dimensión individual, para instituir que los medios de comunicación estén abiertos a todos sin discriminación; así como una dimensión colectiva o social, que exige establecer ciertas condiciones respecto de éstos, a fin de que sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla, para lo cual resulta indispensable una regulación acorde con la naturaleza de cada medio, destacando como un aspecto esencial, que exista pluralidad de medios.

El objetivo consiste en reconocer a la diversidad y pluralismo como principios fundamentales del nuevo marco normativo. Estableciendo mecanismos legales efectivos para garantizar la libre expresión de una diversidad de contenidos y perspectivas en ellos, y reconocer una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-comercial y social-sin fines de lucro. Buscando que la expresión real del pluralismo se manifieste en el público, en la sociedad, en el receptor.

Desde esta perspectiva, la intención es que la nueva legislación: garantice la libertad de expresión el derecho a la información; asegure la rectoría del Estado y el interés general ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica; afirme el uso social del espectro radioeléctrico, en forma más equitativa y con una visión democrática; prevea la conformación de un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses y ofrezcan la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte del sector; promueva la libre concurrencia; considere cuotas de programación nacional independiente como manera de promover pluralidad de visiones y creación de una industria audiovisual independiente; regule la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial no esté por encima de los derechos de las audiencias; establezca un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitarios y que los pueblos indígenas puedan generar, operar y administrar estaciones de radio y canales de televisión.

La legislación propuesta parte del reconocimiento y la búsqueda de la diversidad en los servicios y el acceso en condiciones de igualdad a éstos por parte de todos los cuidadnos y ciudadanas, particularmente de grupos étnicos, universidades e

instituciones educativas y organismos comunitarios. Garantizando los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información y promoviendo la producción, edición y difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad mexicana.

Atendiendo y haciendo suyas todas las propuestas recibidas en la amplia consulta realizada durante casi un año en el Senado de la República, el Proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desarrolla legislativamente los siguientes temas esenciales:

1.- Una sola ley convergente para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión.

La convergencia tecnológica entre medios, formatos y contenidos debe contar con principios y normas que permitan avanzar en esa convergencia que sea regulada orgánicamente y que regule todos estos desarrollos tecnológicos, y su aprovechamiento social.

2.- Principios Fundamentales

a) Servicio Público. Su espíritu califica la función de servicio público de la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad fundamentando así la rectoría del estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.
b) Acceso universal. Como derecho público, garantiza la disponibilidad de la información, en todos los servicios y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos. Derivan de sus disposiciones la obligación de desarrollar políticas de Estado para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a las telecomunicaciones.
c) Conectividad. Garantiza la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios. Los usuarios de un servicio podrán cambiar de proveedor sin por ello perder bases de datos o señas de identidad (como el número telefónico que ya tengan).

3.- Ente regulador del sector con naturaleza de órgano constitucional autónomo.

Como parte de la defensa del interés público, se establece que la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en todas sus modalidades, quede a cargo de un órgano estatal con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas. La naturaleza del órgano regulador implica:

- Competencia en funciones esenciales.
- Su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general.
- Especialidad de la materia y especificidad técnica.
- Garantía de independencia respecto a los poderes políticos y económicos.

4.- Régimen de Concesiones.

a) La Concesión como figura jurídica habilitante única. Homologa todos los títulos habilitantes a la figura de la concesión, atendiendo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención l al engrose de la sentencia de la SCJN y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. La diferencia entre los tipos de concesiones se establece a partir de los diversos fines (fines lucrativos y

sin fines de lucro). Por lo tanto, pueden asignarse concesiones para servicios educativos, culturales, comunitarios, de orientación social o de explotación comercial.

b) Licitación Pública en la asignación de concesiones. Previene que las concesiones deberán ser otorgadas mediante un proceso de licitación pública, a través de concursos transparentes y con reglas claras.
c) Contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro.
d) Duración de la concesión de hasta 10 años en radiodifusión y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años.
e) Intervención de la Comisión Federal de Competencia desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable.
f) Refrendos, considerando los criterios expresados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Los titulares de concesiones con fines lucrativos al término de la misma, competirán nuevamente, en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre terceros". La Suprema Corte estableció criterios para evaluar lo que debe entenderse por derecho preferente de terceros: Para que el refrendo de la concesión y la preferencia que se otorga al concesionario resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, ya que la preferencia de que aquél goza sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, lo que, por tratarse de facultades regladas, tendrá que fundarse y motivarse debidamente". La preferencia aplica, cuando se presente un equilibrio entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión. Además se considera la revisión del expediente legal, a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

5.- Convergencia Tecnológica.

Buscando la más flexible y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos a fin de que se garantice un uso intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión). En ese uso se pretende promover la más amplia competencia y se establecen criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible. Respetando el principio establecido por nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que "las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada".

Indudablemente que la posibilidad para que los concesionarios puedan ofrecer nuevos servicios a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, alcances, límites, condiciones y beneficios al Estado, partiendo de la definición precisa de lo que debe entenderse por servicios auxiliares o asociados y los servicios adicionales, quedan claramente señalados en el proyecto de ley en la intención de evitar privilegios y un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Asimismo, en este rubro se previene la creación de un fondo del Estado destinado a efectuar la convergencia tecnológica, cuyos destinatarios serán las estaciones de carácter público y las estaciones comunitarias. Bajo los siguientes principios para la asignación de recursos:

- Apoyar el proceso de convergencia tecnológica a fin de equilibrar las asimetrías entre los actores del sector.
- Será Pública

- Considerará el proyecto de inversión anual y el costo total de la inversión por la migración.
- Considerará el grado de marginación en la que opera el medio.

6.- Pueblos y comunidades Indígenas.

En el caso de los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán de acuerdo con los principios constitucionales establecidos en los artículos 1°, 2°, 3°, 6° y 27 a petición de parte, considerando la disponibilidad y previo cumplimiento de requisitos simplificados.

Se reconoce que una comunidad indígena tiene legitimidad para solicitar un título de concesión que tenga como fin el desarrollo de la comunidad, que no persiga fin de lucro. Por lo que es procedente su solicitud para adquirir, operar y administrar medios de comunicación y de telecomunicación, cuando cumplan los requisitos establecidos, favoreciendo a los indígenas, sus comunidades y pueblos.

7.- Régimen de Medios Públicos.

Reconocimiento explícito del estatuto jurídico de éstos, que los define como medios de radiodifusión de servicio público, sin fines de lucro y con fines sociales, educativos, culturales, de información y de entretenimiento para el vínculo con la sociedad y garantizando la calidad y pluralidad de sus contenidos.

Estableciendo la responsabilidad del Estado en su mantenimiento, desarrollo y promoción, por lo que deberán recibir financiamiento público, pero también se permite cuenten con fuentes de financiamiento diversificadas como es la posibilidad de comercializar tiempo aire de manera acotada y regulada, además de la posibilidad de la venta de servicios.

Como otras fuentes de financiamiento posibles se establecen también los patrocinios, donativos, venta de productos y/o servicios, venta de espacios publicitarios y convenios de coinversión para la difusión de programas de desarrollo social, en los términos que para ello establezcan públicamente los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales.

Para garantizar su independencia editorial se regulan criterios de organización, operación, administración y rendición de cuentas para los medios públicos.

10.- Régimen de Medios Comunitarios.

De acuerdo a la iniciativa, se entiende por servicio de radiodifusión comunitario, al servicio de radiodifusión no estatal de interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente asociaciones civiles) con personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrece un servicio público de comunicación orientado a satisfacer necesidades de comunicación social.

Legislación no puede ignorar una realidad que el mundo democrático ha recogido, y cuya necesidad está a la vista en nuestro país por lo que se les reconoce un procedimiento de otorgamiento transparente y simplificado, que reconoce las reales posibilidades económicas de los operadores de estas frecuencias.

Entre los criterios de evaluación para la asignación de frecuencias comunitarias, se estatuyen los siguientes:

- El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al Servicio.
- Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.
- Los antecedentes de trabajo social en la zona de cobertura solicitada.
- Las referencias de personas, 0rganizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la

comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Su financiamiento considerara los mismos que para los medios públicos sean incorporados por la ley.

11. Contenidos Audiovisuales.

La regulación establecida respecto a contenidos se aplicará a los servicios de radio y televisión que operen bajo concesión o permiso, independientemente del medio tecnológico que los transmita.

Se garantiza que derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y de las leyes aplicables en la materia.

La programación deberá respetar los horarios de transmisión de acuerdo a su tipo de clasificación. Disposición que también será aplicable para la programación originada y programada localmente en la radio y televisión restringida, a menos que la misma sea codificada.

Los prestadores de servicios de radio y televisión al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido, para la valoración de los padres o responsables de los menores.

La programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales aplicables.

Los prestadores del servicio de televisión abierta están obligados a publicar, al menos semanalmente, en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, genero, clasificación y horario de cada programa. En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet.

Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia.

12. Tiempos de Estado.

Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.

Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos. Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente: al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento; en emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales; al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirán en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y a los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento.

En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación regular.

14.- Publicidad.

Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios: para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio; para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Se considerara dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al público en general y destinados a la oferta de bienes o servicios. La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través de medios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.

Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes.

Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programación hasta 6 minutos de publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional establecidos.

15. Sanciones.

En el capítulo de sanciones se contempla la infracción a cada una de las obligaciones establecidas, incorporando la figura de la reincidencia y actualizando los montos de las sanciones económicas que permitan valorar en su justa dimensión el necesario respeto a las reglas.

Asimismo se previene que la comisión de las infracciones constituirá expediente al evaluar el comportamiento de los concesionarios en la alta responsabilidad de interés público que representa la operación de frecuencias de radio y televisión.

II.
Bases Constitucionales para una Nueva Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dictada en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006.

Es evidente, el contenido de la iniciativa no surge en el vacío histórico, constituye la continuación de una larga y polémica discusión realizada por la sociedad en las tres últimas décadas.

El 11 de abril de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El 4 de mayo de 2006, cuarenta y siete senadores de la Quincuagésimo Novena Legislatura (quince del PAN, dieciséis del PRI, quince del PRD, y uno del Partido Convergencia), promovieron una Acción de Inconstitucionalidad, con 21 conceptos de invalidez constitucional en la que solicitaron la invalidez de los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A,17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión y los artículos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS. Además, los artículos 3, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Por acuerdo del 8 de mayo de 2006, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad en cuestión, con el número 26/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

El análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este procedimiento de inconstitucionalidad, inauguro formas de consulta y transparencia en las deliberaciones, interpretando ampliamente un marco constitucional que ahora fundamenta el Proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16, por lo que hace al término de las concesiones y a la porción normativa "El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley."; 17-E, fracción V, en la porción normativa "solicitud de"; 17-G en la porción normativa "a través de subasta pública"; 20, fracciones I, en la porción normativa "cuando menos", II, en la porción normativa "De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud", y III, en la porción normativa "a su juicio", y 28 y 28-A, en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión.

1.- Principios y consideraciones generales que la Suprema Corte estableció como punto de partida para sus deliberaciones:

a) Son áreas estratégicas en las que el Estado ejerce sus funciones de manera exclusiva, sin que se consideren monopolios: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleos y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, generación de energía eléctrica, electricidad y las demás actividades que expresamente señalen las leyes.
b) El Estado puede concesionar, en casos de interés general y sujetándose a lo que establezcan las leyes respectivas, la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio de la Federación.
c) Corresponde a la Nación el dominio directo, entre otros bienes, del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.
d) El dominio que ejerce la Nación sobre este bien es inalienable e imprescriptible y su explotación, uso o aprovechamiento por los particulares no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal.
e) La comunicación vía satélite es un área prioritaria para el desarrollo nacional en la que el Estado debe ejercer su rectoría, protegiendo la seguridad y la soberanía nacionales y manteniendo el dominio de las respectivas vías de comunicación.
f) Toda concesión, como acto jurídico administrativo mixto, se encuentra sujeta a las modificaciones del orden jurídico que regulan el servicio público que debe prestarse o el bien público por explotar, al mismo tiempo que garantiza los intereses legítimos de los concesionarios.

2.- Estudio y valoración de los agravios expresados por lo Senadores promoventes de la acción de inconstitucionalidad:

Se inicio el procedimiento abordando los fundamentos invocados en la acción de inconstitucionalidad, en donde la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 17-E y cuarto transitorio del decreto, diferían de los contenidos que fueron aprobados en el texto hasta ahora, todavía vigente, concepción que fue desestimada por la Suprema Corte por no constituir una modificación sustancial al contenido y objeto de la Ley de referencia.

El primer párrafo del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones en donde se invocaba la violación a los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución, al prever la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), debido a que la decisión de crear los órganos desconcentrados debe ser atribución

exclusiva del poder Ejecutivo y en este caso, lo hizo el Congreso de la Unión.

En este caso, se desestimó la inconstitucionalidad del artículo conjurado, toda vez que, en ningún precepto constitucional establece como facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, la de crear órganos desconcentrados, lo que se corrobora de la lectura del artículo 89 constitucional, del cual no se desprende que prevea una condición de exclusividad en el uso de dicha facultad, máxime que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para crear órganos como la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Los artículos 9-C y 9-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fundamento de que contravienen los artículos 49, 89, 90 y 133 de la Constitución, así como la garantía de legalidad prevista por el artículo 16 en relación con los artículos 11, 16, 17, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, debido a que la facultad de la Cámara de Senadores de objetar los nombramientos de los Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) que realiza el titular del Ejecutivo, violenta el principio de división de poderes, la supremacía constitucional y la legalidad, pues las facultades u obligaciones de un poder que están relacionadas con las de otro deben estar señaladas expresamente por la Constitución.

En su análisis, la Suprema Corte apoya la invalidez constitucional, en donde se puntualiza la interpretación de la norma como confusa, al determinar la facultad del Presidente de la República de nombrar libremente y sin injerencia de algún otro Poder, a los funcionarios que integran la administración pública federal, de la cual es titular y superior jerárquico.

Se alega en el caso de los artículos 4 y 5 transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el 2 transitorio de la Ley Federal de Radio y Televisión, que son contrarios a los artículos 16, 49 y 89 constitucionales y que prevén la derogación de los reglamentos expedidos anteriormente por el Ejecutivo, atribuciones que antes eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que con la reforma fueron otorgadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la derogación del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las atribuciones que correspondían a la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión, ahora asumidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En los artículos antes mencionados, se interpreta la no obligatoriedad del Ejecutivo Federal para la expedición de un reglamento por cada ley que dicte el Poder Legislativo, ni que establezca un límite temporal para que esa facultad reglamentaria sea ejercida.

La Suprema Corte desestimo el alegato, debido a que el principio de primacía de la ley sobre el reglamento implica la posibilidad de que se puedan fijar plazos para la expedición de un reglamento, lo que, además, debe complementarse con la obligación constitucional del Presidente de la República de ejecutar las leyes. El Ejecutivo no tiene posibilidad de elegir si cumple o no con la ley: ésta le obliga por mandato constitucional y debe cumplirla, siempre y cuando, los plazos observen racionalidad.

El artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que prevé la designación escalonada de los Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), violatoria de los artículos 16, 40, 80, 81 y 83 de la Constitución, y considerada como una práctica de ejercicios transexenales del poder presidencial, en tanto el próximo Ejecutivo Federal no tendrá injerencia en el nombramiento de comisionados, sino en el penúltimo año de su sexenio, lo que significa que no podrá incidir en las políticas de la materia, siendo desechado por los Ministros de la Corte, toda vez que no existió el consenso suficiente para pronunciarse al respecto.

Entre la defensa invocada por los Senadores de la LIX Legislatura, se encuentra la de la no elegibilidad de los actuales Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quienes de acuerdo a su criterio, infringen los artículos 1, 5, 13, 49 y 89 de la Constitución, porque se considera que es una disposición legal limitativa

en su vigencia y privativa ya que se dirige a sujetos concretos.

El análisis de la Suprema Corte, apoyo la invalidez constitucional, pues la porción normativa del artículo transitorio, traspasa las garantías consagradas en los artículos 1, 5, 13 y 35, fracción II, de la Constitución Federal, y establecen como prerrogativas la igualdad, la libertad de trabajo, el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión públicos, teniendo las calidades que establezca la ley, y la prohibición de leyes privativas.

El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, vulnera los artículos 1 y 28 de la Constitución, porque contraviene los principios de igualdad y libre concurrencia. En lugar de promover la convergencia tecnológica, la reforma establece un régimen de excepción para el espectro destinado a la radiodifusión. Las definiciones separadas de servicio de radiodifusión y servicio de radio y televisión rompe el principio de neutralidad tecnológica y regulación equitativa para servicios iguales, un claro retroceso al régimen de convergencia y competencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues un concesionario de red pública podría solicitar autorización para prestar servicios de radio y televisión a través de su red como servicio adicional sin que se le impongan obligaciones específicas en esa materia, conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión, lo que origina otro tipo de asimetría de derechos y una ventaja competitiva a favor de los concesionarios de telecomunicaciones, siempre que éstos pueda iniciar la prestación de servicios de radio y televisión abierta mediante el arrendamiento de capacidad de un concesionario de radiodifusión, sin necesidad de verse obligados a concursar por frecuencias en igualdad de circunstancias con nuevos participantes en el mercado, lo que provoca el fracaso del propósito de la reforma que establece procedimientos de licitación pública en materia de radiodifusión.

Los estándares internacionales para la convergencia tecnológica recomiendan que la vía general de comunicación se regule de manera separada a los contenidos que se transmiten por la misma y que el desarrollo de ésta se de a través de prestadores de servicios y tecnologías en un ambiente de competencia, es por ello que el servicio de radiodifusión puede ser regulado como una vía general de comunicación utilizado para la telecomunicación sin menoscabo de la regulación de contenidos.

El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, al dar un trato preferencial a los radiodifusores, permite un acto discriminatorio prohibido por el artículo 1º constitucional y establece una barrera de entrada para los interesados en obtener frecuencias para prestar servicios de telecomunicaciones, razonamiento que fue respaldado por los Ministros de la Corte, resolviéndolo como inconstitucional.

El artículo 9-A, fracción XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contraviene el principio de igualdad al establecer obligaciones específicas a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones con poder sustancial y relevante en el mercado, es decir, discriminando a aquéllos que no lo tienen, distinción prohibida por la Constitución, sobre todo porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones carece de facultades para determinar cuáles concesionarios tienen poder sustancial en el mercado relevante.

Criterio que fue desestimado por la Suprema Corte debido a que la utilización por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de los conceptos de mercado relevante y poder sustancial contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica, no supone la inconstitucionalidad de la norma por invasión a las facultades que, en principio, le corresponden a la Comisión Federal de Competencia, pues la remisión que hace la Ley Federal de Telecomunicaciones a la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, se encuentra plenamente justificada en atención a la conveniencia de establecer los parámetros y condiciones técnico-jurídicas para que el órgano regulador en materia de telecomunicaciones pueda cumplir con sus objetivos.

La facultad de la Comisión de imponer obligaciones específicas a concesionarios con

poder sustancial en el mercado relevante, se encuentra razonablemente justificada, pues tiende a garantizar la rectoría del Estado en el ramo de las telecomunicaciones fomentando un ambiente de sana competencia, mediante el establecimiento de obligaciones específicas a concesionarios que cuentan con ventajas competitivas en el mercado de las telecomunicaciones; por tanto, no puede considerarse que dicha atribución de la Comisión sea violatoria del principio de igualdad o equidad.

La fracción XII del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, violenta el principio de legalidad, pues le da la atribución a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de recibir el pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos en materia de telecomunicaciones, cuando según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ello le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, el criterio fue desestimado por la Suprema Corte, ya que la atribución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para imponer obligaciones específicas a concesionarios, no puede considerarse violatoria del principio de legalidad, y la propia Ley Federal de Telecomunicaciones señala los únicos aspectos sobre los cuales pueden recaer las obligaciones que la Comisión llegare a establecer, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información. Además, las diversas áreas de la Administración Pública cuya atención se encuentra encomendada a las Secretarías de Estado, no pueden entenderse de manera aislada, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se prevé la igualdad de rango entre las Secretarías de Estado, que los titulares de las dependencias ejercerán sus funciones por acuerdo del Presidente de la República, se establece la existencia de una coordinación entre entidades para que se proporcionen información, datos o cooperación técnica necesaria, así como que el Presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos que atañan a varias Secretarías.

Si bien, en el artículo 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables, ello no significa que otras dependencias de la Administración Pública no puedan recibir el pago de aquellos conceptos que corresponden a los ingresos de la Federación relacionados con el ejercicio de las atribuciones a su cargo.

Por lo que se refiere a la fracción XIV del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los Senadores alegan una violación a los artículos 16 y 89 fracción X, de la Carta Magna, en relación con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al autorizar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia. Criterio que fue desestimado por los Ministros de la Suprema Corte, debido a que la Comisión Federal de Telecomunicaciones se limita expresamente al espacio de su competencia, es decir, a la materia de telecomunicaciones y de servicios de radiodifusión, sin que ello interfiera en modo alguno con la atribución de dirección de la política exterior del Estado mexicano y para la celebración de Tratados Internacionales que en forma exclusiva la Constitución consigna a favor del titular del Ejecutivo Federal, en el entendido de que, en todo caso, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado de carácter técnico que auxilia al Ejecutivo Federal en la materia a su cargo, para el desempeño de las funciones exclusivas que se especifican en la Ley.

Los argumentos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad, fueron el de la trasgresión a la Constitución, al otorgarle facultades al órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, y que corresponden originariamente al estatus de una Secretaría de Estado. Razonamiento desestimado por la Suprema Corte, debido a que se plantea el indebido otorgamiento de atribuciones que, en todo caso, pudieran corresponder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no así a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuando es el caso que tal

distinción carece de sustento jurídico, pues la COFETEL no tiene una personalidad diversa a la de la Secretaría al constituir sólo un órgano descentralizado y jerárquicamente subordinado de esta última, y que además, no se considera asequible, ya que al permitir que el uso de un bien escaso del dominio público lo determinen las peticiones formuladas por los concesionarios, se está privando al Estado de la rectoría para planear una eficiente y eficaz administración del espectro radioeléctrico a corto, mediano y largo plazo.

Se integra al cuerpo del recurso de inconstitucionalidad, los artículos 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21-A de la Ley Federal de Radio y Televisión**,** que imponen los principios de seguridad jurídica y legalidad, dejando un alto margen de discrecionalidad a la autoridad encargada de otorgar los permisos.

El análisis de la Suprema Corte apoya la invalidez constitucional, al establecer la fracción I del artículo 17E, respecto de la información que deben presentar los solicitantes de permisos de radiodifusión, y que otorga a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad para solicitar la información y exigir los requisitos que considere convenientes, aun cuando no se relacionen con los directamente establecidos en ese artículo, colocando a los solicitantes de los permisos en un grave estado de inseguridad jurídica al desconocer qué otra información tendrán que proporcionar o les será solicitada por la autoridad, lo que se traduce en infracción a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La primera parte de la fracción II del artículo 20 objetado, resulta violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al disponer que: "de considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a la solicitud'. Asimismo, la fracción III del artículo 20, abandona a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el otorgamiento de los permisos de radiodifusión una vez cumplidos los requisitos exigidos para ello, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 7-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 71-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, atentan en contra de los artículos 1º y 2º constitucionales, porque vulneran los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la Constitución para adquirir, operar y administrar medios de comunicación.

Desestimado por la Suprema Corte, debido a que el derecho a la igualdad se traduce, en principio, en que a las personas que se encuentran en una misma situación jurídica les sean aplicadas las mismas normas; de donde se sigue que si los sujetos previstos en una ley se encuentran en planos jurídicos diferentes, entonces, los preceptos que los regulen de manera diferente no incurrirán en violación a la garantía de igualdad, puesto que, ésta se cumple en la medida en que la ley regula las situaciones particulares de las personas, pudiendo para ello hacer distinciones, siempre y cuando éstas no resulten arbitrarias ni artificiales.

En el caso del Decreto, vulnera el artículo 133 constitucional y los Tratados Internacionales celebrados por el Estado mexicano, al contravenir el principio 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, "…Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos."

El análisis de la Suprema Corte de Justicia apoya la inconstitucionalidad de la norma, con el argumento, de que el avance tecnológico debe ser considerado como una ventana de oportunidad para los planes de desarrollo de cualquier Estado, sin embargo, conforme a la reforma aprobada, el tema de la convergencia digital se maneja con unas cuantas reglas de acceso a frecuencias para la ampliación de servicios a los mismos operadores de radiodifusión, sin que pasen por un proceso de licitación, vulnerando el derecho de igualdad. Por otro lado, en materia de concesiones, la reforma aprobada, prevé el otorgamiento de las de radio y televisión mediante licitaciones a través de subasta

pública, bajo el argumento de que ello supone el fin del poder discrecional del Poder Ejecutivo en esta materia.

Este argumento, sin embargo, lejos de cumplir con el propósito buscado, únicamente transforma el criterio discrecional, en un criterio claramente antidemocrático traducido en poder económico. Es decir, quien tenga más recursos para instalar y operar servicios de radiodifusión, será quien tenga más posibilidades de ganar la licitación para tales efectos.

Los procesos de protección del proceso de competencia y libre concurrencia, a través de la prevención y eliminación de monopolios, prácticas desleales y cualquier otra restricción al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, se encuentran observados en La Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional, dándole existencia a la Comisión Federal de Competencia, como órgano descentralizado, y encargado de analizar los casos bajo los supuestos de que existe un mercado relevante del bien o servicio de que se trate y que el agente económico tiene, dentro de éste, un poder sustancial. Criterio que hace procedente la Suprema Corte al respaldar los alegatos emitidos por los Senadores de la LIX Legislatura, bajo la consideración de la necesidad de diferenciar los marcos legales de "radio y televisión" y "radiodifusión".

En el caso del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se limita a establecer que el concesionario tendrá preferencia sobre terceros y que no estará sujeto al procedimiento de licitación, estableciendo así un régimen discriminatorio violatorio del artículo 1º de la Constitución y contradiciendo el propósito de la reforma, que tenía como espíritu el establecer un régimen de convergencia sin exigir al concesionario de radio y televisión el cumplimiento de obligaciones y de ser necesario, de nuevas condiciones por el uso y utilización de la concesión. Juicio apoyado por la Suprema Corte, declarándolo inconstitucional con argumentos similares.

La valoración de los Ministros de la Corte a los alegatos interpuestos en el caso del artículo 17-E de la Ley Federal de Radio y Televisión, considera que el precepto es violatorio del artículo 28 constitucional, al establecer en su fracción V, como requisito para participar en las licitaciones públicas para una concesión de radiodifusión, la mera "solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia".

Aparentemente, en congruencia con la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Radio y Televisión dispone que no se admitirán extranjeros como socios o asociados de la sociedad concesionaria o permisionaria, sin embargo la autorización de prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones a un concesionario de radio y televisión, permitirá a dichos concesionarios el uso de capacidad existente por arrendamiento, compra, fusión o cualquier otro mecanismo de asociación de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, materia en la cual se acepta la inversión extranjera hasta en un 100%, de manera tal que, evidentemente, este tipo de inversión tendrá injerencia directa en las empresas de radiodifusión, violentando el artículo 16 constitucional, con obvias consecuencias culturales, económicas y sociales. Testimonio considerado como débil y sin cimientos por los Ministros de la Corte.

La Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 28, permite que quede a discreción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pago de una contraprestación por la autorización para prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión. La discrecionalidad que prevé el precepto impugnado en el recurso de inconstitucionalidad, constituye una ventaja exclusiva e indebida que resta certeza jurídica a los concesionarios y priva al Estado del pago de una contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público de la Nación, como lo es el espectro radioeléctrico. Fundamento respaldado por el Pleno de la Corte y declarándolo inconstitucional.

Por lo que corresponde a la regulación de la propaganda en medios en materia electoral, se

insta en los alegatos del recurso interpuesto ante la Suprema Corte, se declare inconstitucional el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, toda vez que se considera, lesiona el artículo 41, fracción II de la Constitución Federal, tratándose de elecciones federales, debiendo informar al Instituto Federal Electoral sobre la propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto de elección popular, lo cual supone una clara autorización para que estos últimos contraten directamente con los concesionarios la difusión de propaganda electoral, lo que no está permitido constitucionalmente y está prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que sólo los partidos políticos pueden acceder a los medios de comunicación.

Reclamo que fue desestimado por la Suprema Corte, debido a que el numeral 79-A, fracción I, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de acuerdo al criterio de los Ministros, no contraviene lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, párrafo primero constitucional, en la medida en que no instituye derecho alguno a favor de los candidatos a cualquier puesto de elección popular para contratar propaganda electoral de manera directa, sino que únicamente impone a los concesionarios del servicio de radiodifusión la obligación de informar, al Instituto Federal Electoral, sobre la propaganda contratada por los partidos políticos o por los candidatos citados, es decir, a través del artículo cuestionado sólo se establece la obligación de informar a la autoridad competente sobre la propaganda en materia electoral contratada por los participantes en este tipo de contiendas y, de ninguna manera, se concede autorización a los candidatos a puestos de elección popular para que puedan contratar por sí mismos, dicha propaganda.

Respecto al artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Suprema Corte establece que involucra dos figuras distintas, como son la licitación y la subasta pública, que dificultan el entendimiento de las reglas y criterios que debe aplicar la autoridad para definir el otorgamiento de una concesión.

Si bien, la licitación se entiende como el concurso que permitirá definir el otorgamiento de la concesión atendiendo a las propuestas presentadas; en este sentido, lo previsto en la norma impugnada respecto a la valoración de la correspondencia entre el esquema de criterios, por los cuales se otorga una concesión de frecuencias de radiodifusión y los fines expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para la prestación del servicio de radiodifusión, resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 17, en el sentido de que las concesiones se otorgarán mediante licitación pública.

Sin embargo, la disposición impugnada señala que además de la congruencia entre el programa y los fines referidos, se valorará el resultado de la licitación a través de subasta pública, siendo que ésta se entiende como una puja en el que el vencedor será quien más dinero ofrezca. Entonces, se ignora de qué forma se decidirá el procedimiento relativo, esto es, si el triunfador será el que presente las propuestas más congruentes entre el programa de concesión de frecuencias de radiodifusión y los fines expresados para su utilización en el servicio respectivo, o bien, el que ofrezca una mayor cantidad de dinero al subastarse la concesión.

Asimismo, si se relaciona lo dispuesto por la segunda parte del artículo 17 de la propia ley impugnada, a saber, que el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión, con la prescripción relativa a considerar, para definir ese otorgamiento, el resultado de la licitación por subasta pública, podría pensarse que la cantidad que resulte de ésta constituye la contraprestación referida. Sin embargo, entonces no se entendería la naturaleza jurídica de la contraprestación, ya que si se considera como un derecho, resultaría que el pago respectivo lo es por permitirse el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio de la nación, supuesto en el cual no podría ser resultado de una subasta pública, y si se estimara que es un aprovechamiento, se advierte que el mismo no tiene justificación ni en la ley, ni el procedimiento legislativo del que derivó.

Al privilegiarse el elemento meramente económico para la obtención de una concesión para la prestación de servicios de radiodifusión, se demerita la trascendental función social que a través de la radio y televisión abierta debe llevarse a cabo. Es decir, los medios de comunicación masiva se han convertido en instrumentos claves para la satisfacción de derechos subjetivos fundamentales, concretamente de los derechos de libre expresión y de información, a través del ejercicio de los cuales debe contribuirse al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana, fomentándose los valores de igualdad y no discriminación, ayudando a elevar el nivel de educación y cultura, así como a la democratización y politización de la población, al mejoramiento y cuidado de la salud, del medio ambiente, etcétera.

Al mismo tiempo, el que se ennoblezca el elemento económico para el otorgamiento de la concesión de bandas de frecuencias para la prestación de servicios de radiodifusión, favorece el acaparamiento de los medios de comunicación masiva en grupos económicamente poderosos, impidiendo la participación plural y el ingreso de nuevos agentes o entidades en el ramo, con lo cual evidentemente, el Estado está renunciando al ejercicio de sus facultades como garante del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, obstaculizando con ello, el desarrollo integral, plural, democrático de la sociedad mexicana.

Además, se contrarían los principios económicos rectores establecidos en el artículo 28 constitucional que prohíbe la creación de monopolios y la realización de prácticas monopólicas, al impedirse la libre competencia o concurrencia en el sector de radiodifusión, generándose ventajas a favor de ciertas clases poderosas económicamente y en perjuicio del público en general, pues si el otorgamiento de concesiones en este ramo se hace depender preponderantemente del elemento económico, resulta lógico concluir que quienes cuenten con mayores recursos financieros resultarán vencedores de la licitación por subasta pública, pues sin desconocerse que en tales procedimientos deberá atenderse a la susceptibilidad de explotación del bien, el criterio rector predominante del Estado, conforme al marco constitucional y legal que rige en la materia, debe ser el del interés público de la actividad a desarrollar para que efectivamente se cumpla el fin social que se persigue.

Por lo que corresponde a declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se integra en las consideraciones del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, la transgresión a los principios fundamentales consagrados en los artículos 25 y 27 constitucionales, relacionados con la rectoría económica que corresponde al Estado ejercer sobre el sector de telecomunicaciones, así como respecto al otorgamiento de las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público de la Federación, además de infringir el principio de igualdad que contiene el artículo 1° de la Ley Suprema, al otorgar un trato diferente a los concesionarios de radiodifusión respecto del establecido para los concesionarios en materia de telecomunicaciones, concretamente de bandas de frecuencia para usos determinados, sin que exista razón que lo justifique, y un trato igual a los concesionarios de radiodifusión entre sí con independencia de la inversión que realicen y los fines que persigan mediante el uso y explotación de la banda de frecuencia asignada.

Con el otorgamiento de la concesión para el uso de las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión, en el término forzoso de veinte años, consideran, favorecen situaciones que dificultan que el Estado cumpla con su deber constitucional de actuar como rector de la economía en el sector de telecomunicaciones, así como con el de proteger el bien del dominio público concesionado, manteniendo el dominio de las respectivas vías de comunicación, ya que no pueden alterarse las características de la concesión sino mediante resolución administrativa o judicial.

La inversión tecnológica que realizan los concesionarios no justifica el plazo forzoso de veinte años, en virtud de que en la actualidad la tecnología avanza rápidamente y es la que provoca, precisamente, el aprovechamiento cada vez más

eficiente del espacio radioeléctrico, de suerte tal que mientras transcurre el plazo forzoso de duración de la concesión, el Estado perderá el control para verificar el mejor aprovechamiento de la tecnología y, por tanto, del bien concesionado.

Al no existir correlación entre la inversión tecnológica y el aprovechamiento del bien, dada la velocidad con que aquélla avanza, se traduce en una barrera para la libre competencia, pues los terceros estarán en desventaja al no poder competir con los concesionarios como consecuencia del manejo de un plazo tan amplio.

Existe contravención a la Constitución Federal por el diverso trato que el legislador da a los concesionarios y permisionarios en esta materia, en relación con los demás servicios de telecomunicaciones y la posibilidad que se les da para acceder a la prestación de los demás servicios de telecomunicaciones, sin sujetarlos a licitación pública, sino mediante la presentación de una simple solicitud de autorización.

Sólo las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados y para usos experimentales requieren de concesión, es decir, es el uso específico que se asocia a la banda de frecuencia lo que determinará la necesidad de obtener la concesión para su explotación o aprovechamiento.

Es decir, el Estado, como rector de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, deberá evitar el acaparamiento de los medios masivos de comunicación, lo que resulta de vital relevancia si se considera la función social que la radio y la televisión llevan a cabo y su poder de influencia sobre la población".

3.- Principios Constitucionales que Orientan la Nueva Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como consecuencia, al resolver la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado los principios constitucionales que orientan esta propuesta de nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión:

a) Salvaguarda absoluta a la libertad de expresión y el derecho a la información.
b) Igualdad de los hombres ante la ley, que no puede ser absoluto dadas las diferencias propias que caracterizan la individualidad del ser humano, actualizando el principio aristotélico de dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, con el deber de aminorar las diferencias sociales y económicas.
c) Igualdad a favor de los pueblos indígenas y comunidades, en la medida en que impone a la Federación, los Estados y los Municipios, la obligación de promover la igualdad de oportunidades de éstos, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
d) El derecho a la educación que, entendido como una garantía de libertad.
e) La rectoría económica del Estado atribuyéndole a éste la responsabilidad de conducir e implementar el desarrollo nacional, mediante la actuación que regule e impulse el proceso económico y a la vez atienda los procesos sociales derivados del mismo, para propiciar un crecimiento sostenido, equilibrado e integral.
f) La planeación democrática como instrumento fundamental del sistema político, la planeación, que tendrá como objetivos imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para lograr la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
g) El dominio directo, inalienable e imprescriptible, del espacio situado sobre el territorio nacional.
h) La prohibición general de monopolios y prácticas monopólicas.

III.

Compromiso Asumido por el Senado de la República para Realizar una Reforma Integral a la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Constitución del Grupo Plural.

Respondiendo a los términos en que fue dictada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 4 de julio de 2007, se aprobó la conformación de un Grupo de Trabajo, con el propósito de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.

El 16 de agosto de 2007, se comunicó a las presidencias de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, que el Grupo de Trabajo de referencia quedó integrado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios; los Presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos y por los siguientes senadores: por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Sen. Humberto Aguilar Coronado, Sen. Marko Antonio Cortés Mendoza y Sen. José Julián Sacramento Garza; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Sen. Francisco Arroyo Vieyra y Sen. Raúl Mejía González; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Sen. David Jiménez Rumbo y Sen. Pablo Gómez Álvarez; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Sen. Javier Orozco Gómez; por el Grupo Parlamentario de Convergencia: Sen. Gabino Cué Monteagudo; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: Sen. Alberto Anaya Gutiérrez.

El Grupo de Trabajo inició sus funciones a partir de que se recibió en la Cámara de Senadores, la notificación y el engrose de la resolución relativa a la acción de inconstitucionalidad en cuestión.

Conforme al programa de trabajo aprobado también por la Junta de Coordinación Política, la misión específica del Grupo Plural consistió en elaborar una iniciativa de reforma integral al régimen de los medios electrónicos de comunicación, que sería presentada al pleno del Senado para su discusión y aprobación.

Para allegarse de información y documentación, el Grupo Plural desahogó un amplio calendario se sesiones consultivas en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado. La presentación de las ponencias se desarrolló por tema específico y, en la invitación a comparecer, se cumplió puntualmente con los criterios de representatividad, equidad, pluralidad e inclusión.

En este contexto, el Grupo Plural para la Revisión de las legislaciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión realizó las siguientes sesiones de trabajo: el siete de septiembre de dos mil siete, para declara la instalación y definir el programa de trabajo; el veinte de septiembre de dos mil siete, para realizar el análisis de la propuesta de agenda temática; el veintisiete de septiembre de dos mil siete, para aprobar la agenda temática; el diez de octubre de dos mil siete, con especialistas para dilucidar los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006; el once de octubre de dos mil siete, con integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia; el dieciséis de octubre de dos mil siete, con la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación A. C. y Asociación Mundial de Radios Comunitarias; el diecisiete de octubre de dos mil siete, con la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable y la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; el veintitrés de octubre de dos mil siete, con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C; el veinticuatro de octubre de dos mil siete, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y organizaciones Vinculadas con Medios de Comunicación e Información Indígenas; el treinta de octubre de dos mil siete, con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión; el seis de noviembre de dos mil siete,

con la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; el siete de noviembre de dos mil siete, con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2; el trece de noviembre de dos mil siete, con el Sindicato de Telefonía de Japón; el catorce de noviembre de dos mil siete, con la Secretaría de Gobernación; el veintiuno de noviembre de dos mil siete, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el veintiocho de noviembre de dos mil siete, con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; el cinco de diciembre de dos mil siete, con el Sistema Nacional de Productoras de Instituciones de Educación Superior.

Asimismo, para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión en el proceso legislativo, todas las sesiones de trabajo fueron transmitidas por el Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Las aportaciones documentales que se recibieron, las minutas de las sesiones de trabajo, los informes rendidos, los documentos elaborados como insumos de trabajo, las convocatorias y avisos están disponibles en la página Web del Senado.

El programa de trabajo y la agenda temática del Grupo Plural estableció realizar el estudio y análisis tanto de los rubros declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como también de los demás temas que aun cuando no fueron motivo de la acción de inconstitucionalidad, son indispensables para efectuar una revisión integral de la legislación en materia.

El objetivo consistió en agrupar los temas a partir de una estructura que permitiera ordenar los trabajos de análisis, consenso y redacción de manera sistemática y expedita en la elaboración de la iniciativa legislativa.

Siete grandes directrices ordenaron la agenda temática para los trabajos del Grupo Plural y la recopilación de información: jurisdicción y competencia; régimen autorizante en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y administración del espectro radioeléctrico; modernización y convergencia tecnológica; condiciones para que pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; régimen de medios públicos y comunitarios; contenidos, y Sanciones y controversias.

Por tanto, ante el incumplimiento en la elaboración de la iniciativa por parte del Grupo Plural, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se nutre con las aportaciones recibidas por el Grupo Plural en estos grandes temas.

IV.
Estructura y Contenido de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Para cumplir con los objetivos y principios que deben guiar la regulación en materia de las Telecomunicaciones y de la Radio y Televisión en el territorio nacional, y tomando como base los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia y las propuestas expresadas en las audiencias convocadas por el Grupo Plural en el Senado de la República, esta iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que consta de 239 artículos, agrupados en 12 Títulos y 18 Transitorios.

En el Titulo Primero de Principios Generales se establece el concepto integrador de las telecomunicaciones y la radiodifusión al incorporar como telecomunicaciones a las actividades prioritarias para el desarrollo nacional, en las que se comprenden las redes cableadas e inalámbricas que transportan servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión así como de otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica. En consecuencia queda establecido en este Titulo, que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La intención de la Ley al regular los servicios de telecomunicaciones y los de radiodifusión (radio y

televisión abierta) y la radio y la televisión (cuando se incluyen además los contenidos de la televisión restringida) referirá en su contenido de manera diferenciada de acuerdo a los servicios específicos a los que se refieren los preceptos y por ello establece que tanto la radiodifusión, que transmite señales de manera abierta que son recibidas por cualquier radio o televisor, como la radio y televisión restringida, en la que existe una contraprestación del usuario a cambio de la recepción de la señal, están comprendidas dentro del servicio de radio y televisión. Por supuesto se reconoce que aun cuando en ambas modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una denominación específica.

Regular al servicio en su conjunto, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios tecnológicos que ya se están dando y que continuarán en los próximos años, en los que se prevé la ampliación de frecuencias y su convergencia, (servicios diversos que a través de los medios pueden ofrecerse dado el avance de las telecomunicaciones) lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios y aparatos receptores muy diversos, que en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. De este modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por el desarrollo tecnológico**.**

En el artículo 5º se exponen los principios y responsabilidades que deberán observar particularmente los prestadores del servicio de radio y televisión, para cumplir de manera eficiente la función social que tiene encomendada el servicio. Se propone extender y adecuar las obligaciones de función social, a los cambios democráticos, a las demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el país en materia de defensa de los Derechos Humanos, libertad de expresión y el derecho a la información especialmente; la no discriminación, la tolerancia y la equidad de género; la democracia y la paz; la defensa y respeto de la esencia pluricultural de la nación; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo integral de la niñez y la juventud, así como la protección de los derechos de los grupos vulnerables.

En el Titulo II, referido a los ámbitos de jurisdicción y competencia, delimita las atribuciones del órgano regulador autónomo que transforma a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta transformación se da en virtud de que se amplía su ámbito de competencia como órgano regulador autónomo que deberá responder a la independencia necesaria para la regulación de un sector de fundamental importancia para la democracia y en virtud de la especialidad que se requiere para su operación, toda vez que se ocupará también de la regulación de los contenidos de la radio y la televisión que son el instrumento necesario para el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información.

En virtud de la opinión de la Suprema Corte de Justicia respecto al órgano regulador, cuando planteo que “No se trata de una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, aunque deben respetarse su naturaleza y características esenciales”. Por ello, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le atribuye la responsabilidad de atender el desarrollo de la necesaria infraestructura para atender las obligaciones de cobertura social. Asimismo, la Suprema Corte opinó que es necesario que la Ley limite la intervención de la dependencia (SCT) en las determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la “doble ventanilla.

En lo que se refiere al órgano regulador, la necesidad de trascender los límites de la autonomía técnica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en las circunstancias actuales resulta pertinente fortalecer las atribuciones del nuevo ente regulador mediante un esquema orgánico funcional que no limite la capacidad técnica de que debe gozar para la eficiente administración del espectro radioeléctrico, en congruencia con lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución General de la República.

Es así que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión estará en aptitud de “regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de las telecomunicaciones, así

como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones", de tal suerte que incluso su denominación resulta acorde con las atribuciones que habrá de ejercitar.

En efecto, la transformación de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, no es sólo nominal, pues las atribuciones del nuevo órgano regulador autónomo se hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión, con lo cual, se atiende un añejo reclamo social en el sentido de no atribuir una tarea de tal magnitud —estrechamente vinculada con la función social a que se encuentran afectos este tipo de servicios—, a una dependencia cuya vocación es fundamentalmente política como lo es la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, como se mencionó con antelación, la asignación de atribuciones al Instituto, se hace bajo un enfoque orgánico funcional de tal suerte que la administración del espectro radioeléctrico, en particular lo relativo a los procesos para la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias será ejercitada por conducto del Instituto, en su carácter de órgano especializado en la materia, para lo cual se le ha dotado de "autonomía plena para dictar sus resoluciones".

De esta manera, se evita la discrecionalidad que históricamente ha caracterizado el otorgamiento de concesiones, pues habrá de recordarse que a partir de la constitución de la COFETEL se desconcentró formalmente la función técnica, aunque no se le otorgaron facultades específicas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitación del espectro; la idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisión política de otorgar las concesiones, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión, constituyó siempre una falacia.

En lo que corresponde a la integración del órgano regulador, se mantiene la figura del Pleno como instancia máxima para la toma de decisiones y se aumenta el número de comisionados de cinco a siete, en congruencia con el enfoque integral de las atribuciones que habrá de ejercitar, tanto en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como para la regulación y vigilancia de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión.

En cuanto al perfil, previo a establecer los requisitos para el nombramiento, se anuncia la integración multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno del Instituto cuente con "especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales", con lo cual se asegura que para la toma de decisiones se tomen en cuenta diversos puntos de vista, lo cual contribuye a que prevalezca un sentido de pluralidad.

Por ello es que en las nuevas disposiciones se atribuye al Senado de la República la facultad de nombrar a los Comisionados. No obstante, a diferencia del marco jurídico previo, se introducen requisitos que excluyen toda posibilidad de nombrar en el cargo a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe recordarse que en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la federación, como en el caso concreto lo es el espectro radioeléctrico, debe prevalecer el interés público. De esta manera, se adicionan las dos siguientes hipótesis relevantes:

I. No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas;

II. No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos o actividades:

a. De dirigencia de partido político;
b. De candidato o cargo de elección popular;
c. De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta;
d. De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada;
e. De ministro de culto religioso;

f. Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada.

Por otra parte, se prevé la integración de un Consejo Consultivo, cuya función se encuentra estrechamente vinculada con las atribuciones que se adicionan al actual órgano regulador, en lo que corresponde a la regulación y vigilancia de los contenidos de la radio y la televisión.

Como se mencionó con anterioridad, se trata de evolucionar hacia una situación en la cual se desvincule a la Secretaría de Gobernación de la vigilancia de los contenidos en materia de radio y televisión que a la fecha ejerce a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, pues si la función social a la que se encuentran afectos los servicios de radio y televisión se verifica en la transmisión de programas que: a) Contribuyan al fortalecimiento de la integración nacional, b) Promuevan el mejoramiento de las formas de convivencia humana y, c) Fomenten un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendente al fortalecimiento de nuestro país como nación plural y multiétnica, resulta totalmente inconveniente encargar formalmente la tarea de supervisión a una dependencia del Ejecutivo Federal que tiene atribuciones de política interior que en nada se relacionan con la citada función social de los medios electrónicos de comunicación.

En esta tesitura, las nuevas disposiciones en materia de radiodifusión precisan que el Consejo Consultivo "es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación que serán seleccionados por el pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación".

Con el propósito de asegurar una instancia plural alejada de intereses personales, se regula la integración del Consejo mediante cargos a título honorífico, además de que se descarta la posibilidad de la representación, para lo cual se exige que la participación de los consejeros sea a título personal, pues de otra forma se estaría posibilitando la asistencia de personas que podrían no satisfacer los requisitos que impone la Ley.

De igual manera, la legislación hará posible la integración de uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, que podrán constituirse a manera de órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. Para ello, se introdujo en la Ley un principio de equidad que favorezca la presencia, a título honorífico, "de asociaciones o cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios".

En el Titulo II, de la Planeación y Administración del Espectro Radioeléctrico, se introducen innovaciones importantes respecto a las leyes que se reforman. Las reglas establecidas para las autorizaciones del uso y explotación del espectro radioeléctrico en todos los servicios, telecomunicaciones y radiodifusión, son uniformes salvo en aquellas en que, específicamente se refieren a la radio y la televisión, que cada vez que se usa en este sentido el concepto involucra a la radiodifusión y al servicio restringido que se distinguen, hasta hoy, por la unidireccionalidad y por el servicio público de transmisión de contenidos que los distingue.

En primer término se propone considerar el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que "la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podrá realizarse mediante concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes" por lo que la única figura jurídica reconocida constitucionalmente para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico es el de la concesión y no la de permiso, por lo que se homologa todo a la figura de la concesión, en atención puntual al engrose de la sentencia de la Suprema Corte y en apego estricto al artículo 27 Constitucional.

La diferencia o modalidad que se establece a partir de los usos asignados a las frecuencias del espectro y será la distinción entre los que se dedican a

fines lucrativos y los que no. Por lo tanto, pueden asignarse concesiones para servicios educativos, culturales, comunitarios, de orientación social o de explotación comercial. En este sentido se propone, en el artículo 24, la clasificación de concesiones de acuerdo a lo siguiente: Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro; Uso social: para la explotación sin fines de lucro, para fines sociales, culturales, comunitarios, científicos, educativos y de experimentación; comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas temporales de equipo y radioaficionados; Uso público: asignada de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, e instituciones de educación suprior para el cumplimiento de sus atribuciones; Uso protegido: para la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal; Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto y Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Para la transparencia en la administración del espectro se establece la obligación de la autoridad de publicar un Programa Anual de Frecuencias con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas.

Se establecen también los procedimientos que deberán ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para el caso de las de uso comercial que busca fines de lucro se establece el procedimiento de licitación pública, sin subasta. Esto es, concursos transparentes y con reglas claras, con base en un Plan Anual de Frecuencias. La Suprema Corte de Justicia reconoció que no existe *razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente**.*** *Lo que en términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este mercado […] que propicia prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión*.

Por ello, en esta propuesta, el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Con duración de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. En la ley quedan establecidos los criterios que el órgano regulador debe atender para la definición de las concesiones con el fin de acotar la discrecionalidad y parcialidad en las decisiones.

A fin de garantizar el uso social y el Interés general, las instituciones religiosas y los ministros de culto; así como los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para prestar el servicio de radio y televisión de

forma directa o indirecta, o en su caso participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos.

La Comisión Federal de Competencia deberá participar desde el diseño de las bases de licitación. Y en atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras que constituyan ventajas a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia determinará, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, que prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura.

Para el caso de los refrendos de las concesiones la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 2006/26, claramente estableció que "*Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados"*.

La preferencia sobre terceros para el concesionario con motivo del refrendo, sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento además de la revisión de su expediente legal a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

Respecto a las concesiones para uso público se hace mención a esta figura de autorización para lo que comúnmente se conoce como medios públicos o de Estado.

En los casos del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se deberá acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales se operará la concesión para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial, en cuyos órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social. En el resto de los entes públicos, la operación se hará a través de la forma administrativa que resulte idónea para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. Además de que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituidos al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio. Además de estar obligados a contar con un defensor de la audiencia y publicar sus códigos de ética.

Atendiendo a los criterios establecidos en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Presidente Ministro Mariano Azuela al discutir el 29 de mayo de 2007, los artículos referidos a los permisos incluidos en la Acción de Inconstitucionalidad expresó: "*Lo que corresponde a los concesionarios y permisionarios, nos vamos a dar cuenta de algo que a mí me parece verdaderamente curioso; que lo comercial, lo que es para especular y ganar dinero, todo es clarísimo, y un trato muy distinto a los permisionarios, que son los que se van a dedicar de una manera directa, a todo lo que es el objetivo fundamental de la Ley; están sujetos a una gran discrecionalidad; y por ahí, hay una disposición de que no pueden tener anuncios comerciales, con lo que se establece un régimen de una televisión fuerte, importante, digitalizada que es la comercial, y una televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades que se establecen en la Ley de Radio y Televisión. Qué hay desigualdad, me parece que hay desigualdad; porque la igualdad debe ser en torno a lo que se está pretendiendo, que es utilizar el espectro radioeléctrico; y en ese sentido, debe haber perfecta igualdad. Las diferencias deben ser para que se actúe en razón de ellas; y para mí, dando mayor facilidad; dando mayores apoyos; dando mayor seguridad jurídica a los permisionarios y no a los concesionarios*".

En este sentido se establece el procedimiento y los requisitos que habrán de atenderse a partir de la solicitud de parte y una vez que se conozca el Programa Anual de Frecuencias establecido en la ley y se determina un plazo de 90 días para la respuesta fundad y motivada de la autoridad para evitar la experiencia de solicitudes sin respuesta o aplazadas indefinidamente.

Por otra parte se establecen y regulan las fuentes de financiamiento para las concesiones de uso público y las de uso social incorporando además del presupuesto público que garantice su operación, la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional, en este caso se acota la necesidad de expedir recibos o firmar contratos que transparenten los montos o bienes recibidos. También se podrán vender productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de programación en el caso de la televisión y 24 minutos por hora en la radio. En todo caso, tratándose de medios que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.

En relación, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., entrego al Grupo Plural una propuesta para su propia regulación, entre los puntos a destacar que han sido considerados en esta propuesta se encuentran*:*

Que los medios estatales constituyan entes públicos con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; claras reglas para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; finanzas sanas para que cuenten con alternativas de financiación; pleno acceso a tecnologías; reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; espacios de inclusión de la más amplia participación social; un ombudsman; una decidida regulación que proteja al patrimonio audiovisual. Constituirlos como medios públicos reales; establecer su definición, principios, fines y elementos que requieren para garantizar su plena existencia.

Estos medios deben contar con plena independencia editorial, para ello es necesario que cuenten con un órgano colegiado de amplia representación social, que plantee las políticas de desarrollo de las emisoras. En la concepción plural de un medio público, las voces que más importan son las que no se escuchan: garantizar la participación social, que los contenidos reflejen la pluralidad de México y del mundo.

Es necesario contar con autonomía financiera: recursos fiscales realmente necesarios y rápidos en los presupuestos corrientes; eliminar la prohibición de comercializar tiempo aire, porque la comercialización puede tener fines distintos al lucro, mediante una adecuada regulación, no lucrativa y responsable (límites claros de tiempo, obligación de reinvertir los recursos, que no desvirtúe el carácter educativo, cultural, de información social de los medios públicos). Esta es una práctica cotidiana en países con sólidas economías de mercado. En México se ha interpretado como una competencia desleal. Pero como lo han mostrado elementos y cifras, podemos afirmar que históricamente no han sido los medios públicos los que han sido beneficiados por la entrega de recursos públicos. No hay argumentos sólidos para dicha prohibición.

Por tratarse de medios que operan una concesión de uso público estarán sujetos a una serie de responsabilidades sin demerito de las establecidas en el artículo 5 de esta ley. Entre las obligaciones adicionales que deberán atender estos medios se encuentran:

- Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los derechos a la educación, a la salud, a la información y la libertad de expresión;
- Difundir información de interés público, plural y confiable;
- Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el reconocimiento de que nuestra nación es plural y multiétnica;
- Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la producción de contenidos;
- Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente;
- Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad;
- Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro;

- Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional;
- Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones y garantizar el derecho de réplica de todo ciudadano;
- Promover, fomentar y garantizar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de la administración, dirección y contenidos;
- Evitar el uso con fines de promoción personal a los gobernantes y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales.

En la Sección IV de este Capítulo se considera a las concesiones del espectro radioeléctrico para uso social. Como una demanda social claramente expuesta en las consultas y audiencias al respecto y que a lo largo del tiempo se han realizado, el acceso social a los medios de comunicación. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), durante su comparecencia ante el Grupo Plural apunto lo siguiente:

La AMARC propone que se reconozca y promueva el derecho de las comunidades, grupos y asociaciones sociales sin fines de lucro para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria. No clasificar a los medios sino el servicio que se pretende dar a este tipo de comunidades. Estas asociaciones podrán utilizar concesiones que se otorgarán a personas morales sin fines de lucro para fortalecer el desarrollo social, comunitario y educativo. Coincidimos con otros en que la figura de la concesión y el permiso han contribuido a generar marcos discriminatorios tanto en el otorgamiento de la frecuencia como en su sostenibilidad. Proponemos utilizar la figura de concesiones en tres categorías: concesión con fines de lucro, concesión otorgada a instituciones del Estado –medios públicos-, y concesión a personas morales sin fines lucrativos para el servicio de radiodifusión comunitaria. Entendiendo por servicio de radiodifusión comunitario, social, cultural y educativo, al servicio de radiodifusión no estatal de interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente asociaciones civiles) con personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrece un servicio público de comunicación orientado a satisfacer necesidades de comunicación social.

Por otra parte, en este Capítulo, también se considera lo establecido en la citada resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de atender lo establecido por el artículo segundo constitucional:

"Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país las comunidades indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de comunicación".

"En efecto, el legislador debe dictar acciones afirmativas para disminuir su desigualdad real. Esta acción, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado".

Es así que esta propuesta asume esta omisión y atiene de manera puntual la elaboración de las normas que permitan la garantía y las condiciones simplificadas para el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a operar sus propios medios.

Para ello se incorpora un procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y simplificado que considera las condiciones marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias. Por ejemplo que al acreditar la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, puedan documentarlo con solo un acta de asamblea; (y no obligación de crear asociaciones civiles o demostrar documentos oficiales); explicitar la zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias; y en su proyecto de producción y

programación especificar el porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad en la programación.

El Capitulo II integra lo que en este proyecto se ubica como "De los Permisos", que a diferencia de lo que hasta ahora se ha conocido con esa figura jurídica, sólo se refiere a las autorizaciones que hará la autoridad para los operadores que no usan espectro radioeléctrico, que como se ha señalado anteriormente el uso de ese Bien debe hacerse de acuerdo a la Constitución, bajo la figura de concesión.

De esta manera, los servicios de telecomunicaciones que no usan espectro y que se ubican en el capítulo de Permisos, son para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbrica y estaciones terrenas transmisoras, así como las comercializadoras de los servicios de telecomunicaciones. Estos permisos se otorgarán a través de un proceso de licitación definido en la propuesta y su vigencia, considerando que la inversión es por parte de los mismos operadores es por un plazo de hasta 20 años.

Un Capitulo importante es el III, de los Servicios Adicionales y Valor Agregado: en este tema la Corte estableció una serie de principios constitucionales que deberán guiar las normas para definir los alcances, límites y condiciones para la prestación de servicios auxiliares o adicionales a través de las frecuencias concesionadas, en el caso particular de la radiodifusión y considerando las figuras jurídicas existentes definió la Igualdad en la aplicación de la ley para concesionarios y permisionarios; los principios de rectoría económica del Estado, y evitar que mediante estos servicios, se agudicen fenómenos de concentración en contra del interés público y la libre concurrencia en este segmento del mercado.

La propuesta que se entrega se basa en el criterio de permitir la más flexible, versátil y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos comunicacionales con la finalidad de que haya un uso más intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión, etcétera). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible.

Considerando que la posibilidad para que a través de las frecuencias se puedan prestar servicios auxiliares o adicionales, se incrementa con la digitalización. Por ejemplo, en televisión, además de una mejoría en la calidad de imagen y sonido similar al disco compacto y multicanal (5.1 o teatro en casa), es técnicamente posible transmitir servicios de Internet, películas, canciones, juegos o cualquier otro contenido a demanda; sonido y subtítulos en varios idiomas, servicios de televisión interactiva (informativos en tiempo real, información de tráfico vehicular y clima, comercio electrónico), publicidad interactiva, guías de programación, juegos interactivos, participación en encuestas, teletexto y servicios para personas con capacidades diferentes, entre otros.

En radio, dependiendo de los estándares existentes que se desarrollan en el mundo, algunos de los servicios que potencialmente es posible ofrecer son: sonido en 5.1 canales (teatro en casa), transmisión de imágenes, datos como nombre de la estación, identificación, frecuencia, autor o intérprete de la melodía que se transmite en ese momento, programa, etc., información especializada (finanzas, cotizaciones, tráfico vehicular), avisos comerciales y de emergencia, entre otros.

Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, en el artículo 28, declarado inconstitucional por la Corte, establecía que los concesionarios de radio y televisión podían prestar "servicios adicionales de telecomunicaciones" en las mismas frecuencias atribuidas a la radiodifusión, mediante un trámite sencillo y sin que necesariamente existiera una contraprestación al Estado por el otorgamiento de un nuevo título de concesión le hubiese permitido a los concesionarios incorporarse en el sector de las telecomunicaciones de una manera privilegiada y ventajosa. Por ello, en su proyecto de sentencia el ministro Salvador Aguirre Anguiano establece que *"las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea*

sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada".

La posibilidad para que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión puedan ofrecer nuevos servicios a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, alcances, límites, condiciones y beneficios al Estado deben quedar claramente asentados en la ley y sus disposiciones reglamentarias para evitar privilegios y un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Durante la discusión de las reformas, los ministros se refirieron justamente a esa deficiencia. "*No hay definición exacta y precisa" de esos servicios, dijo la ministra Luna Ramos. "Lo que entendemos es que estos servicios adicionales abarcan todos los servicios de telecomunicación, absolutamente todos, y si nosotros vemos la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, la lista es enorme*…". Además, los servicios adicionales se reducen a situaciones como, por ejemplo, "*en el momento en que se está dando un noticiario se establezca un recuadro con los servicios meteorológicos, o bien se dé una información específica de la bolsa, cuando están dando noticias financieras"*. Sin embargo, también pueden darse otro tipo de servicios adicionales y "*en estas circunstancias se puede a solicitar un servicio de telecomunicación e instalar el equipo necesario, en el que pueda darse un servicio de telecomunicación bidireccional, o lo que normalmente los expertos han llamado la entrada al triple play en el que se usa voz, video y datos"*. *De esta manera, "es necesario establecer esta diferenciación entre los servicios adicionales que se van a pasar dentro del canal que está en uso y los servicios adicionales que son ajenos y diferentes… y que sí ameritan todos los requisitos que en este aspecto marca el artículo 11 de la Ley de Telecomunicaciones*".

En principio, la presente iniciativa define como servicios adicionales: aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y requieren autorización del Instituto y por otra parte, los servicios auxiliares conexos, como aquellos que se integran a los servicios de interconexión para proveer integralmente un servicio de telecomunicaciones a los operadores, prestadores de servicios o usuarios. Estos incluyen, entre otros, los servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, para permitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado al efecto.

Con rigurosa atención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia al invalidar los artículos 28 y 28A de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, esta iniciativa establece claramente que los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar solicitud al Instituto, el cual la considerará si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y los títulos de concesión y siempre y cuando continúe prestando los servicios originalmente autorizados, y en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, competencia y pluralidad. En esa hipótesis, las solicitudes para nuevos servicios únicamente podrán ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente concesionadas y una vez autorizados se establecerá el pago de una contraprestación con base al valor del mercado por utilización de las bandas de frecuencias para servicios adicionales semejantes.

Por otra parte, los servicios auxiliares de valor agregado en radiodifusión, o sea, asociados al servicio principal de radiodifusión podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en ley y disposiciones reglamentarias.

En el Capítulo IV se establecen los casos en los que será posible la cesión de derechos considerando siempre que hayan transcurrido al menos dos años del otorgamiento de la concesión y que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, además de acreditar la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. Es decir, que el nuevo operador atienda a los mismos requisitos que el concesionario original. Es importante acotar que solo la figura de concesión para uso comercial puede caer en la hipótesis de la cesión de derechos.

Así mismo, cuidando fenómenos de concentración, si la cesión se pretende transferir a otro concesionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, deberá exigirse la opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

El Capitulo V regula los criterios de la terminación, revocación, cambio y rescate de concesiones y permisos que en principio integra los criterios establecidos en las actuales leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, incorporando como falta grave, la comisión de acciones que impidan la transmisión de señales de otro concesionarios, o bien, el incumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en la reforma constitucional en materia electoral.

En el caso del cambio o rescate de frecuencias se establecen puntualmente, en el artículo 108, las hipótesis para su aplicación sin violentar preceptos constitucionales ni legales. De hecho de este apartado puede desprenderse con toda precisión la motivación de cambio de frecuencias de manera regulada que podría aplicarse a la atención del problema de las frecuencias de AM en su cambio a la banda de FM, y en ese sentido se incorporan artículos transitorios.

En el caso del cambio o rescate el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados, en condiciones similares. Para la contraprestación debe atenderse en caso de que las frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios de telecomunicaciones. Las causas para la aplicación de este ordenamiento son:

- Cuando lo exija el interés público;
- Por razones de seguridad nacional;
- Para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa o el uso libre;
- Para la introducción de nuevas tecnologías
- Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;
- Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y
- Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.

En el Título V se establecen los ordenamientos para la operación de los servicios de telecomunicaciones con el fin de atender las condiciones de arquitectura abierta, interconexión e interoperabilidad de sus redes para los cuales el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios.

En este Capítulo se prevé la atención a aspectos ampliamente solicitados por diversos operadores, entre los que se encuentran la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de la transición digital, que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, se autoriza a los prestadores del servicio, el uso provisional de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión dejando claro que al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional.

El Capítulo III, establece ordenamientos a fin de fomentar el aumento de la cobertura de los

servicios de telecomunicaciones y el desarrollo de condiciones de competencia adecuadas en el mercado, se establecen condiciones para asegurar una adecuada interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones, y que en un ambiente de redes convergentes no se presenten conductas anticompetitivas en perjuicio de los usuarios.

Para garantizar la existencia de una sana competencia, la iniciativa de ley establece que los operadores de redes públicas deberán permitir la interconexión a otros operadores en condiciones equitativas y no discriminatorias observando las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas de interconexión que determine el Instituto, mismas que deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión.

A efecto de regular en forma eficaz todos los servicios necesarios para la interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, y corregir los problemas que se han presentado en la apertura de los servicios de telecomunicaciones a la competencia, se introduce la definición de servicios de interconexión auxiliares conexos, mismos que incluyen facturación y cobranza, servicios de información y otros.

Asimismo, para apoyar el desarrollo de nuevos concesionarios se establece que la interconexión entre operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando no se presenten fuertes desbalances de tráfico.

Se establece el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes públicas de telecomunicaciones sobre bases de tarifas individuales, competitivas y no discriminatorias, así como bajo condiciones que aseguren el desarrollo de una sana competencia.

Para impedir que se presenten conducta anticompetitivas en perjuicio de los usuarios y del desarrollo de los nuevos servicios vía protocolo Internet, se establece la obligatoriedad de establecer mecanismos que garanticen que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre las redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni distinguir o degradar la capacidad del acceso al usuario para ofrecer acceso a los diferentes servicios que se prestan.

Asimismo, se obliga a que, tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los concesionarios están obligados a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del concesionario o permisionario que preste el servicio final.

A efecto de permitir que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con la infraestructura necesaria para su desarrollo, se establece que el Instituto dictará las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias.

A efecto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los operadores, se fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada.

El Capítulo IV que regula las tarifas a los usuarios establece que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas requerirán únicamente de ser registradas ante el Instituto para consulta pública.

Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Para proteger a los usuarios se establece que cuando se convenga el tiempo como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, el concesionario deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.

Con respecto a la Cobertura Social, en su Título VIII, queda establecido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes velará por la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, mediante mecanismos transparentes, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas para atención de servicios públicos y sociales, y de que estén disponibles a toda la población y a las unidades de producción, un conjunto mínimo de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridades: aumentar la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales; y desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público. Así mismo, se prevé incluir en el presupuesto de la Federación, el Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones con un fondo integrado por el presupuesto e ingresos provenientes, en su caso, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones; de los estados y municipios; y, las que realice cualquier otra persona física o moral. Estos recursos deberán ser administrados de manera eficiente, pública y explícita, siendo asignados mediante subasta pública descendente, a los concesionarios que ofrezca mayores beneficios para cada población con los recursos disponibles que se le atribuyan

En el Titulo X se integra lo relativo al principal servicio de las telecomunicaciones en particular el servicio de radio y televisión, el de los contenidos audiovisuales. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico -propiedad de la Nación- la nueva legislación deberá atender el tema de los contenidos, independientemente del medio tecnológico a través del cual se difundan. El verdadero servicio de los medios de comunicación y por lo tanto el eje fundamental, más que la infraestructura y las formas de transmisión, debe ser el contenido que en ellos se proponen a las audiencias, o como también se dice en materia de telecomunicaciones, a los usuarios de los servicios.

Además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes de los contenidos, esta iniciativa incorpora criterios para la clasificación de los programas en particular atendiendo al reclamo de que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos mediáticos y considerando también lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Protección de las niñas, niños, y adolescentes del 13 de diciembre de 1999.

Por ello se propone la existencia jurídica de horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. Así se determina que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier horario y los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Dejando claro que los prestadores del servicio de radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión para la valoración de los padres o responsables de los menores, la clasificación de su programación y cualquier otra información establecida en los lineamientos.

Por otra parte se establece que la programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y a una serie de once directrices marcadas en el artículo 186.

Las únicas restricciones que se marcan para los contenidos audiovisuales se establecen en el artículo 177 y están orientadas por criterios de respeto y promoción de los siguientes principios:

- Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas.
- Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social.
- Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
- Promover, estimular o hacer apología de la violencia.
- Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz o y al orden público.
- Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente.
- Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables;
- Transmitir loterías, rifas y otra clase de sorteos, sin previa autorización de la Secretaría de Gobernación.

Se establece para la radiodifusión el ordenamiento de transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia. Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes.

Por otra parte para atender el derecho a la información sin discriminación, se incorpora que los prestadores del servicio de radio y televisión establecerán las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de televisión o en los videos. En el caso de la información referida en el artículo 196 y en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, se deberá emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos.

Otros artículos que se incorporan en este apartado de la iniciativa atienden a la necesidad de las audiencias y los profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos. Por otra parte, se establece la aplicación de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión.

Se modifica la regulación vigente respecto al denominado tiempo gratuito (legal o fiscal) que establece 30 minutos a los que se sumarán los 18 y 35 minutos para televisión y radio respectivamente, que establece el reglamento de la LFRTV por concepto de pago en especie y considerando además que la propia constitución habla de 48 minutos gratuitos. Ampliándolo a 60 minutos diarios (5 minutos menos para la radio y 12 minutos más a la TV) y en consideración de la eliminación, en los transitorios, del denominado tiempo fiscal, para una mejor utilización regulada de esta prerrogativa del Estado a fin de que los prestadores del servicio de radiodifusión pongan a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos como es el caso de la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán por el Instituto de acuerdo a lo siguiente:

Para el caso de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida deberán reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado, lo que actualmente establece el artículo 22 del reglamento vigente para el servicio de televisión y audio restringidos en materia de disponibilidad de tiempo y canales para distribución de señales que determine el Instituto

En materia de publicidad, este Titulo, en su Capítulo IV establece los rangos permitidos para publicidad: Para los concesionarios con fines de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio y para los concesionarios sin fines de lucro no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Las modalidades de publicidad que serán incorporadas en estos tiempos se ajustan a las actuales formas publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera se establece considerar la publicidad que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora; la publicidad que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida y las Inserciones pagadas que deberá identificarse como tal. En el caso de las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, telemercadeo ni inserciones pagadas. Así mimo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes publicitarios.

El Capitulo V del Título referido a los contenidos audiovisuales establece las características que deberán atenderse para garantizar el derecho de réplica de los ciudadanos y que atienden a los estándares internacionales para tal efecto.

En su Capítulo VI a partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción audiovisual nacional, para el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de nuestra cultura, que encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión. Se busca que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por un solo emisor. Por ello se fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar y dar pluralidad a las trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la radio y la televisión. Por ello se propone la creación de un Fondo para el Apoyo para a Producción nacional independiente con la finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y televisión. El dictamen da forma a esta propuesta estableciendo las fuentes de recursos del fondo, los responsables de su administración y los procedimientos para utilizarlo. Sólo se establecen los lineamientos generales de los fondos que deberán ser desarrollados en el reglamento correspondiente.

El Titulo XI establece el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de garantizar la transparencia y hacer pública toda la información que en este sector se genera por lo que será responsabilidad del Instituto lleva y mantener actualizada toda la información que de manera detallada se establece en la iniciativa y garantizar que su contenido este a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto.

Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones establecido en el Título XII debe quedar claro que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción de esta Ley,

de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa.

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones establecidas en la Ley. De esta manera, en este apartado se determinan seis grandes rubros cuyo propósito es hacer efectiva la naturaleza coactiva de la autoridad:

1. Determinación del alcance de la figura de la reincidencia.
2. Homologación de los rangos y montos de multas en los casos similares tanto en Telecomunicaciones como Radiodifusión.
3. Establecimiento de nuevas causas de revocación de las concesiones.
4. Incorporación del recurso de revisión contra actos arbitrarios de la autoridad.
5. Realización de visitas de inspección.
6. Imposición de amonestaciones públicas.

Particularmente destaca que para el establecimiento de los montos de la multa y la clasificación de las hipótesis contempladas en cada supuesto, se realizó un trabajo cuidadoso para crear disposiciones que en gran medida disminuyan la discrecionalidad de la autoridad y se otorgue certeza jurídica al acto administrativo derivado. Por esta razón, para la imposición de las sanciones se prevén supuestos objetivos a tomar en cuenta: la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y la reincidencia del infractor.

Finalmente, también en la estructura del cuerpo normativo se contempló la integración de artículos transitorios, los cuales, si bien tienen una vigencia momentánea o temporal, tienen la importancia de habilitar o derogar derecho vigente.

En ellos se plasma la salvaguarda de categorías normativas y de competencias que buscan dar certeza las disposiciones de la Ley, en virtud de que facilitan el tránsito de la anterior legislación aplicable a la materia a esta que se está creando, como en el caso de las reformas a diversas leyes del ámbito federal, a disposiciones de naturaleza administrativa y algunas otras que determinan el régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas pendientes, creadas bajo la legislación derogada pero que perviven al entrar en vigor la nueva ley y a situaciones jurídicas que temporalmente son emitidas por el legislador para atender una situación específica, caso de la transición digital.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; que reforma los artículos 27, fracción XXI, 36, fracción III, y 38, fracción XXX bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; que deroga las fracciones II del artículo 27 y I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

LEY DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

TÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de jurisdicción federal, y tiene por objeto regular

el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión.

Las telecomunicaciones son actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan comprendidas las redes cableadas e inalámbricas que transportan servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión así como de otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica.

Artículo 2. Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

En todo momento el Estado mantendrá el dominio del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el Estado podrá permitir su uso, aprovechamiento y explotación bajo las modalidades que establece esta ley.

Artículo 3. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Artículo 4. Son objetivos de la presente ley:

I. Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y la administración del espectro radioeléctrico;
II. Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales;
III. Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones;
IV. Defender los intereses de los usuarios en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, asegurando su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad;
V. Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de las telecomunicaciones;
VI. Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones;
VII. Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles y competitivos en términos de diversidad y calidad;
VIII. Impulsar el incremento de la teledensidad, la penetración y la conectividad de los servicios de telecomunicaciones, así como la ampliación de la cobertura a la población rural y urbana de escasos recursos y a los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;
IX. Facilitar la convergencia de servicios de telecomunicaciones;
X. Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional;
XI. Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones de manera objetiva, transparente y no discriminatoria;
XII. Regular la eficiente interconexión e interoperabilidad de los diferentes equipos, aplicaciones y redes de telecomunicaciones;
XIII. Garantizar que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se respeten los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales y a la secrecía en las comunicaciones, así como los relativos a las personas con discapacidad;
XIV. Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de telecomunicaciones;
XV. Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos interesados en el sector;

XVI. Garantizar los derechos de las audiencias así como promover el respeto a las libertad de expresión y el derecho a la información;
XVII. Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional;
XVIII. Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público a ese legado;
XIX. Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones.

Artículo 5. Las telecomunicaciones, particularmente los servicios de radio y televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendente al fortalecimiento de nuestro país como nación plural y multiétnica. Para el cumplimiento de esta función social, los operadores de redes y prestadores de los servicios de telecomunicaciones, deberán:

I. Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los ordenamientos internacionales;
II. Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información;
III. Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio;
IV. Promover el respeto y reconocimiento a la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana;
V. Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo tercero constitucional;
VI. Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud;
VII. Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las lenguas indígenas;
VIII. Contribuir al fortalecimiento de una cultura ecológica que fomente el desarrollo sustentable;
IX. Promover la protección del derecho a la salud de la población;
X. Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;
XI. Procurar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población;
XII. Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores;
XIII. Promover el acceso a las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones de las personas con capacidades diferentes;
XIV. Fomentar la inclusión, acceso y capacitación de las comunidades y personas en zonas urbanas y rurales marginadas a las nuevas tecnologías digitales y a los programas de capacitación, y
XV. Observar las demás obligaciones que dispongan las leyes.

Artículo 6. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. **Acceso al usuario:** Enlace de transmisión entre la instalación del concesionario y el punto de conexión terminal donde se conectan los equipos del usuario y a través del cual se transmiten o reciben signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de la red pública de telecomunicaciones.
II. **Acceso a redes de telecomunicaciones**: Derecho que tienen los usuarios y los prestadores de servicios de telecomunicaciones para acceder a los servicios de las diversas redes públicas de telecomunicaciones.
III. **Arquitectura abierta: C**onjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas.
IV. **Asignación de bandas de frecuencias: A**utorización mediante licitación pública o asignación directa para utilizar un conjunto de

frecuencias, en condiciones determinadas.

V. **Atribución**: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

VI. **Banda de frecuencias**: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas.

VII. **Comisión**: Comisión Federal de Competencia.

VIII. **Compartición de infraestructura:** Servicio de telecomunicaciones que implica el uso de infraestructura o redes de telecomunicaciones por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo.

IX. **Convergencia de servicios**: Integración de servicios y tecnologías para llevar por un mismo medio de telecomunicaciones diversos servicios a los usuarios.

X. **Cuadro:** Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XI. **Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias** Registro donde se inscriben las bandas de frecuencia atribuidas a diferentes servicios de radiocomunicación terrena o por satélite, señalando la categoría atribuida a los diferentes servicios, así como las condiciones especificas y restricciones en el uso de algunas frecuencias para determinados servicios de radiocomunicación.

XII. **Espectro radioeléctrico:** Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz;

XIII. **Estación terrena**: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite.

XIV. **Frecuencia**: Número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro radioeléctrico.

XV. **Homologación**: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico.

XVI. **Instituto:** Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

XVII. **Interconexión:** Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas.

XVIII. **Interoperabilidad**: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes;

XIX. **Ley**: Ley de Telecomunicaciones Radiodifusión.

XX. **Orbita satelital**: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;

XXI. **Portabilidad**: Posibilidad de que los usuarios de los servicios prestados a través de las redes públicas de telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la misma numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se defina en el plan técnico fundamental de numeración.

XXII. **Posiciones orbitales geoestacionarias**: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;

XXIII. **Punto de interconexión**: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones otras redes públicas de telecomunicaciones;

XXIV. **Radiocomunicación privada**: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implique explotación comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XXV. **Recursos esenciales de la red:** Elementos de una red pública de telecomunicaciones o las instalaciones suministrados en forma exclusiva o predominante por un concesionario o por un número limitado de éstos, o cuya sustitución técnica o económicamente no es factible;

XXVI. **Red de telecomunicaciones:** Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones y casetas públicas telefónicas o cualquier otro equipo necesario**.**

XXVII. **Red privada de telecomunicaciones**: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones.

XXVIII. **Red pública de telecomunicaciones:** Red de telecomunicaciones a través de la cual se presten servicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal.

XXIX. **Registro**: Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

XXX. **Retransmisión**: Difusión pública de contenido audiovisual producido o ensamblado por una persona o entidad distinta e independiente al emisor, que mediante el cumplimiento de la ley permite que otro reciba tal contenido y lo difunda públicamente, a través del medio o medios para los cuales el emisor tenga permiso o concesión para operar.

XXXI. **Secretaría**: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

XXXII. **Servicios adicionales**: Aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y requieren autorización del Instituto.

XXXIII. **Servicios Auxiliares Conexos**: Los que se integran a los servicios de interconexión para proveer integralmente un servicio de telecomunicaciones a los operadores, prestadores de servicios o usuarios. Estos incluyen, entre otros, los servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, para permitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este

último o por algún otro proveedor autorizado al efecto.

XXXIV. **Servicios de interconexión**: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen a los Servicios Auxiliares Conexos.

XXXV. **Servicio de radio y televisión:** Servicio de audio o de audio y video asociado que se presta de manera abierta o restringida a través de redes públicas de telecomunicaciones**.**

XXXVI. **Servicio de radiodifusión:** Atribución que se hace a un servicio de telecomunicaciones, por el que se transmiten contenidos de audio o audio y video asociados que tienen carácter gratuito y abierto al público y sin control técnico del receptor dentro del radio de cobertura.

XXXVII. **Servicios de telecomunicaciones**: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas redes.

XXXVIII. **Servicios de valor agregado**: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones de procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada.

XXXIX. **Servicio restringido**: A través del que se difunden contenidos de audio o audio y video asociados mediante un contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida.

XL. **Sistema de comunicación vía satélite**: El que permite el envío de señales de microondas a través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, amplifica y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones receptoras.

XLI. **Subsidio cruzado**: Se presenta cuando un servicio se presta a una tarifa que no permite la recuperación de los costos totales en que se incurre para prestar el servicio y otro que se presta a una tarifa superior a los costos totales incurridos. Lo anterior aplica si el servicio con el que no se recupera los costos totales se presta en competencia.

XLII. **Telecomunicaciones**: Emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos incluyendo la comunicación vía satélite

XLIII. **Tráfico público conmutado**: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental de numeración.

TÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, procurar la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios básicos que se provean para la atención de las

necesidades sociales, de la población en general y de las unidades de producción.

Artículo 8. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes, puedan someterse a procedimientos arbítrales, de mediación o de conciliación en los términos de las disposiciones aplicables.

Articulo 9. A falta de disposición expresa de esta ley, sus reglamentos o de los tratados internacionales aprobados por el Senado de la República, se aplicarán supletoriamente, los siguientes ordenamientos:

I. Ley General de Bienes Nacionales;
II. Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
III. Ley Federal de Competencia Económica,
IV. Ley General de Salud;
V. Ley Federal de los Derechos de Autor
VI. Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
VII. Ley Federal de Protección al Consumidor;
VIII. Código de Comercio;
IX. Código Civil Federal;
X. Código Federal de Procedimientos Civiles; y,
XI. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPITULO II
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

Artículo 10. El Instituto es el órgano constitucional autónomo encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.

Articulo 11. Corresponde al Instituto el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país;

II. Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones;

III. Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, los contenidos audiovisuales de radio y televisión, las redes de telecomunicaciones y el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico;

IV. Regular y vigilar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en esta ley en materia de contenidos de radio y televisión;

V. Elaborar los anteproyectos de reformas y adiciones de las leyes y reglamentos en materia de telecomunicaciones que se requieran;

VI. Interpretar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y contenidos de radio y televisión, en el ámbito de su competencia;

VII. Otorgar, modificar, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones previstas en esta ley;

VIII. Garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones y, en su caso, intervenirlos por causas de seguridad nacional;

IX. Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la presente ley;

X. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por si o a través de terceros redes públicas de telecomunicaciones;

XI. Cambiar o rescatar una frecuencia o banda de frecuencias;

XII. Autorizar la interrupción de la vía general de comunicación o la prestación de sus servicios total o parcialmente siempre y

cuando lo solicite por escrito el concesionario y medie causa justificada

XIII. Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales;

XIV. Expedir disposiciones administrativas, elaborar y administrar los planes técnicos fundamentales y expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones;

XV. Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones;

XVI. Dictaminar sobre la nulidad, revocación y caducidad de las concesiones y permisos y en su caso, la requisa y rescate de frecuencias o bandas de frecuencias;

XVII. Elaborar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública; así como llevar a cabo los procesos de licitación correspondientes;

XVIII. Llevar a cabo los procesos de licitación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales;

XIX. Establecer los procedimientos para la evaluación de la conformidad y en su caso, la homologación, en materia de telecomunicaciones y ámbitos tecnológicos relacionados, así como otorgar la certificación correspondiente o autorizar a terceros, tales como unidades de verificación, organismos de certificación y laboratorios de prueba, para que emitan dicha certificación;

XX. Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico así como mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XXI. Administrar el Registro Público de Telecomunicaciones y de Radiodifusión previsto en esta ley y exigir a los operadores su actualización permanente;

XXII. Promover, vigilar e instruir sobre la eficiente interconexión e interoperabilidad de los equipos, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación;

XXIII. Vigilar el uso eficiente del espectro en las dependencias, entidades paraestatales y demás organismos de la administración pública federal, los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior;

XXIV. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio, condiciones bajo las cuales se presta el servicio e información incorporando, a los operadores de telecomunicaciones que hayan sido declarados dominantes conforme lo establecido en esa;

XXV. Recibir y requerir, en su caso, los comprobantes del pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, así como dar aviso al Servicio de Administración Tributaria en los casos que se emite el incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los contribuyentes.

XXVI. Vigilar el debido cumplimiento de lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, y ejercer las facultades de supervisión, inspección, radiomonitoreo y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XXVII. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia

XXVIII. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

XXIX. Realizar funciones de conciliación, mediación y arbitraje en las controversias

que se presenten entre la autoridad, prestadores del servicio y/o público en general, en los términos dispuestos por la ley.

XXX. Solicitar y requerir a los operadores de telecomunicaciones, la información relativa a la operación, explotación y prestación de servicios para cumplir con las disposiciones previstas en la presente ley;

XXXI. Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad;

XXXII. Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio;

XXXIII. Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de las normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones;

XXXIV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones;

XXXV. Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de audiencias en radio y televisión e integrar y hacer disponible al público esa información a través de su portal de interne;

XXXVI. Autorizar el cambio de bandas y/o frecuencias del espectro radioeléctrico;

XXXVII. Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso o asignación;

XXXVIII. Llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes a los proyectos de cobertura social que involucren concesiones o permisos y efectuar el seguimiento de su ejecución;

XXXIX. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas del Instituto, con excepción de las que emita el pleno;

XL. Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones;

XLI. Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en radio y televisión;

XLII. Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables;

XLIII. Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica;

XLIV. Promover la creación de Códigos de Ética y el nombramiento de defensores de audiencias en la radio y televisión;

XLV. Celebrar convenios con personas físicas o morales y con organismos públicos nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia;

XLVI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social de la radio y la televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos.

XLVII. Elaborar su anteproyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la ley;

XLVIII. Dentro de los primeros novena días del año de ejercicio legal elaborar y hacer público el Informe Anual.

XLIX. Emitir su reglamento interno, su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

L. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12. En la expedición de disposiciones administrativas de carácter general para normar a los operadores de redes, prestadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión, el Instituto podrá hacer uso de los procedimientos de consulta pública que establezcan las disposiciones reglamentarias. Tratándose de reglas y planes técnicos fundamentales, el procedimiento de consulta pública será obligatorio.

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Artículo 13. El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a su presidente.

Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales.

Para el desahogo de los asuntos a cargo del Instituto, cada comisionado contará con la estructura administrativa que determine el reglamento interno.

Artículo 14. A fin de atender los asuntos de su competencia el pleno deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos, por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, la sesión del pleno será presidida por el comisionado designado por éste, quien tendrá voto de calidad. Los comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal.

El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso deliberativo que deba resolverse por otra instancia.

Articulo 15. Los comisionados serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación representativa de los distintos sectores de la sociedad.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, los candidatos y al presidente del pleno, y deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de al menos nivel licenciatura expedido por una institución de educación superior;
III. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con las materias objeto de esta ley;
IV. No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas;
V. No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos o actividades:
   a. De dirigencia de partido político;
   b. De candidato o cargo de elección popular;
   c. De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta;
   d. De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada;
   e. De ministro de culto religioso;
   f. Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada.

Artículo 16. Los comisionados, durante su encargo, no podrán:

I. Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia;
II. Tener contratos o prestar servicios, de manera directa o indirecta, a la federación, estados o municipios;
III. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como divulgarla sin autorización del Instituto, y

IV. Concertar con prestadores del servicio alguna actividad fuera de las disposiciones normativas.

Los comisionados no podrán, en el transcurso de dos años contados a partir de la conclusión de su cargo, desempeñar ninguna de las funciones a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción V del Artículo 15.

Artículo 17. Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por el ejecutivo federal por causa grave debidamente justificada.

Artículo 18. El presidente del instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión.

Al presidente corresponde el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento interno del Instituto:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las disposiciones aplicables;
II. Elaborar y proponer al pleno del instituto, para su aprobación, el programa anual de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión;
III. Actuar como representante legal del Instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mimo, designar o delegar facultades en representantes para tal efecto;
IV. Instruir la ejecución de las resoluciones del pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento;
V. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, que incluya los resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado, y dar cuenta de éste al H. Congreso de la Unión;
VI. Proponer al pleno el establecimiento de representaciones estatales;
VII. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas del Instituto; y
VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas que le instruya el pleno.

Artículo 19. El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como ejecutar los acuerdos y resoluciones del pleno de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno. Será designado y, en su caso removido, por el pleno a propuesta del presidente del Instituto.

Artículo 20. El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.

El consejo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación que serán seleccionados por el pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

Los consejeros durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible por lo que no actuarán en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El consejo sesionará al menos una vez cada dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias.

Artículo 21. El Instituto contará con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los comités deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones

profesionales especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por mayoría del pleno del Instituto.

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban adoptar en el territorio nacional y el instituto dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

TÍTULO III
DE LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 22. Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones que se podrán prestar a través de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas serán aquellos que establezca el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y atendiendo a los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

El cuadro nacional de atribución de frecuencias, deberá ser actualizado permanentemente y garantizar la disponibilidad frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Artículo 23. La asignación de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se hará conforme a lo siguiente:

I. A título primario: servicios que contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y
II. A título secundario: servicios cuyas estaciones radioeléctricas no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio a título primario, ni pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio a título primario; sin embargo, tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio a título secundario o de otro servicio a título secundario a los que se asignen frecuencias con posterioridad.

Artículo 24. El uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasificará de acuerdo con lo siguiente:

I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro, mediante concesión que otorgue la Secretaría;
II. Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, para la explotación sin fines de lucro, mediante concesión para fines de radiocomunicación privada, sociales, culturales, comunitarios, científicos, educativos y de experimentación; comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas temporales de equipo y radioaficionados;
III. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, mediante concesión asignada de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, para el cumplimiento de sus atribuciones;
IV. Uso protegido: concesiones para utilización de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal;
V. Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto;
VI. Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 25. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un programa anual de frecuencias con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas.

Articulo 26. El programa anual de frecuencias deberá atender los siguientes criterios:

I. Considerar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría y zona geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, la función social y las necesidades de cobertura social;
II. Buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles en relación con las que estén operando en cada categoría y uso, con el fin de evitar fenómenos de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada zona geográfica de cobertura;
III. Valorar las solicitudes de frecuencias o bandas de frecuencias, modalidades de uso y coberturas geográficas que le hayan sido turnadas por los interesados;
IV. Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones. y
V. Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la innovación en el desarrollo de aplicaciones.

Artículo 27. Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del programa anual de frecuencias, que se liciten frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas adicionales o distintas de las ahí contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir del vencimiento del plazo anterior.

TÍTULO IV
DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES

CAPITULO I
DE LAS CONCESIONES

Artículo 28. Se requiere concesión del Instituto para:

I. Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio nacional, salvo el espectro de uso libre;
II. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas;
III. Ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, y
IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 29. Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las instituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha prohibición se extiende a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o comercializadoras de frecuencias.

Durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término, los servidores públicos vinculados con las materias reguladas en esta ley y las empresas en las cuales posean participación accionaria, no podrán participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de concesiones.

Artículo 30. El titular del uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de

frecuencias, será el responsable de las obligaciones establecidas en esta ley y en el respectivo título de concesión.

Artículo 31. En materia de telecomunicaciones, la participación de la inversión extranjera se deberá ajustar a los porcentajes establecidos en los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión. La participación de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo 32. Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas en cuya incorporación esté claramente identificado el beneficio directo para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Artículo 33. En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las posibilidades financieras de los operadores para la adopción de las innovaciones tecnológicas. En el supuesto de que al concluir el plazo de la concesión, no se hayan realizado las adecuaciones en los plazos señalados y habiéndose aplicado la sanción que señala esta ley, no podrá participar en el proceso de licitación para continuar operándola.

Artículo 34. Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente.

Artículo 35. No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, bajo los supuestos establecidos en esta ley o en cumplimiento de resolución judicial.

SECCION I
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO COMERCIAL

Artículo 36. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión se otorgarán por un periodo de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años.

El gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo 37. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que cualquier interesado obtenga las bases correspondientes.

La convocatoria deberá contener como mínimo:

I. La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, sus modalidades de uso y zona geográfica de cobertura;
II. Periodo de vigencia de la concesión;
III. Las condiciones mínimas de servicio;
IV. Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y
V. La fecha y forma para adquirir las bases de licitación.

Artículo 38. En un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria, el Instituto elaborará las bases de licitación correspondiente. Dentro de los primeros 30 días del plazo anterior deberá recabar la opinión de la Comisión Federal de Competencia en el ámbito de sus atribuciones. Las bases de licitación podrán ser adquiridas por cualquier interesado, previo pago de los derechos aplicables, y deberán incluir:

I. Las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;
II. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:
   a. La capacidad jurídica, incluido el acreditamiento de la nacionalidad mexicana y, en su caso, la estructura corporativa del participante;
   b. Su capacidad técnica y financiera;

c. Plan de negocios, que deberá contener el programa y compromiso de inversión;
d. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;
e. Programa de cobertura;
f. Programa de actualización y desarrollo tecnológico;
g. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;
h. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y
i. Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las condiciones y calendario de pago de productos y aprovechamientos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Monto mínimo de referencia para el inicio de la licitación, misma que será determinada por el Instituto con base en las condiciones del mercado y, en su caso, en el pago que hubieran realizado otros concesionarios en la obtención de frecuencias o bandas para usos similares;
IV. Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes;
V. El período de vigencia de la concesión;
VI. Los criterios para descalificar a los participantes;
VII. Casos en los que se declara desierta la licitación, y
VIII. El establecimiento de penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de licitación, y la forma de garantizarlas.

Para el servicio de radio y televisión se entregará además el proyecto de producción y programación, así como la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Artículo 39. El Instituto tendrá como criterios para seleccionar al ganador de una concesión, los siguientes:

I. Congruencia entre el Programa Anual de Frecuencias y los fines expresados por el interesado para prestar el servicio;
II. Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;
III. La oferta de calidad de los servicios;
IV. El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;
V. El número de usuarios directamente beneficiados;
VI. Plazo para iniciar el servicio;
VII. Que su participación como prestador de servicios contribuya a la pluralidad y la diversidad de los contenidos, a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes;
VIII. La revisión de su expediente, cuando se trate de solicitantes que sean o hayan sido titulares o que operen o hayan operado otra concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, en el título de concesión y demás disposiciones legales aplicables, y
IX. En el caso del servicio de radio y televisión además, la propuesta de programación de contenidos a transmitir y su vinculación con los principios a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, así como la forma de garantizarlos ante el Estado.

Corresponderá al Instituto deberá emitir los lineamientos y puntajes precisos que especifiquen el valor de los criterios anteriores. En el caso de las concesiones para el servicio de radiodifusión el criterio económico no podrá tener mayor valor que el referido a la propuesta de programación de contenidos a transmitir.

Artículo 40. Un extracto de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite se publicará a costa de los interesados en el Diario Oficial de la Federación, y en un periódico en el área de cobertura de la concesión. La versión completa de las solicitudes deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 41. El título de concesión contendrá como mínimo:

I. Antecedentes y objeto de la concesión;
II. El nombre y domicilio del titular;
III. La frecuencia o banda de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zona geográfica en que pueden ser utilizadas;
IV. Las especificaciones técnicas como sistemas de radiación, ubicación del equipo transmisor e instalaciones de operación, distintivo, potencia máxima, horario de transmisión.
V. Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de licitación;
VI. Los programas de inversión respectivos;
VII. Los programas de cobertura obligatoria que, en su caso, se hayan previsto en las propias bases de licitación;
VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario;
IX. Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente ley;
X. El período de vigencia;
XI. Los productos y aprovechamientos que, en su caso, deberán cumplirse por el uso y la explotación de la concesión;
XII. Las contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación del procedimiento concesionario;
XIII. El monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión y,
XIV. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de un permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo.

Artículo 42. Un año antes de que inicie la última quinta parte del periodo de vigencia de la concesión para uso comercial, el Instituto deberá licitar las frecuencias o banda de frecuencias objeto de la misma. Para tal efecto, el Instituto deberá incluir dichas frecuencias o banda de frecuencias en el programa de licitaciones que se llevarán a cabo durante ese año calendario. La falta de cumplimiento por parte del órgano regulador de ésta disposición será considerada causa grave, para los efectos del artículo 17 de esta ley.

El procedimiento de licitación deberá realizarse atendiendo a las disposiciones establecidas en el artículo 38 de la presente Ley.

Cuando al final de la evaluación de las propuestas, los proyectos presentados por el concesionario y los demás participantes resulten en una igualdad absoluta de condiciones, en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, el concesionario, por una sola vez, tendrá derecho de preferencia sobre terceros para seguir operando la misma.

Al momento de emitir la convocatoria para el procedimiento de licitación el Instituto podrá modificar los servicios atribuidos a la frecuencia o banda de frecuencias o limitar el espectro sujeto al procedimiento de licitación, en los siguientes casos:

I. A fin de adecuarlos a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;
II. Cuando no se use, aproveche o explote totalmente la banda de frecuencias, o sea técnica y económicamente factible prestar servicios con un menor ancho de banda, o
III. Sea de interés público la prestación de nuevos servicios a través de dichas bandas.

Artículo 43. No podrá participar en el proceso de licitación a que se refiere el artículo anterior de la presente ley el concesionario que:

I. No se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en su título de concesión o en las demás disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables;

II. Esté haciendo un uso deficiente de las frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico;

III. No haya cumplido con los estándares tecnológicos establecidos por el Instituto, o

IV. No acepte las nuevas condiciones que al efecto le establezca la Secretaría.

SECCION II
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO PÚBLICO

Artículo 44. Las asignaciones sobre bandas de frecuencias para uso público sin fines de lucro se otorgarán a petición de parte y con base en el Programa Anual de Frecuencias.

Artículo 45. Podrán obtener concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior, los cuales tendrán como finalidad específica la prestación de servicios públicos como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.

En los casos del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se deberá acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales se operará la concesión para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial, en cuyos órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social.

En el resto de los entes públicos, la operación se hará a través de la forma administrativa que resulte idónea para asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial.

El Instituto definirá las modalidades de uso y reglas de operación para el uso público de acuerdo a las políticas públicas para tales fines.

Artículo 46. Los entes públicos interesados en obtener una concesión presentarán una solicitud en la que se deberán atender los siguientes requisitos:

I. Datos generales del solicitante.
II. Demostrar la función social que se pretende cumplir.
III. Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna para el cumplimiento de su función.
IV. Demostrar que el proyecto a desarrollar contribuya a la pluralidad y diversidad en la oferta del servicio.
V. Plan de desarrollo, que contendrá como mínimo los siguientes apartados:
    A. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto,
    B. Programa de cobertura,
    C. Programa de inversión y presupuesto de operación,
    D. Programa de actualización y desarrollo tecnológico;
    E. Proyecto de producción y programación para el caso de radio y televisión;
    F. En su caso, los programas de cobertura obligatoria;

Artículo 47. Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 90 días, el Instituto emitirá la asignación directa de la concesión, mediante resolución fundada y motivada.

Un extracto del título de concesión se publicará a costa de la entidad solicitante en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 48. No se podrá ceder, gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la concesión de uso público, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios. De igual manera estará prohibida su explotación bajo cualquier forma, por persona física o moral distinta a su titular.

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.

Artículo 49. El Estado deberá garantizar la existencia de al menos, una red de uso público de radio abierta y una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con cobertura nacional.

Artículo 50. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de uso público se financiará con presupuesto público que garantice su operación, adicionalmente podrán tener las siguientes fuentes de ingresos:

I. Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional.
   Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse recibos foliados en los que se hará constar los datos generales del donante, mientras que las donaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;
II. Venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa;
III. Patrocinios y publicidad, de acuerdo a lo establecido en el articulo 206 de esta Ley;
IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio.
V. Convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público.

Artículo 51. Los ingresos adicionales, establecidos en las fracciones I, II y III del artículo anterior, se aplicarán preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y producción, a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. En ningún caso podrá destinarse más del 30% de dichos ingresos para la contratación de servicios personales.

Sobre estos ingresos, los operadores deberán rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de rendición de cuentas a que se encuentran obligados.

Artículo 52. Además de lo establecido en el artículo 5, los operadores de concesiones de uso público y para efecto de dar cabal cumplimiento a su función social deberán observar las siguientes finalidades:

I. Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los derechos a la educación, a la salud, a la información y la libertad de expresión;
II. Promover la educación y la cultura;
III. Difundir información de interés público, plural y confiable;
IV. Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el reconocimiento de que nuestra nación es plural y multiétnica;
V. Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la producción de contenidos;
VI. Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente;
VII. Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad;
VIII. Fomentar la capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión;

IX. Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro;
X. Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional;
XI. Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;
XII. Garantizar el derecho de réplica de todo ciudadano;
XIII. Promover, fomentar y garantizar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de la administración, dirección y contenidos;
XIV. Evitar el uso con fines de promoción personal a los gobernantes y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales;
XV. Promover la diversidad de emisores y evitar la concentración en la prestación del servicio:
XVI. Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus atribuciones:
XVII. Permitir la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructura, y
XVIII. Los demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia.

Artículo 53. Cada uno de los entes públicos bajo régimen de concesión para el servicio de radio y televisión deberá contar con un Consejo Consultivo, encargado de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituido al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio.

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Órgano de Gobierno al que se encuentre adscrito, tendrán carácter honorífico sin remuneración, durarán en su encargo dos años, podrán ser reelectos por un periodo más, y sus funciones estarán previstas en el Reglamento.

Artículo 54. Los operadores de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Órganos de Gobierno nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información.

El defensor de las audiencias entregará de manera trimestral un informe al órgano de gobierno con la finalidad de que se tomen las medidas conducentes respecto de los asuntos de su competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se harán públicos.

Artículo 55. Dada su naturaleza pública, los operadores se encuentran obligados a custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio público de la federación, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 56. Para el adecuado cumplimiento de sus fines, deberá garantizarse la participación de los sectores privado y social en los órganos de gobierno de los organismos públicos descentralizado, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia.

Artículo 57. Tanto el informe del Consejo Consultivo como la evaluación del Órgano de Gobierno se harán públicos, al igual que los compromisos que derivado de dichos documentos, adopte el concesionario.

Corresponderá al Instituto vigilar el cumplimiento de estos compromisos, con la finalidad de mejorar la calidad de los contenidos que se transmiten. El Instituto podrá hacer amonestaciones publicas a los concesionarios en caso de incumplimientos reiterados de sus obligación para con sus audiencias.

SECCIÓN III
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO PÚBLICO PARA COMUNICACIÓN INTERNA

Artículo 58. Cuando las bandas de frecuencias de uso público sean solicitadas para la comunicación interna de una entidad pública se otorgarán

mediante asignación directa, para lo cual el Instituto valorará la disponibilidad y la motivación de la solicitud.

El Instituto adoptará mecanismos que le permitan constatar el uso racional y eficiente de las bandas de frecuencias asignadas, y podrá expedir disposiciones de carácter general a que deberán ajustarse los concesionarios de tales frecuencias.

Los titulares de bandas de frecuencias de uso público que requieran bandas adicionales para satisfacer necesidades internas de telecomunicaciones, deberán acreditar que dichas necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias con las que ya cuentan.

SECCION IV
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA USO SOCIAL

Artículo 59. Las concesiones sobre bandas de frecuencias para uso social sin fines de lucro se otorgarán hasta por diez años, con base en lo establecido en el Programa Anual, y podrán ser prorrogadas mediante nueva convocatoria en la que el titular de la misma se someterá de nueva cuenta a los criterios establecidos en el artículo 64, párrafo segundo de esta ley.

En el caso de quienes soliciten participar en la nueva convocatoria para efectos de la prórroga de la concesión, se revisara además el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Artículo 60. Podrán obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas en la prestación de servicios y difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter comunitario, cultural, educativo, social y científico en el área geográfica de su cobertura.

Artículo 61. El Instituto informará a través de convocatoria pública las frecuencias disponibles para uso social, los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión.

La convocatoria establecerá los siguientes requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención de la concesión:

I. Datos generales del solicitante;
II. Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la institución u organización;
III. Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio;
IV. Potencia y horario de funcionamiento;
V. Modalidad del uso o usos pretendido(s): comunitario, educativo, cultural, social, científico o de experimentación;
VI. Plan de operación y acreditación de capacidad financiera;
VII. Proyecto de producción y programación;
VIII. Designación de un representante responsable del proyecto;
IX. Compromisos que asumirían en caso de adjudicación de la frecuencia, para cumplir en forma satisfactoria la función social a que se refiere el artículo 5 de la presente ley; y
X. Mecanismos con los que garantizará la pluralidad de contenidos y el beneficio social.

Artículo 62. El Instituto deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación en la zona de cobertura y en el portal de Internet del Instituto, un extracto de las solicitudes.

Artículo 63. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, se prevendrá al solicitante, de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles.

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

Artículo 64. Para el otorgamiento de los títulos de concesión para uso social, el Instituto deberá tomar en consideración:

I. Congruencia entre los objetivos de la institución u organización, su proyecto de programación y los fines establecidos para la atención de la función social de esta Ley;

II. Área de cobertura, características de la población destinataria, considerando las necesidades culturales, educativas y de servicio que pretende atender, y
III. Que dentro de los fines de la organización o institución solicitante se justifique el interés en prestar el servicio.

En el caso de que exista más de una solicitud para la misma zona de cobertura, y se presente una igualdad absoluta de posiciones, de no existir disponibilidad de frecuencias adicionales, el Instituto valorará para decidir su otorgamiento, conforme a los siguientes criterios:

I. El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación con las necesidades de comunicación;
II. La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la garantía del derecho a la información
III. Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica

Artículo 65. Una vez valoradas las solicitudes y en un plazo no mayor de 90 días, el instituto resolverá sobre su otorgamiento mediante acto debidamente fundado y motivado, el que se comunicará a los interesados. Los interesados que hayan participado en el proceso podrán hacer valer sus derechos en los términos establecidos por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 66. El beneficiario de la concesión deberá constituir una garantía, establecida por el Instituto de acuerdo a las características del servicio, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión. En ningún caso esta garantía equivaldrá al pago de una contraprestación por uso de espectro.

Artículo 67. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución, y constituida la garantía, el título de concesión será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 68. El título de concesión deberá contener:

I. Nombre y domicilio del concesionario;
II. Antecedentes y objeto de la concesión;
III. La frecuencia, distintivo y potencia máxima de cobertura de la concesión, su modalidad de uso y zona geográfica de cobertura;
IV. Condiciones para la prestación del servicio;
V. Ubicación del equipo transmisor e instalaciones de operación;
VI. Sistema de radiación y especificaciones técnicas;
VII. Horario de funcionamiento;
VIII. Compromisos asumidos para cumplir en forma satisfactoria con la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley;
IX. Periodo de vigencia, y
X. Otros derechos y obligaciones.

Artículo 69. Para los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Datos generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto;
II. Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, pudiendo ser éste un acta de asamblea;
III. Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias;
IV. Proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y
V. Proyecto mínimo de instalación y operación técnica.

Artículo 70. Los titulares de las concesiones de uso social, podrán financiar su operación, sin fines de lucro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50.

Artículo 71. Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán ser invertidos preferentemente en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de

innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio.

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la asociación titular.

Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por este artículo, los concesionarios presentarán anualmente un informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, mismo que deberá estar a disposición del público, de manera impresa y electrónica

Artículo 72. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia a la concesión, la frecuencia será reintegrada al Estado y sus bienes podrán ser liquidados con supervisión de un representante del Instituto con el objeto de verificar que no exista lucro de la operación.

Artículo 73. Cuando las frecuencias o bandas de frecuencias se soliciten para fines científicos, experimentales, pruebas de equipos y de nuevas tecnologías, se otorgarán mediante asignación directa por un plazo hasta de dos años, serán improrrogables y no crearán ningún derecho a favor del titular. Deberán sujetarse invariablemente a las disposiciones reglamentarias respectivas.

SECCION V
DE LAS CONCESIONES PARA OCUPAR POSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS Y ÓRBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL PAÍS, Y EXPLOTAR SUS RESPECTIVAS BANDAS DE FRECUENCIAS

Artículo 74. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, obtenidas por el país mediante asignación directa a través de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública a que se refiere la Sección VI del presente Capítulo, a cuyo efecto el Gobierno Federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones.

Tratándose de dependencias y entidades de la administración pública federal, el Instituto otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 75. El Instituto podrá exceptuar del procedimiento de licitación pública y asignar en forma directa concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias u orbitales satelitales, con sus respectivas bandas de frecuencias y sus respectivos derechos de emisión y recepción de señales, obtenidas por el país a través del procedimiento de aplicación contenido en los artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En este caso, para que el Instituto actúe como administración notificante ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el interesado deberá satisfacer las garantías de seriedad y capacitación técnica que al efecto establezca el Instituto, y se comprometa a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias para que esta realice las promociones y trámites ante dicho organismo internacional conforme a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La concesión se otorgará al interesado una vez que el Instituto concluya satisfactoriamente el proceso de coordinación internacional del sistema satelital correspondiente, y se asuman las condiciones que al efecto establezca la Secretaría, incluida, en su caso, la reserva de capacidad a favor del Estado, y cubra la contraprestación que al efecto fije la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a propuesta del Instituto.

Artículo 76. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán hasta por un plazo que no exceda de 30 años y podrán ser prorrogadas, a juicio de la Secretaría, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 15 años atendiendo al procedimiento

establecido para las concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

SECCION VI
DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Artículo 77. Sólo se otorgarán concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país notificante del sistema satelital que se utilice, ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Asimismo, podrán operar en territorio mexicano los satélites internacionales establecidos al amparo de tratados internacionales multilaterales de los que el país sea parte.

Artículo 78. Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional se otorgarán hasta por un plazo de 20 años y podrán ser prorrogadas, a juicio del Instituto, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 15 años, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 42 de la presente ley.

CAPÍTULO II
DE LOS PERMISOS

SECCION I
DE LOS PERMISOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 79. Se requiere permiso del Instituto para:

I. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alambricas;
II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras.

Artículo 80. Los interesados en prestar servicios de telecomunicaciones mediante la instalación, operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones alambricas, deberán presentar a satisfacción del Instituto, una solicitud que contenga:

I. Datos generales del solicitante;
II. La documentación que acredite su capacidad jurídica;
III. Los servicios que desea prestar;
IV. El plan de negocios que contenga lo siguiente:
   a. Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;
   b. Programa y compromiso de cobertura;
   c. Proyecciones y supuestos financieros, y
   d. La viabilidad financiera y técnica del proyecto, y
V. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en cualquiera de sus modalidades de uso.

El Instituto establecerá disposiciones de carácter general y lineamientos que faciliten el cumplimiento de los requisitos previstos.

Artículo 81. El Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles, y éste dispondrá de 15 días hábiles para su entrega. Si el Instituto no hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no podrá dictaminar en sentido negativo fundándose en la falta de información.

El Instituto desechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere esta fracción, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables, lo que motivará en la resolución que emita al efecto. Una vez entregada la información requerida, el Instituto resolverá en un plazo de 90 días hábiles mediante resolución fundada y motivada.

Artículo 82. El permiso contendrá como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;
II. El objeto de la concesión;
III. Los servicios que pueda prestar el permisionario;
IV. Los derechos y obligaciones de los concesionarios;
V. El período de vigencia;
VI. Las características y el monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión, y
VII. Los compromisos de cobertura geográfica de la red pública.

Una vez otorgado el permiso, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado y en portal de Internet del Instituto de manera completa.

Artículo 83. Los permisos para instalar, operar o explotar sobre redes públicas de telecomunicaciones que no usen espectro radioeléctrico se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas de redes públicas de telecomunicaciones alámbricas, será necesario que el permisionario presente la solicitud antes de que inicie la última quinta parte de la vigencia del permiso; haya cumplido a satisfacción del Instituto las condiciones previstas en el permiso que se pretende prorrogar, y acepte las nuevas condiciones, que en su caso, establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

En caso de que el Instituto no resuelva al vencimiento del plazo del permiso, se entenderá por prorrogado el permiso bajo los mismos términos y condiciones originalmente establecidos.

Artículo 84. Las redes privadas de telecomunicaciones no requerirán de concesión, permiso o registro para operar y sólo podrán cursar tráfico privado.

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener concesión en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red pública de telecomunicaciones.

SECCION II
DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 85. Se requiere permiso del Instituto para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. La duración de los permisos no excederá de 20 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.

Para el otorgamiento de las prórrogas de los permisos de redes públicas de telecomunicaciones, será necesario que el permisionario presente la solicitud antes de que inicie la última quinta parte de la vigencia del permiso; haya cumplido a satisfacción del Instituto las condiciones previstas en el permiso que se pretende prorrogar, y acepte las nuevas condiciones, que en su caso, establezca el instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Articulo 86. Se entiende por comercializadoras de servicios de telecomunicaciones toda persona que contrata servicios básicos de telecomunicaciones de un concesionario, con el objeto de ofrecerlos a nombre propio al público en general.

Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes de telecomunicaciones. Sin embargo, podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación y facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente.

El Instituto podrá determinar mediante disposiciones de carácter general el establecimiento, las modalidades y la forma de operación a que deberán sujetarse las comercializadoras en relación con cada servicio de telecomunicaciones.

Artículo 87. Salvo aprobación expresa del Instituto, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 88. Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud al Instituto. Dicha solicitud se sujetará a las disposiciones previstas en al artículo 80 de esta ley, con excepción del requisito de opinión favorable de la Cofeco, y atenderá a criterios de simplificación administrativa.

El Instituto analizará y evaluará la documentación correspondiente a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, y otorgará el permiso correspondiente, conforme al procedimiento previsto en el artículo 81.

Artículo 89. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, se prevendrá al solicitante, de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles. El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención del Consejo, para la entrega de la información requerida.

Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

Artículo 90. El permiso deberá contener:

I. Nombre y domicilio del titular;
II. Antecedentes y objeto del permiso;
III. La frecuencia, distintivo y potencia máxima de cobertura del permiso, su modalidad de uso y zona geográfica de cobertura;
IV. Condiciones para la prestación de servicios;
V. Ubicación del equipo transmisor e instalaciones de operación;
VI. Sistema de radiación y especificaciones técnicas;
VII. Horario de funcionamiento;
VIII. Compromisos asumidos para cumplir en forma satisfactoria con la función social a que se refiere el Artículo 5 de esta ley;
IX. Periodo de vigencia;
X. Otros derechos y obligaciones.

SECCION III
DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 91. Para los efectos de esta ley, se entiende por operación del mercado secundario de espectro radioeléctrico, el arrendamiento de canales o bandas de frecuencias de espectro que le hayan sido asignadas a un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, a otro concesionario para la prestación de servicios autorizados en los títulos de concesión de ambos concesionarios.

La implantación y operación del mercado secundario de espectro radioeléctrico deberá sujetarse, invariablemente, a las disposiciones reglamentarias que al efecto emita el Instituto.

CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES Y DE VALOR AGREGADO

Artículo 92. Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar solicitud al Instituto, el cual la considerará solo si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas y continúa prestando los servicios originalmente autorizados, y en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, condiciones de competencia y pluralidad y congruencia con Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Articulo 93. Las solicitudes para nuevos servicios únicamente podrán ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente concesionadas. Para formular estas solicitudes, los concesionarios deberán:

I. Haber cumplido las obligaciones contenidas en sus títulos de concesión y comprometerse a mantener de forma íntegra la prestación de los servicios originalmente autorizados;

II. Presentar a satisfacción del Instituto la información que acredite que los nuevos servicios no afectarán la prestación de los servicios originalmente autorizados y que sea factible la prestación de los mismos sobre la misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de frecuencias objeto del título de concesión.
III. Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.
IV. Cubrir el pago de la contraprestación que para tal efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 94. El Instituto resolverá lo conducente, en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la entrega de la solicitud.

En las autorizaciones que otorgue, el Instituto deberá establecer:

I. El pago de una contraprestación con base al valor del mercado por utilización de las bandas de frecuencias para servicios adicionales, así como productos, derechos y aprovechamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor del Gobierno Federal, y
II. Obligaciones sobre las condiciones para la prestación de los servicios, entre las que se podrán incluir las relativas a cobertura, conectividad, penetración, plazos de inicio de operaciones, tarifas al público, entre otras.

El servicio autorizado será incorporado al título de concesión.

Artículo 95. La lista de los servicios de valor agregado que se ofrecen estará disponible en el Registro. Los interesados en prestar este tipo de servicios deberán entregar al Instituto los compromisos de operación, calidad y protección que ofrecerán a los usuarios. El instituto inscribirá en el Registro los datos generales del prestador del servicio y sus compromisos.

Artículo 96. Los interesados en prestar servicios de valor agregado deberán solicitar al Instituto su incorporación en el registro aportando la descripción e información técnica así como los compromisos de operación, calidad y protección que ofrecerán a los usuarios que permita dictaminar si el servicio se ajusta a lo solicitado. En caso afirmativo, en 10 días naturales el Instituto incorporará el nuevo servicio a la lista, e inscribirá los datos generales del prestador del servicio y sus compromisos en el Registro.

Artículo 97. Se considerarán como servicios de valor agregado en radiodifusión los servicios auxiliares asociados al servicio principal de radiodifusión.

Los servicios auxiliares podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en los artículos 207, 208 y 213 de la presente ley y disposiciones reglamentarias.

Los concesionarios que deseen prestar servicios auxiliares que impliquen una contraprestación de parte del usuario, deberán solicitar autorización al Instituto, el cual resolverá lo conducente en un plazo no mayor a diez días, con base en los criterios establecidos en el artículo 93. En todo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la propuesta que para tal efecto elabore el Instituto establecerá al concesionario una contraprestación por el uso y explotación de las bandas de frecuencias para ese fin.

Para la prestación de los servicios auxiliares, el Instituto vigilará que no se afecten en forma alguna la prestación de los servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión.

CAPÍTULO IV
DE LA CESION DE DERECHOS

Artículo 98. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir

de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría, de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

El cesionario deberá acreditar ante el Instituto la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente.

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones o una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, el Instituto autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos años a partir del inicio de operaciones de la concesión o permiso respectivo.

Artículo 99. En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto podrá autorizar la transmisión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones y permisos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que los accionistas propietarios de por lo menos el cincuenta y un por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad escindente, sean los mismos en la escindida durante un periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

II. Que en la sociedad que surja con motivo de la fusión o en la que subsista, permanezcan los accionistas que detentan el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad titular de la concesión o permiso, durante un periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Artículo 100. En las concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones de radio y la televisión abierta prevalece la función social a que se refiere el artículo 5 sobre el interés comercial. En atención al interés público, el cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.

En su caso, con base en esta información, el Instituto podrá determinar el pago de una contraprestación por la transferencia de los derechos derivados de la concesión o permiso. La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de 5 años a partir del inicio de operaciones de la concesión o permiso respectivo y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

CAPITULO V
DE LA TERMINACION, REVOCACION, CAMBIO Y RESCATE DE CONCESIONES Y PERMISOS.

SECCIÓN I
DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES Y PERMISOS

Artículo 101. Las concesiones y permisos terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en el título de concesión o, en su caso, en el permiso respectivo;
II. Renuncia del concesionario o permisionario;
III. Revocación;
IV. Rescate, y
V. Liquidación o quiebra del concesionario o permisionario.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 102. Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán a la Nación las bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión.

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las bandas de frecuencias, posiciones orbitales u órbitas satelitales, objeto de la concesión.

Artículo 103. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión o permiso, salvo autorización del instituto por causa justificada;
II. Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización del instituto;
III. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello;
IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión y en los permisos;
V. Negarse a interconectar a otros concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones, sin causa justificada;
VI. Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley;
VII. No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones los productos y aprovechamientos que se hubieren establecido;
VIII. Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión;
IX. No cumplir con las obligaciones específicas del artículo 143 o con las correspondientes al artículo 146, establecidas a los concesionarios dominantes, cuando tengan tal carácter, y
X. No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando estos hayan sido el principal criterio de selección del ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública;
XI. Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 60 días;
XII. Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la concesión;
XIII. Cambiar de nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros;
XIV. Modificar la escritura social en contravención con las disposiciones de esta ley;
XV. Modificar cualquier aspecto de la concesión sin la autorización del instituto;
XVI. Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión cuando dicha explotación se encuentre expresamente prohibida en las concesiones o permisos;
XVII. Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización del instituto, y
XVIII. Cambiar la o las frecuencias asignadas sin previa autorización del instituto;
XIX. Negarse a transmitir en los tiempos de estado los mensajes indicados por el Instituto Federal Electoral en los términos establecidos en la normatividad aplicable y en los artículos 222 y 223.

El Instituto procederá de inmediato con la revocación de las concesiones o los permisos en los supuestos de las fracciones III, V, VI, VII, IX, XI, XII y XIII anteriores.

En los casos de las demás fracciones el Instituto procederá con la revocación de las concesiones cuando previamente hubiese sancionado al concesionario, por lo menos en tres ocasiones por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones.

Artículo 104. En los casos de las fracciones VII, XII y XIII del artículo 103 el concesionario perderá la propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de terminación y de revocación, el concesionario o permisionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de levantar las instalaciones en el término que al efecto le señale el Instituto quien podrá efectuar dicho levantamiento a costa del concesionario, siguiendo el procedimiento administrativo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 105. La revocación, será declarada administrativamente por el Instituto, conforme al procedimiento establecido en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 106. El titular, los accionistas y socios tenedores de partes sociales de una concesión o permiso que hubiere sido revocada estarán imposibilitados para obtener nuevas concesiones o permisos de los previstos en esta Ley, por un plazo de 5 años contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 107. Los socios de una persona moral cuya concesión le hubiere sido revocada o las sociedades en las que éstos sean accionistas o detenten partes sociales, se encontrarán imposibilitadas para obtener nuevas concesiones o permisos, por un plazo igual al establecido en el párrafo anterior.

SECCION II
DEL CAMBIO O RESCATE DE LAS CONCESIONES.

Artículo 108. El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija el interés público;
II. Por razones de seguridad nacional;
III. Para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa o el uso libre;
IV. Para la introducción de nuevas tecnologías
V. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;
VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y
VII. Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados, en condiciones similares. El Instituto deberá requerir el pago de una contraprestación cuando las frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios de telecomunicaciones.

El rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.

Al efectuar el cambio de frecuencias o un rescate parcial el Instituto podrá establecer al concesionario nuevas obligaciones relacionadas con inversión, cobertura y calidad de servicio.

SECCION III
DE LA REQUISA

Artículo 109. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal solicitará al Instituto hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Instituto podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la

requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia.

TÍTULO V
DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO I
DE LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 110. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse a lo dispuesto por esta ley, sus reglamentos, las normas técnicas y a las medidas de seguridad y eficiencia técnica que fije el Instituto.

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones;
II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios;
III. Fomentar la competencia entre concesionarios;
IV. Promover un uso más eficiente de los recursos;
V. Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones se dé de manera eficiente;
VI. Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones;
VII. Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones que prestan los concesionarios a sus propios usuarios, así como a otros concesionarios y a los usuarios de éstos a través de la interconexión, cumplan con valores establecidos en las normas de calidad aplicables, basados en estándares internacionales, y
VIII. Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las redes públicas de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios.

Artículo 111. La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales o municipales en materia de desarrollo urbano y protección ecológica en su caso, así como, con las normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad correspondiente para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 112. El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre sistemas de prestadores de servicios de telecomunicaciones. Los titulares de los mismos estarán obligados a observar oportunamente las medidas que al efecto dicte ésta

Artículo 113.- El Instituto buscará evitar las interferencias entre sistemas nacionales e internacionales, y dictará las medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de servicio.

El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencia y la amplitud de las bandas de frecuencia de transmisión/recepción para toda clase de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor.

Artículo 114. Para la introducción de nuevas tecnologías que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, el Instituto podrá autorizar a los prestadores del servicio, el

uso provisional de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión. En tales casos, al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional.

Artículo 115. La Comisión Federal de Competencia resolverá los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades.

116. El Instituto establecerá los términos y condiciones bajo los cuales los concesionarios y permisionarios tendrán acceso a programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de radio y televisión restringida.

Artículo 117. Las emisoras del servicio de radio y televisión no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto:

a) De las causas de la suspensión del servicio;
b) Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión;
c) De la normalización del servicio al desaparecer la causa que motivó la emergencia.

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de veinticuatro horas contado a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor.

El concesionario o permisionario deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio se preste nuevamente en condiciones normales.

Artículo 118.- Las emisoras del servicio de radio o televisión operarán con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de ingeniería.

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar dotadas de dispositivos para reducir la potencia.

CAPÍTULO II
DE LA COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE

Artículo 119. El Instituto asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.

Artículo 120. Salvo lo previsto en sus respectivas concesiones, los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país tendrán la obligación de hacer todo lo necesario para poner un satélite en órbita, a más tardar 5 años después de haber obtenido la concesión.

Es causal de revocación de la concesión, en términos la fracción I del artículo 103, de esta Ley de cuando no dé cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, o cuando no realice en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el lanzamiento oportuno y adecuado del satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente.

Artículo 121. Los concesionarios que ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país, deberán establecer los centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional. Los centros de control de satélites serán operados por mexicanos.

Artículo 122. Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, los operadores satelitales extranjeros podrán ofrecer sus servicios en México, de conformidad con las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Artículo 123. Los concesionarios que distribuyan señales en el país deberán respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de las señales que transmitan.

Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros deberán asegurarse de que las señales que se distribuyan por medio de dichos satélites respeten los ordenamientos legales, reglamentarios y administrativos aplicables.

Artículo 124. La activación directa o indirecta de equipos que reciban las señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros, o cualquier otra forma de aprovechamiento comercial de dichas señales, dentro del territorio nacional, requerirá de concesión de las previstas en los artículos 77 y 78 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
DEL ACCESO, INTERCONEXION Y LA INTEROPERABILIDAD DE LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 125. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá observar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas que determine el Instituto y su negociación deberá atender al procedimiento establecido en el artículo 126.

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas indispensables y tarifas máximas aplicables a la interconexión. La unidad de medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de interconexión es el segundo, sin perjuicio de que también se pueda cobrar por capacidad.

La interconexión entre operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%. El Instituto con base en estudios que elabore, podrá determinar un porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente sobre la competencia.

Artículo 126. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones interesados en interconectar sus redes están obligados a llevar a cabo el siguiente procedimiento:

I. El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión con otro operador de red pública de telecomunicaciones, registrará mediante formato electrónico ante el Instituto su solicitud de interconexión indicando el operador con el que desea llevarla a cabo, y los términos propuestos para llevar a cabo la misma. Esta solicitud se inscribirá en la base de datos del registro de telecomunicaciones. El Instituto establecerá un mecanismo de notificación automática a fin de que en un término no mayor a 24 horas dicha solicitud se haga del conocimiento del representante legal del operador con el que desea interconectarse por medios electrónicos.

II. El representante legal del operador que recibe la solicitud de interconexión, tendrá hasta 5 días naturales para confirmar por el mismo medio electrónico la recepción de la solicitud, de lo contrario se entenderá que acepta los términos y condiciones propuestos por el operador interesado en celebrar el convenio de interconexión.

III. Los operadores involucrados en la negociación de interconexión, contarán con 20 días hábiles a partir de la recepción de confirmación de la solicitud prevista en el inciso II para negociar los términos y condiciones de la interconexión.

IV. Una vez negociados los términos y condiciones para llevar a cabo la interconexión, los acuerdos deberán registrarse ante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración, quien los pondrá a disposición de otros operadores interesados, salvo aquella información que pueda afectar secretos comerciales o industriales.

Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial o comercial.

En ningún caso se considerará como información confidencial las tarifas; los

acuerdos compensatorios; los puntos de interconexión, y los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación.

V. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo a que se refiere la fracción III del presente artículo, cualquiera de los operadores podrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva los aspectos no acordados. La resolución deberá ser emitida por el Instituto en un plazo que no deberá exceder los 15 días hábiles contados a partir de que se concluya el procedimiento para determinar las condiciones materia del desacuerdo, en términos de lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

VI. El servicio de interconexión deberá prestarse a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la resolución del Instituto o, en su caso, de la presentación para registro del convenio por el operador solicitante.

En los convenios de interconexión los operadores deberán observar las condiciones técnicas indispensables y tarifas máximas establecidas por el Instituto.

Artículo 127. Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto deberá de considerar el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de las solicitudes del servicio, las tecnologías de punta, entre otras.

Las tarifas máximas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución proporcional para la recuperación de los costos comunes, este último obtenido de las referencias internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.

Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales deberán ser comparables a los de una empresa eficiente.

Artículo 128. En los convenios de interconexión, las partes deberán:

I. Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes;

II. Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas máximas establecidas por el Instituto;

III. Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión;

IV. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran;

V. Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos;

VI. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los servicios a que pueden acceder los usuarios;

VII. Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente;

VIII. Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan hacerlo;

IX. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, la hora, y si hubo asistencia de operadora, y

X. Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable.

XI. Utilizar el segundo como medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de

interconexión, sin perjuicio de que también se pueda cobrar por capacidad.

Artículo 129. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. Permitir a concesionarios y permisionarios que comercialicen, los servicios y capacidad que hayan adquirido de otras redes públicas de telecomunicaciones.
II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto;
III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas y sin la aprobación previa del Instituto;
IV. Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad con lo establecido por el Instituto;
~~V.~~ Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto;
VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión o permisos respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria;
VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios. Cuando el concesionario convenga con el usuario utilizar el tiempo como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, éste deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio;
VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;
IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;
X. Abstenerse de obstaculizar de manera alguna la interconexión indirecta, entendida esta como aquella interconexión que se realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red.
XI. Abstenerse de contratar en exclusividad la instalación de infraestructura de telecomunicaciones a áreas comunes en propiedades bajo el régimen de condominio;
XII. Los titulares de dichas infraestructuras deberán establecer un punto de interconexión con las redes públicas de telecomunicaciones;
XIII. Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos, y
XIV. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros.

Artículo 130. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deben permitir que los usuarios que hagan uso de los servicios de valor agregado, puedan acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por ellos mismos o por terceros, no debiendo limitar, degradar o restringir su disposición.

Artículo 131. Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que la misma determine.

Artículo 132. Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del operador que preste el servicio final. Asimismo, los operadores deberán respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma

clase de servicio, independientemente del operador que lo ofrece.

Artículo 133. El Instituto establecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permitan exclusivamente la recuperación de los costos incurridos.

La Secretaría de la Función Pública, al ejercer sus funciones relativas a la conducción de la política inmobiliaria de la administración pública federal, procurará que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los objetivos de la presente ley.

Para tal efecto, dicha Secretaría presidirá una Comisión Intersecretarial en la que, cuando menos, participen la Secretaría, el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión Federal de Competencia, que tendrá por objeto, entre otros, proponer las bases y lineamientos para instrumentar la citada política inmobiliaria en materia de fomento de las telecomunicaciones.

Ningún operador de redes públicas de telecomunicaciones podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.

Articulo 134. Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los operadores, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada.

La ubicación y el uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los operadores interesados. A falta de acuerdo entre los operadores, el Instituto establecerá las condiciones de la ubicación compartida sobre la propiedad pública o privada. En caso de desacuerdo el Instituto establecerá el uso compartido siempre y cuando determine que la infraestructura a ser compartida es esencial para salvaguardar los objetivos señalados en el primer párrafo de este artículo.

Los desacuerdos serán resueltos por el Instituto, siguiendo el procedimiento establecido en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 135. El Instituto promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los concesionarios nacionales interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional.

Artículo 136. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el Instituto.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán al Instituto su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 137. El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de

emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros.

Artículo 138. La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

CAPÍTULO IV
DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS.

Artículo 139. Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 140. Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

Artículo 141. Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. El Instituto vigilará que se apliquen correctamente las tarifas y que no se hagan devoluciones o bonificaciones que impliquen la reducción de las mismas.

Artículo 142. Cuando el concesionario convenga con el usuario utilizar el tiempo como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, éste deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 139 de la presente ley.

TÍTULO VI
DE LA CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Artículo 143. Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las normas oficiales mexicanas y, en su ausencia, con las normas que indique el Instituto.

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 144. El Instituto estará facultado para acreditar a peritos para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior.

Artículo 145. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 143 de la presente Ley.

TÍTULO VII
DE LA VERIFICACIÓN, INSPECCION Y VIGILANCIA

Artículo 146. El Instituto verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto los concesionarios, permisionarios, prestadores de servicios de valor agregado o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la presente ley. Las personas que sean sujetos de verificación cubrirán las contribuciones que por este concepto se originen.

Las visitas de inspección deberán estar fundadas y motivadas y se practicarán en presencia del titular su representante o de alguno de sus empleados, dentro de las horas de funcionamiento de la emisora.

Los datos que el personal de inspección obtenga durante o con motivo de su visita tendrán el carácter de confidenciales y sólo se comunicarán a la Secretaría o del Instituto, para los efectos legales correspondientes.

Articulo 147. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función

y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto; además de información relativa a la topología de sus redes, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos que las conforman, y toda la referente a la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la industria de las telecomunicaciones.

El Instituto vigilará que los prestadores de servicios de telecomunicaciones proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten. En el caso de que la información que se publicite en los medios de comunicación no cumpla con los requisitos anteriores, el Instituto estará facultado para ordenar la suspensión de dicha publicidad en forma inmediata.

Articulo 148. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Articulo 149. El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

TÍTULO VIII
DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PÚBLICAS

CAPITULO I
DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL

Artículo 150. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios de telecomunicaciones para satisfacer necesidades básicas de comunicación y de carácter social de la población en general y de las unidades de producción.

Se entiende por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un conjunto mínimo de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Articulo 151. Los programas de cobertura social son de interés público y tendrán como objetivo que la población tenga acceso a servicios de radiodifusión de contenido local, así como a los servicios básicos de telecomunicaciones que le permitan emitir y recibir telefonía local, de larga distancia nacional e internacional, transmitir y enviar voz, datos y video, así como recibir los servicios de telefonía pública, números de emergencia y servicios de directorio.

La Secretaría en colaboración con el Instituto podrá revisar y ampliar los servicios que comprenden los programas de cobertura social, tomando en cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social.

Artículo 152. En materia de cobertura social, la Secretaria estará facultada para:

I. Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos, de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones;
II. Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en su caso, serán subsidiados por el mismo;
III. Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, y
IV. Promover ante los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones.

Artículo 153. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para:

I. Establecer condiciones de operación, interconexión, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre otras, que considere necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras disposiciones de esta ley.
II. Realizar las subastas públicas descendentes que le requiera la Secretaría para el otorgamiento de subsidios con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.
III. Establecer disposiciones de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas que forman parte de los programas de cobertura social, con las modalidades que juzgue convenientes para el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 150;
IV. Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 154 de la presente ley, que formarán parte de los programas de cobertura social;

Artículo 154. Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto, en colaboración con la Secretaria recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas. Cualquier concesionario podrá participar en el programa anual de cobertura social de telecomunicaciones que publique el Instituto a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Articulo 155. Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridad:

I. Aumentar la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;
II. Aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local;
III. Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales.
IV. Desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público;
V. El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social.

Artículo 156. El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente:

I. Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo 155 anterior;
II. La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios:
a) Penetración de los servicios de telecomunicaciones;
b) Ingreso per cápita;
c) Índice de marginación, y
d) Beneficio a pueblos y comunidades indígenas.
III. Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, que serán subsidiados por la Secretaría con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;
IV. Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, distintos al señalado en la fracción anterior;
V. La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, según sea el caso;
VI. La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otras personas;
VII. Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso;
VIII. La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión con otras redes, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto;
IX. Los niveles de calidad de los servicios, y
X. Las condiciones tarifarias correspondientes.

Artículo 157. Es obligación de todos los concesionarios que prestan servicios de telecomunicaciones interconectar sus redes con

aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

Artículo 158. El Instituto asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los concesionarios la utilización de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien asignar directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los concesionarios que participen en los programas.

Igualmente, el Instituto podrá asignar en forma directa concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con la fracción I del artículo 36, a las personas que hayan sido elegidas para participar en los programas de cobertura social y que requieran de tales bandas, así como el artículo 69 en el caso de pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 159. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los prestadores de servicios de telecomunicaciones apoyarán al Instituto en el establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de los estados y municipios su participación en dichos programas.

Artículo 160. El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de incentivos fiscales a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que participen en los programas de cobertura social.

CAPITULO II
DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 161. Se crea el Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones, con objeto de contribuir al logro de los objetivos de cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables, mediante la administración eficiente de los recursos a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 162. La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito y contará con un Comité Técnico, integrado de la siguiente manera:

I. El Presidente del Instituto quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su voto será de calidad;
II. El Secretario de Comunicaciones y Transportes,
III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;
IV. El Secretario de Desarrollo Social;
V. El Secretario de Educación Pública;
VI. El Secretario de Salud;
VII. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sin voto;
VIII. Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto, y
IX. El representante de la Secretaria de la Función Pública, con voz, pero sin voto;

Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, IV, V y VI podrán ser reemplazados en sus ausencias por funcionarios que ellos mismos designen cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General.

Artículo 163. El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones:

I. Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
II. Provenientes, en su caso, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones;
III. Provenientes, en su caso, de los estados y municipios, y
IV. Que realice cualquier otra persona física o moral.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente,

cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en nuestro país.

Artículo 164. Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los siguientes criterios:

I. Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;
II. Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones;
III. Se otorgarán una vez que los concesionarios hayan concluido las instalaciones y los servicios correspondientes se encuentren en operación, con las características previamente requeridas, y
IV. No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto.
V. Los subsidios con recursos del Fondo podrán conferir derecho de exclusividad por un tiempo razonable, en el cual se estime la recuperación de la inversión.

TÍTULO IX
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 165. La Procuraduría Federal del Consumidor será competente en el ámbito administrativo para dirimir las controversias que se susciten entre los concesionarios, permisionarios y los agentes comerciales con los usuarios de sus servicios; lo anterior, sin perjuicio de la competencia que corresponda a la autoridad judicial en términos de las disposiciones aplicables.

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas y las que resulten aplicables de conformidad con la presente ley y demás disposiciones vigentes. Estos acuerdos deberán considerar la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor de informar al Instituto de las sanciones que imponga a fin de que el propio Instituto haga la valoración respectiva para efectos del artículo 229 de la presente ley.

Artículo 166. El Instituto vigilará que la información que se transmita a través de las redes públicas de telecomunicaciones sea confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad competente. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones garantizarán la secrecía de las comunicaciones y la protección de los datos personales de los usuarios que sean cursados por su red.

Artículo 167. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán presentar para su registro ante el Instituto, y previo dictamen favorable de la Procuraduría Federal del Consumidor, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables. Los modelos deberán contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Los servicios objeto del contrato;
II. El área de cobertura de los servicios;
III. Las contraprestaciones que deberá pagar el usuario por la prestación de los servicios;
IV. La calidad de los servicios que se prestarán;
V. Los términos y condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios;
VI. Las bonificaciones o reembolsos a favor de los usuarios por interrupciones en el servicio o incumplimiento de los índices de calidad;
VII. El domicilio del prestador de servicios de telecomunicaciones;
VIII. La forma en que el prestador de servicios atenderá las quejas de los usuarios;
IX. Las penas convencionales por incumplimiento del prestador de servicios;
X. La vigencia del contrato;
XI. La obligación de entregar periódicamente al usuario, como anexo del contrato, las disposiciones de la presente ley, sus

reglamentos y demás disposiciones aplicables, que atañen a la calidad y características del servicio en beneficio del propio usuario, conforme lo establezca el Instituto;

XII. El derecho del usuario de dar por terminado el contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a que lo solicite, o antes si así lo previene el contrato, sin perjuicio de las cantidades que deban compensarse las partes, y

XIII. La obligación del prestador de servicios de informar a los usuarios de cualquier modificación a las tarifas registradas.

Artículo 168. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán:

I. Llevar a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas;

II. Asegurar y garantizar que la información y publicidad sobre los servicios de telecomunicaciones que comercialicen y que se difunda por cualquier medio sea veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas y abusivas;

III. Cumplir con la calidad contratada con los usuarios o con aquélla que establezca el Instituto a través de disposiciones de carácter general o la concertada por ésta última con los propios prestadores de servicios de telecomunicaciones;

IV. Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, el cual deberá contar al menos con mecanismos documentados para recibir, identificar, investigar y resolver cualquier reclamación, así como establecer los tiempos de respuesta, registros sobre los resultados de control y las acciones derivadas de los mecanismos implementados, políticas y mecanismos para facilitar y simplificar la presentación y llenado de formatos para las reclamaciones y acciones correctivas y preventivas derivadas de tales reclamaciones.

V. Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico fundamental de numeración;

VI. Obtener autorización del Instituto para suspender de manera general la prestación de un servicio de telecomunicaciones;

VII. Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

VIII. Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas;

IX. Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los 30 días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios;

X. Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las excepciones que establezca el Instituto;

XI. No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de telecomunicaciones;

XII. No interrumpir sin causa justificada los servicios de telecomunicaciones;

XIII. Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones; y

XIV. Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas.

Articulo 169. Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin su responsabilidad, cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos a favor de

los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos.

TÍTULO X
DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 170. La regulación de los contenidos establecida en esta ley se aplicará a los servicios de radio y televisión que operen bajo concesión o permiso, independientemente del medio tecnológico que los transmita.

Artículo. 171. El derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y de las leyes aplicables en la materia.

Artículo 172. La programación deberá respetar los horarios de transmisión de acuerdo a su tipo de clasificación, considerando lo siguiente:

I. Los aptos para todo público, en cualquier horario;
II. Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas.

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación.

Artículo 173. La disposición anterior también será aplicable para la programación originada y programada localmente en la radio y televisión restringida, a menos que la misma sea codificada.

Artículo 174. Los prestadores de servicios de radio y televisión al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido, para la valoración de los padres o responsables de los menores.

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto establezca el Instituto.

Artículo 175. En el caso de películas cinematográficas transmitidas en televisión, la clasificación será la misma que la de su difusión en salas de cine o en el mercado del video, de acuerdo con su regulación específica, sin perjuicio de que si es modificada para su transmisión en televisión, pueda ser reclasificada.

Articulo 176. La programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, para lo cual deberá:

I. Propiciar el desarrollo armónico de la infancia a través de la difusión de información y programas dentro de un marco cultural, ético y social;
II. Evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las personas;
III. Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia;
IV. Informar y orientar sobre los derechos de las niñas y los niños;
V. Promover el interés por los aspectos científico, artístico y social;
VI. Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad internacional;
VII. Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;
VIII. Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;
IX. Promover una cultura ecológica que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;
X. Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud;
XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil;
XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y
XIII. Promover una cultura de respeto y protección a los animales.

Artículo 177. En la programación de radio y televisión que se transmita no se podrá:

I. Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas.
II. Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social.
III. Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
IV. Promover, estimular o hacer apología de la violencia.
V. Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz o y al orden público.
VI. Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente.
VII. Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables;
VIII. Transmitir loterías, rifas y otra clase de sorteos, sin previa autorización de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 178. Los prestadores del servicio de televisión abierta están obligados a publicar, al menos semanalmente, en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, genero, clasificación y horario de cada programa. En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet.

Artículo 179. Queda prohibido transmitir en radio y televisión información que atente contra la secrecía de las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite.

Artículo 180. Los titulares de la concesión serán los responsables, en los términos de esta ley, del contenido de la programación que se transmita, mismo que deberá cumplir en todo momento con las disposiciones aplicables.

Artículo 181. Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales.

Artículo 182. Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia.

Artículo 183. Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior, al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes.

Artículo 184. En la radio y televisión restringida, cuando menos el 80% de los canales que transmitan deberán ser en español o subtitulados en este idioma.

Artículo 185. Los prestadores del servicio de radio y televisión establecerán las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de televisión o en los videos. En el caso de la información referida en el artículo 196 y en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, se deberá emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos.

Artículo 186. Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los concesionarios de frecuencias de radio y televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones del Instituto:

I. Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil;

II. El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de

mensajes de interés de la Nación. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a cualquiera de los poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la repuesta se solicitará por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 187. En la programación de radio y televisión se deberá transmitir información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales e internacionales. En el caso de las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo relacionados con su área geográfica de cobertura.

Articulo 188. Los concesionarios del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos.

Articulo 189. Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación contractual con la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido improcedente.

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractual y recibir una indemnización equivalente al despido injustificado cuando:

I. En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial; o

II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.

CAPÍTULO II
DE LOS TIEMPOS DE ESTADO

Artículo 190. Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 191. El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.

Artículo 192. Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:

I. Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento; en

emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales;

II. Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirán en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III. Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y

IV. A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento.

Artículo 193. En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral**,** el Instituto determinará la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 200 de esta ley;

Articulo 194. En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación regular.

Artículo 195. Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida deberán reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado:

I. Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor de 30 canales,

II. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

III. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales;

IV. Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales;

V. Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales.

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el prestador del servicio.

CAPÍTULO IV
DE LA PUBLICIDAD

Artículo 196. Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios:

I. Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio.

II. Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Artículo 197. Se considera dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al público en general y destinados a la oferta de bienes o servicios, sea ésta transmitida en cualquiera de las siguientes modalidades:

I. Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora;

II. Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa;

III. Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa.

IV. Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio.

V. Publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos; los mensajes publicitarios con formato de programa sobre un mismo producto o servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida.

VI. Inserciones pagadas. Inserción publicitaria pagada que aparece como nota informativa y que deberá identificarse como tal.

Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos equivaldrán a un minuto del tiempo total

contabilizable para publicidad y solo podrán ser transmitidos de las 24:00 a las 6:00 horas.

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir la publicidad señalada en las fracciones III, V y VI.

Articulo 198. La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través de medios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.

Articulo 199. Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora.

Artículo 200. Los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión deberán acatar las órdenes de suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor y conforme a las facultades que al respecto le confiere dicho ordenamiento.

Artículo 201. No se considerará tiempo publicitario:

I. Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la finalidad explicita de la venta de bienes y servicios:
II. Los mensajes transmitidos en los tiempos del Estado; y
III. La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Artículo 202. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programación hasta 6 minutos de publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional establecido en el artículo 194, de lo contrario no podrán transmitir publicidad.

Los canales de televisión restringida dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos quedarán exceptuados del límite señalado en el párrafo anterior, y se sujetarán a lo establecido por el Reglamento en la materia.

Artículo 203. En los programas deportivos o de espectáculos que tienen una continuidad específica, ajena al medio que los transmite, no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, o con menciones o efectos sonoros.

Artículo 204. La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más de un corte publicitario cada hora.

Artículo 205. La publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá transmitir en el horario de las 6:00 a las 22:00 horas clasificado como para todo público.

En la publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá emplear a menores de edad, ni consumirse real o aparentemente frente al público los productos que se anuncian. En esta publicidad se atenderá a lo dispuesto en la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas.

La publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el

consumo de los productos anunciados se le vincule directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva.

Artículo 206. Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera autorización de la autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su transmisión se hará solamente en los términos en los que la autorización haya sido otorgada.

Artículo 207. No podrá ser transmitida aquella publicidad de bienes o servicios, que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal de Consumidor.

Artículo 208. En el caso del servicio de radio o televisión restringida, los criterios en materia de publicidad serán aplicables únicamente tratándose de bienes o servicios que se ofrezcan, consuman, enajenen o se promocionen en o para el mercado mexicano.

Artículo 209. En la publicidad no se podrá transmitir mensajes que**:**

I. Promuevan la discriminación y la violencia de género,
II. Reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar a las mujeres de forma vejatoria, es decir, la que utiliza de manera particular y directa el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres como un simple objeto desvinculado del producto que se busca promover,
III. Fomente malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la seguridad humanas
IV. Promueva el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como el tabaco y alcohol.
V. Promueva servicios o establecimientos dedicados a la prostitución;
VI. Promueva entre los menores la compra de un producto o la contratación de un producto, de modo que explote su inexperiencia o credulidad
VII. Promuevan productos que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido expresamente aprobados por la Secretaría de Salud.
VIII. La publicidad de productos médicos y dirigidos a propiciar modificaciones estéticas deberá advertir de los riesgos que puede implicar el consumo de tales productos.
IX. Ofrezca soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales.
X. Hacer publicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso.
XI. Transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta

Artículo 210. Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán informar al Instituto y tener a disposición del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación**.**

Artículo 211. No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras**.**

Artículo 212. Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán transmitir los programas, cápsulas, promocionales y demás mensajes que con base en los tiempos de Estado se difundan con fines electorales y de información por parte de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, y deberán respetar íntegramente las pautas que para tal efecto señale la autoridad electoral.

Artículo 213. Los prestadores del servicio de radio y televisión en ningún momento podrán contratar con los partidos políticos, o a través de terceras personas, tiempos publicitarios con fines electorales en cualquier modalidad de radio y televisión.

De la misma manera está prohibido realizar contratos con persona físicas o morales, sea a título propio o por cuenta de terceros, para transmitir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

CAPÍTULO V

DEL DERECHO DE RÉPLICA

Artículo 214. Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por radio o televisión cuya divulgación pueda causarle un perjuicio tiene derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación en las condiciones que establece esta ley.

Artículo 215. El derecho de la persona a la que aludan los hechos, en caso que la misma haya fallecido, puede ser ejercido por sus familiares en línea ascendente o descendente en primer grado.

Articulo 216. Los prestadores del servicio de radio y televisión, deberán designar a un responsable para atender las solicitudes de réplica que podrá ser su defensor de la audiencia y hacerlo del conocimiento de las audiencias a través de sus portales de Internet.

Artículo 217. Para el ejercicio del derecho de réplica se observará lo siguiente:

I. La difusión de la rectificación será gratuita;
II. La rectificación se limitará a los hechos de la información que se desea rectificar; y
III. La extensión de la rectificación no podrá ser menor del doble de espacio utilizado para la difusión de la información objeto de la misma, al menos que el concesionario acepte destinarle más tiempo a la respuesta y se hará en el mismo formato y características en las que se emitió la información que se reclama. La rectificación deberá difundirse sin ediciones, comentarios ni apostillas en el mismo programa en que se difundió la información que se rectifica, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,

Si el programa por sus características o periodicidad, no permite divulgar la rectificación en el plazo antes señalado, ésta deberá difundirse en la emisión inmediata posterior.

Artículo 218. La solicitud de rectificación deberá estar dirigida por escrito al director o al responsable acreditado por el medio de comunicación y presentarse dentro de los siete días siguientes a la difusión de la información; y

Artículo 219. Si la rectificación no se divulga en los plazos señalados con anterioridad o se hubiese notificado al interesado que la réplica no será difundida, este último podrá acudir ante el Instituto, para el dictamen de procedencia. En caso de que el Instituto concediere de pleno derecho la replica, la emisora responsable estará obligada a su inmediata difusión.

Artículo 220. En ningún caso la rectificación exime de las responsabilidades civiles que se puedan reclamar.

CAPÍTULO VI
DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE

Artículo 221. Se crea el Fondo para el Apoyo a la Producción audiovisual independiente con objeto de contribuir a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión.

Artículo 222. Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, culturales y de servicio público propuestas por personas no vinculadas empresarialmente con los titulares de concesiones,

Artículo 223. El patrimonio del Fondo se integrará por:

I. Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
II. Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios;
III. Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos de Ley
IV. Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio fideicomitido que realice el fiduciario;
V. Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente,

cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.

Artículo 224. La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.

Tal fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y estará integrado por:

I. El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, su voto será de calidad;
II. un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público;
III. Un representante de la Secretaria de Educación Pública;
IV. Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisual propuestos: uno por los concesionarios de uso comercial, otro por concesionarios de uso público y uno más por los concesionarios de uso social.

Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, y IV, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los miembros del comité técnico tendrán voz y voto.

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el Secretario Ejecutivo. El Instituto deberá emitir el reglamento interno para el funcionamiento del Fondo en que se incluirá el funcionamiento del Comité Técnico.

Artículo 225. Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar proyectos susceptibles de otorgamiento de apoyo financiero a su producción. Sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria serán sometidos a consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable.

Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado por el fondo únicamente para el fin establecido en la solicitud de apoyo y ratificado en el contrato que al efecto se celebre bajo los términos y condiciones que el Instituto establezca en el Reglamento de la materia

TÍTULO XI
DEL REGISTRO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Articulo 226. El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, cuyo contenido deberá estar a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto, en el que se inscribirán:

I. Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; así como las modificaciones de carácter legal o técnico de las concesiones o permisos y los datos generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;
II. En el caso de titularidad de personas morales, se deberá contar con información acerca de:
    a) Nombre de la sociedad titular;
    b) Acta constitutiva;
    c) Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios;
    d) Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración;
III. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional;
IV. Los servicios de valor agregado y auxiliares y
V. Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;
VI. La cesión de derechos y obligaciones;
VII. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;
VIII. Los convenios de interconexión con otras redes;
IX. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones.
X. Las tarifas publicitarias de radio y televisión.

XI. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los servicios de telecomunicaciones;

XII. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables, actualizadas trimestralmente;

XIII. El informe anual del Instituto;

XIV. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones;

XV. Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales les fueron otorgadas las concesiones o permisos;

XVI. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones así como Información general sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria, para radio y televisión;

XVII. Las tarifas máximas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión;

XVIII. Las obligaciones específicas impuestas al operador principal, y

XIX. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

XX. El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión;

XXI. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios, permisionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector.

Articulo 227. Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no mayor de 30 días.

Artículo 228. Los concesionarios y permisionarios están obligados a poner a disposición de el Instituto en cualquier tiempo, todos los datos, informes y documentos que ésta le requieran en el ámbito de su competencia.

TÍTULO XII
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 229. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

A. Con multa de 10,500 a 105,000 salarios mínimos:

I. Cuando en las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial contravenga el porcentaje de inversión extranjera directa;

II. Cuando se alteren los términos de la concesión sin que medie resolución administrativa o resolución judicial;

III. Se carezca de diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes;

IV. Se suspendan las transmisiones de las emisoras;

V. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones impidan interconectar sus redes y no registren el convenio de interconexión dentro de los 30 días naturales siguientes a su celebración, y

VI. Cuando los concesionarios que prestan servicios de telecomunicaciones impidan interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

B. Con multa de 4,200 a 42,000 salarios mínimos:

I. Cuando los concesionarios que usen derechos de vía públicos y que instalen redes de fibra óptica u otros medios de transmisión, no pongan a disposición de

otros concesionarios que lo soliciten los recursos que no utilicen a tarifas que les permitan una recuperación adecuada a su inversión;

II. Cuando los concesionarios de redes públicas o las personas carezcan de autorización expresa del Instituto para instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país;

III. Cuando los concesionarios celebren convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras sin la intervención del Instituto;

IV. Cuando la programación dirigida a la población infantil no se realice de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. Sin detrimento de lo anterior, se procederá a la suspensión indefinida de la programación;

V. Cuando el tiempo que se destine a la transmisión de publicidad en la programación en radio y televisión no se ajuste a características establecidas para tal efecto;

VI. Cuando los concesionarios sin fines de lucro incluyan publicidad de la cual están impedidos transmitir;

VII. Cuando en la transmisión de infomerciales no se les identifique como tales y tampoco se diferencien claramente del programa;

VIII. Cuando en la programación dirigida a la población infantil la publicidad relativa a productos alimenticios distorsione los hábitos de la buena nutrición, fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes;

IX. Cuando en los programas deportivos o de espectáculos que tienen una continuidad específica, ajena al medio que los transmite, se inserte publicidad durante el desarrollo del evento, mediante imágenes superpuestas que rebasen una quinta parte de la pantalla, interfirieran la visión del evento o contengan menciones o efectos sonoros;

X. Cuando en la publicidad de bebidas alcohólicas se empleen a menores de edad, se consuma real o aparentemente los productos que se anuncian y se desatienda la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas;

XI. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se asocie directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva;

XII. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en el horario clasificado como para todo público;

XIII. Cuando se transmita publicidad que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos, carezca de la autorización de la autoridad competente;

XIV. Cuando se transmita publicidad de bienes o servicios que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal de Consumidor, y

XV. Cuando la publicidad transmita los mensajes restringidos por el artículo 213 de la presente Ley.

C. Con multa de 2,625 a 21,000 salarios mínimos:

I. Cuando los concesionarios sustituyan cualquiera de los servicios comprendidos en su concesión sin la previa autorización del Instituto;

II. Cuando se presten servicios auxiliares solicitando la entrega de una contraprestación por parte del público para recibirlos sin que se cuente con la autorización del Instituto;

III. Cuando los servicios auxiliares no se ajusten a las disposiciones establecidas en materia de contenidos, publicidad, así como juegos y sorteos previstas en la presente ley y las disposiciones reglamentarias que de ella deriven;

IV. Cuando en la prestación de los servicios auxiliares se afecte en forma alguna la prestación de los servicios de

radiodifusión de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión;

V. Cuando los concesionarios otorguen subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico;

VI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones suspendan de manera general la prestación de un servicio de telecomunicaciones sin la autorización del Instituto;

VII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones se abstengan de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones;

VIII. Cuando la programación no respete los horarios de transmisión de acuerdo a su tipo de clasificación;

IX. Cuando la programación originada y programada localmente en la radio y televisión restringida no respete los horarios de transmisión de acuerdo a su tipo de clasificación, a menos que la misma no sea codificada;

X. Cuando la programación general que se transmita considere algunos de los supuestos incorporados en el artículo 183 de la presente Ley. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a suspender indefinidamente el programa correspondiente;

XI. Cuando se intercepten, divulguen o aprovechen los mensajes, noticias o informaciones que no estén destinados al dominio público y que se reciban por medio de los aparatos de radiodifusión;

XII. Cuando los prestadores de servicio de radio y televisión abierta transmitan contenidos nacionales en un porcentaje menor al 50% del tiempo total de la programación diaria;

XIII. Cuando los prestadores de servicio de radio y televisión del servicio restringido transmitan contenidos nacionales en un porcentaje menor al 50% del tiempo total de la programación diaria en los canales de producción propia;

XIV. Cuando del porcentaje para contenidos nacionales, los canales de televisión de cobertura nacional y las televisoras de uso público no incorporen al menos un 20% de programación contratada a productores independientes;

XV. Cuando en la radio y televisión restringida menos del 80% de los canales que transmitan no sean en español o con subtítulos;

XVI. Cuando los concesionarios de radio y televisión no trasmitan gratuitamente los mensajes a que se refiere el artículo 191 de este Ley;

XVII. Cuando los concesionarios no pongan a disposición del público su Código de Ética;

XVIII. Cuando los concesionarios no designen su defensor de la audiencia, y

XIX. Cuando los concesionarios, a través de su defensor de la audiencia, no rindan un informe publico de su gestión.

D. Con multa de 1,500 a 10,000 salarios mínimos:

I. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión y los proveedores de contenidos en telecomunicaciones, atenten contra la función social establecida en los supuestos previstos en el artículo 6 de esta Ley;

II. Cuando los titulares de una concesión de frecuencias atribuidas a la radiodifusión impidan la retransmisión simultánea de manera gratuita de su señal en la misma área de cobertura geográfica de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y titulares habilitados que presten el servicio radio y televisión restringida en cualquiera de sus modalidades;

III. Cuando los concesionarios que ocupen posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país no establezcan los centros de control y operación de los satélites respectivos en territorio nacional;

IV. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones limiten, degraden o restrinjan al usuario acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por terceros con autorización para ello;

V. Cuando los concesionarios de un mismo tipo de tráfico o servicio otorguen un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción independientemente del concesionario o permisionario que preste el servicio final. Asimismo, cuando no respeten la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma clase de servicio, independientemente del proveedor que lo ofrece;

VI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones facturen servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

VII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones interrumpan sin causa justificada los servicios de telecomunicaciones;

VIII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones desatiendan las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas;

IX. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión no graben sus transmisiones en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales;

X. Cuando los concesionarios de radio y televisión no empleen la lengua de señas mexicana y/o subtítulos, en al menos uno de sus espacios informativos y en la información referida en el artículo 191, de manera simultánea al lenguaje oral, y

XI. Cuando los prestadores del servicios de radio y televisión no proporcionen al Instituto Federal Electoral y a los órganos electorales locales el catalogo de horarios y tarifas disponibles para su contratación.

E. Con multa de 25,000 a 100,000 salarios mínimos:

I. Cuando las comercializadoras operen o exploten redes de telecomunicaciones o sean propietarias o poseedoras de medios de transmisión o conmutación;

II. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones participen en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin la autorización del Instituto;

III. Cuando las estaciones no operen con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas;

IV. Cuando las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, no estén dotadas de dispositivos para reducir la potencia;

V. Cuando los titulares de las interferencias que se presenten entre sistemas de prestadores de servicios de telecomunicaciones no observen las medidas que al efecto dicte el Instituto;

VI. Cuando se realice el uso provisional de frecuencias adicionales a las que hayan sido otorgadas originalmente en la concesión para la introducción de nuevas tecnologías sin la autorización del Instituto o cuando al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores no dejen de utilizar la frecuencia adicional. Adicionalmente operará la devolución de la frecuencia asignada provisionalmente;

VII. Cuando las tarifas no sean registradas ante el Instituto previamente a su puesta en vigor;

VIII. Cuando los operadores adopten prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas;

IX. Cuando los productos destinados a telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico y los productos diferentes de telecomunicaciones cuya operación puede causar daño o interferencia perjudicial a los sistemas y servicios de telecomunicaciones no estén certificados conforme a las normas oficiales mexicanas o con las normas que indique el Instituto;

X. Cuando los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no proporcionen información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones;

XI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no lleven a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas;

XII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no aseguren y garanticen que la información y publicidad sobre los servicios de telecomunicaciones que comercialicen y que se difunda por cualquier medio sea veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas y abusivas;

XIII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones incumplan con la calidad contratada con los usuarios o con aquélla que establezca el Instituto a través de disposiciones de carácter general o la concertada por ésta última con los propios prestadores de servicios de telecomunicaciones;

XIV. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no establezcan el procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, consagrado en esta Ley;

XV. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones no ofrezcan acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine;

XVI. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones eviten dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de 24 horas;

XVII. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones den por terminado anticipadamente el contrato, sin reembolsar a los usuarios, dentro de los 30 días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios;

XVIII. Cuando los prestadores del servicio de radiodifusión no pongan a disposición del Estado el tiempo establecido en el artículo 193 de esta Ley, bajo las condiciones que en el mismo se señalan;

XIX. Cuando en la transmisión de los programas incluidos en tiempos de Estado, el prestador del servicio de radio y televisión no conserven la misma calidad de transmisión que emplee en su programación normal, y

XX. Cuando los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión no acaten las órdenes de suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor.

F. Con multa de 2,000 a 25,000 salarios mínimos por:

I. Cuando los ingresos adicionales no se apliquen preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y producción;

II. Cuando los operadores no rindan rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de rendición de cuentas sobre sus ingresos adicionales;

III. Cuando los entes públicos bajo régimen de concesión no cuenten con un Consejo Consultivo, aunado a que no esté constituido en los términos previstos en esta Ley. En caso de reincidencia se procederá a la destitución del Director General;

IV. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos, no pongan a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos;

V. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos no nombren un Defensor de las audiencias y emitan Códigos de Ética. Ante la reincidencia de esta falta se procederá a la destitución del Director General del organismo;

VI. Cuando el Órgano de Gobierno de los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos no haga públicos el informe del Defensor de las audiencias, las decisiones que adopte colegiadamente, el informe del Consejo Consultivo, la evaluación del Órgano de Gobierno, al igual que los compromisos que derivado de dichos documentos, adopte el concesionario;

VII. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos carezcan de reglas para custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación;

VIII. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos prescindan de la presentación de un informe anual de sus actividades y contabilidad ante el Instituto;

IX. Cuando los prestadores de servicios de radio y televisión al iniciar cada programa no hagan referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido;

X. Cuando los prestadores de servicios de televisión no realicen la misma clasificación de películas cinematográficas que la establecida para su difusión en salas de cine o en el mercado del video;

XI. Cuando las transmisiones audiovisuales en atención al servicio que prestan no incluyan en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales e internacionales;

XII. Cuando las transmisiones audiovisuales en el caso de las emisoras locales de radio y televisión no incluyan en su programación diaria contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura;

XIII. Cuando las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera injustificada, y

XIV. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión no designen a un responsable para atender las solicitudes de aclaración o replica y hacerlo del conocimiento de las audiencias a través de sus portales de Internet.

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 230. En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda ocasión.

Articulo 231. Para la determinación del monto en el rango de las sanciones, la autoridad deberá considerar:

I. La capacidad económica del infractor.
II. La gravedad de la infracción;
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
IV. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y
V. La reincidencia del infractor

Artículo 232. Ante la irregularidad en el informe de los ingresos establecido en los artículos 51 y 71 se aplicará una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.

Artículo 233. En caso de incumplimiento de los artículos 190, 192 y 212 el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo solicitado y no otorgado.

Artículo 234. Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a publicidad establecido en los artículos 200, 201 y 299 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido.

.**Artículo 235.** Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido.

Artículo 236. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 28 y 79 de esta Ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.

Artículo 237. Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

I. Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;

II. En el acta que se levante, el Instituto dejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al depositario de los mismos;

III. Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes;

IV. El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la resolución que corresponda., y

V. La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

Artículo 238. El Instituto, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones, deberá emitir amonestación, la cual se hará pública en su portal de internet, ante el incumplimiento de los siguientes supuestos:

I. La presentación anual ante el Instituto de los informe de actividades y contabilidad por parte del concesionario, establecidos en los artículos 51 y 71;
II. Permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la presente Ley;
III. Incluir en la programación diaria de las transmisiones audiovisuales, en el caso de las emisoras locales de radio y televisión, contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura, y
IV. Evitar que las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera injustificada.

Articulo 239. Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de la conducta.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Reglamento Interno del Instituto deberá ser expedido en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. Los Medios de Estado actualmente en legal operación, gozarán de un plazo no mayor a 365 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que realicen los ajustes normativos, administrativos y operativos necesarios para cumplir con lo establecido en esta Ley.

Quinto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto, regirán las disposiciones reglamentarias vigentes.

Sexto. Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto.

Las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán ejercidas por el Instituto a través de las unidades administrativas que al efecto prevea su Reglamento Interno. Los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas mencionadas en este párrafo serán transferidos al Instituto en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Séptimo. Los asuntos en trámite a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberán ser remitidos a el Instituto en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones a más tardar en 8 días naturales informarán al Presidente del Instituto de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que, en tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo anterior, se hagan del conocimiento del Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin de no afectar los derechos de terceros.

Octavo. La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, se hará mediante nombramientos por plazos de cuatro, cinco, seis, siete y, en tres casos por ocho años, respectivamente.

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los nombramientos de los Comisionados que ocupan dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, dejarán de surtir efectos hasta en tanto se designen los nuevos Comisionados.

Noveno. El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo numero 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el

Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968.

Décimo. Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Al efecto, El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 90 días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá modificar el Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, a fin de que los concesionarios de televisión gocen de un plazo de hasta 5 años para realizar la transición tecnológica que les permita brindar servicios digitales, en congruencia con lo dispuesto en la presente Ley.

Décimo Primero. A efecto de garantizar el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico y del servicio y calidad que se presta a través de las estaciones de radio concesionarias y permisionarias que operan en amplitud modulada, y con el objeto de adoptar cuando así lo determine el gobierno federal el estándar tecnológico para las transmisiones de radio digital terrestre, o cualquier otra innovación que se genere con la introducción de nuevas tecnologías, el Instituto publicará la convocatoria de licitación con los términos y condiciones a los que deberán sujetarse los concesionarios y permisionarios de AM que por única vez, gozarán del otorgamiento de frecuencias de FM, de conformidad con los siguientes criterios:

1) Sólo podrán participar aquellas personas físicas o morales que no hayan recibido una frecuencia adicional de FM entregadas previamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2) Las frecuencias sólo podrán otorgarse en aquellas localidades donde técnicamente es posible y de acuerdo a la disponibilidad de espectro después del ajuste de las normas técnicas.

3) En los términos de la licitación se deberán definir las condiciones para aplicar el derecho preferente de los actuales concesionarios de AM que participen y el monto de la contraprestación que deberán entregar por la asignación de la frecuencia de FM.

4) Los canales de FM sólo podrá retransmitir la programación de los canales de AM originales.

5) Las frecuencias de AM deberán continuar operando, junto con los canales de FM, hasta por dos años, al final de este periodo, reintegrarán al Estado la frecuencia de AM original.

6) La Comisión Federal de Competencia contará con un plazo de hasta 60 días naturales a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer criterios específicos sobre competencia, acaparamiento por grupos, así como condiciones diferenciadas para el otorgamiento de los canales de FM a concesionarios.

7) La Comisión Federal de Competencia deberá emitir opinión favorable en el caso de que los concesionarios o permisionarios de AM participantes posean más de una emisora en la plaza motivo de la licitación.

8) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará que las emisoras permisionadas que operan frecuencias de AM tengan acceso efectivo a frecuencias de FM, emitiendo, al mismo tiempo y a la par que la convocatoria para los concesionarios, una convocatoria específica para otorgar frecuencias de FM a los permisionarios de AM.

9). El Instituto deberá planear las nuevas convocatorias y licitaciones necesarias a fin de garantizar la cobertura del servicio de radiodifusión en las plazas que pudieran resultar afectadas en el momento de la reintegración de la frecuencia de AM por parte de concesionarios y permisionarios.

10). La entrega de las frecuencias adicionales se llevará a cabo en etapas de acuerdo a los siguientes criterios:

Primera etapa. En el primer año a partir de la entrada en vigor de la presente reforma y de acuerdo al siguiente orden:

a). A los concesionarios y permisionarios que operen una frecuencia de AM.

b). A los concesionarios que operen de 2 a 5 emisoras de AM siempre y cuando sea una por plaza.

Segunda Etapa. Durante el segundo año los concesionarios y permisionarios que operen más de 5 emisoras podrán instalar hasta 6 emisoras y sólo una por ciudad.

Décimo Segundo. Los concesionarios de radio gozarán de un plazo de hasta 3 años para realizar la transición tecnológica que les permita brindar servicios digitales, para lo cual el Ejecutivo Federal deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor de 90 días naturales, un Acuerdo de subvención que permita a estos operadores contar con facilidades para realizar dicha transición.

Décimo Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009 deberá establecer la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del Instituto.

Décimo Cuarto.- El Instituto a partir de su instalación, contará con un plazo de 90 días naturales para crear y organizar el Registro Público del Telecomunicaciones y de Radiodifusión.

Décimo Quinto. Con el propósito de garantizar que los medios públicos que operan frecuencias de televisión estén en aptitud de transitar a la televisión digital terrestre, el Gobierno Federal, durante los ciento veinte días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá las bases para la creación de un Fondo de Apoyo que permita que las estaciones de televisión de esta naturaleza avancen gradualmente hacia la televisión digital.

Décimo Sexto. El Titular del Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la integración del Consejo Consultivo de Nuevas Tecnologías a que se refiere la presente Ley, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en el que se faculte al Instituto a establecer las medidas necesarias para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio.

Décimo Séptimo. El Instituto contará con un plazo de 365 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para regularizar la denominación de los títulos de permiso y las adiciones a los títulos de concesión a que se refiere el transitorio DÉCIMO PRIMERO, otorgados con antelación a la entrada en vigor de la presente Ley.

Décimo Noveno. El incumplimiento a lo establecido en los presentes artículos transitorios será sancionado en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen el Instituto de algún delito o perturben el orden público;

...

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y

...

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 9°, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 9°. No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones:

...

III.- (derogada);

...

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones secundarias y reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sede del Senado de la República a los nueve días del mes de diciembre de dos mil ocho.

SENADOR CARLOS SOTELO GARCÍA

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74, 89, 90, 115 Y 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



Recinto del Senado de la República, a 22 de Noviembre de 2009.

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS

INICIATIVA DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objeto.

El presente documento tiene como propósito esencial fortalecer y modernizar la legislación e infraestructura del Estado mexicano vinculada con la publicación, compilación, sistematización y divulgación de las diferentes disposiciones legislativas, reglamentarias y normativas que regulan la organización y funcionamiento de las diferentes instituciones de los Tres Poderes y Órdenes de Gobierno, así como las relativas a los sectores social y privado.

A fin de sustentar las diversas adecuaciones que será necesario promover en las disposiciones relacionadas con tal materia, se analizarán diferentes aspectos sobre: a) la vigencia del Estado de Derecho; b) la iniciativa y formación de las leyes en México; c) el marco que regula la publicación y compilación y difusión de las disposiciones señaladas; y d) la problemática que prevalece en dicho campo en las diferentes instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

2. La Instauración del Estado de Derecho.

En la historia y en el desarrollo de la sociedad contemporánea guarda una gran importancia la integración de un Estado de Derecho. Igualmente, para identificar este concepto se padece una notable ausencia de consensos y cierta profusión de definiciones e ideas sobre su significado. Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la Francia de 1789, se afirmaba que “Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución”. En

nuestros tiempos hay quien identifica llanamente al Estado de Derecho con la simple idea de "que se aplique la ley", hasta otras nociones de mayor complejidad y alcance.

Así por ejemplo, J. Jesús Orozco Henríquez, en el Diccionario Jurídico Mexicano le reconoce como "aquel Estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo". Bajo otra perspectiva Gerhard Casper, ex rector de Stanford y ex decano de la facultad de Leyes de la Universidad de Chicago lo ubica "… como un concepto que incluye, como mínimo, el requisito de un fundamento claro en el derecho para el ejercicio de la autoridad pública, la protección de derechos individuales, incluyendo salvaguardas contra el abuso del poder, una judicatura independiente y la igualdad frente a la ley". Por su parte, Manuel Aragón Reyes precisa que "si el Estado de Derecho no fuese Estado Constitucional, no sería un verdadero Estado de Derecho... el Estado Constitucional de Derecho no puede realizarse más que en una democracia... un Estado de Derecho no social sería un Estado de desigualdades..." .

El tema ha sido una preocupación fundamental para el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. Así en el año de 2002 formuló un estudio en la materia, con el propósito de encontrar las "Razones para una Definición Mínima del Estado de Derecho", en el cual destaca la Importancia de recuperar las raíces liberales del concepto, a fin de poner a los derechos del individuo en el centro del sistema jurídico y darle dirección al cambio social en una etapa de transición. Igualmente para tener una definición que pueda servir para generar consenso sobre las instituciones que conforman un Estado de Derecho y poder verificar, empíricamente, su existencia.

En dicho estudio el Centro señala que "un Estado de Derecho es aquél en el cual las autoridades e individuos se rigen por el Derecho. Éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre". También afirma, desde otra perspectiva, que el Estado de Derecho se relaciona con la política y los valores. En este sentido en la tradición occidental existen dos grandes corrientes que privilegian la Libertad o la Igualdad. De cada uno de estos valores se derivan estructuras institucionales contrastantes. No obstante reconoce que se trata de un continuo dinámico, pero finalmente cada uno de ellos entraña concepciones distintas del Estado de Derecho. Como tesis central del estudio se señala que "La definición de Estado de Derecho surge de esa diferencia".

En el contexto señalado quienes privilegian a la libertad como objetivo prioritario le confieren preeminencia al individuo. En las sociedades que privilegian al individuo como punto cardinal del desarrollo la protección de las libertades políticas y civiles individuales constituye el elemento esencial del Estado de Derecho. El Estado de Derecho existe siempre que no se violen los derechos del individuo.

En cambio quienes privilegian a la igualdad como prioridad, le confieren preeminencia al gobierno. Las sociedades que privilegian al gobierno como centro de la interacción humana definen al Estado de Derecho en función del cumplimiento de las reglas que emite el proceso político. En consecuencia, existe un Estado de Derecho siempre que el gobierno se apega a las reglas que para ese propósito existen. Las sociedades que privilegian al gobierno como centro de la interacción humana definen al Estado de derecho en función del cumplimiento de las reglas que emite el proceso político. En consecuencia, existe un estado de derecho siempre que el gobierno se apega a las reglas que para ese propósito existen.

La cabal comprensión de estas ideas precisa del reconocimiento de aquello qué no es un Estado de Derecho. Al respecto el Centro de Investigación señalado concluyó que un Estado en el que no se cumple la Ley ciertamente no es "de Derecho", pero un Estado en el que se aplica la Ley, tampoco es necesariamente "de Derecho".Así se tiene el caso de Estados que están regidos por un sinnúmero de leyes y reglamentos, pero la mayoría de los actores se someten a ellos en razón de los altos costos que tienen el infringir las leyes. Estas leyes, sin embargo, restringen las libertades básicas, ya sean las de propiedad, comercio, tránsito, y en general, las libertades políticas y religiosas en los regímenes socialistas, o las libertades políticas y de tránsito en las dictaduras militares. Al efecto señala como ejemplos los casos de regímenes socialistas como China o

Cuba o las dictaduras militares como la de Pinochet en Chile.

En este sentido, prosigue, la legalidad es una condición necesaria, pero insuficiente para que exista un Estado de Derecho. Es evidente que se requiere su coexistencia con las libertades políticas y civiles. Así, la negación de un Estado de Derecho, involucra que éste no garantice las libertades políticas y civiles. Seguramente tal Estado no es "de Derecho", empero un Estado que garantiza transitoria o discrecionalmente tales libertades tampoco es plenamente "de Derecho". "Las reglas que el soberano puede cambiar con facilidad difieren significativamente en sus implicaciones sobre el desarrollo de exactamente las mismas reglas cuando éstas no se pueden revisar. Entre más probable sea que el soberano altere los derechos de propiedad a su favor, menor serán los beneficios esperados de la inversión y en consecuencia menor el incentivo a invertir." (Douglass North)". Por lo mismo, las libertades constituyen una condición necesaria, pero tampoco son suficientes para que exista un Estado de Derecho. Invariablemente se requieren instituciones que garanticen certidumbre e imparcialidad.

Históricamente el Estado de Derecho deriva de la tradición política y jurídica liberal. Al desarrollarse este concepto en el siglo XX ha incorporado elementos adicionales a los de su estructura básica, por ello cualquier sistema legal carente de los requisitos establecidos por el pensamiento liberal no podría ser un genuino Estado de Derecho. El Estado de Derecho reposa sobre dos pilares fundamentales: la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y la reivindicación de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Los modelos constitucionales derivados de los principios liberales buscaron establecer con claridad los límites del poder político respecto de los derechos individuales básicos. Estos rasgos definitorios se explican en gran medida por las condiciones de origen de la propia noción de Estado de Derecho. Sus raíces se encuentran en la lucha política e ideológica contra un modelo de Estado absolutista que abogaba por un amplio control gubernamental de la vida colectiva. El control absoluto de la vida social sacrificó los derechos individuales en aras de un supuesto bienestar común, muchas veces incompatible con los proyectos y las ambiciones de los ciudadanos. Así el Estado de Derecho se constituyó en una respuesta individualista y legalista frente al riesgo del ejercicio despótico del poder político.

La instauración del gobierno de la ley (Rule of the Law) significó el triunfo de los principios liberales del Estado de Derecho y correspondió a la definición de la tradición política y jurídica anglosajona del marco institucional y legal de protección de las libertades.

Debe subrayarse que en el gobierno de la ley es definitoria la idea de que la ley excluye el ejercicio del poder arbitrario; en consecuencia, el castigo arbitrario infligido a los ciudadanos sólo por la voluntad del poder o por una burocracia sin control, resulta incongruente con el gobierno de una ley regular. También reconoce como algo esencial sostener la igualdad de todas las personas ante la ley y la sujeción de gobernados y gobernantes a la ley ordinaria aplicada por tribunales ordinarios.

El concepto de Estado de Derecho como "gobierno de la ley" depende de la tesis, fundamentalmente política, de un gobierno limitado y su posibilidad de aplicación corresponde al ámbito jurídico. Por ello el Estado de Derecho se ha restringido a la doctrina jurídica, limitando la comprensión de su complejidad histórica, social y política. También ha soportado diversos intentos de justificación de regímenes autoritarios o despóticos que se han sustentado con sistemas legales coherentes bajo el argumento de que en ellos prevalece la legalidad en el control de la vida social, pero sin respetar las libertades individuales y colectivas. Así, la observancia de esos sistemas jurídicos sólo ha garantizado la existencia de una relación de poder. Por ello la justicia y legitimidad de un sistema fincado en un Estado de Derecho es algo posible únicamente si se atiene a los requisitos de gobierno limitado y respeto a los derechos individuales básicos, es decir, si adquiere la forma de un Estado constitucional de derecho.

En el marco de un Estado de Derecho resulta de gran trascendencia referirse al caso mexicano. Baste señalar que de acuerdo con el Índice Kaufmann, establecido por el Banco Mundial para valorar el "Estado de Derecho en el Mundo"

durante el periodo de 1998-2001, México fue evaluado muy bajo en dicha escala, incluso frente a países de la región o de menores ingresos.

El estudio referido del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. concluye que México necesita generar un consenso social sobre una definición de Estado de Derecho que no lo limite al "cumplimiento de la ley" o lo deje en manos de "iniciados". Como en el caso de la democracia mexicana (que tuvo que comenzar por garantizar el voto individual). Por ello resulta necesario rescatar los elementos liberales básicos del concepto de Estado de Derecho: derechos civiles e instituciones imparciales que otorguen certidumbre. Empero, se reconoce que México se ha acercado en los últimos años a cumplir con algunos de los elementos liberales básicos del Estado de Derecho. Tal es el caso del respeto a los derechos políticos de los individuos, con la transparencia electoral, las garantías institucionales de los derechos políticos, respaldadas por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. De igual forma con el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como la creación del Consejo de la Judicatura.

La gran interrogante es qué requiere la sociedad mexicana para desarrollarse. Su respuesta involucra, sin duda alguna, la plena instauración de un Estado de Derecho que indefectiblemente conlleva la correcta aplicación del Derecho y la garantía de los derechos políticos y civiles. Ambos asuntos implican aceptar la existencia de certidumbre e imparcialidad institucional, con reglas conocidas y la seguridad de que no se usará el poder coercible de manera arbitraria. Asimismo la existencia de un Poder Judicial autónomo y eficiente que realmente limite el poder predatorio del gobierno.

La filosofía de un Estado de Derecho involucra que los gobiernos y los distintos sectores sociales acepten acatar, reconocer y obedecer el marco jurídico y normativo que han aprobado a través de las instituciones y procesos que voluntariamente se han impuesto, con la finalidad de regular la convivencia y fomentar la interacción social. También que dichos sectores aceptan establecer los mecanismos que permitan dirimir las controversias que surjan con otras naciones o entre esos sectores o bien entre sus integrantes. Bajo estas premisas la sociedad debe contar con una cultura de la legalidad para sustentar su desarrollo, ya que la carencia de esa cultura de la legalidad hará imposible que pueda superar los innumerables obstáculos económicos, políticos, jurídicos o sociales que toda comunidad deberá enfrentar para lograr su progreso.

En otra perspectiva el Estado de Derecho también involucra que las diferentes instituciones de los distintos Poderes y Órdenes de Gobierno se sujeten al marco jurídico normativo que rige sus atribuciones y responsabilidades. Situación que equivale a reconocer que todas las instituciones y procesos de la Administración Pública se deben sujetar a la legislación vigente aplicable. Igualmente que las autoridades y el personal de esas instituciones deberán conducirse con sujeción a dicho marco jurídico, para asegurar el correcto ejercicio de las funciones y responsabilidades a su cargo. Situación que conlleva la rendición de cuentas y la transparencia en las acciones gubernamentales. De ahí que la publicidad de las políticas públicas, de las acciones y estrategias de gobierno y las modificaciones al marco normativo, son reflejo de lo que es la sociedad y de las decisiones y políticas ha decidido adoptar para cimentar su futuro.

3. Génesis de la Compilación y Sistematización Jurídica.

Si bien existen manifestaciones jurídicas relevantes en el derecho babilónico, griego e hindú los historiadores jurídicos coinciden en reconocer que las primeras recopilaciones jurídicas de importancia se realizaron en el Derecho Romano, destacando los Códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, que culminaron con la obra de Justiniano. La compilación fue impulsada por el emperador de Bizancio. También por su decisión fue sancionado el Corpus Juris Civilis, conformado por el Digesto, las Institutas, el Código y las Novelas. El Digesto contenía la doctrina de figuras célebres como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo, Modestino y Celso. Las Institutas contenían las fórmulas de Derecho elementales, y aunque hasta ese momento tenían vigencia legal, estaban especialmente dedicadas a los estudiantes de Derecho. Finalmente se encontraban el Código, que condensaba las

constituciones de los emperadores anteriores a Justiniano que conservaban un interés actual, y las Novelas, que agrupaban las constituciones de Justiniano.

Por lo que se refiere al Imperio Romano de Oriente en él se utilizaba la compilación justinianea. En cambio en occidente, debido a la caída del imperio los diferentes pueblos germánicos, utilizaban una legislación que si bien se encontraban inspiradas en el Derecho romano, se encontraban imbuidas con principios ancestrales de esos pueblos. Al comienzo de la dominación de los visigodos, España mantuvo una legislación dividida: se aplicaba la legislación romana a los hispano-romanos y a los visigodos las leyes bárbaras. Pero con el correr del tiempo fue necesario adoptar una legislación unificada, proceso que se cumplió con el Código de Eurico, el Breviario de Alarico (Lex Romana Visigothorum), el Código de Leovigildo y el Código de Recesvinto (Liber Iudiciurum o Lex Visigothorum). Durante la Alta Edad Media surgió un movimiento codificador que culminó con la legislación de Alfonso X: el Fuero Viejo de Castilla en 1212, el Fuero Real en 1254 y las Siete Partidas en 1265. A partir del siglo XIX.

Todos los países de Europa e Iberoamérica y varios de África, Asia y Oceanía comenzaron a aprobar códigos civiles. No obstante, la primera ley que utilizó esta denominación fue el Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis de 1756 (de Baviera); le siguió, en 1792, un cuerpo legal que incluía Derecho civil, penal y político, el Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (de Federico II de Prusia), y ejerció una fuerte influencia en la legislación posterior. De todas maneras, ambos aún no satisfacían los cánones del movimiento codificador moderno del Derecho. El código que de manera sobresaliente recogió los requisitos que, a partir de la Ilustración, fueron estableciéndose sobre la forma de un cuerpo legislativo moderno, fue el Código Civil que promulgó Napoleón en 1804.

Este último resultó ser el modelo que, por imitación o imposición, se expandió por los países europeos y americanos. Por otra parte existieron tres factores fundamentales que determinaron el desarrollo de la codificación francesa: a) la necesidad de ordenar la legislación ya que la diversidad no favorecía la autoridad de un poder central. Las provincias del norte de París se atenían a las costumbres germánicas, mientras que en las del sur reinaba el Derecho romano a través de la glosa del Corpus Iuris Civilis; b) En segundo lugar el impulso de la Revolución Francesa para arrasar con la legislación anterior; y c) la filosofía enciclopedista y el pensamiento jurídico racionalista que concebía el Derecho como un producto de la razón humana, que se concretaba en la ley. De esta forma, se creía que el surgimiento de un código remediaría para siempre el desorden que existía en el Derecho.

4. La Compilación y Sistematización Jurídica en México.

4.1 Su interrelación con las funciones de publicación, promulgación y divulgación.

Para lograr la adecuada comprensión de los procesos de "Compilación y Sistematización Jurídica" en la Administración Pública de México es conveniente examinar previamente las facultades del Poder legislativo que se relacionan directamente con las funciones de publicación, promulgación, compilación, sistematización y divulgación de las diferentes disposiciones federales, estatales y municipales, así como su vinculación con los distintos Poderes de Gobierno y sectores sociales.

Así, mientras que la promulgación tiene por finalidad dar a conocer jurídicamente la existencia de una ley y ordenar su ejecución mediante un acto administrativo (emisión de un decreto), la publicación tiene por objeto dar a conocer el texto de las normas jurídicas y se realiza comúnmente mediante la inserción del texto de la ley en el periódico oficial. A nivel federal esta publicación se realiza a través del Diario Oficial de la Federación. En el caso de las entidades federativas en las gacetas oficiales de los estados se publican las leyes de carácter local. Diario Oficial, Boletín Oficial, Gaceta Oficial o Periódico Oficial, es el nombre que regularmente se le da a la publicación oficial que un estado o una organización internacional o regional tiene para publicar las constituciones, tratados, leyes, decretos, reglamentos y otras normas jurídicas.

Una vez que las normas o decisiones han sido aprobadas o sancionadas por uno o más órganos de los poderes del estado (poder legislativo y

poder ejecutivo), deben ser promulgadas y publicadas, para que tengan efectos jurídicos y por tanto sean acatadas y reconocidas como parte del ordenamiento jurídico del estado. Esto, en base al principio de que la ley debe ser conocida por el público para que sea legítima.

Por lo que concierne al Orden Federal Mexicano, es oportuno recordar que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, el Título Tercero, Sección II, Artículo 71 regula lo relativo a la "Iniciativa y Formación de las Leyes", estableciendo las facultades que en la materia corresponden al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores, al Congreso de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados. Por su parte el Artículo 72 regula el orden de presentación y discusión de los proyectos, así como las modalidades en los debates, además de precisar, en los incisos del A al J, los procedimientos parlamentarios relativos a: a) el turno, aprobación, remisión y publicación de los proyectos, conforme a lo siguiente; b) la situación y trámite de los proyectos no devueltos con observaciones; c) la tramitación de los proyectos desechados; d) los requisitos para su revisión y sanción y las condiciones para su promulgación; e) el tratamiento de los proyectos rechazados totalmente y las condiciones para su revisión o postergamiento; f) la revisión, aprobación o rechazo de las partes no aprobadas de los proyectos, así como la expedición respectiva; g) los casos de interpretación, reforma o derogación; h) las limitaciones que se aplican, en las sesiones del año, a los proyectos desechados; i) las modalidades en el orden de presentación de los proyectos; j) la discusión de los proyectos en la Cámara en que se presenten; y k) las restricciones al Ejecutivo en las observaciones al Congreso o alguna de las Cámaras. Sin embargo ni este precepto, ni algún otro de la Constitución Federal establece las regulaciones necesarias para ordenar suficientemente los procesos de compilación, sistematización y divulgación del orden jurídico, a nivel nacional. Tampoco se previene la interrelación de los tres Órdenes de Gobierno para asegurar la realización coordinada e integral de estas funciones, para posibilitar la configuración de un sistema de amplia cobertura que pueda facilitar la consulta de cualquier disposición jurídica en vigor, en la República Mexicana, a cualquier persona que solicite el servicio a las autoridades responsables de proporcionarlo.

4.2 La compilación y sistematización jurídica en los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales. Avances y requerimientos.

Bajo otra perspectiva y con el objeto de lograr la adecuada comprensión de las diversas atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo -del orden federal y estatal- que se relacionan directamente con las funciones de publicación, promulgación, compilación, sistematización y divulgación de las diferentes disposiciones que se aprueban o se expiden por ambas instancias, resulta conveniente atender a lo dispuesto por la Constitución Federal en su Título Quinto, relativo a los Estados de la Federación y al Distrito Federal, cuyo Artículo 120 previene la obligación de los Gobernadores de publicar y hacer cumplir las leyes federales. De igual forma lo dispuesto por el Artículo 121, sobre la obligación de los Estados de dar "entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros". Así como la del Congreso de la Unión de prescribir, por medio de leyes generales, la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos.

En relación a las funciones establecidas en esos artículos 121 y 122 precitados y circunscribiéndonos a lo establecido en las disposiciones Estatales y Municipales, podemos afirmar que la generalidad de las Constituciones locales incorporan o adaptan la mayoría de las disposiciones y procedimientos parlamentarios relacionados con la instrumentación de las iniciativas y formación de las leyes, que señala el Título Tercero, Sección II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

En otro orden de ideas es oportuno señalar las disposiciones de la Constitución Federal referidas a la publicidad y efectos de las leyes expedidas por la federación y las entidades federativas. Al respecto el Artículo 120 constitucional dispone: "Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales". Como puede apreciarse no se establecen en los artículos 120,121 y 122 señalados obligaciones en materia de compilación y sistematización jurídica respecto de las disposiciones e instrumentos que regulen la competencia estatal y municipal.

Por otra parte y en referencia a la compilación y sistematización de la legislación estatal debe

señalarse que la casi totalidad de las Entidades Federativas han logrado establecer sistemas informáticos para compilar y procesar sus acervos jurídicos y facilitar la custodia y consulta de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos y normas vigentes que regulan a las instituciones y sectores del Estado. Si bien todos los estados han procesado la legislación y normatividad vigente, los avances son desiguales en cuanto a la incorporación y sistematización de las reformas y los acervos de mayor antigüedad, de igual forma en lo que se refiere a los acervos reglamentarios y de normatividad administrativa. Situación que dificulta el trabajo de los investigadores, abogados postulantes, tribunales e instituciones, cuando tienen que consultar disposiciones que fueron vigentes hace varias décadas y que no se encuentran disponibles o resultan de difícil acceso. También cuando se precisa consultar determinadas reformas, reglamentos o antecedentes legislativos o normativos.

Como observación general es importante destacar que las Entidades Federativas tienen acuerdos con la Secretaría de Gobernación Federal para que a través del Portal electrónico de la SEGOB se pueda consultar libremente su respectivo sistema jurídico. Esto ha constituido un enorme avance en los servicios a distancia que se proporcionan a la población. Ahora el país se encuentra en una situación muy ventajosa al respecto: el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales ya disponen de una misma plataforma informática para compilar y difundir toda su legislación y normatividad, sólo hace falta perfeccionar el modelo actual para lograr el objetivo de incorporar y procesar la totalidad de los acervos federales, estatales y municipales. Situación que hace indispensable proceder a la pronta adecuación de la normatividad y la organización de dicho modelo.

4.3 La compilación y sistematización jurídica en los Organismos Autónomos. Avances y requerimientos.

De acuerdo con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos los Organismos Autónomos forman parte la Administración Pública Federal, no obstante que su regulación específica se comprende en muy diversos artículos de la misma y sin atender a un criterio de integralidad En efecto son diferentes los artículos constitucionales que regulan al Intitulo Federal Electoral, al Banco de México, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Universidades y al Órgano Superior de Fiscalización.

Sin embargo el texto constitucional no hace referencia específica sobre la pertenencia de los Órganos Constitucionales Autónomos a la Administración Pública Federal, aunque su integración a la misma resulte evidente. En efecto el Artículo 90 constitucional no los comprende, ya que solo determina que "La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación"…"La leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado".

De acuerdo con la Investigadora Susana T. Pedroza de la Llave, en su estudio sobre los Órganos Constitucionales Autónomos, éstos gozan de cierta independencia para el desarrollo de sus actividades, aunque en estrecho sentido son entes autárquicos (entendida la autarquía como la capacidad de las entidades de administrase a sí mismas, con independencia de los poderes centrales o estatales); empero, están sujetos a coordinación y control, lo que comprende el conjunto de potestades de inspección, vigilancia y fiscalización que pueden ejercer las autoridades supremas del Estado. Así las decisiones de un ente u órgano autónomo no deben estar exentas del control de los poderes públicos, sobre todo del órgano parlamentario.

Con respecto a la libertad de actuación de los órganos constitucionales autónomos los administrativistas distinguen cinco ámbitos de la autonomía que al final confluyen en el nivel de autonomía total de dichos órganos. Estos ámbitos son los de autonomía técnica, política, financiera, jurídica y administrativas, aunque con la limitación señalada en el párrafo anterior.

Por lo que concierne a las obligaciones de los Órganos Constitucionales Autónomos de integrar las disposiciones que les norman en un sistema nacional de compilación, sistematización y

divulgación jurídica, prácticamente éstas son inexistentes y por ello cualquier esfuerzo para incorporarles a tal sistema tendría que establecer las bases jurídicas para que tuviesen tal obligación, so pena que el sistema señalado tuviera que prescindir de las disposiciones que regulan a dicho Órganos Autónomos, con lo cual tendría un importante déficit en su integración y operación.

4.4 La compilación y sistematización jurídica en el Gobierno del Distrito Federal. Avances y requerimientos

Por otra parte y con referencia al Título Quinto de la Constitución Federal, ya señalado, relativo a los Estados de la Federación y al Distrito Federal, el Artículo 122 dispone que "Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo". A continuación indica cuales son las autoridades locales del Distrito Federal y señala las competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal, especificando las que corresponden al Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Con una fuerte vinculación con las funciones de compilación y sistematización de las disposiciones del Distrito Federal debemos atender lo establecido en la BASE SEGUNDA, de este artículo 122, relativa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y en la cual se señala, en la Fracción II, que " El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes; e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

La compilación y sistematización de la legislación y normatividad del Gobierno del Distrito Federal, si bien es muy completa es de una extraordinaria lentitud para su consulta y no siempre es sencillo su manejo. Es cierto que estas autoridades han logrado automatizar la mayoría de las disposiciones que les regulan y poner a consulta electrónica la consulta de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos y normas vigentes que regulan a las instituciones y sectores del Distrito Federal. Sin embargo ahora es muy importante mejorar y agilizar la sistematización, administración y consulta de tal información. Así por ejemplo los avances son precarios en cuanto al almacenamiento y procesamiento de los acervos de mayor antigüedad, de igual forma será necesario incorporar las respectivas exposiciones de motivos y antecedentes para enriquecer los acervos y brindar un mayor apoyo informativo en su consulta.

4.5 La compilación y sistematización jurídica en los Municipios. Avances y requerimientos.

La modernización en los municipios del país de las estructuras, funciones y procedimientos que se relacionan con la expedición, publicidad, compilación y sistematización de las normas que regulan toda su actividad precisa del análisis previo de las facultades que ahora le rigen, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 115 Constitucional.

El análisis detallado del Artículo 115 Constitucional resulta esencial para comprobar que éste trata de manera insuficiente los aspectos regulatorios del municipio. Así por ejemplo carece de reglas que obliguen a los municipios a establecer algún sistema mediante el cual publiquen, compilen y sistematicen todas las disposiciones que han emitido y que emiten en la esfera de sus competencias. Tampoco establece

normas que obliguen a los municipios a establecer sistemas y procedimientos que permitan la consulta inmediata y gratuita de toda la normatividad que ha expedido el municipio. Si bien establece que *"II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley….Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal"*. Tales atribuciones se centran en la aprobación de los "bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones", pero resultan omisas sobre los procedimientos de compilación, sistematización y divulgación ya señalados.

Aún más, el artículo que nos ocupa y que define las responsabilidades esenciales de los municipios, no contempla ninguna obligación de éstos de entregar al Estado al que pertenece y al Gobierno Federal, una copia de los instrumentos normativos que ha emitido, acompañados de sus respectivos antecedentes jurídicos o administrativos, para que puedan incorporarse a los sistemas informáticos que ambos tienen y operan para la oportuna y eficiente compilación, sistematización y divulgación jurídica de la legislación respectiva.

Por ello podemos señalar que en materia de compilación, sistematización y divulgación de la legislación y normatividad aplicable en el ámbito municipal, los avances son notoriamente inferiores en la mayoría de los Estados. Si bien los acervos jurídicos municipales parcialmente se encuentran incorporados en los sistemas informáticos de cada una de las entidades a las que pertenece el respectivo municipio, son muy pocos los municipios que han logrado avances significativos y directos en la computarización y consulta electrónica de sus respectivos acervos. Uno de los reclamos más fuertes de la población de muchos municipios es la gran dificultad para conocer las disposiciones vigentes, derogadas o abrogadas en el municipio, en las diferentes materias que le corresponden. Bien sea por desconocimiento, omisión, descuido, indolencia o mala fe, resulta muy frecuente que las autoridades municipales no le faciliten a su población la consulta directa de las disposiciones que se han emitido o modificado. Sobre todo cuando éstas tienen cierta antigüedad, involucran el cobro de diferentes contribuciones o afectan la esfera de los derechos personales o patrimoniales de los ciudadanos del municipio.

Tal situación ha originado un sinfín de abusos en contra de la ciudadanía de esos municipios, ya que las autoridades locales pueden aplicar discrecionalmente muchas disposiciones, sin que la población conozca realmente cual es el texto o vigencia de la disposición municipal involucrada.

Como no existe ningún sistema que le obligue a la autoridad municipal a difundir permanentemente todos los acervos jurídicos y normativos que rigen en dicho municipio las autoridades locales tienen un gran campo de discrecionalidad para desviar la aplicación correcta de las disposiciones vigentes. En la práctica pueden perpetuar una disposición ya abrogada o derogada o pueden inventar alguna disposición, mientras la ciudadanía del municipio no tenga manera de verificar el contenido vigente y auténtico de la disposición que se le está aplicando.

Otro aspecto a destacar en esta problemática está representado por el desconocimiento que origina el rezago existente en muchos municipios en materia de compilación y sistematización jurídica. Estamos ante la imposibilidad de que la población municipal pueda conocer electrónicamente el marco normativo que les es aplicable. Tal consulta si es posible cuando se trata de acceder a la legislación federal o estatal. Este importante rezago está originando un grave desfase en el desarrollo de muchos municipios, en razón de que su población está impedida de poder conocer las diversas disposiciones que se están aplicando en su propio municipio o en otros municipios de su estado o del país, sobre la materia o las materias que le preocupan.

Incluso este rezago está afectando a las propias autoridades del municipio, ya que al carecer de un sistema eficiente para divulgar las disposiciones municipales que están vigentes en el país corren el riesgo de marginarse continuamente del oportuno

conocimiento sobre los avances que estén logrando otros municipios en la regulación de las diferentes materias que les competen o en la resolución de conflictos de su jurisdicción.

Situación que contrasta con los avances alcanzados por los Gobiernos estatales en materia de compilación y procesamiento automatizado de sus acervos jurídicos. Avances que han simplificado a dichas entidades los procedimientos de publicidad, custodia y consulta de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos y normas que regulan a las instituciones y sectores del Estado.

5. Propuesta.

Si bien es obligación de todos los mexicanos el conocer el marco normativo para conducirse con apego a las leyes; recordemos el principio de derecho, que establece que el desconocimiento de las mismas, no exime de su observancia. En ese contexto creemos que el gobierno tiene la responsabilidad de crear los instrumentos necesarios para poner a disposición de sus gobernados la legislación vigente, en aras de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y a la transparencia de sus actos.

En este sentido resulta esencial para el Estado Mexicano promover las medidas legales y administrativas que permitan compilar, sistematizar y difundir toda la legislación y normatividad que se emite en el país, por los tres Órdenes de Gobierno con el propósito de posibilitar su consulta inmediata por cualquier persona que lo requiera, en cualquiera de las entidades del País. Asimismo para garantizar a la ciudadanía que podrá consultar de inmediato cualquier disposición que pretendan aplicarle las autoridades señaladas, sin que exista la posibilidad de que estas le nieguen la consulta de esas disposiciones.

Lo anterior conlleva la necesidad de reformar las atribuciones de la Cámara de Diputados para que considere dentro de sus obligaciones la complementación del banco o sistema de compilación y sistematización jurídica a su cargo, a fin de que integre las exposiciones de motivos y los antecedentes jurídicos de las disposiciones que carezcan de los mismos, (en la versión electrónica que difunde dicha Cámara). También para que incorpore todos los reglamentos faltantes, así como las leyes y reglamentos abrogados o derogados y que aún no se incorporan al sistema citado.

Por otra parte y ante la evidencia de que el Orden Municipal es el más cercano a la población, resulta imprescindible reforzar las medidas para dar a conocer la legislación Estatal y Municipal, dentro de su demarcación territorial, pero también compartirlo con el resto de la jurisdicción estatal y aún darlo a conocer en el ámbito nacional. En ese orden de ideas la legislación correspondiente puede y debe ser perfeccionada, con el objetivo de que los ciudadanos mexicanos en particular y en general quienes así lo requieran, tengan un fácil acceso al marco normativo municipal de todo el país.

El Estado tiene la responsabilidad de crear los instrumentos necesarios para poner a disposición de sus gobernados la legislación vigente, en aras de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la transparencia de sus actos. No obstante el contar con el apoyo de las tecnologías de la informática, la tarea no ha sido fácil, en virtud de que mucha información normativa municipal no se encuentra disponible para el público en general. Por ello se requiere la participación activa y responsable de todos los Estados y sus Municipios para publicar el marco normativo municipal de cada uno de ellos, bajo tres premisas fundamentales:

1.- Establecer la obligación constitucional de los Municipios para que integren y publiquen la totalidad del marco normativo municipal que les rige, debidamente actualizado. Incluyendo las correspondientes gacetas municipales, a fin de que éstas se encuentren disponibles, de preferencia en forma gratuita, para consulta física, digital o vía Internet en los ayuntamientos respectivos;

2.- Establecer la obligación constitucional y legal de los Municipios de difundir y poner a disposición del público el marco normativo municipal precitado, para su consulta pública a través de las correspondientes paginas web o direcciones electrónicas respectivas; y

3.- Establecer la obligación constitucional y legal de los Estados y sus respectivos Municipios de enviar y poner a disposición del Gobierno Federal

su correspondiente marco normativo, procurando actualizarle periódicamente para evitar la pronta obsolescencia de la información y facilitar su consulta, a nivel nacional, por los más diversos sectores.

Ante esa necesidad y ante el hecho de que México ya cuenta con los avances tecnológicos requeridos para poder operar nacionalmente los procesos de compilación, sistematización y divulgación de la legislación y normatividad que rige o que ha regido en el país, se estima indispensable adoptar las reformas necesarias para impulsar el uso masivo del Internet y de los medios de comunicación masiva, como la vía más idónea para poder consultar la legislación y la normatividad multicitadas, de una manera fácil y económica.

Reformar la normatividad federal, estatal y municipal existente, para establecer como obligación de los Gobiernos Municipales que los bandos y los reglamentos municipales, sus adiciones y reformas, se publiquen oportunamente en las Gacetas Municipales correspondientes, en los periódicos oficiales "Gaceta del Gobierno", y se difundan a través de los medios de comunicación o tecnologías de la informativa que estimen convenientes, así como en los sitios oficiales de Internet o similares con que cuenten el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y en su caso los Gobiernos Municipales, a fin de proporcionar un servicio de consulta ágil y expedito del marco jurídico de la entidad y el municipio respectivo.

Con ello se logrará que de una manera gratuita, transparente, eficiente se proporcione un servicio de excelencia, que permitirá a la ciudadanía conocer sus derechos y obligaciones, bajo los siguientes principios:

1.- Establecer políticas de calidad comprometidas a actualizar, difundir y sistematizar el marco jurídico de las entidades, proporcionando información veraz y oportuna, establecida en un sistema de gestión de la calidad, bajo los principios de eficiencia, eficacia y satisfacción.

2.- Brindar a la ciudadanía en general, información actualizada de la legislación de todo el país, mediante consultas personalizadas, vía Internet, telefónicas y vía fax, para dar a conocer de manera gratuita, veraz y oportuna los beneficios que se pueden obtener mediante un sistema debidamente organizado y de fácil acceso.

3.- Posicionar al sistema que se diseñe y se ponga en operación en las diferentes esferas municipales, estatales, federales y público en general, a fin de ser reconocido como un sistema de actualización de la legislación Mexicana.

4.- Brindar información de calidad proporcionando el servicio con eficiencia y eficacia, contando con equipo adecuado dentro de la informática, para cumplir con el objetivo para el que fue creado.

5.- Actualizar la base de datos y página web, para proporcionar información de Leyes, Reglamentos, Bandos Municipales, acuerdos, decretos, convenios, planes de desarrollo y manuales existentes en toda la entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO ÚNICO: Se reforma la fracción VII del artículo 74; se reforman las fracciones XVII y XIX del artículo 89; se reforma el inciso i) y se adiciona un inciso j) a la fracción III, se reforma el artículo 90, y se reforman las fracciones XI y X del artículo 115; y se reforma el artículo 120; todo ello, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a VII. …

VII. Compilar, sistematizar y divulgar, a través de medios físicos y electrónicos, las disposiciones que hubiese aprobado el Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras, así como entregar copias de las mismas al Ejecutivo Federal, en forma periódica y oportuna, para su incorporación al sistema nacional de compilación y sistematización jurídica; y

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a XVI …

XVII. Compilar, sistematizar y divulgar, a través de medios físicos y electrónicos, las disposiciones e instrumentos que regulan la competencia y actividades de los tres Órdenes y Poderes de Gobierno, con el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes;

XVIII. …

XIX. Establecer y administrar el sistema nacional de compilación y sistematización jurídica para divulgar las disposiciones e instrumentos que regulan la competencia y actividades de los tres Órdenes y Poderes de Gobierno; y

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 90.-La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. **También formarán parte de la Administración Pública Federal los Organismos Autónomos previstos en esta Constitución. Sus competencias, organización y funcionamiento se regirán por la misma y por las leyes que se expidan para su regulación y control.**

Las leyes determinarán las relaciones entre **los Organismos Autónomos y** las entidades paraestatales **con** el Ejecutivo Federal **y** las Secretarías de Estado. Asimismo tendrán la obligación de **compilar, sistematizar, publicar y divulgar las disposiciones e instrumentos que regulan su competencia, organización y actividades, para su incorporación al sistema nacional de compilación y sistematización jurídica.**

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I y II …

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a h) …

i) Compilación, sistematización, publicidad y divulgación de las disposiciones e instrumentos que regulan la competencia y las actividades del municipio

j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

IV a VIII …

IX. Los Municipios establecerán los sistemas administrativos y electrónicos, con el apoyo de los estados y de la federación, que les permitan compilar, publicar y divulgar las disposiciones e instrumentos que regulan su competencia y actividades; y

X. Los Municipios entregarán al estado del que formen parte y, por conducto de éste al ejecutivo federal, copia física y electrónica de las disposiciones e instrumentos que regulan su competencia y actividades para su

incorporación al sistema nacional de compilación y sistematización jurídica.

Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. **También tendrán la responsabilidad de establecer los sistemas administrativos y electrónicos requeridos para compilar, publicar y divulgar la legislación y normatividad que regula la competencia y actividades del Estado y sus Municipios.**

Además procurará la oportuna remisión al Ejecutivo Federal, de las copias físicas y electrónicas de las disposiciones y demás instrumentos que regulan la competencia y actividades del Estado y sus Municipios, para su incorporación al sistema nacional de compilación y sistematización jurídica.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las autoridades federales, estatales y municipales responsables de realizar las diferentes actividades que señala el presente decreto para la plena organización y administración del sistema nacional de compilación y sistematización jurídica, dispondrán de un año para su la instrumentación y operación, contado a partir de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ

DEL SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.



SEN. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA LX LEGISLATURA P R E S E N T E

El suscrito, Senador de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los aspectos más relevantes de los seres humanos es su vida íntima y personal. Toda persona disfruta un ámbito para sí misma en el cual reflexiona y toma las decisiones que se transforman en su modo de vida.

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como una garantía individual el derecho de protección de toda información que se refiera a la vida privada y los datos personales, garantía que vela por el respeto a la intimidad de las personas.

Sin embargo, derivado del avance tecnológico y de las interpretaciones erróneas que puedan darse al derecho a la información, en múltiples ocasiones se ha visto una vulneración al derecho que toda persona tiene a su intimidad.

Es cotidiano que para contratar servicios, crédito, realizar compras, afiliarse a organizaciones sociales, civiles o políticas, inscribirse a alguna institución educativa, realizar trámites gubernamentales y hasta para poder votar, todas las personas deben proporcionar cierta información que está relacionada con su vida privada.

En esa tesitura, le son requeridos datos como su nombre, edad, domicilio, sexo, creencia religiosa, escolaridad, nivel académico, profesión, y dependiendo del trámite que se esté realizando, puede ser que les requieran datos sobre su estado de salud, monto del salario, teléfono, dependientes económicos, por mencionar algunos.

Toda esta información es almacenada en expedientes o en archivos electrónicos que conforman bases de datos y que se supone deben ser utilizadas solamente para los fines para los cuales han sido recabados.

Sin embargo, derivado de que nuestro sistema de derecho carece de un ordenamiento eficaz de protección a los datos personales, hemos visto que en muchas ocasiones estas bases de datos son transmitidas sin recabar el conocimiento y mucho menos el consentimiento de las personas titulares de dichos datos, pudiendo trasgredir la vida cotidiana de las personas.

Por citar algunos ejemplos, hace algunos meses los medios de información pública dieron la noticia de que el padrón de electores había sido vendido a alguna empresa o institución estadounidense; así mismo, es frecuente que los mexicanos reciban llamadas provenientes de partidos políticos que promueven el voto a su favor, o que se ofrezca la venta de productos y servicios por vía telefónica siendo que la persona que recibe la llamada jamás ha dado su número de teléfono a dicha empresa u organización correspondiente.

Lo más grave es cuando la circulación de estos datos llegan a manos de personas que sólo buscan estafar y extorsionar a las personas para obtener un lucro o beneficio indebidos.

Compañeras y compañeros senadores, el derecho a la intimidad y a la vida privada es esencial para que la persona pueda desarrollar su vida con seguridad y es obligación del Estado Mexicano otorgar esta protección de los datos personales de toda persona que resida en el territorio nacional.

Por ello, presento ante esta Soberanía un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que hace posible la garantía individual consagrada en nuestro artículo 6° constitucional.

Mediante esta Ley se contarán con mecanismos jurídicos que permitan regular la protección a los datos personales y consecuentemente, garantizar el derecho de las personas a gozar de su intimidad.

Esta Ley se encuentra dividida en seis capítulos, los cuales contienen disposiciones generales, reglas aplicables al tratamiento de datos personales, los derechos de los interesados como titulares de dichos datos; disposiciones que protegen la secrecía y seguridad de los datos personales; las atribuciones conferidas a la autoridad encargada de aplicar la ley y las aplicables para sanciones y medios de defensa.

El derecho a la intimidad y la protección de datos personales se relaciona a su vez con el derecho a la información, también consagrado en el propio artículo 6°, ello es así dado que el derecho a ser informado se ve limitado a no invadir la esfera íntima y privada de los gobernados y una interpretación adecuada hace compatible ambos derechos individuales.

Por ello, se atribuye al Instituto Federal de Acceso a la Información la atribución de ser la principal autoridad encargada de la protección de datos personales y la facultad de emitir los criterios aplicables en esta materia.

En este sentido, ampliar la competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información permitirá la mencionada compatibilidad del derecho a la información sin vulnerar el derecho de toda persona a la vida privada y a la intimidad, a la vez de que administrativamente se aprovechará una estructura existente que impida un mayor gasto en el erario público.

La ley será aplicada sin perjuicio de otras disposiciones vigentes cuyo objetivo sea la protección de datos personales y prevé mecanismos que regulen la debida realización de actividades de tratamiento de datos como el acopio,

el registro y el almacenamiento de la información, la recuperación para su consulta, el envío o la puesta a disposición de otras personas, así como el bloqueo, el borrado o la destrucción de datos.

Asimismo, se disponen normas estrictas de protección de la intimidad que regulan estas actividades, como por ejemplo, no se permite que las instituciones y organismos o las personas que tienen a su cargo el tratamiento de datos divulguen información que revele el origen racial o étnico, las tendencias políticas, las creencias religiosas o filosóficas o las historia clínica, médica o de salud, o la vida sexual de una persona.

Este tipo de ordenamientos han sido efectivos en derecho comparado, existe este tipo de leyes en todos los países que conforman la Unión Europea y el derecho a la intimidad, al respeto a la vida privada y a la protección de datos personales está reconocido en tratados internacionales suscritos por México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

No cabe duda que como representantes populares estamos obligados a velar por el debido respeto a las garantías individuales de los mexicanos y, en consecuencia, a establecer los mecanismos legales que permitan que esos derechos sean efectivos y debidamente observados.

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de Usted C. Presidente, someto a la consideración de ésta H. Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la:

Ley de Protección de Datos Personales

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1°.- La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas y, en particular, la información que se refiere a su vida privada, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2°.- La presente ley se aplicará en todo el territorio nacional y su interpretación en el orden administrativo estará a cargo del Instituto.

La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos respecto de la protección de datos personales.

Artículo 3°.- La protección de datos personales estará sujeta a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 4°- Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Archivo de datos personales: todo conjunto estructurado de datos personales accesible con arreglo a criterios determinables;

II. Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable, entre otra, la relativa a su identidad física, fisiológica, psíquica, origen étnico o racial, la que se refiera a sus características morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número de teléfono, patrimonio, ideología, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, salud física o mental, situación económica, cultural o social, preferencia sexual, y cualquier otra que afecte su intimidad.

III. Destinatario: la persona física o moral, pública o privada, que reciba comunicación de datos. Las autoridades que reciban información en el marco de una investigación específica y conforme los procedimientos legales a que haya lugar, no serán considerados destinatarios.

IV. Encargado del tratamiento: la persona física o moral, autoridad, servicio o cualquier otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

V. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información;

VI. Interesado.- El titular de los datos personales.

VII. Responsable del tratamiento: toda persona física o moral, pública o privada, área administrativa o cualquier ente organizado que por sí sola o conjuntamente con otra, determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales

VIII. Tratamiento de datos personales: cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuada o no mediante procedimientos automatizados, aplicada a datos personales, como la obtención, registro, organización, conservación, adaptación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, así como la alineación, la interconexión, el bloqueo, la supresión o la destrucción;

Capítulo II
Del tratamiento

Artículo 5°.- Los datos personales deberán ser:

I. Tratados de manera lícita y fidedigna;

II. Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos;

III. No ser tratados, ni al momento de su acopio ni posteriormente, de manera incompatible con los fines para los cuales fueron recogidos. No se considera incompatible con dichos fines el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre que se utilicen medidas y decisiones que no afecten a personas concretas;

IV. Adecuados, pertinentes y no excesivos, en relación con los fines para los cuales han sido recabados;

V. Actualizados y exactos, para lo cual se tomarán las medidas que permitan la supresión o rectificación de los mismos;

VI. Conservados de tal forma que se permita la identificación del interesado durante el tiempo estrictamente necesario para la consecución de los fines para los cuales fueron recabados.

Si los datos se archivan por un periodo superior al necesario para su posterior tratamiento con fines históricos, estadísticos o científicos, deberán archivarse en forma anónima y si ello no fuere posible, codificando la identidad del interesado.

Artículo 6°.- El tratamiento de datos personales solamente podrá realizarse para el cumplimiento de una obligación a la que esté sujeto el responsable del tratamiento para el cumplimiento de un contrato en el que el interesado sea parte o para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado; cuando sea necesario para proteger los intereses esenciales del interesado y, cuando éste haya dado su consentimiento de forma inequívoca y fehaciente.

Artículo 7°.- Los datos personales solamente podrán ser tratados para fines distintos de los que motivaron su recolección, cuando así lo disponga alguna ley y conforme al procedimiento previsto para ello.

Artículo 8°.- El responsable del tratamiento está obligado a comprobar que el destinatario ha sido autorizado o facultado para recibir los datos personales de que se trate.

Artículo 9°.- El destinatario tratará los datos únicamente para los fines que hayan motivado su transmisión.

Artículo 10.- En toda transmisión de datos personales deberá garantizarse un nivel suficiente de protección de los datos personales de que se trate. El nivel de protección será determinado de acuerdo a las circunstancias de la operación de transmisión de datos y se tomará particularmente en cuenta la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de las operaciones de tratamiento.

El responsable del tratamiento y el destinatario serán responsables de la protección de los datos personales en toda transmisión de los mismos.

Artículo 11.- Solamente podrá efectuarse la trasmisión de datos personales cuando el interesado haya dado su consentimiento expreso de forma inequívoca.

Artículo 12.- La transmisión de datos personales podrá efectuarse cuando sea necesaria para el

cumplimiento de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o para la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado.

Artículo 13.- La transmisión de datos personales podrá llevarse a cabo cuando sea necesaria o requerida legalmente por razones de interés público, o para proteger los intereses esenciales del interesado.

Artículo 14.- La transmisión de datos personales podrá llevarse a cabo cuando tenga por objeto proporcionar información al público cuando dicha información esté disponible para consulta del público en general o de cualquier persona.

Artículo 15.- El responsable del tratamiento ofrecerá las garantías necesarias para la protección de la vida privada del interesado en el tratamiento de datos personales.

Artículo 16.- Cuando la transmisión de datos personales se efectúe en cumplimiento de una resolución jurisdiccional se garantizará la protección de la vida privada, los derechos y las libertades fundamentales del o los interesados.

Artículo 17.- Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revele el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de datos relativos a la salud o a la sexualidad.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el interesado haya dado su consentimiento expreso y fehaciente a dicho tratamiento, cuando el tratamiento sea necesario con fines de seguridad nacional de conformidad con las leyes en la materia, o cuando el tratamiento se refiere a datos que el interesado haya manifestado públicamente.

También quedará exceptuado de lo dispuesto en el primer párrafo, el tratamiento de datos que se realice para la prevención o diagnóstico médico, la prestación de asistencia médica o sanitaria, siempre que dicho tratamiento de datos se efectúe por algún profesional sujeto al secreto profesional o a una obligación de secrecía o reserva de información equivalente.

Artículo 18.- El tratamiento de datos relativo a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, solamente podrá efectuarse de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables y siempre que se establezcan garantías específicas adecuadas al caso de que se trate.

Artículo 19.- La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por un contrato u otro acto jurídico que vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento y que disponga que el encargado solamente actuará siguiendo las instrucciones que le dé el responsable del mismo.

Capítulo III
Derechos del interesado

Artículo 20.- El interesado tendrá los derechos previstos en el presente Capítulo sin perjuicio de otros que se establezcan en esta ley o en otros ordenamientos.

Artículo 21.- El responsable del tratamiento está obligado a proporcionar al interesado cuyos datos se recaben, por lo menos, la información relativa a la identidad del responsable del tratamiento; los fines del tratamiento del que van a ser objeto los datos; los destinatarios o las categorías de destinatarios de datos; el carácter obligatorio o voluntario a las preguntas y las consecuencias a que hubiere lugar por la falta de respuesta; la existencia del derecho de acceso y de rectificación de los datos que le conciernen; así como el plazo de conservación de los datos personales.

Artículo 22.- Cuando los datos no hayan sido recabados de forma directa del propio interesado, el responsable del tratamiento está obligado a comunicar al interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación de datos personales, el origen de los mismos, además de la información a que se refiere el artículo anterior.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando el tratamiento de datos personales sea con fines estadísticos o de investigación histórica o científica; cuando sea imposible informar al interesado; o cuando la comunicación de datos personales sea en cumplimiento de un mandamiento judicial o de una ley.

Artículo 23.- El interesado tendrá derecho a obtener gratuitamente del responsable del tratamiento en cualquier momento, sin restricciones y a más tardar en un plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de la solicitud correspondiente.

Artículo 24.- A solicitud del interesado, el responsable del tratamiento está obligado a rectificar inmediatamente los datos personales inexactos o incompletos.

Artículo 25.- El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento bloquee sus datos de forma inmediata en los siguientes casos:

I. Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos, el responsable del tratamiento procederá al bloqueo durante un plazo que permita verificar que los datos son exactos y que están completos;
II. Cuando el responsable de los datos ya no los necesite para los fines para los que fueron recabados, pero es necesaria su conservación para efectos probatorios.
III. Cuando el tratamiento de los datos sea ilícito y el interesado se oponga a su supresión, exigiendo en su lugar el bloqueo.

Cuando se proceda a bloquear los datos personales dicha circunstancia deberá indicarse en el sistema respectivo de tal modo que clara e indubitablemente se manifieste que los datos personales bloqueados no se pueden utilizar.

Los datos personales bloqueados sólo podrán utilizarse con efectos probatorios, por mandamiento judicial o con el consentimiento expreso del interesado.

Artículo 26.- El responsable del tratamiento está obligado a informar al interesado de forma previa, cuando los datos personales vayan a ser desbloqueados.

Artículo 27.- El interesado tiene derecho a que el responsable del tratamiento suprima o elimine sus datos cuando se hayan cumplido los fines del tratamiento, o cuando los datos se hubieren utilizado para fines distintos sin su consentimiento.

Artículo 28.- El responsable del tratamiento está obligado a notificar a todo tercero a quien le haya comunicado datos personales, cualquier rectificación, bloqueo o supresión de los mismos, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la rectificación, bloqueo o supresión correspondientes.

Artículo 29.- El interesado tiene derecho, en cualquier momento, a oponerse a que los datos personales que le conciernan, sean objeto de tratamiento.

Artículo 30.- El interesado tiene derecho a ser informado por el responsable del tratamiento, de forma previa al hecho, de cualquier comunicación que se haga a un tercero de los datos personales que le conciernan o de la utilización que de dichos datos se haga por cuenta de terceros.

Artículo 31.- Todo interesado tiene derecho a promover el recurso de reclamación ante el Instituto si considera que han sido violados sus derechos como consecuencia del tratamiento de datos personales que le conciernan.

Capítulo IV
De la secrecía y seguridad de los datos personales

Artículo 32.- Cuando los datos personales se utilicen con fines estadísticos, de investigación científica o histórica, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de que se vulnere la intimidad del interesado y para evitar que los datos personales correspondientes sean utilizados para tomar decisiones relacionadas con personas concretas.

Artículo 33.- El responsable del tratamiento y cualquier persona que tenga acceso de los datos personales está obligada a guardar la reserva correspondiente sobre los mismos, en caso contrario será responsable de su mal uso.

Artículo 34.- El responsable del tratamiento deberá adoptar medidas que garanticen un nivel óptimo de seguridad en relación con los datos personales, a fin de evitar la comunicación o el acceso no autorizados, la destrucción accidental o ilegal, o cualquier pérdida accidental o alteración, así como cualquier otra forma ilegal del tratamiento.

Artículo 35.- Cuando los datos personales se traten en forma automatizada, el responsable del tratamiento tomará las medidas pertinentes en función del riesgo, con el objeto de:

I. Evitar que personas no autorizadas puedan acceder a los sistemas informáticos que traten datos personales;

II. Evitar que se puedan leer, reproducir, alterar o retirar los soportes de memoria sin autorización;

III. Evitar que personas no autorizadas puedan introducir información en memoria o comunicar, alterar o suprimir datos personales almacenados;

IV. Evitar que personas no autorizadas puedan utilizar los sistemas de tratamiento de datos mediante instalaciones de transmisión de datos;

V. Garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos puedan acceder únicamente a aquellos datos personales a que se refiera su derecho de acceso;

VI. Registrar qué datos personales se comunicaron en qué momento y a quién;

VII. Garantizar que posteriormente sea posible comprobar qué datos personales se han tratado, cuándo y por quién;

VIII. Garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros puedan tratarse únicamente en la forma prescrita por la institución o la persona contratante, y

IX. Garantizar que durante la comunicación de datos personales y durante el transporte de los soportes de memoria, los datos no puedan ser leídos, copiados o suprimidos sin autorización.

Dicha persona deberá velar por que el tratamiento no tenga efectos adversos sobre los derechos y las libertades de los interesados.

Artículo 36.- Cada responsable del tratamiento llevará un registro de las operaciones que realice sobre tratamiento de datos personales.

Artículo 37.- Tanto el responsable del tratamiento como el encargado del tratamiento serán responsables por el incumplimiento en lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal a que hubiere lugar.

Capítulo V
De las atribuciones del Instituto

Artículo 38.- El Instituto tendrá a su cargo la protección de los datos personales en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 39.- El Instituto está facultado para:

I. Atender y resolver las consultas que le presente los interesados, sobre asuntos de su competencia;

II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que presenten los interesados en los términos de la presente ley;

III. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los interesados, como árbitro en la solución de conflictos relacionados con la protección de datos personales, en los términos del reglamento de esta ley.

Para efectos de lo anterior, el Instituto podrá realizar todas las acciones necesarias para tratar de resolver las controversias que le sean planteadas;

IV. Promover y proteger los derechos de los interesados, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre los interesados y los responsables del tratamiento y los encargados del tratamiento;

V. Garantizar que los responsables del tratamiento y los interesados sean informados de sus derechos y obligaciones de conformidad con la presente Ley;

VI. Notificar las operaciones de tratamiento que pudieran presentar riesgos específicos con arreglo al artículo 27 de esta Ley.

VII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales para coadyuvar al cumplimiento del objeto de esta Ley;

VIII. Emitir recomendaciones a los responsables del tratamiento y al encargado del tratamiento a efecto de que se cumpla el objeto de esta ley y se procure la protección de los datos personales de los interesados;

IX. Formular recomendaciones al Ejecutivo Federal para la elaboración de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia, a fin de dar cumplimiento al objeto de esta ley, así como para la debida protección de los datos personales;

X. Concertar y celebrar convenios con personas físicas y morales, públicas y privadas, así como con autoridades federales y locales, con el objeto de dar cumplimiento a esta ley;

XI. Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las materias de su competencia y publicarlos para apoyar a los interesados, a los responsables del tratamiento y a toda persona que haga uso de datos personales;

XII. Informar al público sobre los encargados del tratamiento o responsables del tratamiento que registren el número más alto de reclamaciones;

XIII. Imponer las sanciones establecidas en esta ley; Conocer y resolver sobre el recurso de reclamación previsto en la presente ley;

XIV. Denunciar ante el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito;

XV. Denunciar antelas autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas y asistir al interesado que pretenda coadyuvar con el Ministerio Público;

XVI. Requerir al encargado del tratamiento o al responsable del tratamiento, según sea el caso, que tome las medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesiones los derechos del interesado, así como publicar dichos requerimientos en su página de internet;

XVII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia de protección de datos personales, en el ámbito de su competencia, y

XVIII. Las demás que le confiera esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Artículo 40.- El Instituto deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozca con motivo de su objeto que se relacionen o contengan datos personales, excepto cuando la información o los documentos de que se trate sean solicitados por la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el interesado sea parte.

Artículo 41.- Los servidores públicos del Instituto serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables, por violación de la reserva o secrecía a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 42.- El Instituto y sus servidores públicos, según sea el caso, estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que se causen en caso de revelación de datos personales en violación a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 43.- El responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, las autoridades federales y locales, deberán proporcionar al Instituto la información que éste les solicite para el cumplimiento de su objeto, en caso contrario se harán acreedores a las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 44.- El Instituto informará al público sobre los índices de reclamaciones que se presenten ante él en contra de los responsables o encargados del tratamiento de datos personales. La

información se presentará de forma general y global sin identificar a los interesados involucrados.

Artículo 45.- El Instituto incluirá un apartado relativo a las actividades que realice de conformidad con lo dispuesto en esta Ley que estén relacionadas con la protección de datos personales en el informe a que se refiere el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo VI
Sanciones, y recurso de reclamación y recurso de revisión

Artículo 46.- El incumplimiento o la contravención a las disposiciones previstas en esta Ley, será sancionado con multa que impondrá administrativamente el Instituto, tomando como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción respectiva.

Artículo 47.- El Instituto estará facultado para imponer las siguientes sanciones:

I. Multa de 500 a 1000 días de salario a quienes no entreguen la información a que se refiere el artículo 43 de esta ley;

II. Multa de 500 a 1000 días de salario a quienes no proporcionen al interesado la información a que hace referencia el artículo 21 de esta ley;

III. Multa de 5000 a 10000 días de salario a quienes incumplan lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10, 24, 25, 26, 28 y 30, de la presente ley;

IV. Multa de 10000 a 20000 días de salario a quienes no adopten las medidas de seguridad, reserva y secrecía previstas en los artículos 33, 34 y 35 de esta ley o violen lo dispuesto en dichos numerales.

V. Multa de 15000 a 20000 días de salario a quienes incumplan lo previsto en el primer párrafo del artículo 17 de esta ley;

VI. Multa de 20000 a 40000 días de salario a los servidores públicos que violen lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de esta ley.

En caso de reincidencia, en los términos señalados en el artículo 48, el Instituto podrá imponer una multa de hasta el doble del monto originalmente impuesto.

Las multas a que se refiere el presente artículo tendrán el carácter de créditos fiscales para su cobro.

Artículo 48.- Cuando el Instituto además de imponer la sanción respectiva, le requiera al infractor para que en un plazo cumpla con la obligación omitida o normalice alguna situación irregular y éste incumpla o haga caso omiso del requerimiento, este hecho se sancionará como reincidencia.

Artículo 49.- Para imponer las multas a que se refiere este capítulo, el Instituto tomará en consideración:

I. La gravedad de la falta;

II. Las condiciones económicas del infractor, y

III. La reincidencia

Artículo 50.- Todo interesado tiene derecho a promover el recurso de reclamación cuando considere que se han afectados sus derechos en términos de la previsto por la presente ley.

El recurso de reclamación se presentará ante el Instituto dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la afectación del derecho o a partir de que se tenga conocimiento del hecho violatorio de los derechos del interesado.

El recurso se presentará por escrito y se acompañará de los elementos probatorios con que se cuente.

El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles para citar al responsable de la afectación y allegarse mayores elementos para la substanciación del recurso.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el Instituto resolverá dentro de los veinte días hábiles siguientes.

Artículo 51.- En contra de cualquier acto o resolución del Instituto se procederá el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal publicará el Reglamento de la presente ley dentro de los 180 días siguientes al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, al primer día del mes de diciembre de dos mil nueve.

SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS

DE LOS SENADORES CARLOS LOZANO DE LA TORRE Y FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL.



SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE



SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LOS SENADORES CARLOS LOZANO DE LA TORRE Y FRANCISCO HERRERA LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

Los suscritos, **CARLOS LOZANO DE LA TORRE** y **FRANCISCO HERRERA LEÓN**, Senadores de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el 43% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de de su pareja (esposo o novio) durante su última relación.

Con frecuencia, las mujeres que padecen violencia la consideran como actos de situaciones normales, lo que contribuye a crear conciencia sobre el problema, a una ausencia de cultura de la denuncia, pero sobre todo a perder miles de vidas inocentes en nuestro país, principalmente a consecuencia de la violencia física inferida sobre aquellas mujeres que por su estado de gestación se vuelven aún más vulnerables.

En efecto, la violencia en el seno de la pareja es aún más grave en el caso de las mujeres en cinta, ya que sin demérito de los problemas de autoestima y trastornos psicológicos que la mujer puede desarrollar, las consecuencias aumentan ante los efectos secundarios sobre el feto o el recién nacido.

Múltiples encuestas y estudios relativos al tema de la violencia en contra de las mujeres, refieren que la violencia física y emocional durante el embarazo predomina antes y después del mismo.

Ahora bien, la explicación a este fenómeno puede encontrar diversos factores que escapan a la finalidad de nuestra exposición; sin embargo, lo que resulta ineludible es afirmar la conveniencia de implementar programas que contribuyan a crear conciencia sobre la responsabilidad de la paternidad, tal y como ocurre en otros países verdaderamente exitosos en el tema, al enfatizar los beneficios de dichos programas que reducen el nivel de hostilidad entre las parejas, a la vez que fomentan mayor comunicación entre las parejas.

Pero, en aras de armonizar los programas tendientes a erradicar la violencia familiar, resulta igualmente necesario elevar las penas a quienes infieran lesiones en contra de cualquier mujer en estado de gestación; razón por la cual proponemos adicionar el Código Penal Federal, a fin de incluir dentro del catálogo de penas un castigo más severo para los agresores de este grupo vulnerable de nuestra sociedad.

No podemos soslayar que el Estado debe velar por ser garante de los derechos y obligaciones de los individuos, de forma que prevea en la legislación la demanda de todos y cada uno de los sectores sociales, a fin de que éstos puedan convivir con armonía y respeto.

Así, para tal efecto, en el caso de las mujeres embarazadas la búsqueda de su integridad física se ha hecho manifiesta en la lucha de sus organizaciones, logrando finalmente la sensibilización de instituciones nacionales y de organismos internacionales. De ahí que se torne incuestionable la obligación moral y la responsabilidad política que tenemos por legislar en pro de todos y cada uno de sus derechos.

Finalmente, huelga enfatizar sobre la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento legal al último estadio conocido de la acción pública de la sociedad democráticamente avanzada a favor de la igualdad de la mujer: la promoción de la igualdad real o efectiva de mujeres y hombres, en la medida en que, tal y como lo afirma la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2007 “Para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres” de España, <<el pleno reconocimiento de la igual formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente>>.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 300 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 300 bis.- Se le impondrán de diez a quince años de prisión al que infiera lesiones a una mujer en estado de gestación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A t e n t a m e n t e,

SEN. CARLOS LOZANO DE LA TORRE

SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN

Salón de Sesiones del Senado de la República, 8 de diciembre de 2009.

DE LOS SENADORES JESÚS GARIBAY GARCÍA Y ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.



SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA



SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Los suscritos, Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández**,** Senador y Senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: **Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley del Banco de México, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de Remesas Familiares**, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

La constante migración de mexicanos hacia el extranjero encuentra, en la mayoría de los casos, una explicación inmediata en la necesidad de obtener un mejor nivel de vida que en nuestro país les ha sido fácticamente negado. En las últimas décadas hemos sido testigos de de un incremento significativo en el número de mexicanos que intentan migrar a los Estados Unidos; en 1970 solamente el 1.5% de la población mexicana vivía en ese país, cifra que para 1980 había ascendido a 3.3%, en 1990 a 5.2% y para el año 2000 se ubicó en 8.7%, actualmente tal cifra se estima en 10.2% lo que significa un aumento considerable en el flujo de migrantes en los últimos años.

El número de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, representa aproximadamente el 30.7% de la población total extranjera asentada en ese país, seguido por los chinos que representan el 4.9% y los filipinos con un 3.9%.

En este tenor, el tema de la migración México – Estados Unidos ha sido hondamente estudiado, identificándose al menos cuatro elementos causales:

El primero es la brecha significativa que existe entre el PIB per cápita del país emisor y el del receptor. Mientras que en México se tiene un PIB per cápita de $14,400 dólares al año, en EE.UU. se tiene uno de $48,000 dólares al año (cifras ajustadas por poder de paridad de compra) sin embargo, esta proporción se ha mantenido relativamente constante durante las últimas tres décadas, por lo que este factor no explica toda la historia.

El segundo elemento es la contracción de la demanda laboral en México, ocasionada por el mal desempeño económico nacional y las recurrentes crisis económicas que hemos sufrido en México. Diversos estudios, muestran que los flujos migratorios de México a la Unión Americana, tienden a aumentar después de una caída de los salarios reales causado por la contracción de la demanda laboral.

El tercer factor es el incremento de la oferta laboral relativa de México respecto a Estados Unidos, lo que ha sido ocasionado por mayores tasas de crecimiento poblacional entre 1960 y 1980, trayendo como consecuencia una mayor proporción de trabajadores en edad de trabajar en México respecto de los Estados Unidos, que aparejado con la incapacidad del Estado para crear

empleos justamente remunerados en las últimas dos décadas, ha presionado a la baja los salarios.

Finalmente, resulta de vital importancia en estos análisis, la existencia de redes de migrantes en Estados Unidos, cuya presencia facilita la entrada de nuevos mexicanos en Estados Unidos, debido a que proporcionan conocimiento y ayuda para migrar y establecerse exitosamente.

Ahora bien, en el aspecto económico, el fenómeno migratorio es especialmente significante, en virtud del flujo de miles de millones de dólares en remesas que los trabajadores migrantes envían a México, hecho que se ha convertido en un innegable impulsor de nuestra economía, y que hoy en día, se encuentra en detrimento. Según estadísticas del Banco de México y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas en México crecieron a una tasa de casi 20% por año entre 1994 y 2006, se estancaron en el 2007, y a partir del 2008 comenzaron a caer en un 3%, comparado con el 2007.

Del total de remesas de Estados Unidos -cerca de $46 mil millones de dólares en el 2007-, un poco más de la mitad -$24 mil millones- iba a México. Actualmente miles de familias son dependientes de ese flujo. Al respecto, es precisamente el Banco de México el que admite que un 86% de las remesas son usadas por las familias mexicanas para alimentación, salud, vivienda y educación.

Es entonces preocupante el estancamiento que enfrenta esta importante fuente de ingresos familiares, más aun, considerando que el número de trabajadores que envían dinero a sus lugares de origen regularmente cayó de 12,6 millones en el 2006, a 9,4 millones en el primer trimestre del 2008; es decir, 3,2 millones de trabajadores dejaron de enviar dinero regularmente. En términos porcentuales, en el 2006, 73% de los adultos en Estados Unidos nacidos en Iberoamérica enviaban dinero regularmente a sus lugares de origen, en tanto que en el 2008, esta cifra cayó a solo el 50%.

Según el BID, el que 3.2 millones de personas envíen menos remesas se traduce en que 10 millones de personas en sus lugares de origen ya no reciben ningún apoyo para su sustento elemental. La agencia estima que, producto de esto, unas 2 millones de familias van a caer por debajo del nivel de pobreza, especialmente en México, más una caída del producto de 7% para el cierre de año que impactará en tal magnitud en la pobreza, que la CEPAL estima para el cierre de 2009, 37 millones de pobres en México, siete millones más de los que había al inicio de este sexenio.

Teniendo en consideración todo lo anterior y en justa retribución a la aportación que los migrantes mexicanos realizan a la economía de su país, el Estado se encuentra obligado, en lo inmediato, a proteger los ingresos por remesas familiares de miles de familias en México, que se ven mermados por las altas comisiones que les cobran las compañías intermediarias y el establecimiento discrecional del tipo de cambio, por debajo del que fija el Banco de México.

Ésta iniciativa se inscribe como un esfuerzo inmediato del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, para proteger la economía de las familias que dependen de las remesas para subsistir, al confirmar la motivación original de eximir en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a los ingresos por remesas familiares, protegiendo el poder adquisitivo de los ingresos de las familias más pobres y estableciendo un nuevo supuesto de no obligación para el pago del impuesto a los depósitos en efectivo, para aquellos realizados en cuentas personales, hasta por diez mil pesos en cada mes fiscal, cuando se deriven de remesas familiares. Cabe señalar que tal cantidad, será adicional a la establecida en la fracción III del artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo, que es uno de los ordenamientos que se propone reformar.

Como es sabido, la mayor parte de las remesas familiares, se pagan en efectivo por lo que el establecimiento de un impuesto como el que grava los depósitos en Efectivo, desincentiva el uso de las instituciones bancarias, el ahorro y los proyectos productivos, y orilla al familiar del emigrante a hacer uso de mecanismos inseguros, como es el guardar dinero en casa.

En consecuencia, se establece el concepto de remesas familiares, como aquellas transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar.

Asimismo, es necesario establecer un mecanismo para que la persona física compruebe que el efectivo de que dispone y que pretende depositar, se deriva de una remesa familiar, para lo cual, se establece la obligación de cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, de expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.

Dicho comprobante se entregará por la persona física a la institución bancaria ante la que éste tenga su cuenta, e independientemente de que consigne una cantidad mayor, amparara la que se deposite, hasta un máximo de diez mil pesos, con lo que al menos para este sector, se mantendría en veinticinco mil pesos, no obligada a pagar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Lo anterior es totalmente justificable, dado que dicho ingreso, tiene carácter de unilateral, es decir, proviene de una economía extranjera, sin que la nuestra aporte algo a cambio, es decir, es riqueza generada fuera de México, pero beneficios en su interior.

Finalmente, consideramos urgente normar lo relativo al tipo de cambio que es tomado por las intermediarias financieras para pagar las remesas, que se establece de manera discrecional y sin tomar en cuenta las disposiciones emitidas por el Banco de México.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en el artículo 73, fracciones XVIII y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE REMESAS FAMILIARES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 35 bis a la **Ley del Banco de México**, para quedar como sigue:

"Artículo 35 bis. Las Instituciones de Crédito, organizaciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán pagar las remesas familiares, en moneda nacional, al tipo de cambio de venta establecido por el Banco de México, en la fecha en que se haga efectivo."

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción VII al artículo 2 de la **Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo**, para quedar como sigue:

"Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:

I. a VI. (…)

VII. Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $10,000.00, adicionales a lo establecido en la fracción III de este artículo, en cada mes del ejercicio fiscal, cuando se deriven de remesas familiares que se hagan efectivas a través de una institución de crédito, una organización auxiliar de crédito, un centro de envío de valores o una casa de cambio.

Se entenderá como derivado de remesas familiares, el depósito en efectivo que se acompañe del comprobante descrito en el título octavo de la Ley de Instituciones de Crédito, siempre y cuando la cantidad depositada sea igual o menor a la consignada en dicho documento, que será retenido por las instituciones del sistema financiero, para efectos de justificación."

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un título octavo, denominado de las remesas familiares, integrado por un capítulo único, denominado disposiciones generales, compuesto por los artículos 150, 151, 152 y 153, que se adicionan; todo ello, en la **Ley de Instituciones de Crédito**, para quedar como sigue:

"TÍTULO OCTAVO
De las remesas familiares.

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 150. Se entenderá por remesas familiares, a las transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar.

Artículo 151. Las remesas familiares, se pagarán en moneda nacional, al tipo de cambio establecido por el Banco de México.

Artículo 152. Las Instituciones de Crédito, organizaciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.

Artículo 153. El comprobante a que se refiere el artículo anterior, tendrá cuando menos las siguientes características:

I. Se expedirá a nombre del beneficiario, quien se identificará por alguno de los medios establecidos para tal efecto en esta Ley;

II. Una copia , quedará a resguardo de la institución emisora para efectos contables y otra se enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes del ejercicio fiscal en que fue emitido;

III. El monto entregado en moneda nacional, y en su caso el tipo de cambio al que fue hecho efectivo y la comisión que hubiere causado expresada en moneda nacional y en porcentaje respecto de la cantidad entregada, y

IV. El lugar y fecha en que fue emitido."

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben

Senador Jesús Garibay García
Senador Rosalinda López Hernández

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 1 del mes de diciembre de 2009.

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 419 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.



Recinto del Senado de la República, a 8 de Diciembre de 2009.

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 Y 419 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con **Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:**

RESUMEN: **La presente iniciativa reforma los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud para que se establezca por ley, que las dependencias y entidades de la Administración Pública del sector salud, tanto federal como local, deberán realizar la compra de los insumos para la salud y medicamentos directamente y de manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera su suministro urgente.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud de un pueblo debe ser una de las prioridades de todo gobierno, ya que ésta es una condición indispensable para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social. Es así que el Estado debe asegurar a todo ser humano el derecho a la salud, a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos o requisitos burocráticos.

Sin embargo, la realidad nos efrenta con un sector salud en desabasto permanente por falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de medicamentos.

Esta situación se agrava ante el incremento considerable de los costos asociados al deterioro de la saud, en especial aquellos que tienen que ver con el precio de las medicinas e insumos para la salud, los cuales en el país han aumentado muy por encima del promedio en Latinoamérica.

Los precios de los medicamentos han sido motivo de controversia entre todos los agentes que intervienen en la operación de los sistemas de salud, así como para los pacientes. Esta inquietud en buena medida se debe a las fallas del mercado farmacéutico y a la falta de un sistema de salud integrado en México.

La falta de integración del sector salud es uno de los factores que eleva el gasto en medicamentos en proporción al gasto en salud, pues sólo en las instituciones del sector público se prescriben medicamentos genéricos de acuerdo con el Cuadro Básico y el Catálogo de Medicamentos, que contiene una lista de fármacos de probada eficacia terapéutica siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Lo contrario ocurre en el segmento privado del mercado de medicamentos. El patrón de prescripción en este sector se orienta por los esquemas de promoción y ventas, en los que se privilegia el uso de productos novedosos con marca comercial a precios elevados.

Ante la ausencia de una evaluación terapéutica y económica de los medicamentos en México, el mercado farmacéutico registra un crecimiento en dólares constantes muy por arriba del crecimiento de la economía.

En la industria farmacéutica es común encontrar precios diferentes para la misma sustancia activa, para el mismo producto y entre productos de marca y genéricos; estos patrones se repiten tanto en el plano local como en el internacional.

Ante esta dispersión de precios, en países de ingresos elevados se tiene una intervención estatal directa en el mercado de medicamentos a través de regulaciones y controles, lo cual no ocurre en naciones de ingresos bajos. El control de precios en Europa abarca desde el costo de manufactura hasta precios de referencia con base nacional o internacional, así como límites a la tasa de ganancias.

En España y Austria los precios se determinan a partir de los costos. En Alemania y Suecia se tienen precios de referencia para todos los productos. En Italia y Holanda los precios se fijan con base en el precio promedio de algunos países. En Francia los precios se fijan sobre la base de la efectividad de los medicamentos. En Inglaterra se tiene una regulación sobre la tasa de ganancia. En países como Australia, la introducción de nuevos medicamentos y su precio están definidos a partir de una evaluación económica sobre el costo-efectividad de los mismos. En Canadá se aplica un programa para el control de precios de productos innovadores con patentes, a través del Patented Medicine Prices Review Board.

En México, el sector público continúa sin establecer una adecuada regulación de precios de este sector, y lo que es peor, ni siquiera se tiene un sistema de compra de medicamentos e insumos para la salud, regulado adecuadamente para que el erario público obtenga siempre los mejores precios.

Hasta ahora las dependencias públicas del sector salud no están obligadas por ley a realizar las compras de medicamentos en forma directa y exclusiva con los productores, de tal forma que se pueda minimizar los costos del gobierno a partir de la obtención de un mejor precio. Las compras públicas de medicamentos se realizan muchas veces a intemediarios farmacéuticos, sujetandose así a un mercado irregular que no ofrece ventajas por el volumen de compra que realiza el sector público, lo cual evidentemente implica un precio mucho más elevado y que existan clínicas del sector salud en distintos estados, o incluso en uno mismo, que adquieran el mismo medicamento a precios muy distintos.

Esto se debe también a que no existe un sistema centralizado de compras que permita al gobierno abatir costos. Si el gobierno no puede bajar el precio de los medicamentos, al menos debería de implementar todas aquellas medidas que permitan que el sector salud público tenga acceso a medicamentos baratos.

Es por ello que presentamos esta iniciativa que reforma la Ley General de Salud, con el ánimo de contribuir a la implementación de medidas que permitan mayores ahorros a nuestro gobierno. Por tal motivo proponemos que por ley, las dependencias y entidades de la Administración Pública del sector salud, tanto federal como local, deban realizar la compra de los insumos y medicamentos directamente y de manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera su suministro urgente.

Si bien ésta debería ser una práctica cotidiana en el quehacer público, en realidad no lo es, se sigue recurriendo a distribuidores que mantienen un elevado margen y que implica una gran pérdida para el erario público.

El establecer la obligación de que se compren los medicamentos directamente a los productores, evidentemente implica la obtención de menores precios, y se limita la posibilidad de generar corrupción en la compra, al recurrir a intermediarios que tienen una gran variable de precios. Con esta simple disposición son millones de pesos los que se podrán ahorrar, y por fin se obliga al sector salud a realizar estrategias coordinadas y centralizadas de compras.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), los procedimientos de adquisición de medicamentos influyen directamente en la disponibilidad y el precio de los mismos.

Los listados de medicinas financiables y las prácticas de prescripción determinan, en mucho, la disponibilidad de genéricos intercambiables y suscitan entre los productores un intenso cabildeo para la inclusión de sus medicamentos innovadores en los listados.

Un estudio elaborado por un grupo de laboratorios pertenecientes a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), señala que el número de unidades compradoras y de eventos licitatorios en el IMSS pasaron de 7 regiones compradoras y un sólo evento de licitación en el 2000; a 54 unidades compradoras y mil 475 licitaciones en el 2004.

Lo que incrementó los costos, multiplicó las cargas de trabajo y administración para la proveeduría y la propia institución. Situación que impacta en los costos, en la eficiencia de las empresas y en el propio IMSS.

El estudio explica que la creación del Sistema de Abasto Institucional en el 2000, permitió a los proveedores entrar a las licitaciones del IMSS, cuando antes se restringían a los laboratorios. Con el actual sistema de abasto, la multiplicación de licitaciones, lugares y tiempos de entrega, se ha favorecido la participación de distribuidores que encarecen el proceso de abasto, sin generar ningún valor agregado a la cadena, destaca el análisis de los fabricantes mexicanos.

Pero el IMSS argumenta que todo se hace conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que no prevé negociación para el acuerdo de precios con los participantes.

Reiteramos; si el gobierno no puede controlar el nivel desmedido de precios en medicamentos, por lo menos las compras que efectúa debe realizarlas en óptimas condiciones.

La regulación que se propone obedece a la preocupación del Gobierno Federal ante el gran diferencial que se ha observado en los precios a los que las distintas Entidades Federativas adquieren los medicamentos que se brindan a la población mediante el Sistema Nacional de Salud y, particularmente, los que se ofrecen a través del Seguro Popular.

Además, esta problemática ha sido ya reconocida por el gobierno, de tal forma que se emitió el anteproyecto denominado “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por parte de las Entidades Federativas, con recursos del Sistema de Protección Social en Salud” el cual fue enviado a la COFEMER el día 18 de diciembre de 2008, por parte de la Secretaría de Salud (SSA).

En este sentido, cabe destacar que nuestro grupo parlamentario presentó en el 2007, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía establezcan una verdadera política de regulación de precios de los medicamentos, la cual continúa sin ser dictaminada.

La capacidad de un país para obtener el mejor precio posible para un insumo concreto, depende en gran medida del volumen que se adquiere.

Países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú y Nicaragua tienen sistemas para la compra nacional centralizada, con los cuales obtiene economías de escala importantes y sus consiguientes ahorros.

Finalmente, por lo que debemos seguir trabajando es porque el sistema de salud tenga una oferta de medicamentos adecuada y una cobertura total respecto a los afiliados que pagan sus cuotas de seguridad social y que por ello merecen obtener medicinas gratuitamente. Esta es la discusión de fondo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 29 y se reforma el artículo 419, ambos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 29.- Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Para ello, las dependencias y entidades de la Administración Pública del sector salud, tanto federal como local, deberán realizar la compra de los insumos para la salud y medicamentos directamente y de manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera su suministro urgente.

Los funcionarios públicos que no cumplan con lo dispuesto por el párrafo anterior se sancionarán de conformidad con el artículo 419 de esta ley.

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos **29,** 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- **El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.**

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
COORDINADOR
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO

DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.



SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXI LEGISLATURA PRESENTE

La que suscribe Senadora **ROSALÍA PEREDO AGUILAR** del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga los Artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente **INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL** bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las reformas de la presente iniciativa se refieren a las **fracciones VIII y IX del Artículo 84 de la Ley del Seguro Social** que limitan de manera inconstitucional, el derecho a la seguridad social, específicamente de los padres beneficiarios, con el argumento de que para que éstos sigan teniendo dicho derecho cuando los hijos cambian de residencia, deben tener el mismo domicilio que los trabajadores o trabajadoras asegurados o pensionados.

La seguridad social es, en esencia, una de las máximas expresiones que cualquier Estado-Nación procura para con su población, ya que de esta manera consolida su reconocimiento

no sólo política sino moralmente ante la ciudadanía que le emitió su confianza para gobernar.

En este sentido, la historia de nuestro país refleja profundamente el interés porque este postulado se cumpla.

Es así que este precepto parte de las condiciones históricas de marginación y desigualdad que han sido una enorme dificultad de resolver. Así por ejemplo, el Barón Alexander Humbolt decía de la Nueva España que no había conocido otro lugar donde pocos tuvieran mucho y muchos tuvieran poco. Los movimientos de Independencia y Revolución tuvieron entre otros, el sustento de reinvindicar derechos que por siglos fueron negados. Hoy, a pesar de los esfuerzos por reducir los impactos de la crisis múltiple global, con programas que coadyuvan a mantener el empleo y las condiciones de seguridad social, la población más vulnerable se ven afectada; además, esta vulnerabilidad se incrementa por los impactos de la influenza humana y los riesgos que genera el cambio climático, por lo que se hace imprescindible procurar por todos los medios posibles, no conculcar derechos que histórica y constitucionalmente están ampliamente justificados.

De tal manera que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha establecido claramente este precepto desde el primer artículo, como se indica a continuación:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece."

Es decir, nuestra Carta Magna garantiza por un lado las garantías individuales y sociales que le corresponden a la ciudadanía, y además, precisa que no se podrán restringir ni suspender a menos que ésta misma las establezca y bajo las condiciones que en ella se indiquen.

Ahora bien, derivado de los postulados y espíritu de la Constitución emanan las diferentes leyes reglamentarias de determinado artículo o las leyes secundarias que retoman de una u otra manera, los postulados planteados en la misma, por lo que es claro que las leyes como instrumentos jurídicos hacen efectivo los postulados constitucionales y se hace todavía más precisa su operación y cumplimiento con los reglamentos y normas definidas para cada ley.

En este sentido, es evidente que ni las leyes y mucho menos los reglamentos pueden contravenir las disposiciones y postulados que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, las leyes regulan, norman y dan la pauta de cómo debe aplicarse los postulados y principios emanados y definidos en la Constitución Mexicana. Más grave aún es que teniendo ya la seguridad social, se le pueda eliminar por un aspecto burocrático como es tener un domicilio diferente entre asegurados y beneficiarios de línea directa.

Así por ejemplo, no debe haber duda alguna de que la Ley del Seguro Social no puede restringir un derecho de seguridad social que la misma Constitución no ha establecido ni definido su exclusión o reducción en artículo alguno.

Por lo tanto y ahondando en el tema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto del Artículo 4º precisa lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la **fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución**."

Es decir, no existe duda alguna cuando la Constitución dice "toda persona tiene derecho a la salud", por lo tanto, si algún mexicano no tiene derecho a la salud, se está contraviniendo este Principio Constitucional, y más aún, es grave que ya teniendo ese derecho como son los padres e hijos como beneficiarios de los trabajadores o trabajadoras que pagan sus cuotas, les quiten este derecho por alguna interpretación

incorrecta, como es el que los padres o hijos tengan un domicilio diferente al de dicho trabajador o trabajadora asegurado o pensionado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente que **TODOS LOS MEXCANOS TENEMOS DERECHO A LA SALUD**, y en ningún momento dice que éste debe restringirse y mucho menos que siendo trabajador o trabajadora asegurado o pensionado, por cambiar de domicilio los padres o hijos pierdan el derecho que les amparaba como sus beneficiarios a través de sus cuotas correspondientes y las cuales sigue cubriendo.

La Constitución en el Artículo mencionado indica que "**La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud"**, pero no le da facultades para que los que ya gozan de ese derecho, sean excluidos por el simple hecho de que por ejemplo, los hijos o hijas trabajadores o trabajadoras que estén asegurados y pagando sus cuotas y que tengan de beneficiarios a sus padres o a sus hijos, se vean de un día para otro sin dicho derecho por el simple hecho de que por ejemplo, se casan o adquieren un departamento pero dejan desamparados de seguridad social a quienes tenían como beneficiarios, solamente por el simple cambio de domicilio.

El mismo Artículo continua indicando: **"…y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general"**, o sea que, confirma que la seguridad social es un derecho en el cual todas las autoridades o dependencias del país de orden público debe concurrir para cubrir los diferentes aspectos de seguridad social incluso en los casos que ameritase una salubridad cuarentenaria, epidemiológica o virológica como en este momento se ha dado con el tratamiento efectivo a la influenza humana AH1NI.

Por otro lado, la **fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución** referente a las funciones del Congreso de la Unión, dice lo siguiente:

"XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República", es decir, confirma la potestad del Congreso de la Unión para que se atienda la seguridad general de la población, y la seguridad social es parte inherente de ella, máxime que con el cambio climático se están incrementado algunas enfermedades que se consideraban ya controladas, y de que la pirámide poblacional está aumentando el número de personas de la tercera edad que son más vulnerables a los impactos de los trastornos climáticos por un lado, y de la resistencia de virus, bacterias y hongos que mutan o se hacen más resistentes y afectan a la población más débil y menos resistente que son los niños, niñas, ancianos y ancianas.

Por lo tanto, desde las luchas históricas que han dado los mexicanos, hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como potestad del Congreso de la Unión, la seguridad social ha sido un eje rector que no puede ni debe soslayarse en la interpretación de las leyes secundarias y menos conculcarse en perjuicio de los mexicanos.

Reitero, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es bastante clara cuando indica que se definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, es decir, la ley al respecto deberá plantear como se operarán los servicios de salud y de seguridad social, pero la Constitución no indica que la ley establezca la exclusión o la supresión, y mucho menos la exclusión de familiares de quienes siguen teniendo el derecho a través de las cuotas de los trabajadores o trabajadoras asegurados o pensionados.

Por lo tanto, es claro que el constituyente trató de resarcir la desigualdad histórica al establecer la seguridad social en la Constitución Mexicana, y a partir de ahí con la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social junto con otras instituciones, que han logrado avances importantes en mitigar los problemas derivados de la desigualdad.

Pero aunado a lo anterior, es evidente que la crisis global múltiple que enfrenta el mundo actualmente, y que repercute con mayor énfasis en las economías en vías de desarrollo como México, quien está tomando medidas pertinentes para mitigar los efectos negativos principalmente en la población de más bajos recursos, hace patente que la redacción actual de las **fracciones VIII y IX del Artículo 84**, es contrario al espíritu de la Constitución de México, al sacrificio de lucha del pueblo mexicano por reducir la desigualdad y pobreza, y a las condiciones de la crisis múltiple global actual.

Finalmente, la redacción actual presenta algunas inconsistencias e incoherencias, ya que:

¿Como van a desarrollarse los hijos o hijas trabajadoras si siempre deben estar en el domicilio de los padres para poderlos sostener como beneficiarios?.

A las nuevas generaciones asegurados o aseguradas se les limita su iniciativa de tener una vivienda porque a costa de ello dejan desamparados a sus padres.

Los padres que pierden el derecho de seguridad social lo pierden cuando más lo necesitan por estar más vulnerables a los riesgos de salud.

Las niñas y niños no pueden desprotegerse de la seguridad social, independientemente del estatus marital del padre o la madre como asegurado, asegurada, pensionado o pensionada, ya que ello es una evidente muestra de discriminación.

Los hijos que tienen asegurados a sus papas, si se casan o se hacen de una vivienda para conformar su familia, tendrán que gastar más dinero, ya que pagarán su nueva vivienda y los gastos de salud de sus padres por ya no tener éstos la seguridad social, a pesar de que siguen pagando sus cuotas.

¿Cómo se exige que los padres dependan económicamente del asegurado o pensionado, si los salarios no le alcanzan ni para desarrollar a su propia familia?.

La dependencia económica no debe ser una limitante para tener derecho a la seguridad social, porque las condiciones laborales y de ingreso son de por sí ampliamente reconocidas como insuficientes, y máxime si se hace el esfuerzo de cubrir las cuotas tanto del propio asegurado como de sus beneficiarios.

No hay impacto económico negativo ya que el asegurado o asegurada cubren las cuotas respectivas de él o ella y sus beneficiarios. En el caso de los pensionados es un derecho ganado a través de su vida de trabajo. Y finalmente, es más caro la corrección que la prevención, es decir, resulta para el país un mayor gasto desproteger a su población de la seguridad social, que pretender ahorro al conculcar un derecho constitucional.

Los argumentos anteriores indican que las **fracciones VIII y IX del Artículo 84 de la Ley del Seguro Social** son inconstitucionales, excluyentes, aumentan la marginación y desigualdad, e injustas porque desamparan a la población más vulnerable que son las niñas, niños, ancianas y ancianos.

Por lo tanto, y con base a lo anterior, presento el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero. Se **reforman** las fracciones **VIII Y IX** del Artículo **84** de la **Ley del Seguro Social** para quedar como sigue:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. a VII. …

VIII. El padre y la madre del asegurado **aunque no vivan** en el hogar de éste, y

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, y la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas además **el requisito siguiente**:

a) Se elimina

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley

Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senadora Rosalía Peredo Aguilar

Dado en el salón de sesiones el del día del mes de de 2009

CUADRO COMPARATIVO DE LAS REFORMAS A LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

VERSIÓN ACTUAL	VERSIÓN PROPUESTA
VIII. El padre y la madre del asegurado que viva en el hogar de éste, y	**VIII.** El padre y la madre del asegurado **aunque no vivan** en el hogar de éste, y
IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII. Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes: a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y	**IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, y la fracción VIII.** Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas además el requisito siguiente: **b) Se elimina** b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley

VERSIÓN ACTUAL Y COMPLETA DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. El asegurado;

II. El pensionado por:

a) Incapacidad permanente total o parcial;

b) Invalidez;

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

d) Viudez, orfandad o ascendencia;

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III.

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III;

V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley.

DE LOS SENADORES ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA Y JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 73, 76 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ



SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA



SEN. JESÚS GARIBAY GARCÍA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76, LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 89, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. CÁMARA DE SENADORES PRESENTE

Los suscritos, Senadora **ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ**, Senador **JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA** y Senador **JESÚS GARIBAY GARCÍA**, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República posee la facultad exclusiva de aprobar la ratificación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que suscriba el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Lo anterior, en virtud de que el Senado de la República, teórica e históricamente, ha sido considerado como la cámara encargada de representar la voz y velar por los intereses de las distintas entidades de la federación.

Sin embargo, el régimen de facultades y competencias consagrado en nuestro texto constitucional en materia de celebración de tratados ha quedado rebasado por la dinámica internacional, y presenta hoy en día diversas inconsistencias que es indispensable subsanar.

En primer lugar, la evolución del derecho internacional y la diversificación de los instrumentos jurídicos contemporáneos, hacen cada vez más difícil la homologación y clasificación de los distintos tipos de compromisos adquiridos por el Estado mexicano.

Por ejemplo, los tratados de libre comercio, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIS) y los convenios suscritos para evitar la doble imposición y la evasión fiscal, son instrumentos sustantivamente distintos en alcance y contenido a las convenciones diplomáticas y a las alianzas bilaterales y multilaterales signadas por nuestro país para hacer frente a problemáticas tan especificas como el combate a la delincuencia, el cambio climático o las distintas facetas de la cooperación judicial, científica y tecnológica.

En este escenario, la Cámara de Diputados se encuentra privada de la posibilidad de pronunciarse al respecto de instrumentos internacionales que tienen que ver con facultades que le han sido expresamente conferidas por la Constitución, tales como impuesto sobre la renta, doble imposición, inversiones, aranceles, comercio exterior, etc.

Por ello, y porque resulta inexplicable que la Cámara de Diputados no tenga voz en la aprobación de tratados que tienen profundos impactos en la economía nacional y en el desarrollo de los distintos sectores productivos, es necesario actualizar nuestro marco constitucional, a efecto de incorporar un nuevo régimen de competencias y una nueva clasificación que nos permita enfrentar en mejores condiciones la vertiginosa evolución de la dinámica internacional.

Ahora bien, por si lo anterior no fuera suficiente, es preciso reconocer que bajo el actual esquema de competencias asignado por la Constitución a las Cámaras del Congreso de la Unión en materia de celebración de tratados, una de las Cámaras (el Senado de la República) adquiere facultades que van más allá de lo pensado por el constituyente permanente.

De manera particular, me refiero a la facultad implícita que adquiere el Senado de la República para poder modificar y dejar sin efectos la legislación secundaria al aprobar la ratificación de un instrumento internacional. Esto implica que una sola Cámara, en ejercicio de sus facultades exclusivas, puede cambiar lo aprobado por ambas cámaras, en el marco del proceso legislativo ordinario.

En efecto, a partir de la tesis aislada emitida en 1999 por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1), relativa a la jerarquía de los tratados internacionales y las leyes federales, las normas aprobadas por el Senado de la República a través de los tratados internacionales, poseen una jerarquía superior a la de las leyes federales.

En nuestra perspectiva, esto representa una distorsión jurídica que es preciso corregir de inmediato dotando a la Cámara de Diputados de la facultad de aprobar también los tratados internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Y este es precisamente el sentido de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración.

De manera particular, nuestra propuesta tiene como objetivo particular el reconocer la existencia de distintos instrumentos internacionales que ameritan el análisis y la evaluación de la Cámara de Diputados y, a partir de dicho reconocimiento, modificar el actual régimen de competencias en materia de aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas.

---

(1).- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999,
página 46, Pleno, tesis P. LXXVII/99.

En este contexto, proponemos dotar a la Cámara de Diputados de la facultad de aprobar los tratados internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente aquellos que versen sobre materias vinculadas a las facultades otorgadas a la Cámara de Diputados por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y compartir con la Cámara de Senadores la facultad de aprobar las convenciones diplomáticas, tomando en cuenta el impacto que el derecho internacional contemporáneo ha adquirido sobre nuestra legislación secundaria.

Bajo los términos anteriores, Compañeras y Compañeros Legisladores, me permito someter a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76, LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 89, Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la fracción I del artículo 76, la fracción X del artículo 89, y la fracción IV del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en los siguientes términos:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I-III.- …

IV.- Para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

V- XXX.- …

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

(Se deroga el párrafo segundo).

II-XII.- …

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I-IX.- …

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del **Congreso…**

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 03 días del mes de diciembre de 2009

DEL SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.



Recinto del Senado de la República, a 8 de Diciembre de 2009.

SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS

INICIATIVA DE REFORMAS AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de nuestro sistema legal mexicano, existen los Principio Generales del Derecho los cuales se refieren a los "criterios Fundamentales que informa el origen y desenvolvimiento de una determinada legislación que, expresados en reglas y aforismos, tienen virtualidad y eficacia propia con independencia de las normas formadas en el plano positivo"[1]

Su carácter de criterios fundamentales deriva de expresar principios de justicia de valor elemental y naturaleza objetiva. Y su condición de fuente informativa del ordenamiento explica que puedan adoptar peculiaridades, que sin romper su tónica de general y abstracta, disciplinan la estructura jurídica de un determinado grupo humano y social. No son, ciertamente, verdades absolutas, pero su más pura esencia responde a una general aspiración que se traduce, en la órbita jurídica, es una política de desenvolvimiento y realización de su contenido, que es lo que les da utilidad.

Su independencia respecto de las normas concretas positivas hacen que informen al ordenamiento sin necesidad de que sean matizados. Singularmente, cuando el legislador se apresta a la labor de organizar normativamente la vida de un país, responde en su esquema y parte siempre de unos principios.

[1] Diccionario jurídico Espasa, LEX, Madrid España, 2008, pag 1165

Dentro de dichos principios encontramos el de seguridad jurídica que se puede resumir en la pretensión de que las autoridades del estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se salvaguarda cuando las autoridades actúan con apego a las leyes, y las formalidades deben observarse antes de que a una persona se le prive de sus propiedades o su libertad.

La seguridad es el contexto dentro del cual se toman las decisiones individuales y las interacciones de los actores sociales, para ellos, es la expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable y predecible. Para que así sea, es indispensable que las decisiones de los actores políticos se tomen según el sentido lógico de la norma y no según la lógica de la discrecionalidad.

"La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que, significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, la palabra, seguridad indica la situación de estar alguien seguro frente a un peligro".

El origen o nacimiento de dicho principio puede ubicarse en el Derecho Romano, ya que en los procesos judiciales que se instauraba en esa época, se daba la prohibición de promover un nuevo juicio a través de la presentación de una segunda demanda sobre la misma materia, por la misma o diferente acción, una vez nacida la relación jurídica procesal. En Roma era ampliamente reconocido como un principio general, como consecuencia lógica derivada del carácter preclusivo que caracterizaba el proceso a partir de la litis contestatio.

Posteriormente, la doctrina Alemana lo configura como un principio íntimamente unido a la institución de cosa juzgada, sobre la cual, con independencia de la decisión que se adoptara en un juicio, el poder judicial sólo podría ocuparse una vez respecto de la misma cosa. Sin embargo, existen otros autores que sitúan el origen de este principio en diversos pasajes del antiguo derecho griego, esto es, al citar pasajes de Platón y Demóstenes que recogen de alguna forma el significado de la máxima.

Por otro lado, el contenido inicial de este principio consistía en que una misma acción no podía hacerse valer en dos ocasiones cualquiera que

fuese el resultado del primer procedimiento que le fuera iniciado al acusado. Esta prohibición no operaba automáticamente después de la contestación de demanda y fijación de la litis, sino que el demandado debía ejercitarla en vía de excepción.

Esta máxima se desarrolló en la mayoría de los sistemas jurídicos de origen latino o que en un momento dado sintieron su influencia desde su inicio, por la unificación llevada a cabo por el Derecho Canónico y, posteriormente, en el Derecho Español con el Rey Alfonso X y Las Siete Partidas. Asimismo, se le puede localizar en el Derecho Inglés y Alemán, al instaurarse en el primero el principio double jeopardy o doble juego, y en el segundo al establecer que quien a otro acusa por una causa que ya antes había sido procesado y condenado, debe someterse a la mejora.

No fue sino hasta la Revolución Francesa cuando se hizo notar el primer cambio en el derecho positivo, al formularse la frase non bis in idem, respecto de la cosa juzgada, la cual sería repetida constantemente en leyes posteriores, en el Código de Merlín o de Brumario, el Código de Instrucción Criminal, hasta su reconocimiento e inclusión en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y dentro de los derecho de los ciudadanos denominados Bill of Rights.

Por todo lo anterior, debemos de considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las posibles contingencias que se presentan en sociedad, por la naturaleza misma de las características de cualquier sociedad, debe ser procurada por el ente rector de las relaciones que dentro de ese marco de colectividad pueden llegar a darse.

El Estado, como ente rector de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica al ejercer su poder de imperio.

"La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación.

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente".

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por el Estado desde el nacimiento de esta figura de organización social. La finalidad última del Estado es asegurar los medios para que las personas que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser violentados sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho positivo vigente, general, heterónomo y equitativo.

"La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un ordenamiento jurídico".[2]

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien común" es absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal sólido y de una convicción real de sus integrantes por vivir en completa observancia de sus disposiciones, es por esto que la "seguridad jurídica" plena es un sueño imposible para las sociedades modernas.

Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en aspectos del Estado más específicos, para que en su conjunto logremos el establecimiento de una sociedad más justa y segura para sus integrantes.

[2] Magaloni, Beatriz, La Desobediencia Civil en la Democracia Social, Edit. ITAM, México 1990.

En efecto no podemos dejar de lado la necesidad de establecer "seguridad jurídica" en uno de los objetivos primordiales del Estado, como es la captación de recursos para la realización de sus fines, el derecho tributario.

La seguridad jurídica exige el reconocimiento de la persona y de la soberanía del pueblo, pero también de la supremacía constitucional, de la división entre los poderes constituidos, del poder judicial independiente y de la administración sometida a la ley, de la representación política y la oposición y del control del poder.

En materia electoral los principios democráticos de legalidad y certeza jurídica se encuentran previstos por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el mismo es un catálogo de principios y derechos aplicables al derecho electoral, mas sin embargo, no excluye principios de derecho contenidos en otros artículos de nuestra carta magna.

Es por estas razones, que con la presente iniciativa se pretende reformar el Código Federal Electoral para acotar en un plazo muy razonable las facultades sancionadoras e investigadoras del Instituto Federal Electoral, esto es, establecer que la autoridad electoral solo pueda sancionar a un partido político por revisiones derivadas de la fiscalización, que tengan más de un año contados a partir de la emisión de un dictamen.

Con la presente reforma, se adecua la legislación electoral al sistema fiscal mexicano, ya que en este último, la autoridad cuenta con un determinado periodo para sancionar al contribuyente y fuera de esos términos no podría hacerlo.

Aunado a lo anterior, se da brinda seguridad jurídica a los partidos políticos en razón de que no se les va a poder sancionar por hechos, actos u omisiones realizadas en periodos anteriores a los estipulados en la reforma, acotando con esto las facultades ilimitadas que tenía la autoridad electoral de investigación y su posterior sanción.

Lo que se busca con la presente iniciativa es eliminar del Sistema Jurídico Mexicano principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en el término para la imposición de sanciones o en procedimientos largos y complejos, que impactan negativamente en los niveles de certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los ciudadanos de que las leyes se cumplen.

Lo anterior genera no sólo espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, sino la falta de atención social a la legalidad al generar una percepción de aplicación selectiva de la ley. Ello, a su vez, se traduce en obstáculos para el desarrollo nacional.

No es óbice de lo anterior el hecho de que todas las Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral deban ser con base en el "principio de certeza", ya que la persecución de dicha finalidad nunca puede ir en detrimento de las garantías constitucionalmente tuteladas, en el caso la garantía de seguridad jurídica.

Debemos mencionar que entre los instrumentos internacionales dotados de obligatoriedad jurídica que se preocupan por garantizar la aplicación de este principio, se cuentan, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, que en su artículo 14.7 establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

En México, el primer antecedente de la prohibición non bis in idem, aparece en el artículo 25 del proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 1856, quedando en forma definitiva en el numeral 24 de la Constitución Política de 5 de febrero de 1857 y en la de 1917, junto con otras dos garantías, de la siguiente manera: "...Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene...".

Finalmente lo que se pretende con la citada reforma electoral es establecer el principio de preclusión en materia electoral, el cual ha sido estudiado desde hace mucho tiempo en materia penal, administrativa, laboral y civil ha demostrado su efectividad.

En el sistema procesal de un juicio de carácter laboral, penal, administrativa o civil, rige como presupuesto que en cada acto de procedimiento debe realizarse en la fase que le corresponda, con la consecuencia de que, de no llevarse a cabo,

surja la figura jurídica de la preclusión, conforme a la cual, la parte que no actúa como debe hacerlo dentro del período correspondiente, pierde el derecho de hacerlo con posterioridad.

El principio de preclusión procesal, según el tratadista Chiovenda, consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esa facultad en el juicio o fuera de él.

La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando:

a) No se haya observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto respectivo;

b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra; y,

c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una ocasión.

Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior.

En ese sentido, la figura procesal referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer.

Al respecto la Suprema Corte de la Nación ha emitido los siguientes criterios jurisprudenciales:

Novena Época
No. Registro: 187149
Instancia: Primera Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Abril de 2002
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 21/2002
Página: 314

PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.

La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.

Amparo directo 4398/87. Agustín González Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Inconformidad 60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Contradicción de tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Tesis de jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Octava Época
No. Registro: 207641
Instancia: Tercera Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988
Materia(s): Civil
Tesis:
Página: 374
Genealogía:
Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 156, pág. 177.

PRECLUSION. EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.
La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso civil. Está representada por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, que en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Resulta normalmente, de tres situaciones: 1a. Por no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; 2a. Por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; 3a. Por haberse ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la institución que se estudia no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.

Amparo directo 4398/87. Agustín González Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela del Refugio Ferrer Mac Gregor.

Notas:

En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro "PRECLUSION. OPERA ESTE PRINCIPIO, UNA VEZ PERDIDA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO, PUES ESTE YA NO PODRA EJECUTARSE NUEVAMENTE.".

Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, de rubro: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO."

Octava Época
No. Registro: 222791
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
VII, Mayo de 1991
Materia(s): Laboral
Tesis: III.T. J/19

Página: 108
Genealogía:
Gaceta número 41, Mayo de 1991, página 87.

PRECLUSION. CONCEPTO Y CASOS EN QUE OPERA ESTE PRINCIPIO EN LA LEY PROCESAL MEXICANA.
La ley mexicana no deja al arbitrio de las partes elegir el momento para realizar los actos procesales que les incumben, ya que las normas que regulan el proceso no sólo previenen la forma de los actos propios del mismo, sino el momento en que deben llevarse a efecto, para su ordenado desenvolvimiento. Así vemos que este efecto producido en el proceso constituye el principio preclusivo que rige en las diferentes fases o periodos procesales; razón por lo que es conveniente puntualizar los casos en que la citada preclusión tiene lugar, los cuales son: a) Cuando no se observa el orden señalado en la ley para el ejercicio de una facultad procesal; b) Cuando se realiza un acto incompatible con el ejercicio de esa facultad; c) Cuando ya se ha ejercitado la facultad procesal de que se trata, y d) Cuando por permitirlo la ley se ejercita nuevamente la multicitada facultad, agotándose entonces el derecho o derechos que se habían adquirido con el ejercicio inicial de aquella facultad. Caso este último dentro del que encaja el que se encuentra sometido a estudio, ya que el derecho de la demandada y ahora quejosa para que se declarara confeso a su esposo, precluyó por haber vuelto a ejercitar en segunda instancia la misma facultad de ofrecer la prueba de confesión.

Amparo directo 5017/75. Felipa Cristina García Quintanar. 18 de marzo de 1977. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Efraín Ochoa Ochoa.

Y es por lo anteriormente expuesto y fundado, que sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL

SE REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 85. En casos de excepción, y previo acurdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.

En ningún caso la autoridad electoral podrá sancionar a un partido político por revisiones derivadas de la fiscalización, que tengan más de un año contados a partir de la emisión del dictamen por parte del área encargada de la fiscalización.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
COORDINADOR
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO

DEL SEN. MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.



SEN. MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El que suscribe, Marko Antonio Cortes Mendoza, Senador de la República a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del articulo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IV y VIII del articulo 25, fracción II del articulo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Así como en lo dispuesto por el artículo 70, inciso j) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de los CC. Secretarios de la Mesa Directiva, el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

El desarrollo democrático, la participación ciudadana y política de la sociedad mexicana en la integración de una federación de estados y en la conformación de la República Mexicana, se han significado a lo largo de su existencia como nación, en un proceso arduo, difícil y costoso para su población y para sus instituciones. Razón por la cual los avances en estos ámbitos generados a la fecha, tales como el principio de representatividad política de los ciudadanos enmarcado en el sufragio, constituye un baluarte irrenunciable de nuestro sistema democrático actual.

En México la democracia como forma de gobierno privilegia la participación del pueblo en la acción gubernativa mediante el sufragio; todo ciudadano tiene el derecho de ser votado y votar libremente por sus gobernantes y cada voto, con independencia de quien lo emita o el lugar en que lo haga, debe tener el mismo peso relativo en la definición del representante electo.

Toda democracia participativa y representativa basa su legitimidad, en el principio fundamental de la igualdad de los ciudadanos en el valor de su voto; un miembro, un voto.

Por esta razón es responsabilidad de las instituciones del estado mexicano promover y garantizar la competencia política y electoral libre y plural, procurando una evolución democrática, acorde a una sociedad con una cultura política en constante transformación, manifiesta en los cambios institucionales y en el nuevo comportamiento de los ciudadanos, testigos actuales de su realidad social y política.

La participación política de los ciudadanos mexicanos está enmarcada en el ámbito de los partidos políticos. Los cuales son entidades de interés público, cuyo fin es el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público,

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, Art. 41, fracción I. Esta constituye formalmente la razón primordial de su existencia, por lo tanto los partidos políticos deben garantizar los derechos y obligaciones constitucionales de los ciudadanos mexicanos consagradas en los Art. 34, 35 y 36 de nuestra Carta Magna.

Es menester de las instituciones del estado mexicano garantizar a su vez los derechos constitucionales y las garantías individuales de todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo obviamente las de aquellos que se encuentran afiliados dentro de las entidades de interés público tales como los partidos políticos. Dado que nada, ni nadie se encuentran por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dichas garantías no pueden restringirse ni suspenderse salvo en los casos que ella misma establece.

Atendiendo la vocación democrática de nuestro país, es obligación legislativa, cívica y moral del Congreso de la Unión establecer los lineamientos que determinen la obligatoriedad de los partidos políticos, para que estos garanticen los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos que en ellos participan, su democratización interna y el pleno cumplimiento al principio de participación política que constituye uno de los pilares de la integración de esta Republica y de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de este proceso de democratización de los partidos políticos y de la participación política de sus miembros, los procesos de selección de candidatos deben ser por demás claros, transparentes, participativos y por supuesto democráticos bajo la garantía constitucional de la representatividad política de todos y cada uno de sus miembros en las decisiones internas de dichas entidades de interés público.

Tales decisiones deberán alcanzar a sus órganos de dirección interna, órganos de gobierno, así como a las propias candidaturas que los partidos presenten a las contiendas constitucionales. En este contexto y en concordancia con la representatividad política de sus miembros, dichas candidaturas deberán considerarse bajo el principio de elección de candidatos, en el cual pueda participar cualquiera de los miembros del partido con sus derechos constitucionales vigentes.

En nuestro país la elección candidatos, está documentada en los estatutos de los partidos políticos nacionales, sin embargo, en los últimos años, esta práctica democrática se ha ido dejando de lado, ante el creciente uso discrecional de prácticas centralistas para la designación de candidatos, en detrimento del derecho constitucional del ciudadano mexicano de votar y ser votado, que constituye el principio de esta iniciativa, para garantizar y preservar la vigencia de este derecho desde la selección de los candidatos en los diferentes partidos políticos.

Recientemente el Ejecutivo Federal destaco la importancia de la reelección inmediata en el fortalecimiento democrático. Con el ánimo de contribuir al propósito anterior, la iniciativa que someto a su consideración, garantiza el

respeto a los principios democráticos contenidos en nuestra Constitución. Siendo que los partidos políticos, son entidades de interés público, deben reflejar en sus procedimientos internos de selección de candidatos, los principios que la Constitución establece para la elección de representantes.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta Soberanía, el siguiente proyecto de decreto a través del cual se hace obligatorio para los partidos políticos la celebración de procesos de selección de candidatos, bajo los principios de democracia y de la representatividad política de los ciudadanos para todos los cargos de elección popular, cuya base sea, el registro de militantes o la base social por la cual se integren, en ambos casos dentro del ámbito de la jurisdicción correspondiente a tema de elección.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el inciso d), numeral 1, del artículo 27; el numeral 1 del artículo 211, se adicionan el numeral 7 al artículo 22; todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Articulo 22.
1 al 6
7.- Los partidos políticos deberán realizar todos sus procesos internos de selección de candidatos, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, donde participaran todos los miembros de los partidos o la base social por la cual se integren y gocen de sus derechos constitucionales, dentro del ámbito de la jurisdicción correspondiente a elección y de conformidad con lo dispuesto en el presente código y en sus estatutos.

Artículo 27.-...
1...
a) a c)

I a IV

d) Los procesos internos de selección de candidatos, que garanticen el sufragio universal, libre, secreto y directo, donde participen todos los miembros de los partidos o la base social por la cual se integren y gocen de sus derechos constitucionales.

.
e) a g)...

Artículo 211
1...
Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos; los cuales se celebraran a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de sus integrantes de acuerdo a lo establecido

por este Código, y donde participen todos los miembros de los partidos con sus derechos constitucionales vigentes, siendo la base de votación el registro de militantes o la base social por la cual se integren, en la jurisdicción correspondiente a elección, previa convocatoria pública de los institutos políticos que establezca la fecha de registro de precandidatos cuyo número de aspirantes no podrá ser limitado por los partidos políticos, la fecha en que se llevará a cabo la votación interna, así como la fecha de publicación de los resultados, que en ningún caso podrá exceder de 3 días naturales posteriores a la fecha de elección, momento en el cual deberán ser informados oficialmente por los partidos al Instituto Electoral competente.

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 8 días del mes de Diciembre de 2009.

Sen. Marko Antonio Cortés Mendoza

DEL SEN. ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.



SEN. ANTONIO MEJÍA HARO

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, P r e s e n t e s.

El suscrito Senador **ANTONIO MEJÍA HARO**, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país formado principalmente por gente joven, según estadísticas recientes contamos con 22 millones de personas entre los 14 y 24 años, lo que se traduce en un gran potencial productivo, mismo que estamos desaprovechando por la falta de empleos. De tal guisa, es menester que impulsemos acciones tendentes a fomentar el desarrollo pleno de este sector de la sociedad, que sin duda es fundamental para el crecimiento económico de toda la Nación.

El contexto actual de los jóvenes en el orbe no es alentador, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reveló que 200 millones de jóvenes en el mundo ganan menos de un dólar al día. Señaló también que en materia de educación 130 millones son analfabetos y en cuanto a salud, destaca que otros 10 millones viven con VIH/Sida.

Según cifras del Consejo Nacional de Información (CONAPO), la población joven en nuestro país asciende a 20 millones de habitantes; el 46 por ciento de los hogares cuenta al menos con un joven de entre 15 y 24 años de edad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 48 por ciento de los adolescentes se dedica exclusivamente a estudiar, y poco más de una quinta parte combina el trabajo doméstico con el asalariado. Entre la población de 20 a 24 años, 40 por ciento reparte su tiempo entre el trabajo doméstico y el extradoméstico. Les siguen quienes se dedican sólo a los quehaceres del hogar, con 20 por ciento.

El II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró 103.3 millones de habitantes en el país; de ellos, 26.3% son jóvenes (15 a 29 años). Durante el primer trimestre de 2006, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada joven, fue de 13.9 millones, representaron en este periodo 33.6% de la fuerza de trabajo total.

Es en estas primeras dos décadas del siglo XXI que, México tiene la tarea preponderante de aprovechar la favorable composición de su pirámide demográfica. La condición indispensable es propiciar el empleo de tal manera que la población activa pueda aportar a la generación de riqueza en el país, sí no ocurre lo anterior el bono demográfico se volverá un pasivo, acarreando la cancelación de oportunidades para los jóvenes.

Tenemos una incapacidad estructural para generar los empleos necesarios, característica que afecta a México, desde hace décadas y que se ha visto agravada por la crisis económica mundial. La pérdida de más de 600 mil empleos formales en lo que va de 2009 evidencia que tenemos un alto grado de flexibilidad laboral en términos de conclusión de las relaciones de trabajo.

De los jóvenes ocupados, 56.8% labora en el sector terciario (servicios y comercio), 29.3% en el secundario y 13% en el primario, 0.9% no especificó en que sector labora. Por su posición en la ocupación, la mayor parte de los jóvenes ocupados (77.7%) son personas subordinadas y remuneradas (10.8 millones); los trabajadores no remunerados representan 11.3% (1.6 millones); los trabajadores por cuenta propia, 9.5% (1.3 millones); y los empleadores (patrones) 1.5%, alrededor de 200 mil jóvenes.

Cifras del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señalan que siete de cada diez mexicanos que emigran al extranjero tienen entre 15 y 24 años, lo que quiere decir, que se van justo cuando inician su vida productiva. Con las actuales políticas, con la nula creación de fuentes de empleo, estamos expulsando a nuestros jóvenes, y eso es en detrimento de todos los mexicanos.[3]

Los investigadores de la máxima casa de estudios del país, destacan que existe un éxodo importante fuga de talentos que somos expulsores de entre 100 mil y 150 mil personas por año, lo que se traduce en un costo para el país de más de 100 mil millones de pesos.[4]

De los datos citados en los párrafos que anteceden, podemos advertir que los jóvenes en su proceso de crecimiento, se enfrentan a varios obstáculos de muy diversa índole, van desde la necesidad de abandonar sus estudios para poder ayudar a la economía familiar, hasta la imposibilidad de encontrar un empleo remunerado y buenas posibilidades de desarrollo y evolución.

Es hora de que veamos a los jóvenes como agentes de cambio, México necesita transformar drásticamente el rumbo, tenemos que subsanar los errores que a lo largo del tiempo hemos venido cometiendo, es momento de actuar y de dar a estas personas la oportunidad de acceder al mundo laboral con facilidad y que tengan la posibilidad de emprender sus propios negocios.

En tal virtud, someto a la consideración de esta Asamblea una Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de que se fomente el acceso a los financiamientos para las MIPYMES que estén constituidas principalmente por jóvenes.

También se propone que el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, forme parte del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que este importante segmento de la población tenga representación en la citada instancia.

Igualmente es importante citar, que se propone como atribución de la Secretaría de Economía, que elabore un programa especial que fomente y facilite la creación, desarrollo y crecimiento de MIPYMES, que estén constituidas principalmente por jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 4 y se recorren los subsecuentes; se reforma la fracción II del artículo 11; se adiciona la fracción XI al artículo12, se reforma la fracción II del artículo 14; se reforma el artículo 18 y se adiciona una fracción XIV al mismo numeral, recorriéndose las subsecuentes; se reforma la fracción III del artículo 22; todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

"Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. …

II. Promover:

a) - c) …

d) Fomentar el acceso al financiamiento para las MIPYMES que estén constituidas principalmente por jóvenes;

e) a j) …

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

[3] México Investor Digest. www.e-mid.com.mx/
[4] *Ibídem*.

I. …

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores, **principalmente jóvenes**;

III. A VIII. …

…

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades:

I. a X. …

XI. Elaborar un programa especial que fomente y facilite la creación, desarrollo y crecimiento de MIPYMES constituidas principalmente por jóvenes.

…

Artículo 14.- La Secretaría promoverá la participación del Sector Público y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:

I. …

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad de los emprendedores, **principalmente jóvenes;**

III. a XIII. …

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por **32** integrantes:

I. a XIII. …

XIV. El Director General del Instituto Mexicano de la Juventud;

XV. a XXIII. …

…

…

…

Artículo 22.- El Consejo tendrá por objeto:

I. a II. …

III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y creatividad de los emprendedores, **principalmente jóvenes;**

IV a XI. …"

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

SEN. ANTONIO MEJÍA HARO

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

DEL SEN. MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 165 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO

Recinto del Senado de la República, a 8 de Diciembre de 2009.

INICIATIVA DE ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cultura mexicana se caracteriza por la variedad de tradiciones que hasta hoy en día se conservan; este asunto cultural, también tiene un lado oscuro: la discriminación de la mujer. En nuestro país, es muy común que se piense que la maternidad es la razón de ser de la mujer, y por eso se le ha excluido de las actividades económicas, culturales, políticas, deportivas y muchas otras.

A pesar de los diversos cambios socio-económicos que ha experimentado el país, y en los que tanto hombres como mujeres han participado, las mujeres continúan encontrando barreras que le impiden lograr su desarrollo, y que, por ende, retrasan al país. Uno de estos obstáculos es la discriminación de la mujer en la educación, la contratación, la capacitación, así como la discriminación salarial.[5]
Sin embargo, esa idea de debilidad se ve opacada si recordamos cómo millones de mujeres en el mundo han estado detrás de un hombre, sino al lado luchando por sus derechos, trabajando largas jornadas para mantener a sus hogares, procurando el bienestar de su familia y, en ocasiones, trabajando el doble que los hombres, en el afán de que se reconozca su esfuerzo, o con el fin de sacar adelante a sus hijos.

A partir de los años cincuenta, la incorporación de las mujeres al campo laboral ha ido en aumento, por lo que uno de los muchos obstáculos a los que las mujeres se han enfrentado es la discriminación laboral. Este tipo de comportamiento se debe en gran parte a la concepción histórica de la mujer, basta recordar cómo en el México revolucionario las "adelitas", o soldaderas participaron en la búsqueda de un cambio en el país y, sin embargo, no pudieron romper con el esquema de la mujer de aquellos tiempos; la mujer abnegada y sumisa, que debía permanecer en su hogar y cuidar de los hijos. Para ese entonces, la simple idea de que una mujer ocupara un papel más público, resultaba una amenaza, un insulto para la sociedad machista de aquellos tiempos.[6]

La incursión de la mujer en el ámbito laboral ha provocado muchos cambios en las actitudes y pautas de comportamiento de los círculos sociales, económicos, políticos así como en la organización de la vida laboral, social y familiar.[7] Estos cambios también se han visto reflejados en nuestra legislación, en donde se establecen los derechos de las trabajadoras y se busca la equidad entre los géneros. Sin embargo, la discriminación laboral es un problema latente en nuestro país.

En México, la discriminación salarial es un problema grave, ya que a pesar de que la legislación establece que tanto hombres como mujeres deben percibir un salario igual si realizan un trabajo equivalente, en la práctica es raro que se cumpla con esta disposición. De acuerdo con la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género Jennifer Cooper, la discriminación se percibe desde el momento de la contratación, ya que los empleadores al ver que quien solicita el trabajo es mujer, la cuestionan sobre cuantos hijos tiene, y en la misma solicitud de empleo se le cuestiona si está o no embarazada. En diversas áreas laborales, el acceso está restringido para las mujeres; y en otras, les cuesta mayor trabajo y tiempo lograr ascensos; asimismo es común que las condiciones y los salarios sean distintos, por lo regular inferiores a los de los hombres.[8]

Como se comentó anteriormente, la incorporación de las mujeres en la actividad económica ha

[5] Organización de las Naciones Unidas. Documentos informativos. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995.

[6] Yannini, Judith. "Mujer, Sociedad y Gobierno". Dictada en el Primer Congreso Nacional de la Mujer: Abriendo espacios contigo. Tamaulipas 2001.

[7] Treviño, Laura. "discriminación de Género, Acoso Sexual y temor a la incertidumbre en los lugares de trabajo". Noticias Editorial. Comunidades en línea de México. 2000.

[8] Cooper, Jennifer. Coloquio universitario: "Mujeres en cargos de dirección". Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 16 febrero 2001.

aumentado, sin embargo, este crecimiento no se ha visto reflejado en los salarios que éstas perciben, ya que actualmente los hombres ganan un 11% más.

Irónicamente, uno de los puestos en los que las mujeres ganan menos que los hombres es como funcionario público. Este empleo así como el de funcionarios privados y supervisores industriales, son los empleos en los que se encuentra una gran diferencia salarial, ya que esta es de aproximadamente un 45% en comparación a los salarios percibidos por hombres que ocupan los mismos puestos.[9] De acuerdo con investigaciones realizadas por el INEGI, estos son los empleos en los que las mujeres enfrentan mayor discriminación salarial.[10]

Ante la ley hombres y mujeres gozamos de igualdad jurídica, tal y como establece el artículo cuarto de nuestra Constitución. Sin embargo, no somos iguales; la naturaleza nos ha diferenciado a hombres y mujeres en cuanto a nuestras características biológicas, físicas, psicológicas, etcétera. Una de las grandes diferencias que caracteriza a las mujeres, es la posibilidad de ser madres, sin embargo, esta y otras diferencias propias de los géneros, no deberían ser un obstáculo en cuanto a equidad se refiere. La discriminación por embarazo, es una forma más de rechazo laboral que experimentan muchas mujeres en nuestro país. A pesar de ser un problema grave, la Ley Federal del Trabajo no prohíbe, de manera expresa, la discriminación hacia las mujeres embarazadas que solicitan un empleo, o que ya se encuentran trabajando.

En la capital de la República Mexicana el despido por embarazo así como el examen de ingravidez quedó suprimido en las dependencias públicas, gracias a una recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 1997. Por lo que a partir del año 2002, está prohibido solicitar un examen de ingravidez a todas aquellas mujeres que soliciten un empleo en las dependencias del gobierno federal.[11]

Este hecho es un avance por medio del cual se pretende dejar atrás uno de los diferentes tipos de discriminación que sufre la mujer.

Las prácticas discriminatorias como el despido por embarazo y la solicitud del examen de no-gravidez entre otros, van en contra de los derechos de las mujeres ya que además de resultar denigrantes, violan los derechos reproductivos y laborales consagrados en las leyes mexicanas así como en los múltiples acuerdos y convenios internacionales firmados por México.

Asimismo, la iniciativa de ley que hoy se presenta tiene como objetivo introducir en la Ley Federal del Trabajo la sanción hacia la discriminación a mujeres embarazadas tanto que soliciten un empleo o que ya se encuentren trabajando.

Es por todo lo anterior que nuestra fracción parlamentaria somete a ésta H. Cámara de Senadores en la LXI Legislatura la presente;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 165 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTICULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo al Artículo 165 de la Ley Federal del trabajo para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

TITULO QUINTO
Trabajo de las Mujeres

Artículo 165.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad.

[9] Melgar, Ivonne. Pagan a mujeres Sueldos Menores: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 2002. Grupo Reforma. Mural.

[10] INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano. 2002.

[11] Del Valle, Sonia. "Totalmente prohibida la discriminación laboral contra mujeres embarazadas" CIMAC Noticias. 28 de enero de 2002.

Se sancionará la no contratación y el despido por motivo de embarazo, maternidad o estado civil.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS
SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO
SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ

DEL SEN. EDUARDO T. NAVA BOLAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. EDUARDO TOMÁS NAVA BOLAÑOS

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA EL SENADOR EDUARDO TOMÁS NAVA BOLAÑOS A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA CÁMARA DE SENADORES.

CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE
CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E.

El que suscribe Eduardo T. Nava Bolaños, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente, **INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 3 de febrero de 1983, la Cámara de Senadores como Cámara de Origen impulsó una de las iniciativas más importantes para nuestro país, la cual consistió en reconocer la autonomía del Municipio Libre por ser una institución indispensable para la vida política de todos los mexicanos, para tal fin fue necesario redistribuir y entregar al Municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución.

Una de las razones primordiales que motivaron el fortalecimiento del Municipio a través de esta reforma, fue el considerarlo como una comunidad social que posee territorio y capacidad político-jurídica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie más que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un cambio cualitativo en el desarrollo económico, político y social, capaz de permitir un desarrollo integral. Dicha política se implementó no sólo como el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios poco desarrollados, sino también, para resolver simultáneamente los cada vez más graves problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales.

Con base en lo anterior, se estableció en el inciso a), de la fracción III del artículo

115 Constitucional, la atribución del Municipio para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado, de manera conjunta se facultó al Municipio para recabar recursos, razón por la cual se estableció en la fracción IV del artículo 115 que las legislaturas locales establecerían el monto de los derechos generados por la prestación de los servicios a cargo de los Municipios, los cuales formarían parte de su hacienda pública y que tendrían como objeto mejorar la prestación de los mismos.

Bajo este esquema, el 23 de octubre de 1998, la Cámara de Diputados como cámara de origen propuso que fueran los municipios quienes prestarán libremente sus servicios, y que únicamente en el supuesto de que así lo solicitaran, podrían intervenir las Legislaturas Locales, de manera que los municipios suministrarán de forma directa o a través de sus organismos, los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado incluyendo posteriormente, lo relativo al tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Tanto la modificación impulsada por esta H. Soberanía en 1983, como la promovida por la H. Cámara de Diputados el 23 de octubre de 1998 fueron fundamentales para la vida del País, debemos considerar que estas reformas se limitaron a garantizar la autonomía de los municipios en la prestación de los servicios, libertad en el manejo de su hacienda pública, además de establecer disposiciones que preveían la intervención de los Estados en la prestación del servicio, únicamente cuando así lo solicitará el municipio, sin embargo, no se previó disposición alguna que permitiera garantizar a nuestros representados, es decir, a los ciudadanos en general, la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Como resultados favorables de estas reformas, encontramos que en materia de agua potable se logró que existieran municipios como Monterrey, con eficiencias globales del 100%, Xochitepec e Ixmiquilpan de Soto con eficiencias técnicas y económicas globales de 80% y en los que además de garantizar a su población el suministro de agua potable y fortalecer los sistemas de alcantarillado, contribuyen con todo el país al implementar sistemas de tratamiento de descargas de aguas residuales, lo cual los ha ayudado a obtener mayores ingresos al darle un uso sustentable al recurso a través de la transmisión de sus aguas residuales tratadas. Empero existen otros municipios que aprovechándose de esta atribución exclusiva, incumplen la normatividad existente afectando con ello a los usuarios finales del servicio que contempla el inciso a) de la fracción III del artículo 115 Constitucional.

Resulta evidente la necesidad de reformar la fracción III, del artículo 115 con el fin de garantizar la prestación del servicio a los particulares, sólo en caso de incumplimiento por parte del municipio en la prestación del servicio y únicamente hasta en tanto se preste el servicio con las condiciones que marca la ley, con una reforma de esta naturaleza se garantiza el derecho fundamental de los gobernados al agua en condiciones potables y el de todos los mexicanos a cuerpos de agua libres de contaminación.

Los argumentos que motivan esta iniciativa no se ciñen únicamente a los antes expuestos, no es necesario hacer un análisis de la importancia del agua para la vida en nuestro planeta, tanto las premisas como la conclusión son sencillas, sin agua no hay vida y hoy el agua se termina y se termina no porque desaparezca, sino porque el líquido existente se encuentra muy contaminado y el restante es poco, situación que exige una buena administración del recurso.

El 97 por ciento del agua del planeta es salada, 2 por ciento se encuentra en los glaciares y sólo 1 por ciento puede beberse, el problema es aun más grave si analizamos que no sólo se desperdicia el líquido sino que también se llega a contaminar por el uso de pesticidas y otros productos químicos derivados de procesos de producción agrícola, automotriz, textil, constructor y minero, que ya se ubican en las urbes.

En América se concentra la mayor cantidad de agua del mundo. Tan sólo Sudamérica posee el 47 por ciento del agua dulce del planeta, concentrada en su mayoría en Brasil, sin embargo el mayor problema de Latinoamérica son las aguas residuales. Naciones Unidas dio a conocer que sólo el 30 por ciento de las aguas residuales son tratadas con procesos adecuados, debido a –entre otros factores- la incapacidad financiera de los gobiernos, problema que se agrava si consideramos que por lo menos el 60 por ciento de la población latina vive en zonas costeras, y que la mayor parte de sus desechos se descargan en el mar sin ser previamente tratadas. Por lo tanto si uno de los principales problemas al que nos enfrentamos son las descargas de aguas residuales sin tratar, es necesario legislar políticas eficientes de manejo de aguas residuales.

En México, la contaminación de las cuencas con residuos sólidos no es la única preocupación, se advierte que tan sólo el 27% de las aguas residuales que se vierten en arroyos, ríos y barrancas reciben tratamiento previo a su regreso a los cauces naturales, dicho porcentaje es ínfimo a pesar de que como se ha señalado existe normatividad vigente que "obliga" a los usuarios de las aguas nacionales a tratar sus aguas residuales antes de descargarlas en algún cuerpo de agua nacional.

Las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. Las primeras corresponden a las que son manejadas por los sistemas de alcantarillado municipales urbanos y rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargadas directamente a los cuerpos receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria autoabastecida las cuales son administradas por la Comisión Nacional del Agua, cabe destacar que mientras la industria ésta cumpliendo con sus obligaciones en materia de tratamiento y descargas de aguas residuales, los municipios no, situación por la cual sus descargas, constituyen la mayor fuente de contaminación del líquido en el país.

La legislación actual se sustenta sobre una serie de principios que impregnan la ley y las políticas hídricas nacionales. Entre los principios de mayor importancia encontramos: *"el agua es un asunto de seguridad nacional"* y *"quien contamina paga"*, a saber, quienes contaminen los recursos hídricos son responsables de restaurar su calidad conforme a las leyes en la materia. En abstracto este principio obliga a todo el que cuente con un título de concesión o asignación a restaurar la calidad del agua.

En materia de aguas residuales la Ley de Aguas Nacionales establece como obligatoria la obtención de un permiso de descarga, el cual se define como el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, a las personas físicas o morales de carácter público o privado. En este documento la autoridad dicta una serie de condiciones particulares que deben de cumplir las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores. Las facultades de la autoridad en materia de descarga de aguas residuales (desde otorgar los permisos respectivos, hasta establecer las condiciones particulares que las descargas de aguas residuales deben cumplir) se consideran de vital importancia para la correcta gestión y preservación del líquido.

En cuanto a descargas de agua residual, la ley determina diversas obligaciones, entre las cuales encontramos:

a) Que corresponde al municipio, Distrito Federal y al Estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales derivadas del uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones

particulares de descarga que le sean determinadas.

b) La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables de realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación, y en su caso, para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior.

Por otra parte la Ley de Aguas Nacionales establece de manera expresa: "*Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente ley, deberán tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores, cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores*".

Entre las facultades que la ley confiere a la Autoridad del Agua encontramos que ésta puede suspender las actividades que den origen a las descargas de aguas residuales, cuando la calidad de las descargas no se sujete a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, a las condiciones particulares de descarga, o a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos. Asimismo existen atribuciones para que la Autoridad del Agua revoque el permiso de descarga de aguas residuales cuando existen faltas u omisiones de este tipo.

Otra de las facultades que en materia de descarga de aguas residuales tiene la Comisión Nacional del Agua es la de realizar la inspección o fiscalización de las descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley con el fin de poder aplicar las sanciones respectivas previstas en la Ley en el caso de incumplimiento. Por otro lado, la normatividad establece en armonía con el principio "*quien contamina paga*" que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de Ley por Autoridad competente.

Por último la ley prevé un supuesto novedoso –aunque inoperante- en el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando la suspensión o cese de operación de una planta de tratamiento de aguas residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud, a la seguridad de la población o graves daños a ecosistemas vitales.

En ese supuesto, "la Autoridad del Agua" por sí o a solicitud de autoridad distinta, en función de sus respectivas competencias, ordenará la suspensión de las actividades que originen la descarga, y cuando esto no fuera posible o conveniente, "la Autoridad del Agua" nombrará un interventor para que se haga cargo de la administración y operación provisional de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, hasta que se suspendan las actividades o se considere superada la gravedad de la descarga, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en que se hubiera podido incurrir, también se

establece que los gastos que dicha intervención ocasione serán con cargo a los titulares del permiso de descarga y en caso de no cubrirse dentro de los treinta días siguientes a su requerimiento por "la Autoridad del Agua", los gastos tendrán el carácter de crédito fiscal.

En la normatividad vigente, el agua se considera un asunto de seguridad nacional, esta situación motivó al legislador a establecer la obligación de tratar las aguas residuales previa descarga a los cuerpos receptores, deber que se extiende a todos los usuarios del líquido, sean concesionarios o asignatarios. A pesar de lo anterior como se ha señalado, no existe una forma efectiva de constreñir al municipio a fin de que trate sus aguas residuales antes de descargarlas.

La autoridad del agua se encuentra facultada para suspender o revocar la asignación o concesión en caso de incumplimiento de las condiciones del título o de las obligaciones establecidas por la normatividad vigente, también puede suspender las actividades que ocasionen daño ambiental.

No obstante, cuando un municipio incumple con alguna o con todas sus obligaciones en materia de agua, la realidad se impone a la normatividad, pues suspender o revocar la asignación significaría dejar sin suministro de agua a los usuarios, mientras que suspender las actividades que ocasionan daño ambiental, es decir, detener las descargas de aguas municipales sin tratar, causaría un foco de infección en los centros urbanos.

Esta encrucijada puede ser resuelta por la autoridad a través de una figura jurídica denominada "*interventor*", la cual le permite a la autoridad tratar las aguas residuales de los municipios y fincarles créditos fiscales a fin de hacer efectivo el cobro por el servicio, empero debido a la naturaleza jurídica de los bienes del municipio (cualidad legal de inembargables) resulta imposible hacer efectivos los créditos fiscales que se generen por la sustitución en la prestación del servicio.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa, no es limitar a los municipios en el ejercicio de sus atribuciones, ya que no observa medida alguna que restrinja las mismas, y por ello, los municipios cumplidos siguen con el ejercicio correcto de sus atribuciones, pero evidentemente esta medida va a preocupar al municipio omiso en el ejercicio de su encargo constitucional, que no tendrá mayor alternativa que cumplir.

En otro orden de ideas, se propone se reforme el inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se prevé que en ningún caso las contribuciones que se establezcan a favor de los municipios, sea inferior al costo de la prestación del servicio.

La presente iniciativa pretende fortalecer a los municipios y la calidad de los servicios que prestan, al garantizar que las legislaturas locales establezcan las contribuciones a favor de los municipios que cubran como mínimo la prestación de los servicios que establece la Constitución, con ello se fortalecerá de manera directa el principio de sustentabilidad del recurso, previendo contribuciones que permitan la autosuficiencia en la prestación del servicio.

Las Legislaturas de los Gobiernos de los Estados de acuerdo con las atribuciones que les confiere el Artículo 115 de la Constitución, tienen como facultad exclusiva establecer las contribuciones por lo que se refiere a los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos que formarán parte de la hacienda pública municipal.

En la mayoría de las legislaciones locales, se otorga la atribución a los municipios para que estos, de forma directa o a través de los organismos operadores, presenten a las legislaturas locales propuestas de tarifas por el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, sin embargo todas omiten lo referente al tratamiento de las descargas de aguas residuales, servicio que sin lugar a dudas forma parte de la prestación del de conformidad con el artículo 115 fracción III inciso a) de la Constitución. Por lo tanto resulta indispensable que los municipios sigan proponiendo las

tarifas por la prestación del servicio, pero que las Legislaturas locales no acepten aquellas que sean inferiores a lo que realmente le cuesta al municipio la prestación del servicio, ya que este es el principio fundamental que permitirá la sustentabilidad en el uso del recurso.

Esto es, la ley secundaria establece como principio en materia de cobro "*el agua paga el agua"*, es decir, que la tarifa por el uso del agua, debe corresponder a su costo real, situación que en las zonas urbanas no se cumple en lo absoluto, un ejemplo claro es el de algunos Estados en donde la tarifa mínima asciende a 1.4298 salarios mínimos por $15m^3$ de agua, lo que equivale a $0.0049 por litro de agua, mientras que el costo de una botella de agua es de aproximadamente $8.00 el litro.

Si consideramos que una persona en promedio utiliza 250 litros de agua al día, podemos afirmar que el pago que tendría que cubrir en el municipio es el equivalente a $1.23, mientras que por el consumo de esa misma cantidad industrializada tendría que pagar $2,000.00 esto es, el 1,626% más que lo que le cobra el municipio, sin contar que únicamente cubre el volumen de agua, no así el alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, por lo que al señalar que los derechos no podrán ser inferiores al costo del servicio, se hace sustentable la prestación del mismo.

En 1999 existía una gran necesidad de inversión en el tratamiento de aguas residuales, en México era inferior al 15% de su tratamiento.

Para el año 2003, se esperaba contar con 185 mil tomas de agua potable y 130 mil descargas de drenaje sanitario, así como el tratamiento del 100 % del agua descargada, esta proyección no se ha cumplido en lo más mínimo.

En el año 2007 la Comisión Nacional del Agua censó 1,710 plantas en operación las cuales trataron 79.3 m3/s, es decir el 38.3% de los 207 m3/s, recolectados en los sistemas de alcantarillado, en la normatividad actual existen una serie de dispositivos encaminados a obligar a los concesionarios o asignatarios de las aguas nacionales a tratar sus aguas residuales, no obstante las cifras muestran que la Ley se ha transformado en un referente sin aplicación en la realidad, que afecta exponencialmente la disponibilidad de agua.

Aunado a lo anterior a que la mayoría de las legislaciones locales no prevén el pago de un derecho por las descargas al alcantarillado, o bien lo prevé conjuntamente con la cuota por el suministro, lo que no permite diferenciar el derecho que se destina a la descarga frente a la del suministro.

De la información anterior podemos deducir que si bien todos los municipios cobran los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, no lo cobran con el criterio adecuado, es decir, incumplen con el principio de autosuficiencia del recurso hídrico. Un cobro responsable debe considerar que la tarifa real encierra una amplitud tal que abarca la totalidad de acciones y factores de costo en los que incide un servicio público de agua, tal como lo requiere la población y como lo exijan las condiciones físicas en cada caso, de tal manera que una tarifa real debería de cubrir los siguientes conceptos: operación y mantenimiento adecuados, consumo de energía eléctrica, potabilización, derechos por uso de agua, servicios a la población rural de cada municipio; rehabilitación de la infraestructura obsoleta y renovación periódica de la infraestructura. Un aspecto esencial en materia de inversiones hídricas, consiste en lograr que el propio subsector genere los recursos económicos que requiere para su desarrollo.

En resumen, esta iniciativa no prevé limitar las atribuciones constitucionales de los municipios eficientes y responsables en la prestación de los servicios a su cargo, por el contrario la iniciativa se dirige a los supuestos claros de incumplimiento por parte de aquellos, así como hacer constitucionales los principios de *"el agua paga el agua" y "quien contamina paga", con ello* el municipio no podrá evitar el cumplimiento de la Ley, aunado a que fortaleciendo de su hacienda ya que sólo se podrán establecer contribuciones que cubran proporcionalmente el costo de los servicios.

Las anteriores medidas, aunque drásticas, resultan necesarias, durante siglos el pensamiento antropocentrista dio por sentado que los recursos naturales estaban a disposición del hombre para ser explotados de manera irracional, este *modus vivendi* es la causa de los innumerables problemas ambientales que enfrentamos, la disyuntiva es obvia, cambiar de hábitos o sucumbir por ellos, la solución no es para mañana y no depende de nadie más que de nosotros.

Ser la única especie animal con raciocinio, debería hacernos los protectores del mundo que cohabitamos con una infinidad de especies -cuyas vidas también están amenazadas-, sin embargo a pesar de la razón y las serias circunstancias ambientales, los gobiernos del mundo parecen preocuparse más por otros temas que por procurar lo poco que queda de un lugar que en no mucho tiempo extrañaremos. Es hora de actuar, antes de que todo esfuerzo sea insuficiente. La conciencia es sin duda la única vía de cambiar los hábitos de las personas, no obstante la situación apremia, y por lo tanto estamos obligados a tomar medidas urgentes, efectivas y a corto plazo, a fin de detectar las fuentes de mayor daño que a través de una reforma normativa podemos resolver.

En virtud de lo antes argüido, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos a la fracción III y se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. …

I. …

II…

…

III. …

a) al .i) …

….

…

En el caso de los servicios a los que se refiere el inciso a), cuando derivado de la no prestación de los servicios, deficiencia en su prestación o incumplimiento de la normatividad aplicable, se puedan ocasionar perjuicios a la salud, a la seguridad de la población o daños a los ecosistemas, la respectiva entidad federativa, previo dictamen que al efecto emita la autoridad competente sustituirá al municipio. En el supuesto de que la entidad federativa, sea quien preste el servicio o una vez que sustituya al municipio incurra en cualquiera de los supuestos antes previstos, la Federación podrá asumir la prestación del servicio.

Los gastos que se generen en términos del párrafo anterior se cubrirán con cargo a las participaciones o aportaciones en favor del municipio, conforme al procedimiento y condiciones que para tal efecto determine el Congreso de la Unión en la Ley de la materia; lo anterior hasta en tanto el responsable regularice las omisiones motivo de la sustitución.

…

IV. …

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. **En este supuesto, las contribuciones que se determinen por las Legislaturas Locales, en ningún caso podrán ser inferiores al costo que se genere por la prestación del servicio.**

…

V a X.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un término que no deberá de exceder de 36 meses contados a partir de la publicación de este decreto, realizará las modificaciones correspondientes a la Ley de Aguas Nacionales para aplicar las intervenciones establecidas por las reformas del artículo 115.

Senador Eduardo T. Nava Bolaños

DEL SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 192 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO

INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 192, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 193, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El suscrito, **SILVANO AUREOLES CONEJO,** Senador a la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se adiciona un párrafo segundo al artículo 192, y se reforma el artículo 193, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La jurisprudencia constituye uno de los mecanismos para adecuar y modificar las normas jurídicas a la realidad social constantemente cambiante, para que se adapte a las nuevas condiciones, y no tener que acudir al procedimiento legislativo.

En este sentido, la evolución de la jurisprudencia en nuestro país ha sido un proceso largo y lento, ya que la obligatoriedad de esta importante figura ha sido paulatina hasta llegar hoy en día a ser la institución de referencia obligatoria en el proceso de procurar y administrar justicia.

La jurisprudencia obligatoria se estableció en México por primera vez en el proyecto elaborado por Ignacio L. Vallarta que pasó a ser la Ley de Amparo de 14 de diciembre de 1882; y su consagración definitiva se llevo a cabo en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 26 de diciembre de 1908. [12]

A partir de la vigencia de la Ley de Amparo de 1936 la jurisprudencia sólo podía establecerse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, exclusivamente en los juicios de amparo y versar sobre la interpretación de la Constitución y leyes federales. [13]

Actualmente, en virtud de las reformas realizadas en 1951, el alcance la jurisprudencia obligatoria,

[12] Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, La jurisprudencia obligatoria de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, [citado 1/12/2009], Boletín Mexicano de Derecho Comparado (Núm. 83), Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/83/art/art3.htm.

[13] *ídem.*

abarca también a los tratados internacionales. Asimismo, la materia sobre la cual puede establecerse jurisprudencia se extendió a las leyes locales y a los reglamentos federales y locales, abarcando de este modo la gran mayoría de disposiciones legislativas del país.

Cuando se consagró la jurisprudencia sólo era obligatoria para los jueces de Distrito, pero desde finales del siglo pasado ha aumentado la lista de tribunales, de tal modo que en la actualidad obliga tanto los tribunales federales como locales, pertenezcan o no a la estructura del Poder Judicial de la Federación.

Es necesario acentuar que la importancia de la jurisprudencia se puede resumir en los siguientes puntos:

a) La norma jurisprudencial permite al juzgador trasladar la típica generalidad y abstracción de la ley hacia la concreción del caso, puesto que aún sin ser tan particular como la propia sentencia, representa un acercamiento importante a las cambiantes necesidades del momento.

b) En este sentido, la norma jurisprudencial frecuentemente hace de puente entre las normas típicamente generales -la ley, el reglamento, el tratado, etcétera- y la norma particular y concreta que resuelve un caso controvertido -la parte dispositiva o resolutiva de la sentencia-.

De este modo, la jurisprudencia contribuye a completar el ordenamiento y muchas veces los criterios que se han adoptado por vía jurisprudencial se recogen posteriormente en leyes del Congreso; es creadora de nuevas figuras jurídicas y modeladora de las ya existentes.

> ***"La norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se aplica [...] la norma de grado superior tiene, con respecto del acto de su aplicación a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante ese acto".***[14]

Esto significa, por ejemplo, que en ocasiones los tribunales encargados de la creación jurisprudencial deben crear nuevas reglas para solucionar un caso concreto, realizando una labor integradora y no meramente interpretativa del ordenamiento.

> ***"La jurisprudencia no sólo ha interpretado y adaptado las leyes a las cambiantes necesidades sociales sino que ha integrado y desenvuelto el ordenamiento jurídico en un complejo proceso al que no es ajena una auténtica función creadora del derecho" "También las leyes envejecen".***[15]

La jurisprudencia cumple con ciertas necesidades de seguridad jurídica que

[14] Kelsen, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, trad. Y notas de Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, 1995.
[15] Montoro Ballesteros, A., "Ideologías y fuentes del derecho", Revista de Estudios Políticos, núm. 40, julio-agosto de 1984, pp. 72-73.

indican la conveniencia y la necesidad de conocer la interpretación que le están dando los tribunales a las normas de un determinado sistema jurídico, además de dotar a esa labor interpretativa de un mínimo de uniformidad que permita tanto a particulares como a autoridades conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver una controversia.

> ***"Los conceptos inspiradores de la jurisprudencia mexicana parten de la gran necesidad que el Estado Moderno tiene de estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para los órganos judiciales"*** [16]

La jurisprudencia es un instrumento que permite llenar las lagunas, tanto las de conocimiento como las de reconocimiento de un sistema jurídico determinado, en virtud de lo cual podemos afirmar que cada caso tiene una solución dentro del propio sistema. De tal forma que el proceso de aplicación de las normas permite determinar su significado, esto confiere certidumbre sobre su aplicación, eliminando así la arbitrariedad de la autoridad, lo cual redunda en una mayor seguridad jurídica. [17]

Los motivos que impulsaron a Vallarta para dar obligatoriedad a los fallos de la Suprema Corte fueron, fijar el derecho constitucional a través de la interpretación de la Ley Suprema, permitir conocer y a la vez ilustrar sobre las materias relacionadas con el juicio de amparo, y servir como criterio de decisión para los jueces de Distrito.

Se apoyó en el sistema judicial norteamericano con el fin de que las ejecutorias de la Suprema Corte desarrollaran la doble función que tenían encomendada, que eran:

a) La protección de la libertad del individuo en los casos concretos que le sean sometidos; y,

b) Fijar el derecho público de la nación, es decir, establecer a través de la interpretación judicial el sentido y alcance de la Ley Suprema.

En el derivado de lo anterior podríamos concluir que la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, las cuales tiene que apegar su actuación (tanto en sus procedimientos como en sus resoluciones) a las reglas que establece el Máximo Tribunal del país, pero existe una autoridad que escapa a esta obligación, nos referimos al ministerio publico de la federación y de los estados, los cuales por su naturaleza administrativa, eluden su cumplimiento a pesar de ser obligatoria para todo el sistema jurídico.

Es cierto que el ministerio público nos es un tribunal sino, la representación social del Estado, pero en sus actuaciones hace una interpretación libre de las leyes, ya que la lógica se encuentra que sus acciona deberán ser respaldadas por un juez, pero exigen actos de autoridad de esta institución

[16] Castro, Juventino V., *Lecciones de garantías y amparo*, 7a. ed., México, 1991, p. 563.

[17] Cfr. Huerta, Ochoa Carla, La Jurisprudencia como Técnica, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, [citado 1/12/2009], Boletín Mexicano de Derecho Comparado (Núm. 95), Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/95/art/art4.htm#N20.

que beberían ser apegados a la interpretación e integración de la norma elaborada por la jurisprudencia obligatoria.

Ejemplificamos el caso de que un detenido por cualquier delito en el plazo constitucional, este según la jurisprudencia tiene el derecho a entrevistarse en privado con su defensor antes de emitir su declaración, situación que en la práctica no sucede.

Localización: Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 132
Tesis: 1a./J. 23/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Penal

DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

*Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala considera que la "asistencia" no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, **en caso de que así lo decida, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor.***

Amparo directo en revisión 1236/2004. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

Amparo directo en revisión 759/2005. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

Amparo directo en revisión 1782/2005. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.

Amparo directo en revisión 1908/2005. 30 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Amparo directo en revisión 2151/2005. 22 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Tesis de jurisprudencia 23/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil seis.

Otro ejemplo es el derecho constitucional a no ser incomunicado al momento de ser detenido, situación muy frecuente es las detenciones por los agentes judiciales o por el ejército, y lo que esgrime el Ministerio Publico, tanto local como federal es que no le es aplicable en su actuación la jurisprudencia, y al asistir al amparo por este incomunicación ilegal, y la autoridad judicial otorgarlo, el Ministerio Publico consigna ante un juez, con lo cual se da un cambio en la situación jurídica del inculpado y el amparo otorgado por el juez federal pierde toda eficacia, ya que por ley este se debe sobreseer.

Refuerza nuestra propuesta de hacer obligatoria la jurisprudencia para el ministerio público, el hecho de que tratándose de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, la representación social, aún cuando tenga certeza de la misma, no puede dejar de aplicar la ley o leyes ya declaradas inconstitucionales, sino que deberá ser un juez federal a través del amparo, quien corrija al actuación del ministerio público.

Una cuestión interesante es determinar la sanción a que el servidor público se haría acreedor en caso de no observar la interpretación constitucional dotada de obligatoriedad. Como señala Zertuche García[18] **no existe en nuestro orden jurídico una sanción para el juez que se aparte de la jurisprudencia establecida, la Ley de Amparo es omisa al respecto.**

Sin embargo, en la Ley de 1882 sí se estableció una sanción para aquéllos jueces que violaran la jurisprudencia de la Corte. Esta se encontraba prevista en el artículo 70 de la Ley, a su vez artículo 73 del proyecto de Vallarta, en el que se señaló:

> ***"La concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo y con prisión de seis meses a tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha procedido por falta de instrucción o descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año."***

Los límites de la responsabilidad de los jueces de Distrito a este respecto los encontramos en el artículo 80 de la Ley que señaló:. Artículo 80. La Corte no consignará a los jueces de Distrito al tribunal que debe juzgarlos, por simples errores de opinión: como tales se tendrán las equivocaciones en que incurran los jueces en casos dudosos y difíciles, no definidos por la interpretación judicial o por la doctrina de los autores.

Así, la enorme construcción que representa la jurisprudencia obligatoria pende del delgado hilo de la buena voluntad de los jueces, toda vez que carece de medios coactivos para su observancia y en su caso para reprimir su desconocimiento intencional. No es suficiente la autoridad implícita de la jurisprudencia para que ésta sea efectiva o las correcciones disciplinarias; esto se agrava si lo vemos desde la perspectiva de las normas constitucionales, donde el desacato a la jurisprudencia que establece su sentido y alcance se traduce en una violación manifiesta a la Constitución que debe ser severamente reprimida.

La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de mayo de 1995 introdujo algunos aspectos favorables en este sentido, ya que en su artículo 130 señala: "Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe."

Por lo anterior proponemos que se sancione el doloso incumplimiento de la Jurisprudencia declarada como obligatoria, de igual forma creemos que se debe castigar el error inexcusable, catalogado como notoria ineptitud o descuido en el ejercicio del servicio público con la pérdida del empleo cargo o comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

[18] Cfr. Zertuche García, La jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano, 2a. ed. , México, Porrúa, 1992, pp. 261-275..

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 192, y se reforma el artículo 193, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

> ***Artículo 192.-*** *La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales,* ***así como al Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas.***
>
> ***La inobservancia dolosa de la jurisprudencia declarada obligatoria, se castigará con la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por 10 años, y si sólo ha procedido con notoria ineptitud se castigará con la pérdida de empleo, cargo o comisión.***
>
> *[…]*
>
> ***Artículo 193.-*** *La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales,* ***así como al Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas.***
>
> *[…]*

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los días 2 del mes de Diciembre de 2009.

SEN. SILVANO AUREOLES CONEJO

DE LOS SENADORES FEDERICO DÖRING CASAR Y MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ANEXA UN CAPÍTULO IV AL TÍTULO CUARTO EN GASTO FEDERALIZADO, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.



SEN. FEDERICO DÖRING CASAR



SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS

Los que suscriben **Federico Döring Casar y Minerva Hernández Ramos,** Senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Fracción II del Artículo 55 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente; **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se anexa un capitulo IV al Titulo Cuarto en Gasto Federalizado, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política presupuestaria constituye uno de los principales instrumentos de los que dispone el Estado para promover el crecimiento económico y el empleo del país, así como para aliviar las disparidades sociales y regionales, mediante la determinación del monto del gasto y su asignación a las prioridades nacionales. A nivel global, la consistencia en los ingresos y gastos contribuye a la estabilidad macroeconómica y brinda

certidumbre a los agentes económicos en los procesos de planeación y ejecución de las actividades productivas.

Los gobiernos verdaderamente democráticos no sólo deben garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino además deben asegurar un ejercicio transparente de los recursos públicos, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño del gobierno en sus diferentes niveles: Federal, Estatal y Municipal.

Por ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134 que los recursos económicos que disponga la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político – administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información constituyen piezas claves en el sistema de contrapesos y controles que hacen de la democracia el único sistema político que busca ceñir en el marco de la Ley al poder político con el poder ciudadano. En un estado democrático se busca crear condiciones de transparencia en el ejercicio del poder para establecer una nueva relación entre ciudadanos y gobiernos. En este sentido, son principios fundamentales que favorecen una efectiva rendición de cuentas y generara claridad en las acciones de gobierno.

Asimismo, con la transparencia y la rendición de cuentas se combate la discrecionalidad y la corrupción. Hoy más que nunca los ciudadanos deben de contar con las disposiciones que garanticen el ejercicio responsable de los recursos públicos, pero no sólo eso, sino que se verifique y de seguimiento a los resultados obtenidos con su implementación.

Habida cuenta de que el Presupuesto de Egresos de la Nación, es la herramienta más importante para definir las políticas públicas del país, se considera necesario que la totalidad de los recursos públicos, incluidos los que la Federación canaliza a la población por medio de otros niveles de gobierno, (entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales) debe considerarse necesario reorientar los recursos públicos a programas y proyectos de inversión que tengan un mayor impacto en la población beneficiada, fortaleciendo con ello la infraestructura nacional.

En este sentido el ejercicio del gasto público, no finaliza con el otorgamiento de los recursos federales a los otros órdenes de gobierno, como es el caso de las entidades federativas, y por su conducto a los municipios o las demarcaciones territoriales. Sino que justo inicia ahí, por lo que el ejercicio debe cumplimentarse en todas las fases del proceso presupuestario, la planeación, asignación, ejercicio y rendición de cuentas.

Los ciudadanos de los Estados y Municipios, tienen como derecho conocer la forma y términos en que se aplican los recursos de manera integral, es decir, no sólo los que se generan en las propias entidades federativas, y sus municipios; sino especialmente los que provienen del gasto federal que constituye una parte considerable de los recursos disponibles en los Estados y Municipios. Las últimas cifras revelan que en general, las entidades federativas ejercen recursos en una razón de 9 a 1 entre federales y propios.

Pero sobre todo hoy más que nunca es obligación de los gobiernos, estatales, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, asegurar que los recursos públicos se destinen a los fines específicos para los que fueron asignados, que los recursos que no pierden su naturaleza y deben estar sujetos a una serie de disposiciones legales que deben cumplimentarse pero que hasta ahora no están contenidos en alguna disposición legal, pero que al mismo tiempo de conceder el derecho de ejercer los recursos federales, implique también la obligación de honrar el cumplimiento de los programas, el avance físico de los objetivos y metas a los que se destina el gasto y que en última instancia garantice el uso eficiente del gasto, a favor de los ciudadanos de las entidades federativas de los estados y municipios del país.

Debe existir un compromiso de eficiencia en el quehacer de los gobiernos locales, de tal manera que, en los programas donde se requiere la participación de las entidades, el otorgamiento de los apoyos federales se dé paso a medidas en que las propias entidades y sus municipios efectúan las aportaciones respectivas, siempre que tales autoridades se encuentren al corriente de los pagos de las contribuciones federales o de otras obligaciones con la Federación, o bien cuando se

hayan adherido al esquema de regularización de adeudos de la federación. De otra forma no existirán estímulos para el cumplimiento de las obligaciones de los órganos de gobierno, y entonces se promueve la cultura del no pago desde el propio gobierno.

Es por ello que la presente iniciativa pretende incorporar en la ley de manera expresa estas obligaciones para los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a fin de evitar que se utilicen de manera discrecional, al margen de los compromisos programáticos y de los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal, garantizando la rendición puntual de cuentas, la transparencia, y el buen gobierno, de tal manera que se asegure en todos los ámbitos del que hacer público, que cada peso se aplica para el bienestar de los mexicanos.

Para ello con las modificaciones correspondientes, se busca instituir y reforzar medidas para asegurar que el gasto público se realice de una forma eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, procurando que las Entidades Federativas y los municipios ejerzan de manera responsable los dineros públicos y trabajen dentro de un marco de austeridad y racionalidad en el uso de los mismos.

En atención al esfuerzo y sacrificio que han realizado las familias y empresas mexicanas, los gobiernos locales de todo el país, deben responder con solidaridad y responsabilidad y se debe fijar como prioridad, aplicar el gasto a los programas y actividades establecidos y con los ritmos autorizados, así como el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el propio presupuesto y que este sea sujeto de fiscalización y supervisión puntual.

Por lo tanto se deben impulsar modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios de ministración y corresponsabilidad en el ejercicio de la función pública, que comparten todos los niveles de gobierno, particularmente destacar el logro de resultados y su consistencia con los objetivos planteados. De esta manera, se conoce en qué gasta el gobierno, pero sobre todo, qué resultados entrega a la sociedad al ejercer el presupuesto.

Con estas mejoras al cuerpo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pretende dar un paso indispensable en la calidad del gasto otorgado a entidades y municipios, que no en pocas ocasiones se ejerce sin compromisos ni parámetro alguno, además de que en consecuencia, se logre incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, eliminar la discrecionalidad en el uso de los dineros públicos en todo el país, promover las condiciones para el desarrollo económico y social, pero sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población para obtener:

- Un adecuado proceso presupuestario que identifique el destino del gasto público, y vincularlo con los objetivos estratégicos de la planeación para el desarrollo nacional;

- Nuevos métodos para definir objetivos, indicadores de desempeño y metas para los programas Federales y Estatales, con el fin de incorporar, paulatinamente, información del desempeño en las decisiones presupuestarias;

- Desarrollar los sistemas necesarios para el seguimiento de las metas de indicadores establecidos en los programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de mejorar la toma de decisiones para la asignación y reasignación presupuestaria, y la rendición de cuentas.

Por otro lado la adición propuesta para el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, tiene la finalidad de que la información referente a los pagos que se realicen en materia de servicios, con recursos federales, deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en las respectivas páginas de Internet de las Secretarías de competentes de las entidades federativas y del Gobierno Federal, así como remitir dicha información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

En cuanto al artículo 26 de la misma Ley, la adición pretende evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. En consecuencia propone que la Secretaría de Educación Pública informe oportunamente al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente,

del contenido de las propuestas del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales así como de las acciones que emprenderá al respecto. También se precisa que no podrá erogarse ningún recurso adicional a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspondiente.

Para finalizar con las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, la propuesta para el artículo 28 tiene el objetivo de que las entidades federativas informen trimestralmente a la SEP de los pagos retroactivos realizados durante el periodo correspondiente, detallando las plazas correspondientes y el periodo que comprende el pago retroactivo.

Por lo anteriormente expuesto los que suscriben la presente iniciativa al calce del mismo, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Capitulo IV
De la regulación en los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Artículo 83 bis.- El ejercicio de los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año y que sean transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a lo siguiente:

I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cumplan con lo previsto en las disposiciones aplicables.

Tratándose de programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, éstos serán depositados en la Tesorería de la Federación en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de que los mismos sean ministrados una vez que dichos órdenes de gobierno hayan realizado las aportaciones de recursos que les correspondan. Los depósitos se identificarán de acuerdo con el programa al que pertenezcan y se señalará la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial del Distrito Federal correspondiente.

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser ministrados cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal presenten adeudos en el pago de las contribuciones federales y de otras obligaciones que tengan con la Federación. Salvo que se trate de los órdenes de gobierno que se hayan adherido a esquemas de regularización de adeudos establecidos por el Gobierno Federal en los términos de las disposiciones aplicables y se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones pactadas que deriven de los mismos. Para tal efecto, los servidores públicos competentes de dichos órdenes de gobierno deberán manifestar por escrito, de manera previa a la primera ministración de recursos, que están al corriente en dichas contribuciones u obligaciones o, en su caso, que se han adherido a los esquemas de

regularización de adeudos respectivos y que se encuentran al corriente en las obligaciones que derivan de éstos.

Cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incumplan lo dispuesto en las disposiciones federales que regulan el ejercicio y la rendición de cuentas, respecto a los recursos públicos federales a que se refiere el párrafo segundo de esta fracción, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los que no hayan devengado en los términos de dichas disposiciones.

En caso de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal detecten que las entidades federativas, municipios o, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no han cumplido las obligaciones que les corresponden después de otorgados los recursos a que se refiere esta fracción, o no han ejercido los recursos en los términos de las disposiciones aplicables o detecten que éstos han sido desviados para propósitos distintos a los autorizados, ejercerán las acciones correspondientes para que dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, a más tardar en un plazo de 30 días naturales a partir del requerimiento que realicen las dependencias y entidades, sin perjuicio de las acciones que lleven a cabo las instancias de fiscalización en el ámbito de su competencia;

III. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos de las disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, actualizarán los indicadores para resultados de los fondos de aportaciones federales y de los demás recursos federales a que se refiere este artículo, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales en los términos del artículo 85 de esta ley.

No se continuarán las ministraciones de subsidios o gasto reasignado, en caso de que las entidades federativas , municipios o demarcaciones territoriales no cuenten con indicadores de resultados en términos de las disposiciones federales aplicables o cuando no se cuente con un programa de evaluación sobre la aplicación de los recursos federales que reciben las entidades federativas y municipios, establecido por las instancias técnicas locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. En términos de los artículos 79, 85, 107 y 110 de esta ley y 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, informarán trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales a que se refiere este artículo.

Dichos órdenes de gobierno informarán de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Las dependencias y entidades suspenderán la ministración de los recursos federales distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, a aquellas entidades federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que no envíen dicha información en los plazos establecidos en las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará acceso al sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a la Auditoría Superior de la Federación y a las instancias de fiscalización, de control y de evaluación de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.

Los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán fiscalizarse por la Auditoría Superior de la Federación con el

objeto de verificar que se hayan aplicado a los destinos para los cuales fueron otorgados. Asimismo, se deberá verificar que se hayan cumplido con los plazos y condiciones establecidos para la aplicación de los referidos recursos;

V. Los recursos públicos federales a que se refiere este artículo se sujetarán a evaluaciones del desempeño que establezcan las instancias técnicas de evaluación federal y locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas evaluaciones se realizarán con base en indicadores, a efecto de que se verifique el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos. Asimismo, las evaluaciones a que se refiere este párrafo se sujetarán a los criterios establecidos en el artículo 110, fracciones I a VI, de esta Ley.

Los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior serán publicados en las respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas. Asimismo, se publicarán en las páginas de Internet de los gobiernos de las entidades federativas y, cuando cuenten con ellas, de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, los publicará en su página de Internet y los integrará al Informe Trimestral, en los términos del artículo 85 de esta Ley.

Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las dependencias coordinadoras de dichos fondos y de los recursos federales transferidos, acordarán con las entidades federativas y, por conducto de éstas, con los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. Dichas medidas serán reportadas en los términos del artículo 85 de esta Ley.

Para efectos de determinar la procedencia de continuar o, en su caso, cancelar la transferencia de los recursos federales, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, se tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño que se lleven a cabo conforme al programa anual de evaluación de las instancias técnicas de evaluación;

VI. Las dependencias y entidades sólo podrán transferir recursos federales a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables;

VII. En caso de que, en los términos de la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha Ley, los ajustes que fueran necesarios realizar a los recursos federales destinados a las entidades federativas deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados;

VIII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de las disposiciones aplicables, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, FIES.

En el caso de los subsidios que tengan el mismo destino, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir las disposiciones

correspondientes en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

IX. La Auditoría Superior de la Federación, dentro del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y que la información reportada corresponda con el ejercicio de los recursos entregados y con lo presentado en la Cuenta Pública. Asimismo, procederá en los términos de las disposiciones aplicables para imponer o promover las sanciones que correspondan cuando las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, no hayan entregado la información en los términos de la referida disposición.

Por otra parte con respecto a las adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal se propone lo siguiente:

Se adicionan: un tercer párrafo al artículo 25; un segundo párrafo al artículo 26; y, un tercer párrafo al artículo 28; todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

"Artículo 25.-….

I a VIII.….

"Para efectos de transparencia sobre el uso de las aportaciones federales, los pagos que se realicen en materia de adquisiciones, apoyos económicos, obras y servicios, la información deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en las respectivas páginas de Internet de las secretarías de estado competentes de las entidades federativas y del Gobierno Federal, las cuales deberán remitirla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

"Articulo 26.-….

"Para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas se sujetarán al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en la materia, publicado el 26 de febrero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades federativas, a través del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrán realizar propuestas para modificar dicho acuerdo. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública informará oportunamente al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, del contenido de tales propuestas y de las acciones que emprenderá al respecto. No podrá erogarse ningún recurso adicional a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspondiente.

"Artículo 28.-……

"Las entidades federativas deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Educación Pública los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, detallando las plazas correspondientes y el periodo que comprende el pago retroactivo. Los pagos retroactivos, con excepción de los correspondientes a los incrementos salariales, únicamente procederán hasta por 45 días naturales, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia durante dicho periodo en la plaza respectiva."

Transitorios.

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Federico Döring Casar **Sen. Minerva Hernández Ramos**

Atentamente,
Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de Diciembre de 2009.

DEL SEN. RICARDO TORRES ORIGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.



SEN. RICARDO TORRES ORIGEL

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura Presentes:

RICARDO TORRES ORIGEL, Senador de la República de la LXI Legislatura, integrante del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, por su conducto, la presente **Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123** Constitucional. Lo anterior, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sindicalismo nació en el siglo XIX. Surgió a consecuencia de la revolución industrial y la nueva realidad social que se presentaba: Los talleres en que había una relación entre el dueño y el aprendiz, dieron paso a una situación desventajosa para quienes prestaban servicios profesionales en las fábricas.

Esto llevó a la pobreza a los trabajadores y a su unidad. Las condiciones indignas en que prestaban sus servicios, permitieron una identificación entre ellos. Sus circunstancias eran similares, compartían la misma vida, intereses y propósitos. Así nacieron las primeras asociaciones de trabajadores.

El sindicalismo, sin duda, surgió para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Fue respuesta de una clase social para proteger sus intereses. Nunca para ser un instrumento de ventaja de unos cuantos dentro del mismo sindicato en contra de sus demás compañeros de clase.

En México, la misma definición de «Sindicato» contemplada en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, refuerza nuestra idea de que la asociación de trabajadores, tiene como fines el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses de clase.

Esta asociación de trabajadores tiene que ser libre. El artículo 123 Constitucional - Apartado A, fracción XVI, tratándose de los trabajadores en general y; Apartado B, en su fracción X, tratándose de los trabajadores al servicio del Estado- otorga la garantía o el derecho social a los trabajadores, para asociarse en sindicatos y defender sus intereses.

Indudablemente los sindicatos gozan de autonomía sindical, pero dicha autonomía no es absoluta, sino relativa. El sindicato, como institución jurídica, se regula por la Ley. Ella le concede esa autonomía para autodeterminarse, para otorgarse las normas que regirán a sus afiliados.

De esta forma, la Ley le establece limitantes: La solicitud de registro administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Junta de Conciliación y Arbitraje, el contenido de sus estatutos y los motivos y procedimientos de expulsión, por mencionar algunos ejemplos.

Los sindicatos deben democratizarse. Deben recuperar su espíritu original de defender los intereses de la clase trabajadora. Debe existir democracia hacia el interior y el Estado debe promoverla.

Con base en los argumentos anteriores, presento ante esta Asamblea la presente iniciativa que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

A) Reforma en materia de cuotas sindicales.

Las leyes laborales contemplan la posibilidad de que el patrón pueda realizar descuentos en los salarios de los trabajadores con objeto de cubrir sus cuotas sindicales. Dichas cuotas son acordadas por los trabajadores en la asamblea constitutiva.

Sin embargo, en algunos casos se presentan con sorpresa del trabajador, pues apenas recibe su primer pago, aparece en su comprobante la retención hecha por el patrón a su salario, sin que haya tenido, hasta ese momento, contacto alguno con el sindicato correspondiente.

Además, la Ley no promueve la transparencia y la participación de los integrantes del sindicato en cuanto a la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales que se les retendrá de manera obligatoria.

Por estas razones propongo:

1. Que ya no se permita al patrón la retención de las cuotas sindicales del trabajador. Pues estando legitimado el sindicato en la defensa de los intereses de sus trabajadores afiliados, éstos harán su pago correspondiente.

2. Que la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales se revisen año con año con la participación de todos los sindicalizados. Incluso con la posibilidad de que hagan una propuesta, fomentando con ello su participación en los asuntos internos del sindicato.

3. Que el trabajador conozca y acepte por escrito, desde el momento de su afiliación al sindicato, la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales que liquidará. La directiva le entregará además, copia certificada ante fedatario público de la manifestación de su voluntad.

B) Reforma en materia de transparencia sindical.

Para todos es conocido el tema de transparencia. En doquier se comenta que fomentando la transparencia se combate la opacidad y consecuentemente la corrupción en muchos ámbitos. La transparencia hoy en día se constituye en un elemento primordial en la vida nacional.

La corrupción se puede dar en todos los ámbitos, no solamente en la administración publica. Es un cáncer social que atenta contra la dignidad de las personas y que ha llegado a los sindicatos, afectando a los trabajadores que esperan mejorar sus condiciones laborales.

Los dirigentes sindicales han sido noticia nacional por su cuantioso poder político y económico. Generalmente no les interesa realmente la lucha por sus compañeros de clase, sino por el contrario, echan por delante a sus trabajadores como escudo.

Lo anterior se refleja en la percepción de los ciudadanos. De acuerdo a una encuesta telefónica nacional sobre corrupción realizada recientemente por un diario de circulación nacional, el 79 por ciento de los mexicanos perciben corrupción en los sindicatos.

No podemos seguir así. Tenemos como Estado la obligación de fortalecer el sindicalismo. Fomentar en cada sindicato la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Que cada trabajador conozca a detalle el manejo de la administración del patrimonio sindical.

Las cuotas y los bienes sindicales son patrimonio de los trabajadores. Por lo tanto, debe destinarse exclusivamente a su beneficio. Los trabajadores tienen todo el derecho de conocer el destino de los recursos que aportan, sin temor a ser expulsados del sindicato y separados de su empleo.

Derivado de lo anterior propongo:

1. Que como parte de la rendición de cuentas que la directiva hace sobre la administración del patrimonio sindical, se entregue un resumen de esa información a cada uno de los sindicalizados casi inmediatamente.

   Incluirá la presentación de la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes del sindicato, así como su destino, que no será

otro que el de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores afiliados.

2. Que la información que se presente con relación al punto anterior, sea revisada por un auditor externo que designe la asamblea. La directiva estará obligada a presentar a los sindicalizados el informe de los resultados obtenidos de dicha revisión.

   En caso de que un sindicalizado haya propuesto un auditor externo, se establece la imposibilidad de que sea expulsado del sindicato y posteriormente separado de su trabajo por el patrón, por lo menos mientras se dan los resultados de la revisión y un mes más.

3. Que, sin menoscabo de lo anterior, cualquier sindicalizado pueda solicitar, en cualquier momento, a la directiva del sindicato, la información que requiera sobre la administración del patrimonio sindical, debiendo tener rápidamente respuesta a su solicitud.

4. Que en caso de que la directiva del sindicato incumpla con lo establecido en materia de transparencia y rendición de cuentas, sea destituida y posteriormente se elija otra con nuevos integrantes conforme a sus estatutos.

Con base en los argumentos anteriores y en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se **reforma**: el primer párrafo del artículo 373. Se **adicionan**: dos párrafos a la fracción XII del artículo 371; un segundo párrafo al artículo 373; y, los artículos 373 bis, 373 ter y 373 quater. Se **derogan**: la fracción VI del artículo 110, y, la XXII del artículo 132. Todos de la **Ley Federal del Trabajo**; para quedar como sigue:

Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

I a V…

VI. Se deroga

VII…

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I a XXI…

XXII.- Se deroga.

XXIII a XXVIII…

Artículo 371.- Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I a XI…

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales.

La forma de pago y el monto de las cuotas sindicales serán aprobados anualmente en el mes de enero por la asamblea del sindicato, a propuesta de la directiva o por escrito del diez por ciento de la totalidad de los integrantes de la asamblea del sindicato.

El trabajador y un representante de la directiva, establecerán por escrito la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales que liquidará el trabajador. La directiva le entregará una copia del documento, certificada ante fedatario público.

XIII a XV…

Artículo 373.- La directiva de los sindicatos rendirá a la asamblea cada seis meses por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Entregará un resumen de esta información a cada uno de los sindicalizados dentro de los siete días siguientes.

La rendición de cuentas de la administración del patrimonio sindical incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, el cual será el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sin que pueda desviarse a otro fin.

Artículo 373 bis.- La información a que se refiere el artículo anterior, será revisada por un auditor externo al sindicato con cargo a los recursos presupuestados por el mismo para estos efectos.

La revisión tendrá como finalidad determinar si se realizaron actos contrarios a la normatividad que rige al sindicato. El auditor tendrá acceso a toda la información que necesite del sindicato para cumplir con su finalidad.

El auditor externo será designado por la asamblea de trabajadores a propuesta de la directiva o algún sindicalizado, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dio cuenta a la asamblea de la situación de la administración del patrimonio sindical.

La directiva del sindicato entregará a los sindicalizados el informe de los resultados obtenidos de las revisiones, a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que se designó al auditor externo.

Al sindicalizado que haya propuesto un auditor externo no se le aplicará lo dispuesto por el artículo 395 en su segundo párrafo, hasta un mes después a la fecha en que se haya cumplido cabalmente con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 373 ter.- Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 373 y 373 bis, cualquier sindicalizado podrá solicitar a la directiva del sindicato la información que requiera sobre la administración del patrimonio sindical, siempre y cuando la solicite respetuosamente por escrito.

Se le notificará al sindicalizado la fecha de entrega de la información requerida dentro de los siete días siguientes, o bien, se le solicitará por única ocasión que la aclare antes de que transcurran otros siete días, debiendo la directiva orientarlo en todo momento.

La información solicitada se entregará, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notificó al trabajador la entrega de dicha información o que éste haya aclarado su solicitud.

Artículo 373 quater.- En caso de que la directiva del sindicato incumpla con lo establecido en los artículos 373, 373 bis y 373 ter, será destituida y se elegirá otra con integrantes nuevos conforme a sus estatutos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se **reforma**: la fracción II del artículo 38. Se **adiciona**: un segundo párrafo al artículo 69; y, los artículos 86 bis, 86 ter, 86 quater y 86 quintus. Todos de la **Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional**, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate:

I.-…

II.- De aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad.

III a VI.-…

…

Artículo 69.-…

El trabajador y un representante de la directiva, establecerán por escrito la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales que liquidará el trabajador. La directiva le entregará una copia del documento, certificada ante fedatario público.

Artículo 86 bis.- La directiva de los sindicatos rendirá a la asamblea cada seis meses por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Entregará un resumen de esta información a cada uno de los sindicalizados dentro de los siete días siguientes.

La rendición de cuentas de la administración del patrimonio sindical incluirá la situación de los

ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, el cual será el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sin que pueda desviarse a otro fin.

Artículo 86 ter.- La información a que se refiere el artículo anterior, será revisada por un auditor externo al sindicato con cargo a los recursos presupuestados por el sindicato para estos efectos.

La revisión tendrá como finalidad determinar si se realizaron actos contrarios a la normatividad que rige al sindicato. El auditor tendrá acceso a toda la información que necesite del sindicato para cumplir con su finalidad.

El auditor externo será designado por la asamblea de trabajadores a propuesta de la directiva o algún sindicalizado, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dio cuenta a la asamblea de la situación de la administración del patrimonio sindical.

La directiva del sindicato entregará a los sindicalizados el informe de los resultados obtenidos de las revisiones, a más tardar dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que se designó al auditor externo.

Artículo 86 quater.- Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 86 bis y 86 ter, cualquier sindicalizado podrá solicitar a la directiva del sindicato la información que requiera sobre la administración del patrimonio sindical, siempre y cuando la solicite respetuosamente por escrito.

Se le notificará al sindicalizado la fecha de entrega de la información requerida dentro de los siete días siguientes, o bien, se le solicitará por única ocasión que la aclare antes de que transcurran otros siete días, debiendo la directiva orientarlo en todo momento.

La información solicitada se entregará, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notificó al trabajador la entrega de dicha información o que éste haya aclarado su solicitud.

Artículo 86 quintus.- En caso de que la directiva del sindicato incumpla con lo establecido en los artículos 86 bis, 86 ter y 86 quater será destituida y se elegirá otra con integrantes nuevos conforme a sus estatutos.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el cuarto día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los sindicatos contarán con ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del decreto para ajustar su normatividad interna a lo establecido en el mismo, y que, en su caso, podrán solicitar apoyo a la administración pública federal.

En tanto se realizan los ajustes necesarios dentro del plazo establecido en el párrafo precedente, se aplicará la normatividad anterior.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan lo estipulado en este Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 7 de diciembre del 2009

SENADOR RICARDO TORRES ORIGEL

DEL SEN. JAVIER CASTELO PARADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



SEN. JAVIER CASTELO PARADA

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA P R E S E N T E S HONORABLE ASAMBLEA:

JAVIER CASTELO PARADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II,

56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el presente **PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA QUE EN CASO DE HABER TRANSCURRIDO UN PERIODO DE TIEMPO RAZONABLE, SIN QUE EL CONFLICTO TENGA UNA SOLUCIÓN, CUALQUIERA DE LAS PARTES O INCLUSO UN TERCERO INTERESADO, PUEDA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, CON EL FIN DE IMPEDIR GRAVES PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS,** con arreglo a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho de huelga fue reconocido por primera vez en 1864, en Inglaterra, y constituye en la actualidad uno de los derechos inalienables del hombre reconocidos por la ONU y gran número de países.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 123, Apartado "A", fracciones XVII y XVIII, lo siguiente:

> ***XVII.*** *Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.*
>
> ***XVIII.*** *Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.*

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala en el artículo 440 establece que "la huelga es Ia suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores". Su ejercicio debe ser respetado y protegido para cumplir el objetivo de dar a la organización de los trabajadores un instrumento para asegurar un equilibrio entre los factores de la producción.

Expresamente, la Ley señala en el artículo 450, que la huelga debe tener por objeto:

> *I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital;*
> *II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de*

> *trabajo y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Séptimo;*
> *III. Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Séptimo;*
> *IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado;*
> *V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades;*
> *VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores; y*
> *VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículo 399 bis y 419 bis.*

En México el problema del desempleo es dominante. La rigidez laboral que existe, auspiciada por la misma legislación y por las reglas de las relaciones obrero patronales impide ampliar las bases para la creación y ampliación de las oportunidades de empleo. La organización laboral actual plantea tareas importantes a la movilidad, a la resolución de controversias laborales y a la competitividad de las empresas en una economía abierta como la nuestra, porque se traduce en costos adicionales importantes, limitativos de la expansión de la planta productiva, de nuevas inversiones y mejores condiciones de trabajo.

EI Tercer Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondiente al año 2009, señala respecto al tema del estallamiento de huelgas en los centros de trabajo sujetos a la competencia de las autoridades federales, lo siguiente:

> [...] el numero de movimientos de huelga surgidos entre el 10 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009, [asciende a] 26,954 emplazamientos y solo 59 huelgas estalladas. La meta sectorial se ha mantenido par debajo del 1%, al obtener un Índice de estallamiento del 0.2%. De hecho, en 10 que va de la presente administración se ha mantenido el menor número de huelgas estalladas respecto de las pasadas tres administraciones. De agosto de 2008 a julio de 2009 se obtuvo un Índice de estallamiento del 0.1%, al registrarse 12,637 emplazamientos a huelga y estallar solo 14.
>
> En el periodo de enero de 2007 al 31 julio de 2009, se han concluido 82 huelgas: 42 corresponden a movimientos estallados en administraciones anteriores y 40 a la actual gestión. Cabe

> destacar que par la vía de la conciliación fueron terminadas 46, equivalente al 56.1% con 25,411 trabajadores involucrados, mientras que el resto concluyo por laudo en firme. AI 31 de julio de 2009, existen 28 huelgas en trámite, conflictos en los que en ningún momento se han interrumpido los esfuerzos conciliatorios en búsqueda de solución; la cantidad de trabajadores involucrados en estas, asciende a 5,802."

Aun cuando hemos mantenido un buen clima de paz laboral, subsisten conflictos laborales que se han prolongado en el tiempo. En estos casos, las implicaciones negativas que se desprenden de una duración prolongada de los conflictos laborales es innegable, por los efectos que se producen tanto a los trabajadores, como a las empresas e inclusive a la región en donde los centros de trabajo se encuentran instalados.

Por tal motivo, es imprescindible explorar alternativas que permitan -sin afectar el legítimo derecho de los trabajadores para ejercer el derecho de huelga-, favorecer soluciones que impidan las graves pérdidas económicas de los sectores involucrados. Es decir, la posibilidad de que, si transcurrido un periodo de tiempo razonable, sin que el conflicto tenga una solución, cualquiera de las partes o incluso un tercero interesado, pueda solicitar la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje para la solución del conflicto. De otra manera, los conflictos se eternizan en el tiempo, y no habrá poder humano que pueda lograr una solución justa para las controversias.

Actualmente, el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo no contempla la posibilidad de que la autoridad intervenga directamente en la solución del conflicto, pues las hipótesis que prevé el artículo 469 de la Ley están orientadas fundamentalmente a que la decisión provenga, en principio, del acuerdo a que arriben los patrones y trabajadores; y en la fracción IV especifica que únicamente por solicitud de los trabajadores huelguistas a la Junta, ésta podrá resolver por laudo la terminación de la huelga; es decir actualmente la Ley no prevé la posibilidad de establecer un "arbitraje obligatorio" para ambas partes, porque se considera sólo como un derecho de los trabajadores.

Sin embargo en la práctica son los trabajadores los más afectados con el insometimiento del arbitraje, ya que sin la resolución jurisdiccional no se le puede obligar al patrón a pagar los salarios caídos, y en diversas ocasiones el pasivo laboral es superior a los activos de la empresa.[19]

Es relevante considerar que el propio Comité de Libertad Sindical y la Comision de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, han analizado este tema y han llegado a conclusiones importantes que es conveniente tomar en cuenta. En efecto, los referidos órganos de la OIT, señalan2:

> "... -como ha señalado recientemente el Comité siguiendo a la Comisión de Expertos- cuando tras negociaciones prolongadas e

[19] Tena Suck, Rafael, Derecho Procesal del Trabajo, Ed. Trillas, México, 2004.

[2] Principios de la OIT sobre el derecho de huelga. Revista internacional del trabajo, volumen 117, (1998) número 4

> infructuosas es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las autoridades.
> ….
> …. la Comisión debe admitir que existe un momento en la negociación en el cual, tras negociaciones prolongadas e infructuosas, puede justificarse la intervención de las autoridades, cuando es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las mismas.

Conforme a lo anterior y ante la situación económica que prevalece en el país, tenemos como propósito buscar el bienestar de todos los actores y evitar las graves pérdidas a la economía nacional siendo la prioridad la promoción y conservación del empleo, así como el impulso de un mercado laboral más dinámico, eficiente y productivo.

Las condiciones económicas en la actualidad afectan principalmente a la clase trabajadora, es por ello que se hace no solo necesario, sino urgente la necesidad elevar el nivel de vida de los ciudadanos, de las familias, de los trabajadores. A fin de cuentas, el trabajo es el elemento vertebrador mas importante en las sociedades contemporáneas. La competitividad de las empresas dará como resultado el aumento de la competitividad del país.

Es tiempo de retomar con toda fuerza, hay urgencia, apremia emprender la modernización de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier decisión que adoptemos se debe traducir en la creación de nuevos empleos, en la defensa del ingreso de las familias y en un mayor crecimiento económico.

En México, el problema del desempleo es dominante y se ha tornado permanente es por ello que debe ser atendido de manera prioritaria. Tenemos que sumar nuestras voluntades para apoyar aquellas medidas cuya instrumentación puedan fructificar en la lucha contra el desempleo.

La prioridad número uno debe ser la promoción y conservación del empleo bajo condiciones de seguridad y de adecuada remuneración. Ya se han puesto en marcha medidas de protección al empleo ante la situación actual, pero ahora más que nunca necesitamos promover un mercado laboral dinámico, eficiente y productivo. En el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, los firmantes se comprometieron textualmente a seguir impulsando en las relaciones individuales y colectivas de trabajo aquellas acciones vinculadas con capacitación para la productividad y también analizar temas de naturaleza jurídica en el ámbito laboral para promover la actualización del marco normativo en la materia, con el fin de favorecer la generación de empleos bien remunerados y con seguridad social, la productividad, la competitividad de la economía nacional, la previsión social y la impartición de la justicia laboral.

Esta propuesta tiene por objeto proteger a las clases más desfavorecidas a causa de la crisis económica mundial ya que si bien la huelga es un medio para lograr ciertos objetivos sociales por parte de los trabajadores, en ocasiones el conflicto tiende a resolverse no por una resolución basada en la legalidad o la justicia, sino por la resistencia del patrón o del trabajador, que puede dar como resultado una conclusión injusta de la misma.

No se busca vulnerar la autonomía sindical, se pretende que los trabajadores defiendan sus derechos sin desgastar a sus familias y las empresas con procesos largos y complicados para todos los actores, se pretende que los conflictos laborales se resuelvan de una manera efectiva y rápida.

Por ello, esta iniciativa reconoce que los trabajadores deben tener en todo momento la posibilidad de ejercer sus legítimos derechos, pero al mismo tiempo, propone incorporar alternativas de solución que eviten procesos

largos y complicados para todos los actores, de manera que los diferendos se resuelvan a favor de ambas partes de la mejor manera y más rápido, evitando el desgaste físico, emocional y económico que supone la duración prolongada de los litigios.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo **448**, la fracción IV del artículo **469,** el primer párrafo del artículo **902** y se reforma y adiciona el artículo **937** de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 448.- El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los **las partes** sometan el conflicto a la decisión de la Junta **o esta iniciara de oficio el arbitraje, en los términos del artículo 937 de esta Ley.**

….

Artículo 469.- La huelga terminará:

I. ….

II. ….

III. …….

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 902.- El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los **partes** manifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta **o esta iniciara de oficio el arbitraje, en los términos del artículo 937 de esta Ley.**

…..

Artículo 937. Los trabajadores en cualquier momento podrán someter el conflicto motivo de la huelga, a la decisión de la Junta, incluso después del estallamiento de la misma.

En caso de que la huelga se extienda más de 60 días hábiles, el patrón o los terceros que acrediten su interés, podrán solicitar por escrito se someta el conflicto a la decisión de la Junta para que inicie el arbitraje. En caso de que ni los trabajadores, el patrón o los terceros hayan hecho la solicitud, la Junta podrá iniciar el arbitraje.

En los supuestos anteriores se seguirá el procedimiento ordinario.

…….

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Articulo Segundo. Los asuntos iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma, deberán concluirse de conformidad con ellas.

DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES.



SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR

C.C.
SECRETARIOS DEL
H. SENADO DE LA REPÚBLICA
DE LA LXI LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe Senadora **ROSALÍA PEREDO AGUILAR** del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES** bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los tiempos actuales son tiempos de crisis global y múltiple, pero también de retos, ajustes y nuevos paradigmas.

Hoy abruma al mundo las crisis alimentaria, hídrica y climática entre otras.

En este sentido, nuestro país está haciendo esfuerzos importantes por paliar la situación crítica global, procurando que afecte lo menos posible a la sociedad en su conjunto y procurando dar preferencia a los que menos tienen.

Sin embargo, en algunas veces las omisiones y en otras la duplicidad de funciones en las dependencias gubernamentales, así como la poca transparencia en el ejercicio presupuestal en algunas entidades federativas, y ahora las difíciles condiciones climáticas, limitan la efectividad de las políticas públicas, por lo que cada vez se hace más necesario y urgente consolidar y fortalecer algunas funciones, así como mejorar los mecanismos de transversalidad que demanda la corresponsabilidad institucional, pero fundamentalmente optimizar recursos naturales y financieros para incrementar la productividad y mejorar la economía familiar.

Por lo tanto, además de ser determinante valorar los impactos del Cambio Climático Global y la crisis de los recursos hídricos, es urgente establecer sólidos mecanismos de eficiencia y manejo integral y sustentable del agua en todo el ciclo hidrológico antropogénico, lo cual implica que exista el máximo de fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua como dependencia encargada de la política hídrica del país, y el máximo de transversalidad entre las dependencias relacionadas.

De aquí que las reformas que se plantean en la presente iniciativa, atraviesan por varios escenarios, y uno de ellos es la precisión y fortalecimiento de las funciones del aparato gubernamental federal, con la idea de que pueda incidir en las estructuras estatales, municipales y del Distrito Federal en lo que corresponda, ya que el recurso agua incumbe a todas las dependencias de todos los órdenes de gobierno.

Lo anterior coincide con el planteamiento del ejecutivo de reestructurar el aparato gubernamental para hacerlo más eficiente, por lo que la presente iniciativa recoge además, la inquietud expresada en diferentes foros, en el sentido de que **la actual Comisión Nacional del Agua fortalezca sus funciones y tenga una mayor vinculación con las demás dependencias federales y estatales, municipales, del Distrito Federal y sus**

delegaciones para que tenga una real y verdadera gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.

Hace unas décadas, cuando el problema del agua no era tan crítico como ahora, existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, por lo que ahora que hay una grave problemática hídrica y del cambio climático, se hace más justificable dicho nivel para la actual Comisión Nacional del Agua, sin embargo, es evidente que la situación de crisis económica no hace viable por el momento esta transformación, pero por su trascendencia no omitimos dejarla planteada para su análisis en un futuro próximo.

El fortalecer, ampliar y precisar funciones de las dependencias relacionadas con los recursos hídricos, cubre todos los aspectos del ciclo hidrológico natural y antropogénico, es decir, desde la contaminación, tratamiento, reúso y abasto de agua, hasta los acuíferos y corrientes superficiales que rebasan los límites estatales o municipales, así como sequías e inundaciones que de manera persistente están afectando a la población en toda la república y hacen más vulnerables las actividades productivas principalmente las agropecuarias, reduciendo la certidumbre en la producción de alimentos.

Esta iniciativa retoma por lo tanto, planteamientos hechos en diversos foros relativos a la gestión integral y sustentable del agua, y responde también a los problemas hídricos que estamos viviendo como la incidencia de El Niño y las sequías que afectan las actividades agropecuarias, la reducción en el volumen captado en las presas y su consecuente desabasto para consumo humano y agrícola, así como las inundaciones recientes en municipios del Estado de México, el Distrito Federal, y nuevamente en los estados de Veracruz y Tabasco, las cuales son muestras claras de que los fenómenos hidrológicos derivados del cambio climático global, ya nos están rebasando, por lo que es urgente que todas las dependencias deben ajustar sus funciones para la atención colectiva de dicha problemática.

En este sentido, la iniciativa parte del hecho jurídico de que los recursos hídricos están contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de que el agua está considerada como un recurso prioritario y de seguridad nacional según el artículo 14 BIS 5 fracciones I y V de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo tanto, la presente iniciativa se sustenta en los siguientes planteamientos:

1. El Cambio Climático Global está impactando de manera determinante las variables climatológicas y alterando de forma significativa los ciclos hidrológicos natural y Antropogénico.
2. Los recursos hídricos de nuestro país, atraviesan por una grave problemática que pone en riesgo el desarrollo armónico y sustentable de la sociedad con la naturaleza y la economía.
3. Así por ejemplo:
    - Entre 2003 y 2006 la tasa media de sobreexplotación de las aguas subterráneas fue de 2.3%, pasando de 32 acuíferos sobreexplotados en 1975 a 104 en el 2006.
    - La disponibilidad *per cápita* promedio está disminuyendo peligrosamente, y ya se está haciendo común escuchar que hay que modificar las tarifas, que habrá sanciones más rigurosas a quienes desperdicien el agua, que se requiere mayor participación privada para cubrir la infraestructura de abasto, entre otras cuestiones.
    - Lo anterior se agrava ya que el tratamiento de las aguas residuales es mínimo, porque solamente se trata la tercera parte de las aguas residuales municipales, por lo que la calidad del agua en nuestro país es muy baja.
    - La explotación, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos en México, es un problema que está generando disputas y controversias entre varias entidades federativas y municipios, tanto por la baja disponibilidad *per*

cápita en regiones importantes, como por la situación de estrés hídrico que sufre la mayoría de la población mexicana.

- Disponer de agua suficiente y de calidad adecuada es un indicador socioeconómico y un derecho humano inalienable, sin embargo, a pesar de múltiples esfuerzos, 12 millones de mexicanos no disponen de agua potable en forma directa, y en el medio rural sólo se cubre el 72% de la población y el 58% en saneamiento.
- Lo anterior se complica por la baja eficiencia en su uso y aprovechamiento, sobre todo en los sectores agrícola, pecuario y acuícola que utilizan el 77% del volumen concesionado, teniendo una eficiencia entre 33 y 55%, mientras en las ciudades para uso público es entre 50 y 70%, además de que las fugas de agua en la red de distribución oscila entre 30 y 50%.
- El grave deterioro de los recursos hídricos y su costo social, económico y ecológico tiene su máxima expresión en la Cuenca del Valle de México donde había cinco lagos y se desarrolló la principal cultura prehispánica de Mesoamérica, ya que se hizo desaparecer a los lagos de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, y hoy tiene que traerse agua del río Lerma y del Sistema Cutzamala a un costo muy elevado por el desnivel de más de mil metros, y ante la evidente escasez ya se tiene la proyección de traerse agua todavía de más lejos; pero además, con el hundimiento de la ciudad de México se tienen que hacer obras extraordinarias para desfogar el drenaje.
- Esta sobreexplotación es general, ya que la Comisión Nacional del Agua plantea que 104 de los 653 acuíferos del país se sobreexplotan pues de ellos se extrae el 60% de agua subterránea que se usa en el país, y no existe suficientes recursos para establecer programas de recarga.
- Aumentan y se sobrepolitizan los problemas hídricos entre los estados y municipios con acuíferos y corrientes subterráneas compartidas, lo que retarda las soluciones e incrementa el costo de las mismas, máxime cuando se trata de obras hidráulicas de gran envergadura como está sucediendo en los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato entre otros.
- Así también, la contaminación de los recursos hídricos es grave, ya que más de la mitad de las corrientes hídricas y la mayoría de los acuíferos donde existen zonas agrícolas tienen diferentes niveles de contaminantes químicos y orgánicos. Por ejemplo, la eutroficación por exceso de nitrogenados y fosfatos en los cuerpos de agua y ríos limita el desarrollo de la fauna nativa y su aprovechamiento posterior debido a la insuficiencia química y bioquímica de oxígeno.
- La reciente problemática de inundaciones en la Delegación Gustavo Madero del Distrito Federal y en varios municipios conurbados del Estado de México, son síntomas inequívocos de que la alteración climática por un lado y por otro la gestión no adecuada de la basura y de las obras de desagüe, ponen en riesgo de inundaciones mayores inclusive hasta alrededor de cuatro millones de personas.
- Esto es preocupante como lo menciona el INEGI: " ...de persistir las condiciones actuales, cuando menos un tercio del monto registrado para el Producto Interno Bruto del país en 2006, tendría que ser utilizado para resarcir al medio ambiente por el daño que durante los cuatro años del período

de estudio se generó por la sociedad en su conjunto".

- Y pueden mencionarse muchos problemas más que afectan a la población, a los ecosistemas y medio ambiente y a los diversos procesos productivos de la economía nacional, por no disponer de normas claras y la fortalece en funciones para su aplicación.

El Cambio Climático Global está generando una serie de situaciones inéditas, complicadas y muchas de ellas con dificultad de ser predecibles y aumentando los riesgos de mayor vulnerabilidad.

Lo anterior ha hecho que los fenómenos hidroclimáticos sean menos predecibles como sucedió en 2007 en el estado de Tabasco que afectó a un millón doscientas mil personas, por lo que los esquemas de protección civil requieren ser revalorados ante la mayor vulnerabilidad y ante el incremento de las condiciones graves de temperatura y distorsión de la dinámica de precipitaciones en cantidad y en intensidad, así como el incremento en intensidad de los diferentes ciclones, huracanes, tormentas y frentes fríos.

Una muestra de lo complicado y difícil que se está generando con la distorsión del Cambio Climático Global, es lo que está sucediendo en México en este tercer trimestre de 2009, ya que se inició el fenómeno de El Niño y se sufre el impacto de una sequía que los pronósticos aún no precisos estiman durará hasta mediados del año siguiente, pero que ya afectó la producción agrícola en diversas regiones del país, y que tiene a la mayoría de presas por debajo de la mitad de su capacidad de captación, provocando que para el Distrito Federal y su zona metropolitana se hagan recortes cada vez mayores.

Contra los pronósticos meteorológicos "normales" según los ciclos de El Niño y La Niña, la impredecibilidad de la sequía en los meses de agosto y septiembre se suma los huracanes y lluvias torrenciales con inundaciones y zonas de siniestralidad atípicas, teniendo un costo económico difícil de calcular, pero que es obvio que en tanto no se tomen medidas preventivas el costo en los procesos productivos, en la salud humana, en la infraestructura hidráulica y civil, y en los diferentes ecosistemas, impactarán cada vez más en el Producto Interno Bruto, e incluso en vidas humanas.

La persistente sequía provocada por el fenómeno de El Niño, implica tomar medidas urgentes y a fondo, tanto en los aspectos que ya se están implementando en cuanto al aseguramiento de cosechas como al incremento de sistemas de riego con menor uso de agua; pero también deben revisarse los esquemas de subsidios, de trasvase, de regulación tarifaria, de reúso en formas diferenciadas como por ejemplo "pequeños humedales productivos de uso múltiple", ya que es claro que lo que no cuesta no se valora, y hoy, ante la evidente crisis hídrica mundial y nacional, el agua debe tener un valor económico como una medida de corresponsabilidad para una mayor eficiencia en su uso, aprovechamiento y explotación.

Ante esta situación, los retos son muchos pero también son muchos los esfuerzos que los diferentes gobiernos y la sociedad podemos y debemos hacer.

Seguir manejándonos bajo un esquema inercial ante cambios drásticos que ya nos está impactando es una situación poco racional y objetiva. Por ello, hoy se requieren instancias que tengan el nivel adecuado y las funciones suficientes para enfrentar las nuevas situaciones. De tal manera que es pertinente que las diversas dependencias federales ligadas a los recursos hídricos, contemplen en sus funciones, una política transversal y concurrente para evitar o disminuir los impactos negativos.

En este sentido, la actual Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia encargada de estos asuntos, no dispone de los suficientes instrumentos económicos, legales, fiscales y administrativos para enfrentar los diversos y complicados problemas que ya se están presentando, por lo que resulta a todas luces necesario, dotarla de más y mejores instrumentos, por lo que es justificable

fortalecer sus funciones y recursos, y que las demás dependencias asuman sus responsabilidades en forma conjunta de acuerdo a sus atribuciones.

Con esta iniciativa, las funciones que tiene actualmente la Comisión Nacional del Agua continúan y se aumentan, además se correlacionan con algunas que están definidas actualmente en otras dependencias y con las cuales debe establecerse una mayor corresponsabilidad al precisarles sus funciones, como son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Energía y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación principalmente, por lo que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, al fortalecer las funciones de la Comisión Nacional del Agua, se reforma y adicionan funciones indicadas en el Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que con base a lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: se reforman: las fracciones IV y V del artículo 28; las fracciones XI, XII Y XXIV del artículo 30; la fracción IX y XVI del 32; la fracción XI del 33; las fracciones VI, XIX, los incisos d) y e) de la fracción XXI del artículo 35; y **se adiciona** el párrafo segundo de la fracción XXIV del artículo 27; el inciso d de la fracción IV del artículo 30, el párrafo segundo de la fracción III del artículo 32; el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 32; el inciso h) de la fracción XXI del artículo 35; y la fracción XXI BIS del artículo 35 de la **Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,** para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos

I. a XXIII. …

XXIV. …

Cuando los requerimientos de protección civil sean derivados de factores hidrológicos, y en función de la fracción XIV de este artículo, coordinará conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, las acciones pertinentes para su atención inmediata, oportuna y eficaz;

XXV. a XXXII. …

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a III. …

IV. intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales, **así como el usufructo de los acuíferos trasnacionales conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente**;

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos, **anteponiendo siempre las necesidades y requerimientos del país y la población en los recursos hídricos por su prioridad, seguridad nacional y su disponibilidad para servicio humano directo,**

VI a XII. ….

Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a III. …

IV. ….

a. a **c.**…

d. Vigilar conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, la aplicación de los indicadores de sustentabilidad hídrica establecidos por esta dependencia;

V. a X. …

XI. Ejecutar **conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente,** los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas,

XII. Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas, extranjeras o internacionales en aguas nacionales, **induciendo trabajos de diagnóstico y opciones de para mejorar su uso y aprovechamiento**;

XIII. a XXIII. …

XXIV.- Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en **el diagnóstico, caracterización y en** la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias;

XXV. y XXVI. …

Artículo 32.…

I. a II. …

III. …

Para lograr lo anterior, se dispondrá de un técnico regional que cubra los aspectos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento a los programas y , conjuntamente con la participación de las localidades, el establecimiento de proyectos productivos que generen alimentos y empleo

IV. a V. …

VI. …

Los programas especiales indicados tendrán el permanente seguimiento técnico y social con la participación de los miembros de las localidades, quienes dispondrán de capacitación y asistencia técnica constante para asegurar los resultados positivos en dichos programas;

VII. a VIII. …

IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado, **promoviendo establecer conjuntamente con los Gobiernos de los Estados y Municipios, programas específicos de ordenamiento territorial regional, con base a la información obtenida en el Programa de Certificación de Derechos de Solares, el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad Privada, para desarrollar un manejo sustentable de las cuencas hidrográficas;**

X. a XV. …

XVI. Asegurar la adecuada, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos **promoviendo redes o asociaciones de producción y consumo**, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación **y la Comisión Nacional del Agua para el fomento de humedales productivos de uso múltiple preferentemente donde las condiciones de nutrición son escasas**; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;

XVII. a XXIII. …

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a **V.** …

VI. …

El Consejo Nacional de Energía se constituye por el titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, por los subsecretarios y el oficial mayor de dicha dependencia, así como por los titulares de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del sector y de la **Secretaría de Recursos Hídricos.**

VII. a X. …

XI. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energías alternas a los hidrocarburos, así como proponer, en su caso, los estímulos correspondientes, **definiendo para ello un atlas de lugares con potencial y viabilidad técnica, económica y ecológica, para el caso de localidades apartadas y marginadas priorizar la generación de energía con obras minihidráulicas o aguas pasantes así como el uso intensivo de paneles solares;**

XII. a XXV. …

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a V. …

VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior, y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura, **acuacultura** y silvicultura

VII. a XVIII. …

XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares, **incluyendo humedales productivos de uso múltiple con aguas residuales**;

XX. …

XXI. …

a) a c). …

d) Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e). Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, **Estableciendo, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales**, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) a g). …

h) Desarrollar y establecer conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, demás dependencias federales, estatales y municipales así como con particulares, humedales productivos de uso múltiple incluso con aguas residuales

XXI Bis. Promover en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos de manera integral y sustentable.

XXII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO. se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, todas ellas del artículo 9 de la **Ley de Aguas Nacionales**, para quedar de la siguiente manera:

Artículos 1 a 8. …..
Artículo 9. ….
…
…
a. ….
b. ...
…

Son atribuciones de la "Comisión" en su nivel Nacional, las siguientes:

I. Fungir como la Autoridad en materia **de gestión hídrica integral y sustentable, ejerciendo las atribuciones que por Ley le corresponden dentro del ámbito de la competencia federal, y** con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal o municipios, **por lo que debe**

administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales, y preservar y controlar la calidad de las mismas, con base a indicadores y normas específicas;

II. Formular la política hídrica nacional, **considerando que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que las aguas nacionales son patrimonio de la nación y por ende es un recurso que no se privatiza,** y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de "la Secretaría", así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política;

II. BIS. Participar con las demás dependencias federales y los Gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en las políticas nacionales y acciones contra el cambio climático global y todas las formas de contaminación hídrica, para proteger, restaurar y conservar los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales hidrológicos, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo integral y sustentable;

III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, **con un esquema de gestión integral y sustentable a través de cuencas hidrográficas, con participación ciudadana, indicadores de sustentabilidad hídrica, transversalidad institucional, e inclusión en lo factible los planteamientos de los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, así como los programas de las Delegaciones del Distrito Federal en lo que se correspondan, priorizando su aplicación con fines humanos, ecológicos y económicos, y** actualizarlo y vigilar su cumplimiento;

III. BIS. Con base a la normatividad específica, ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, otorgando contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos según corresponda, en materia de aguas y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en concordancia con las disposiciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca, y con la Secretaría de Marina;

IV. Elaborar **y establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a los Gobiernos, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con instituciones de investigación y educación superior y organismos públicos y privados, Normas Oficiales Mexicanas y** programas **estratégicos** y especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales, **y vigilar su irrestricto cumplimiento en coordinación con las instancias que correspondan;**

V.

VI. Emitir disposiciones de carácter general, **normas, criterios e indicadores hídricos sustentables** en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;

VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica; **participando con las demás dependencias federales y los Gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en el adecuado uso, aprovechamiento y explotación integral y sustentable de los recursos hídricos, que permitan una regulación hídrica, ambiental y productiva en todos los sectores productivos de la economía nacional, estableciendo las prioridades nacionales en lo concerniente a la administración y gestión de las aguas y bienes nacionales inherentes a los recursos hídricos del país;**

VIII. …

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de concesiones o contratos con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral **y sustentable** del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los

demás casos que establezca la Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional, **así como de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica en lo que corresponda;**

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados y de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XI. …

XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte; **participar en la asignación de recursos para su ejecución, considerando fundamentalmente un uso racional, por encima de criterios políticos administrativos;**

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados y de los municipios, así como con el Distrito Federal. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la **presente Ley;** contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales **y de los municipios, así como con el Distrito Federal,** o con terceros;

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego **o Unidades de** Riego y en su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes;

XVI. Regular **con indicadores de sustentabilidad hídrica** los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con los Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos; **promover el desarrollo y apoyo de micropequeñas unidades de humedales productivos de uso múltiple con el reúso de las aguas residuales o de las aguas de escorrentía;**

XVII. …

XVIII. …

XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente con los gobiernos estatales, **municipales y del Distrito Federal**, para realizar lo propio en **sus ámbitos de competencia**, para mejorar la gestión **integral y sustentable** del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de la Ley;

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua; v**igilar y sancionar en los casos que proceda, las descargas de aguas residuales o materiales peligrosos y residuos sólidos que transgredan los límites permitidos en las normas y legislación correspondiente;**

XXI. a **XXIV.** …

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados y municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico **antropogénico,** e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada **y sustentable** de los recursos hídricos;

XXVII. …

XXVIII. Estudiar**, diseñar y operar,** con el concurso de **las dependencias federales y los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, así como con** los Consejos de Cuenca **y los Organismos de Cuenca, instrumentos económicos para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y los ecosistemas por cuenca, que permitan a la vez una valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, conforme a las disposiciones que dicte la Autoridad en la materia, para precisar** los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales, **reúso de** ellas y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;

XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; **participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos hídricos;**

XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, apoyando en lo conducente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua **y otras instituciones afines**;

XXXI. …

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga **y reúso a que se refiere la Ley y sus reglamentos,** así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley; **reconocer derechos, regulando su trasmisión, y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;**

XXXIII. y **XXXIV.** …

XXXV. Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, así como aquellos que fueren necesarios para la **gestión integral y sustentable** de los recursos y bienes a su cargo,

XXXVI. Vigilar el **pleno** cumplimiento y aplicación de la presente Ley**,** interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad que le corresponda en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal, **disponiendo de los bienes que le sean propios para sus funciones;**

XXXVII. a **XL.** …

XLI. Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión **integral y sustentable** de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva;

XLII. y XLIII. …

XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia; **dirigir los estudios, trabajos y servicios**

meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;

XLV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas; **realizar cuando máximo cada diez años, el balance hídrico de los acuíferos con veda o de los más sobreexplotados para determinarla o cancelarla según sea el caso;**

XLVI. Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico **antropogénico,** la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;

XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados, **municipios** y el Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación y permisos de descarga **y reúso,** así como permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley;

XLIX. a LIII. …

LIII BIS1. Evaluar la calidad de los cuerpos de agua y promover el sistema de información hídrica, que incluya los sistemas de monitoreo de contaminación de cuerpos de agua de jurisdicción federal, el tratamiento y reúso que corresponda, con la cooperación de los gobiernos Federal, municipales, estatales, y el Distrito Federal, así como con las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan, promoviendo programas de restauración con metas y tiempos definidos;

LIII BIS2. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica de los recursos hídricos y de los bienes y servicios ambientales que éstos prestan, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad hídrica y económica;

LIII BIS3. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política hídrica, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración de los recursos hídricos;

LIII BIS4. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;

LIII BIS5. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidrológicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

LIII BIS6. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación,

drenaje, mejoramiento y defensa de terrenos y de pequeña irrigación, según los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos estatales, municipales, el Distrito Federal o de particulares;

LIII BIS7. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;

LIII BIS8. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;

LIII BIS9. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;

LIII BIS10. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal; y

LIV. …

TRANSITORIOS

Uno: La presente Ley entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dos: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón del Sesiones, a los 07 días del mes de diciembre de 2009

SENADORA ROSALÍA PEREDO AGUILAR

CUADRO COMPARATIVO DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a XXIII.** … **XXIV.** … **XXV. a XXXII.** …	**Artículo 27.** A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a XXIII.** … **XXIV.** … **Cuando los requerimientos de protección civil sean derivados de factores hidrológicos, y en función de la fracción XIV de este artículo, coordinará conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, las acciones pertinentes para su atención inmediata, oportuna y eficaz;** **XXV. a XXXII.** …
Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a III.** … **IV.** intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales; **V.** Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de	**Artículo 28.-** A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a III.** … **IV.** intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales, **así como el usufructo de los acuíferos trasnacionales conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente**; **V.-** Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana;

Recursos Naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir **VI a XII.** ….	obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos, **anteponiendo siempre las necesidades y requerimientos del país y la población en los recursos hídricos por su prioridad, prevalencia, seguridad nacional y su disponibilidad para servicio humano directo,** **VI a XII.** ….
Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a III.** … **IV.** … **a.** a **c.**… . **V. a X.** … **XI.** Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas, **XII.** .Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas, extranjeras o internacionales en aguas nacionales; **XIII. a XXIII.** … **XXIV.-** Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; **XXV. y XXVI.** …	**Artículo 30.** A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a III.** … **IV.** …. **a.** a **c.**…. **d. Vigilar conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, la aplicación de los indicadores de sustentabilidad hídrica establecidos por esta dependencia;** **V. a X.** … **XI.** Ejecutar **conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente,** los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas, **XII.** Intervenir en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas, extranjeras o internacionales en aguas nacionales, **induciendo trabajos de diagnóstico y opciones para mejorar su uso y aprovechamiento**; **XIII. a XXIII.** … **XXIV.-** Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en **el diagnóstico, caracterización y en** la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias; **XXV. y XXVI.** …
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a II.** … **III.** … **IV. a V.** … **VI.** …	**Artículo 32.** A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I. a II.** … **III.** … **Para lograr lo anterior, se dispondrá de un técnico regional que revise la inclusión de los aspectos de capacitación, asistencia técnica, seguimiento a los programas y, conjuntamente con la participación de las localidades, el establecimiento de proyectos productivos que generen alimentos y empleo;** **IV. a V.** … **VI.** …

VII. a VIII. …	**Los programas especiales indicados tendrán el permanente seguimiento técnico y social con la participación de los miembros de las localidades, quienes dispondrán de capacitación y asistencia técnica constante para asegurar los resultados positivos en dichos programas;** **VII. a VIII.** …
IX. …Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado,	**IX.** Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado, **promoviendo establecer conjuntamente con los Gobiernos de los Estados y Municipios, programas específicos de ordenamiento territorial regional, con base a la información obtenida en el Programa de Certificación de Derechos de Solares, el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad Privada, para desarrollar un manejo sustentable de las cuencas hidrográficas;** **X. a XV.** …
X. a XV. … **XVI.** Asegurar la adecuada, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales; **XVII. a XXIII.** …	**XVI.** Asegurar la adecuada, distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos **promoviendo redes o asociaciones de producción y consumo**, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación **y la Comisión Nacional del Agua para el fomento de humedales productivos de uso múltiple preferentemente donde las condiciones de nutrición son escasas**; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales; **XVII. a XXIII.** …
Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I.** a **X.** … **XI.** Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energías alternas a los hidrocarburos, así como proponer, en su caso, los estímulos correspondientes; **XII. a XXV.** …	**Artículo 33.-** A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I.** a **X.** … **XI.** Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energías alternas a los hidrocarburos, así como proponer, en su caso, los estímulos correspondientes, **definiendo para ello un atlas de lugares con potencial y viabilidad técnica, económica y ecológica, para el caso de localidades apartadas y marginadas priorizar la generación de energía con obras minihidráulicas o aguas pasantes así como el uso intensivo de paneles solares;** **XII. a XXV.** …

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:	**Artículo 35.-** A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:	pesquero;	expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;
I. a V. …	**I. a V.** …	**e).** Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;	**e)**. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, **Estableciendo, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales**, las normas oficiales mexicanas que correspondan;
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior, y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura	**VI.** Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior, y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura, **acuacultura** y silvicultura	**f) a g)** …	**f) a g)** …
VII. a XVIII. …	**VII. a XVIII.** …		
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares;	**XIX.** Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares, **incluyendo humedales productivos de uso múltiple con aguas residuales**;		**h) Desarrollar y establecer conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, demás dependencias federales, estatales y municipales así como con particulares, humedales productivos de uso múltiple incluso con aguas residuales**
XX. y **XXI.** …	**XX.** y **XXI.** …	**XXII. …**	**XXI Bis. Promover en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos de manera integral y sustentable.**
a) a c) …	**a) a c)** …		**XXII.** ...
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector	**d) Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales**, la		

CUADRO COMPARATIVO DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

Versión vigente	Versión propuesta Iniciativa
I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;	**I.** Fungir como la Autoridad en materia **de gestión hídrica integral y sustentable, ejerciendo las atribuciones que por Ley le corresponden dentro del ámbito de la competencia federal, y** con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal o municipios, **por lo que debe administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales, y preservar y controlar la calidad de las mismas, con base a indicadores y normas específicas;**
II. Formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de "la Secretaría", así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política;	**II.** Formular la política hídrica nacional, **considerando que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que las aguas nacionales son patrimonio de la nación y por ende es un recurso que no se privatiza,** y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de "la Secretaría", así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política;
	II. BIS. Participar con las demás dependencias federales y los Gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en las políticas nacionales y acciones contra el cambio climático global y todas las formas de contaminación hídrica, para proteger, restaurar y conservar los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales hidrológicos, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo integral y sustentable;
III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;	**III.** Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, **con un esquema de gestión integral y sustentable a través de cuencas hidrográficas, con participación ciudadana, indicadores de sustentabilidad hídrica, transversalidad institucional, e inclusión en lo factible los planteamientos de los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, así como los programas de las Delegaciones del Distrito Federal en lo que se correspondan, priorizando su aplicación con fines humanos, ecológicos y económicos, y** actualizarlo y vigilar su cumplimiento;
	III. BIS. Con base a la normatividad específica, ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, otorgando contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos según corresponda, en materia de aguas y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en concordancia con las disposiciones de la Secretaría de Agricultura,

	Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca, y con la Secretaría de Marina;
IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales;	**IV.** Elaborar **y establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a los Gobiernos, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como con instituciones de investigación y educación superior y organismos públicos y privados, Normas Oficiales Mexicanas y** programas **estratégicos** y especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales, **y vigilar su irrestricto cumplimiento en coordinación con las instancias que correspondan;**
V. …	**V.** …
VI. Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;	**VI.** Emitir disposiciones de carácter general, **normas, criterios e indicadores hídricos sustentables** en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;
VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica;	**VII.** Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica; **participando con las demás dependencias federales y los Gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en el adecuado uso, aprovechamiento y explotación integral y sustentable de los recursos hídricos, que permitan una regulación hídrica, ambiental y productiva en todos los sectores productivos de la economía nacional, estableciendo las prioridades nacionales en lo concerniente a la administración y gestión de las aguas y bienes nacionales inherentes a los recursos hídricos del país;**
VIII. …	**VIII. …**
IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional;	**IX.** Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de concesiones o contratos con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral **y sustentable** del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca la Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional, **así como de la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica en lo que corresponda;**
X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los	**X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados y de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción**

gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;	**anterior;**
XI. …	**XI.** …
XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte;	**XII.** Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte; **participar en la asignación de recursos para su ejecución, considerando fundamentalmente un uso racional, por encima de criterios políticos administrativos;**
XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;	**XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados y de los municipios, así como con el Distrito Federal. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;**
XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;	**XIV.** Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la **presente Ley;** contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales **y de los municipios, así como con el Distrito Federal,** o con terceros;
XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego y en su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes;	**XV.** Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego **o Unidades de** Riego y en su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes;
XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la	**XVI.** Regular **con indicadores de sustentabilidad hídrica** los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con los Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos; **promover el desarrollo y apoyo de micropequeñas**

coordinación y prestación de los servicios referidos;	**unidades de humedales productivos de uso múltiple con el reúso de las aguas residuales o de las aguas de escorrentía;**
XVII. y **XVIII.**…	**XVII.** y **XVIII.**…
XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales, para realizar lo propio en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley;	**XIX.** Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente con los gobiernos estatales, **municipales y del Distrito Federal**, para realizar lo propio en **sus ámbitos de competencia**, para mejorar la gestión **integral y sustentable** del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de la Ley;
XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;	**XX.** Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua; **vigilar y sancionar en los casos que proceda, las descargas de aguas residuales o materiales peligrosos y residuos sólidos que transgredan los límites permitidos en las normas y legislación correspondiente;**
XXI. a **XXIV.** ……	**XXI.** a **XXIV.** …
XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;	**XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados y municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;**
XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos;	**XXVI.** Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico **antropogénico,** e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada **y sustentable** de los recursos hídricos;
XXVII. …	**XXVII.** …
XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales vinculados	**XXVIII.** Estudiar**, diseñar y operar,** con el concurso de **las dependencias federales y los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, así como con** los Consejos de Cuenca **y los Organismos de Cuenca, instrumentos económicos para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y los ecosistemas por cuenca, que permitan a la vez una**

con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;	**valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, conforme a las disposiciones que dicte la Autoridad en la materia, para precisar** los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales, **reúso de** ellas y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;
XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;	**XXIX.** Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; **participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos hídricos;**
XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, para lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;	**XXX.** Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, apoyando en lo conducente al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua **y otras instituciones afines**;
XXXI. …	**XXXI.** …
XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley;	**XXXII.** Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga **y reúso a que se refiere la Ley y sus reglamentos,** así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley; **reconocer derechos, regulando su trasmisión, y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;**
XXXIII. y **XXXIV.**…	**XXXIII.** y **XXXIV.**…
XXXV. Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, así como aquellos que fueren necesarios para la administración de los recursos y bienes a su cargo;	**XXXV.** Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, así como aquellos que fueren necesarios para la **gestión integral y sustentable** de los recursos y bienes a su cargo,
XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal;	**XXXVI.** Vigilar el **pleno** cumplimiento y aplicación de la presente Ley**,** interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad que le corresponda en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal, **disponiendo de los bienes que le sean propios para sus funciones;**
XXXVII. a **XL.**…	**XXXVII.** a **XL.** …
XLI. Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y	**XLI.** Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión **integral y sustentable** de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva;

decretos de vedas y reserva;	
XLII. y **XLIII.**….	**XLII.** y **XLIII.** …
XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia;	**XLIV**. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia; **dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, y participar en los convenios internacionales sobre la materia**;
XLV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas;	**XLV.** Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas; **realizar cuando máximo cada cinco años, el balance hídrico de los acuíferos con veda o de los más sobreexplotados para determinarla o cancelarla según sea el caso;**
XLVI. Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;	**XLVI.** Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico **antropogénico,** la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;
XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;	**XLVII.** Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados, **municipios** y el Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación y permisos de descarga, así como permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley, conforme a los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo;	**XLVIII.** Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación y permisos de descarga **y reúso,** así como permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley;
XLIX. a **LIII.**….	**XLIX.** a **LIII.…**

	LIII BIS1. Evaluar la calidad de los cuerpos de agua y promover el sistema de información hídrica, que incluya los sistemas de monitoreo de contaminación de cuerpos de agua de jurisdicción federal, el tratamiento y reúso que corresponda, con la cooperación de los gobiernos Federal, municipales, estatales, y el Distrito Federal, así como con las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan, promoviendo programas de restauración con metas y tiempos definidos;
	LIII BIS2. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica de los recursos hídricos y de los bienes y servicios ambientales que éstos prestan, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad hídrica y económica;
	LIII BIS3. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política hídrica, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración de los recursos hídricos;
	LIII BIS4. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;
	LIII BIS5. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidrológicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;
	LIII BIS6. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, mejoramiento y defensa de terrenos y de pequeña irrigación, según los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos estatales, municipales, el Distrito Federal o de particulares;
	LIII BIS7. Regular y vigilar la conservación de

	las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;
	LIII BIS8. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;
	LIII BIS9. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;
	LIII BIS10. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal; y
LIV. …	**LIV.** …

DE LA SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CEBADA.



SEN. ROSALÍA PEREDO AGUILAR

C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA P R E S E N T E.

La que suscribe Senadora **ROSALÍA PEREDO AGUILAR** del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombro propio y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CEBADA,** bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada que se pone a la consideración de este Pleno de la Cámara de Senadores, plantea los aspectos específicos de la cadena agroindustrial cebada-malta, siendo relevante porque en México la cebada es el 5° grano en importancia y en cerveza nuestro país es el primer exportador a nivel mundial.

El esfuerzo que se ha realizado para ajustar los ordenamientos legales en esta materia son, sin duda, avances importantes pero que han sido, hasta ahora, insuficientes, sobre todo porque no se han conseguido en que todos los procesos de la cadena cebada-malta sean competitivos, poniéndose en riesgo, por un lado, el importante ingreso que mejora la balanza comercial, y por otro, el potencial para su modernización que los

haga eficientes y competitivos, ya que no se ha garantizado una adecuada rentabilidad hacia el sector primario.

En el marco general no se ha podido resolver totalmente la dicotomía campo-industria, hecho central que gravita en la secuencia del encadenamiento productivo en el sector agroindustrial. Esto no se refiere, por supuesto, única y exclusivamente a los procesos técnico-productivos que, por sí solos, tienen sus dificultades derivadas entre otros aspectos, de las alteraciones climáticas; sino fundamentalmente a la disparidad en la que se distribuyen los beneficios entre los actores de la cadena agroindustrial cebada-malta, producto, obviamente, de la disparidad de niveles de competitividad y de inversión.

La visión integral de la cadena agroindustrial cebada-malta, implica reconocer su unidad técnica y económica para regular el desarrollo sostenido de ambos sectores, por lo tanto, es importante tener claro cual es la situación actual de la misma, y más aún por la apertura total del TLCAN, con la finalidad de poder diseñar políticas y estrategias que mejoren las relaciones de producción y transformación de dicha cadena.

Ámbito internacional

La cebada ocupa el 5ª lugar en importancia de los cultivos relevantes a nivel mundial , siendo los principales países productores: Rusia, Canadá, Alemania, Francia, España, Turquía y Estados Unidos que concentran el 52% del volumen mundial, estando en este grupo los dos países con los que firmamos el TLCAN; en tanto que la producción de México sólo tiene una participación del 0.5%, que está relacionada con la importante diferencia en productividad, es decir, México ocupa el lugar 29 en superficie cosechada y el 31 en producción de cebada según datos de la FAO.

Lugar	Superficie cosechada			Producción		
	País	(miles ha)	%	País	(miles t)	%
1	F. de Rusia	8,713.30	16.42	F. de Rusia	15,791.37	11.5
2	Australia	4,739.00	8.93	Canadá	12,481.20	9.1
3	Ucrania	4,350.40	8.22	Alemania	11,613.80	8.4
4	Canadá	3,888.80	7.33	Francia	10,317.06	7.5
5	Turquía	3,650.00	6.88	Australia	9,869.00	7.2
6	España	3,143.70	5.92	Turquía	9,500.00	6.9
7	Marruecos	2,179.80	4.12	Ucrania	8,975.10	6.5
8	Alemania	1,946.80	3.67	Reino Unido	5,495.00	4.0
9	R.I. de Irán	1,659.17	3.12	EUA	4,613.49	3.3
10	Francia	1,603.02	3.02	España	4,456.90	3.2
29	México	306.10	0.57			
	Resto	16,864.50	31.79			
	Mundial	53,044.59	100			
31	México				760.69	0.5
	Resto				42,924.31	31.3
	Mundial				136,797.92	100
Fuente: FAOSTAT 2005						

Lo anterior además de indicar la poca participación de México en superficie y en producción de cebada, también refleja la concentración en ambos aspectos, ya que 6 países detentan 53.6% del área cosechada y también 6 países producen el 50.6%, aunque 2 de ellos son diferentes.

Por otro lado, en productividad de cebada, México ocupa el lugar 46, y está por debajo de la media mundial, produciendo 200% menos que Bélgica que es el país de mayor productividad con 7,547 kg/ha debido a sus superficies de riego. En México se siembra y cosecha en los dos ciclos agrícolas, teniendo en el Primavera Verano (temporal) un

rendimiento de 2 t/ha y en Otoño Invierno (riego) un rendimiento de 6 t/ha.

En exportación de cebada México ocupa el lugar 24 con un ínfimo volumen que representa el 0.56% del total mundial.

Al relacionar estos aspectos con la exportación de cerveza donde México ocupa el primer lugar, se hace evidente el potencial del país en productividad para incidir más en la producción y calidad de la cebada que es la materia prima base para la elaboración de malta.

Es una oportunidad para México, el hecho de que exista una tendencia decreciente de la superficie mundial cultivada de cebada para generar un mayor rendimiento por unidad de superficie, ya que una disminución de 14 millones de hectáreas en menos de 10 años, pone en riesgo el mercado internacional porque se reduce el *stock* mundial de cebada.

Por otro lado, es también importante considerar los diversos usos de la cebada, donde se destaca que México es, después de China, el país que mayor proporción de su producción usa para elaborar alimentos (cuadro 3), es decir, se facilita con nuevas tecnologías su uso en alimentos direccionados en el contexto de una bioeconomía.

Lo anterior induce a que en el uso y consumo *per cápita* en todos los rubros, México sea casi el último, lo que confirma el potencial de la cebada en sus subproductos y derivados, y por lo tanto, su importancia de modernizarlo beneficiaría a toda la cadena agroindustrial relacionada con dicho cultivo, incluyendo, obviamente, la producción de cervezas de diversos tipos.

El esfuerzo que se ha realizado para ajustar los ordenamientos legales en esta materia son, sin duda, avances importantes pero que han sido, hasta ahora, insuficientes, sobre todo porque no se han manifestado en que todos los procesos de la cadena cebada-malta sean competitivos, poniéndose en riesgo, por un lado, el importante ingreso que mejora la balanza comercial, y por otro, que no se ha garantizado una adecuada rentabilidad hacia el sector primario, por lo que éste no despliega el potencial para su modernización que lo haga eficiente y competitivo. Resumiendo estos aspectos del contexto internacional, se evidencia la importancia de la Unión Europea en la producción, pero también de Canadá y EUA con quienes es factible adquirirla sin aranceles, por lo que México requiere implementar medidas que hagan más competitivo todos los eslabones de esta cadena, ya que su productividad está en la media mundial.

Que México tenga en cebada una productividad 200% menor que el principal país, es preocupante porque si no se mejora la misma con la modernización y competitividad requeridas, se puede propiciar su adquisición en el mercado internacional, provocando el incremento en el déficit de la balanza comercial agropecuaria, encareciendo fletes y costos del producto agroindustrial, es decir, de la cerveza, que precisamente, al liberarse totalmente el TLCAN, ya se anunció un incremento de 4%; además, deben valorarse las implicaciones sociales y económicas inherentes al desplazamiento y migración de los productores.

En este contexto, resulta necesario ubicar como se encuentra la producción de cerveza en el mundo, evidenciándose que México ocupa el lugar 5° con el 4%, lo que contrasta con China que produce el 19%, y dado el crecimiento de dicha economía, es necesario modernizar la cadena cebada-malta para no correr riesgos en el mediano plazo; además, el segundo productor de cerveza es Estados Unidos, por lo que sus requerimientos de cebada son altos.

Con los datos indicados en el contexto internacional, se confirma la importancia de la cadena agroindustrial cebada-malta, y a la vez el potencial que tiene al diversificar sus subproductos y derivados, incluyendo la exportación de ellos para mejorar la balanza comercial, o el consumo interno para activar los mercados regionales donde se siembra este cultivo.

Procede entonces caracterizar la situación de la cadena cebada malta a nivel del país, para tener una visión integral y comprender la justificación de la presente Ley.

Ámbito nacional

México pasó de una de las economías más cerradas a ser una de las más abiertas, y ello ha implicado el desarrollo de algunos subsectores y el abatimiento de otros, es decir, los tratados incluyendo el TLCAN, han abierto

oportunidades que han sido aprovechadas por los han tenido la capitalización suficiente para lograrlo, pero los sectores donde habita la mayor parte de la población rural, los productores de granos básicos dada la obvia característica de marginación y pobreza, los tratados han representado un riesgo en su *status* socioeconómico, por lo que la modernización y competitividad de ellos demanda una política que incida en los procesos productivos no sólo como una coyuntura con ciertos apoyos, sino fundamentalmente con disposiciones estructurales, siendo una de ellas, el marco jurídico en el que todos los actores de las cadenas agroindustriales obtengan beneficios tangibles.

En este sentido se observa que el sector primario tiene una tendencia descendente que afecta el PIB agroalimentario, que es donde mayores importaciones se hacen.

Lo anterior afecta a la economía en su conjunto, porque la balanza comercial continua siendo deficitaria, y lo más crítico se observa al examinar los subsectores en su conjunto, donde el primario es el de menor rentabilidad y con menor aporte al PIB nacional.

Los datos anteriores muestran la vulnerabilidad del sector primario, por lo que es justificable diseñar políticas que permitan un equilibrio en las cadenas agroindustriales, y más aún en aquellas que tienen relevancia en productos de exportación porque permiten disminuir el déficit comercial, ya que la industria de alimentos y bebidas tiene un mejor comportamiento que la misma economía nacional. El dinamismo y desarrollo agroindustrial le da viabilidad a las actividades primarias, requiriéndose una adecuada articulación que permita satisfacer la demanda de los diferentes segmentos de consumidores finales, aspecto que en el caso del cultivo de la cebada, existe todavía un potencial importante que no se ha aprovechado.

Tener un sector primario sólido e integrado al sector agroindustrial, es determinante para la economía de cualquier país, pero más para los que están, como México, en vías de desarrollo, ya que cualquier variabilidad tiene un efecto multiplicador con mayores impactos negativos, y en este caso de la cadena cebada-cerveza, existen varias industrias que proveen de insumos y servicios como fertilizantes y agroquímicos; maquinaria y equipo; fletes y transportes; almacenaje y embalaje, envase y empaque; distribución y promoción; servicios financieros y otras más como cartón, vidrio etc.

El valor de la producción de los cereales es el que aporta mayor cantidad con porcentajes de 23.4, 21.2 y 19.1 (períodos 1990-1994, 1995-2000 y 2001-2005 respectivamente). La tendencia a la baja (en el último período fue superado por el subsector frutales), demanda revertirla haciéndolo más competitivo, pues dejar de apoyar donde se concentran más productores agrícolas, tiene un efecto multiplicador en las condiciones económicas y sociales que dificulta el desarrollo global de la economía nacional. En este contexto, el cultivo de la cebada ha tenido una participación importante que requiere consolidarse para que exprese su potencial con mayor competitividad.

La cebada es el cultivo que mayor incremento en producción ha tenido en los períodos referenciados, incluso de 2003 a 2005 se acercó al volumen de frijol, por lo que la tendencia indica que en pocos años la cebada sería el cuarto cultivo de básicos (de 2001 a 2005 la producción se incrementó en 72.5% con respecto al período anterior de 1995-2000). En el período 1995-2001 la producción de cebada tuvo una TMCA de 6.6% sólo superada por garbanzo, aunque en los últimos años hay algunos cambios.

En este contexto, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, es la segunda más grande de la industria manufacturera, ya que aporta el 26.5% del PIB manufacturero del país, (sólo superada por productos metálicos, maquinaria y equipo con el 29.9%). Además, al interior de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, el de cerveza-malta ocupa el 6ª lugar, superando a sectores como preparación de frutas y legumbres, azúcar, aceites y grasas comestibles; y estando poco abajo de molienda de trigo y molienda de maíz; y siendo superado con mayor valor por carnes y lácteos, otros productos alimenticios, y refrescos y agua. Esto corrobora que la cadena cebada-malta-cerveza, tiene una dinámica que si se descuida, se desequilibran varios sectores asociados.

Resumiendo, dentro de la industria de alimentos y bebidas, la rama de cerveza y malta en el período 1994-2004, tuvo una Tasa Media de Crecimiento Anual de 4.4%, siendo sólo

superada por la de preparación de frutas y legumbres.

La productividad del sector alimentos, bebidas y tabaco es superior a la de la industria manufacturera y de la economía nacional, y por supuesto, mucho mayor que el sector primario, reflejándose que las actividades aunque están integradas en el uso de insumos, no lo están en los niveles de productividad y competitividad, impactando no sólo en una distribución no equitativa de los ingresos, sino que no se estructura una cadena agroindustrial homogénea, dando lugar a procesos discordantes, requiriéndose, entonces, la legislación pertinente que permita el despegue y competitividad de los subsectores menos competitivos, siendo en este caso el de los cebaderos de malta.

Es importante el potencial tecnológico que tiene la producción de cebada, ya que por las condiciones climatológicas del altiplano en el caso de las unidades de temporal (Hidalgo, Tlaxcala y Puebla), y por el riego en Guanajuato y Baja California, es posible incrementarlo, a pesar de que de 1995 a 2003 fueron superiores a la Federación Rusa (1er productor mundial) en 49%; iguales que Canadá (2° productor mundial); pero menores que los de Alemania y Francia (3° y 4° productores) en 53.3 y 54.7%. Además, la productividad con los socios del TLCAN sigue siendo menor.

Esto es importante porque en cuanto a las importaciones de granos básicos, la cebada es, junto con el sorgo, los que han tenido una TMCA negativa en el período de 2000 a 2005, concretamente de -0.6%.

Procede entonces precisar como está el sector en los diferentes estados del país. Se consideran los datos de 2003, año de baja siniestralidad, y a pesar de ello, la cebada cultivada en 20 entidades del país, presenta una gran desigualdad en rendimientos y en precios medios rurales. Dicho año con 373 mil hectáreas, la producción rebasó el millón de toneladas, pero con una productividad de sólo 2.967 t/ha (incluyendo riego y temporal), y un precio medio rural de escasos 1,651 pesos la tonelada, cuando el costo de producción de las investigaciones del INIFAP, demuestran que mínimo es de 2,493 pesos la hectárea, y máximo de 3,540 si se contabiliza la renta de la tierra y el costo financiero del capital.

Por otro lado, la región centro concentra el 62% de la superficie sembrada pero acumula el 73.6% de la siniestralidad nacional. Por lo que en años de mayor siniestralidad, la región tiene serios problemas para abastecer de grano a la industria cervecera. En esta región destaca Hidalgo que siembra el 32% y Tlaxcala con el 25%.

Al interior de las entidades también se da esa concentración, ya que, por ejemplo, en Tlaxcala la producción se concentra en los municipios de Tlaxco, Calpulalpan y Hueyotlipan que aportan el 66.2% de la entidad. Lo anterior corrobora la fragilidad del sector primario y por ende el riesgo de la cadena cebada-cerveza.

En este sentido, la investigación "Costos de producción y rentabilidad de cebada en los Valles Altos de la Mesa Central de México" realizada por el INIFAP, indica lo siguiente: "La rentabilidad del cultivo fluctuó de 61 a 86% al considerar sólo los costos directos de producción, y de 27 a 52% al incluir tanto los costos directos como los de oportunidad. Bajo estas condiciones para que una familia rural pueda recibir cuatro salarios mínimos mensuales al año, necesarios para un nivel de vida digno, tendría que sembrar más de 20 ha si sólo se consideran los costos directos de producción y por arriba de 35 ha al contabilizar los costos totales".

Dado que en el altiplano la producción es de temporal, las unidades de producción rural tienen un bajo nivel tecnológico y superficies pequeñas, no obstante que los requerimientos del cultivo implican una alta mecanización. El mayor avance tecnológico logrado es que en la mayoría de las unidades se fertiliza y se usan semillas mejoradas, insumos que son aportados por la empresa Impulsora Agrícola S.A. (IASA),

La producción de cebada en México se destina de manera mayoritaria a la producción de cerveza (aproximadamente 70%). La parte restante se utiliza para otras actividades, en especial como alimentación para el ganado.

La cerveza mexicana tiene una alta presencia mundial, sin embargo, estudios recientes en nuestro país demuestran que el valor de la producción de la cebada maltera y de la malta crecen en una proporción menor que el valor de la cerveza, es decir, el crecimiento de la industria cervecera no se expresa en la producción y en el procesamiento de la materia prima, esto debido a

la mayor inversión en mercadeo, logística, distribución y modernización.

Sin pretender indicar una competencia de subsidios, si es necesario considerar que el financiamiento para el campo mexicano es tan sólo del 7 por ciento del valor de la producción contra el 85 por ciento para el mismo valor en los Estados Unidos; que los apoyos al productor son de 1,000 dólares *per cápita* en México, contra 19 mil dólares en Estados Unidos; que la productividad es de tan sólo 1,800 dólares por trabajador en México, en tanto que en Estados Unidos es de 50 mil dólares. Estas asimetrías pueden reducirse modernizando y haciendo competitivo al sector cebadero de esta cadena agroindustrial, para producir los requerimientos de materia prima en cerveza, cereales y alimentos balanceados.

Sin embargo, ante la posibilidad de que las empresas malteras adquieran el grano en el mercado internacional, principalmente Canadá y Estados Unidos, y ante la disminución de la superficie sembrada, el precio internacional ha mostrado un comportamiento cíclico, por lo que los precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera en el país, no han aumentado en la misma proporción en la que lo han hecho los costos de producción. Si esta situación se mantiene, los productores de cebada seguirán viendo disminuir su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que pueda representarles dedicarse a la producción de este cultivo.
En este sentido, la presente propuesta contempla resolver diversos problemas que enfrentan los productores de Cebada en México en lo específico, y la cadena agroindustrial cebada-malta en lo general. Entre ellos están:

- Integrar centros de acopio modernos y bien establecidos para que exista certeza de que se recibe el producto con precios competitivos.
- Contar con la tecnología apropiada para una correcta certificación de la semilla.
- Disponer de apoyos para la investigación y extensión de la cebada que permita su desarrollo y competitividad.
- Obtener materia prima que permita diversificar el tipo de malta como producto final.

Finalmente, es evidente que para lograr dichos aspectos se requiere un marco jurídico que de certidumbre y condiciones favorables para todos los actores de la cadena cebada-malta, y que los proveedores de la materia prima de uno de los negocios más rentables de la industria de alimentos y bebidas en México, potencialicen y diversifiquen sus opciones de desarrollo.

Por los motivos expuestos me permito poner a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto sobre la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada

Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Se expide la presente Ley en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 2.- Sus disposiciones son de interés público y de orden social, y por su carácter básico y estratégico para la economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene por objeto normar las actividades asociadas a la agricultura y a la integración sustentable de la cebada, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la cebada, así como sus productos, subproductos y derivados.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. **Abastecedores de Cebada**: Los Productores de Cebada, como personas físicas o morales, cuyas tierras se dediquen total, parcial y temporalmente al cultivo de la cebada;

II. **Agroindustria de la Cebada**: Los procesos de todos los productos, subproductos, derivados y su comercialización, transformación de la

cebada para malta, cerveza, alimentos cerealeros y alimentos balanceados

III. **Cadena Cebada-malta-cerveza**: Es la integración de todos los procesos productivos, de comercialización y transformación de dichos productos;

IV. **Cámara Cebadera**: La Cámara Nacional de las Industrias Maltera, Cebadera, Cerealera y de Alimentos Balanceados;

V. **Centro de Acopio**: Lugar donde los Productores y Abastecedores de Cebada recepcionan la cebada maltera;

VI. **Ciclo Cebadero**: El período comprendido que abarca desde la siembra hasta la cosecha de acuerdo a las diferentes regiones del país;

VII. **Comisión Intersecretarial**: La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable;

VIII. **Comité**: Cada uno de los Comités de Producción Cebadera de cada Centro de Acopio;

IX. **Comité Nacional**: El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Cebada como órgano consultivo;

X. **Comité Regional**: Cada uno de los Comités Regionales para el Desarrollo Sustentable de la Cebada como órganos consultivos;

XI. **Contrato de Condiciones Particulares**: El contrato de compraventa, siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de cebada, que de manera voluntaria e individual celebren los Productores de Cebada y/o los Abastecedores de Cebada con alguna industria que pudiera estipular condiciones diferentes a las del Contrato Uniforme;

XII. **Contrato Uniforme**: El contrato regional de compraventa, siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de cebada que de manera voluntaria y colectiva celebran los representantes debidamente acreditados de las Organizaciones de los Productores de Cebada, con alguna industria dispuesta a tal convenio;

XIII. **Impulsora agrícola**: Órgano de intermediación entre cebaderos y la Industria Cervecera;

XIV. **Industriales**: Los propietarios de las Industrias procesadoras de cebada y sus derivados (malta, cerveza, alimentos de cereales y alimentos balanceados);

XV. **Industria**: Planta industrial dedicada al procesamiento, transformación e industrialización de la cebada;

XVI. **Junta Permanente**: La Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Cebada, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XVII. **Ley**: La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada;

XVIII. **Organizaciones**: Las Organizaciones nacionales, regionales y locales de los Productores de Cebada y Abastecedoras de Cebada;

XIX. **Padrón Nacional**: El listado de los Productores de Cebada;

XX. **Primer Ciclo**: Cebada en su primer ciclo vegetativo, que se cosecha en Primavera-Verano o de acuerdo a contingencias climatológicas;

XXI. **Programa Nacional de la Agroindustria de la Cebada**: El elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y donde se definen las políticas para modernizar y hacer competitivos todos los procesos de la Agroindustria de la Cebada, que implique un beneficio adecuado para todos los actores de la misma;

XXII. Productores de Cebada: Personas físicas que se dedican al cultivo de la cebada en sus diversas variantes;

XXIII. Segundo Ciclo: Cebada en su segundo ciclo vegetativo que se cosecha en Otoño-Invierno o de acuerdo a contingencias climatológicas;

XXIV. Región o regiones: Son de acuerdo a los Distritos de Desarrollo Rural según SAGARPA;

XXV. Registro: El Servicio Nacional del Registro Agropecuario, previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XXVI. Reglas de Operación: Las definidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para los criterios de funcionamiento de los programas y apoyos para la Agroindustria de la Cebada, las cuales estarán acordes a la presente ley;

XXVII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXVIII. Sistema Nacional de Arbitraje: El definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XXIX. Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral: El definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y que se refiere a la Cadena Agroindustrial de la Cebada

XXX. Sistema Nacional de Planeación: El definido por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo;

XXXI. Subproductos y Derivados: Son todos los compuestos que se obtienen o pueden obtenerse con cualquier transformación de la cebada y aditamentos que se agreguen;

XXXIII. Zona de Abastecimiento: El área geográfica donde se ubican los terrenos de los productores que abastecen a cada Industria.

Artículo 4.- Las líneas de política para la Agroindustria de la Cebada deberán ser consideradas y previstas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Cebada elaborado por la Secretaría, contemplando los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción propuestas en los programas sectoriales agropecuario, industrial y comercial en su caso;

Artículo 5.- Son sujetos de esta Ley, los Productores de Cebada, Abastecedores de Cebada, Industriales procesadores de la cebada, Organizaciones que los representan y, en general, las entidades que se definieron en el Artículo 3.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES Y DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CEBADA

CAPÍTULO I

De la Secretaría

Artículo 6. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones realizará lo siguiente:

I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de aplicarse en la materia, a fin de desarrollar la rentabilidad, productividad y competitividad a las actividades que regula esta Ley, y que las haga sustentable;

II. Establecer programas para el fomento y el desarrollo de la Agroindustria de la Cebada e impulsar esquemas que propicien la inversión en el campo cebadero y en la industria cervecera, cerealera y de alimentos balanceados;

III. Gestionar los recursos que demande la ejecución de los programas que formule para promover el mejoramiento de la Agroindustria de la Cebada;

IV. Formular los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la

producción y a la Agroindustria de la Cebada, así como las Reglas de Operación de los mismos;

V. Participar en la coordinación con las autoridades correspondientes, y en la tramitación y/o prestación de todos los servicios asociados a la producción y Agroindustria de la Cebada;

VI. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía, las medidas para procurar el abasto nacional suficiente de cerveza, cereal y de alimento balanceado, previendo la reserva estratégica que permita el establecimiento de niveles de inventarios adecuados;

VII. Promover y encauzar el crédito y aseguramiento en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo y estímulo de la producción del campo cebadero, y la operación de las Industrias relacionadas con dicho cultivo;

VIII. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Economía la exportación de productos, subproductos y derivados de la cebada;

IX. Participar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las acciones de preservación del medio ambiente y la protección de la biodiversidad en el campo cebadero en las Zonas de Abastecimiento, y de tecnologías limpias en las Industrias, impulsando la ejecución de programas de sustentabilidad ecológica;

X. Impulsar la producción y consumo nacional de los productos, subproductos y derivados de la cebada;

XI. Establecer en coordinación con la Secretaría de Economía, un sistema integral de información de mercados y otros servicios que consoliden el mercado interno y externo, y la exportación de productos, subproductos y derivados de la cebada;

XII. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión hacia los productores y en la Agroindustria de la Cebada y sus actividades complementarias, para lo cual, en coordinación con las dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, fomentará el establecimiento de empresas de los sectores social y privado cuyo objeto social y económico sea el aprovechamiento de la cebada, la industrialización y comercialización de los subproductos y derivados de la misma, propiciando la modernización y competitividad, y en su caso, la reconversión productiva;

XIII. Sugerir adecuaciones a la norma de calidad junto con los Productores, Abastecedores de Cebada e Impulsora Agrícola, para la recepción de la cebada;

XIV. Verificar en los Centros de Acopio conjuntamente con impulsora agrícola, que los análisis de calidad y el peso de la producción del producto sea a la vista del Productor;

XV. Elaborar y promover programas de productividad de las Zonas de Abastecimiento donde se incorporen los programas de infraestructura hidroagrícola y de caminos rurales;

XVI. Vigilar directamente la aplicación de los programas de apoyo a los cebaderos con base a los soportes legales que amparen la producción, como pueden ser los títulos de propiedad, u otros documentos que tengan validez legal, con un límite de 20 ha por Productor;

XVII. Participar en la planeación de la producción de los ciclos agrícolas junto con los Productores, Abastecedores de Cebada e Impulsora Agrícola, así como en la elección de

las diversas variedades de semillas y procesos tecnológicos;

XVIII. Instrumentar el sistema de registro de las Organizaciones locales, regionales y nacionales de Productores de Cebada, así como de las Industrias relacionadas con dicho cultivo, dentro del Servicio Nacional del Registro Agropecuario;

XIX. Promover la conciliación y el arbitraje de las controversias que se presenten entre los Productores, Abastecedores y Agroindustriales de la Cebada en los términos del Sistema Nacional de Arbitraje que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y esta Ley, y

XX. Las demás que esta Ley y su Reglamento establezcan.

Artículo 7.- La Secretaría y las entidades públicas competentes en los términos de la Legislación vigente con opinión del Comité Nacional y los Comités Regionales, formularán el Programa Nacional de Producción, Comercialización e Industrialización de la Cebada con carácter especial, que será presentado para su aprobación y ejecución al Titular del Ejecutivo Federal, en el cual se deberá considerar, entre otros aspectos, los siguientes:

I. El balance maltero, cervecero y el balance general cerealero y de alimentos balanceados;
II. Las políticas de apoyos, subsidios y de financiamiento de inversión para el campo cebadero y su transformación;
III. Las políticas comerciales;
IV. Los estímulos fiscales y apoyos gubernamentales;
V. La competitividad en costos y precios;
VI. El desarrollo y aplicación de altas tecnologías;
VII. Los tratados comerciales celebrados con otros países, y
VIII. El comportamiento del mercado nacional e internacional.

Artículo 8.- Lo indicado en el Artículo anterior, es con el objeto de establecer, para el corto y el mediano plazos, los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, asignación de recursos, responsabilidades, instrumentos de evaluación, y mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional entre los gobiernos Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para propiciar el ordenamiento, fortalecimiento y transparencia en las actividades de la Agroindustria de la Cebada.

CAPÍTULO II

Del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Cebada

Sección Primera

De la Denominación, Objeto y Domicilio

Artículo 9.- Se constituye el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Cebada como un Órgano Consultivo de la Secretaría, cuyo objeto será emitir opiniones con relación a las actividades relacionadas con la producción, comercialización y transformación de la Agroindustria de la Cebada; su domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal.

Sección Segunda

De las atribuciones

Artículo 10.- El Comité Nacional, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Opinar ante la Secretaría y en los términos del Sistema Nacional de Planeación, sobre los programas que resulten más convenientes para la producción, industrialización y comercialización de la Agroindustria de la Cebada, sus productos, subproductos y derivados, así como las obras de infraestructura, considerando el entorno en el que se desenvuelve el sector en el corto y en el mediano plazos;

II. Poner a consideración de la Secretaría sobre los mecanismos de concertación entre Productores, Abastecedores de

Cebada, Impulsora Agrícola e Industriales;

III. Analizar el tamaño de los mercados de grano de cebada, cerveza, cereal y alimentos balanceados, con el propósito de considerar estrategias de expansión de cada uno de ellos en sus distintas presentaciones, así como sus subproductos y derivados, acorde con las tendencias de los mercados y las condiciones del País;

IV. Participar con criterios objetivos y pertinentes en la definición de modalidades de importación de grano de cebada, subproductos, derivados y substitutos, que regulen el mercado nacional de los mismos y beneficien a todos los actores de la Cadena Agroindustrial de la Cebada;

V. Estudiar y poner a consideración de la Secretaría las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de los agentes económicos participantes;

VI. Estudiar las repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito de la producción, comercialización y transformación de los productos, subproductos y derivados de la cebada y sugerir las medidas pertinentes;

VII. Opinar sobre el sistema obligatorio de registro e informes de control semanal, mensual y anual del comportamiento que tiene en el mercado nacional e internacional los productos cerveceros, cerealeros y de alimentos balanceados;

VIII. Emitir consideraciones sobre el registro y control de niveles de producción por Centro de Acopio para contribuir a elevar la competitividad del sector;

IX. Estudiar periódicamente el sistema de pago de la cebada por calidad uniforme y el sistema de pago por la calidad de la cebada individual o de grupo y dar una opinión al respecto;

X. Opinar sobre los balances de producción de grano de cebada, así como de productos cerveceros, cerealeros y de alimentos totales por país, para poner a consideración de la Secretaría, las políticas públicas en relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios administrados y de mercado;

XI. Emitir opinión sobre el sistema de pago de la cebada por calidad individual o por grupos;

XII. Hacer consideraciones respecto a las estadísticas de resultados de producción y productividad de las cosechas de cada región para implementar políticas de producción;

XIII. Dar opinión a los Productores, Abastecedores de Cebada y a los Industriales sobre la instrumentación de un sistema de información que permita integrar los costos de producción de la siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transformación y de distribución de la cebada y de la cerveza, cereal y de alimento, para sustentar las bases del programa de productividad y competitividad de la agroindustria.

XIV. Hacer consideraciones sobre los programas de fomento que se circunscriban a las Zonas de Abastecimiento;

XV. Emitir opinión sobre las acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, formulándose y ejecutándose bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación, los cuales formarán parte del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XVI. Hacer consideraciones sobre los informes de los Comités Regionales respecto de los programas convenidos y sus modificaciones, los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción de la cebada, los de inicio y término de la cosecha, los reportes de evaluación de actividades y todos aquellos que a su juicio resulten necesarios para tomar decisiones en materia de esta Ley;

XVII. Opinar sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración y que propicien la eficiencia administrativa y el aprovechamiento pleno de los recursos, a fin de alcanzar mejores niveles de producción, comercialización y transformación del grano de cebada;

XVIII. Emitir apreciaciones en las consultas de carácter técnico, presupuestal o programático que le sean planteadas;

XIX. Hacer consideraciones sobre los convenios que se realicen con los centros de investigación nacionales e internacionales, instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales, relacionados con la actividad de la producción y transformación, para desarrollar técnicas y tecnologías en los sistemas de producción e industrialización de la cebada.

XX. Las demás que se señalen en esta Ley.

Artículo 11.- El Comité Nacional estará integrado por:

I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Economía;

IV. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Dos representantes de la Cámara Cebadera;

V. Un representante de las Organizaciones Nacionales, Regionales y Locales de Productores de Cebada;

VI. Dos representantes de Organizaciones Sociales y Asociaciones Nacionales y Estatales que deberán contar con un mínimo de 400 representados de productores de cebada debidamente registrados notarialmente, y

VII. Un representante del Consejo Sistema Producto de la Cebada, que se alternarán en cada reunión representantes de los estados que lo constituyen

Por cada miembro propietario habrá un suplente y contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de éstos.

Podrán integrarse a la Junta Directiva con carácter de invitados y sólo con derecho a voz, los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal, que tengan a su cargo acciones relacionadas con el objeto del Comité Nacional, así como los representantes de Organizaciones privadas o sociales con actividades afines al mismo.

Artículo 12.- Las sesiones que celebre el Comité Nacional, serán ordinarias o extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos tres veces al año en forma cuatrimestral y las extraordinarias las veces que sean necesarias.

Serán válidas las sesiones cuando se encuentren el 50% + 1 de sus miembros.

En caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente.

En caso de empate se buscará el consenso entre los asistentes a la sesión.

Los acuerdos serán validos con el 70% de los miembros presentes; de cada sesión se levantará acta circunstanciada misma que será firmada por los asistentes e inscrita en el Registro Nacional.

Artículo 13.- La Secretaría designará como Secretario Técnico del Comité Nacional al Subsecretario de Agricultura.

Articulo 14.- La Secretaría expedirá el reglamento correspondiente para el funcionamiento del Comité Nacional.

CAPÍTULO III

De los Comités Regionales de Desarrollo Sustentable de la Cebada

Artículo 15.- En el ámbito territorial en el que quede comprendida cada una de las regiones que determine la Secretaria de acuerdo a Ley, se promoverá la creación de los Comités Regionales, para que, en concordancia con los programas estatales y municipales del ramo, coadyuven en el ámbito regional a la planeación, organización, producción, comercialización, transformación, competitividad y rentabilidad, con base en la multifuncionalidad de las Regiones cebaderas, circunscribiendo su actuación al ámbito regional y estatal que corresponda, en los términos de la propia Ley.

Articulo 16.- Se encargará en tratar lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, entrega y calidad de la cebada.

CAPÍTULO IV

De los Comités de Producción Cebadera

Artículo 17.- En cada Centro de Acopio se constituirá un Comité para tratar todo lo relativo a la recepción y comercialización.

Artículo 18.- Los Comités se integrarán con los representantes de los Centros de Acopio y los representantes de los Abastecedores de Cebada que correspondan, bajo las siguientes reglas:

I. Dos representantes del Centro de Acopio con facultades para tomar decisiones, de preferencia los representantes legales, con el carácter de propietarios con su respectivos suplentes designados por el mismo; quienes acreditarán su carácter con el nombramiento o poder notarial correspondiente, y

II. Dos representantes de las Organizaciones o asociaciones locales de Abastecedores de Cebada, quienes acreditarán su personalidad con el nombramiento o poder notarial correspondiente.

Artículo 19.- Los acuerdos de los Comités se tomarán por mayoría de votos, excepto los que se refieran a descuentos y castigos de calidad, que deberá de adoptarse por unanimidad.

Artículo 20.- Los Comités son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, y tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Formular para su respectiva Zona de Abastecimiento, los programas de operación de campo relativos a la siembra de cebada; actividades agrícolas; mecanización del campo cebadero; cosecha, conservación y mejoramiento de caminos saca cosecha; entrega y recepción de cebada y de las solicitudes de crédito en general;

II. Elaborar, modificar, y adecuar el programa de cosecha cuando a su juicio sea conveniente;

III. Convenir las condiciones económicas y de operación para la transferencia de cebada de un Centro de Acopio a otro, cuando así se estime conveniente;

IV. Verificar que los productores o abastecedores de cebada se encuentren en el padrón de productores cebaderos que realiza el INEGI, o con su registro ante la Secretaría;

VI. Expedir reportes de riesgos climatológicos, así como solicitar el levantamiento del acta de daños por la instancia correspondiente;

VII. Determinar los descuentos por impurezas aplicables a la cebada al ser entregada al Centro de Acopio, en términos de esta Ley;

VIII. Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los Abastecedores de Cebada, en los términos de esta Ley;

IX. Revisar y aprobar los presupuestos de conservación y mantenimiento de la superficie cebadera;

X. Aprobar el control y rotación del almacenamiento de la cebada en los Centros de Acopio;

XI. **I**nformar a la Secretaría en los formatos que ella misma expida, el avance de los programas convenidos; los avances mensuales y acumulados de los programas de campo y de recepción de cebada en los centros de Acopio; los reportes de evaluación de actividades y los cambios de programas; el inicio y término de la operación de cosecha y los demás que le soliciten;

XII. Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas necesarias que le den viabilidad a las actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la cebada;

XIII. Integrar la información digitalizada de la Zona de Abastecimiento con la finalidad de estar en posibilidades de acordar lo procedente para elevar la productividad y la producción de cebada por hectárea;

XIV. Solicitar a la Secretaría la realización de revisiones, exámenes o auditorías sobre el desempeño de las operaciones del Comité en general o sobre de alguna de ellas en particular;

XV. Informar a los Abastecedores de Cebada en forma pública, clara y puntual, por conducto del representante respectivo, los gastos efectuados en el ejercicio de sus funciones, especificando montos, conceptos y distribución de los mismos, y

XVI. Las demás que les confiera la presente Ley.

Artículo 21.- Los Comités celebrarán las reuniones que se indican a continuación:

a) Ordinarias, una vez por mes durante la cosecha, y

b) Extraordinarias, cuando así lo requiera la atención de asuntos urgentes, debiendo ser convocadas, por escrito, por cualquiera de sus miembros, y acompañarse del orden del día correspondiente.

Artículo 22.- Cuando sin causa justificada y habiendo sido legalmente notificado no asista alguno de los representantes a una sesión ordinaria del Comité, no se llevará a efecto dicha reunión, debiendo convocarse a una nueva reunión con tres días naturales de antelación. En caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria para una nueva reunión podrá hacerse dentro de las 24 horas siguientes si el asunto así lo amerita.

En ambos casos se realizarán con los que asistan en la segunda citación, siendo los acuerdos obligatorios para todas las partes.

Artículo 23.- Todos los cargos en el Comité serán honoríficos.

TÍTULO TERCERO

DE LAS ORGANIZACIONES DE ABASTECEDORES DE CEBADA

CAPÍTULO I

Constitución y Objeto de las Organizaciones de Abastecedores de cebada

Artículo 24.- Los Abastecedores de Cebada de los Centros de Acopio podrán constituir Organizaciones o asociaciones locales y nacionales de productores de cebada para la mejor representación y defensa de sus intereses.

Artículo 25.- Las Organizaciones o asociaciones nacionales y locales deberán constituirse o estar constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria o en las Leyes Federales, estatales y del Distrito Federal vigentes, cualquiera que sea su materia.

Artículo 26.- La Secretaría, por conducto del Registro, inscribirá las Organizaciones o asociaciones locales y nacionales de abastecedores que se constituyan, asentando los datos relativos al acta constitutiva y a su padrón de afiliados, los estatutos, directivas y modificaciones de documentos, previo cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley y en el reglamento correspondiente.

I. Una vez obtenido el registro de las Organizaciones o asociaciones locales y nacionales con base en lo dispuesto en esta Ley, los Abastecedores de Cebada a través de sus Organizaciones o Asociaciones estarán representados en el Comité Nacional, y podrán solicitar ser miembros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como de los consejo estatales, municipales y distritales para el Desarrollo Rural a que se refiere el Artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. Las inscripciones realizadas en el Registro, relacionadas con los sujetos de esta Ley, tendrán efectos de fe pública, de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II

De las Organizaciones Locales de Abastecedores de Cebada

Artículo 27.- Las Organizaciones o Asociaciones Locales de Abastecedores de Cebada estarán constituidas en las Zonas de Abastecimiento con los productores de cebada que tengan celebrado un convenio con el Centro de Acopio que corresponda.

Artículo 28.- Las Organizaciones o Asociaciones locales que se constituyan, para obtener y mantener su registro, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten la figura jurídica para su constitución y deberán estar debidamente inscritas en el Registro. Para estos efectos, el Registro deberá certificar que dichos padrones cumplen con los requerimientos establecidos en esta Ley.

I. Igualmente, deberán exhibir dos copias de su acta constitutiva y de sus estatutos debidamente certificados, dos copias del acta de elección de su Comité Local vigente y dos copias del padrón de Abastecedores de Cebada asociados, mismo que deberán actualizar anualmente.

II. Los Abastecedores de Cebada que tengan celebrado un convenio de condiciones particulares tendrán los mismos derechos y obligaciones que establece esta Ley.

Artículo 29.- Entre otras funciones, a las Organizaciones o asociaciones locales de Abastecedores de Cebada, les corresponderá:

I. Representar los intereses generales de sus agremiados ante los Industriales y toda clase de autoridades y organismos federales, estatales y municipales;

II. Adoptar prácticas productivas e innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar la productividad entre sus afiliados;

III. Promover las medidas que se estimen convenientes para impulsar la actividad cebadera;

IV. Organizar el otorgamiento de servicios de orientación y asistencia técnica, legal y administrativa relacionada con su actividad, en beneficio de sus asociados;

V. Defender los intereses particulares de sus afiliados en los Comités;

VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias, seminarios y en general toda clase de actividades que redunden en beneficio de sus afiliados;

VII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida y la actualización

de los Abastecedores de Cebada para elevar sus niveles de producción;

VIII. Promover y fomentar las figuras asociativas para el desarrollo de proyectos productivos y de financiamiento que contribuyan al desarrollo regional, municipal y al empleo;

IX. Informar con periodicidad a los Abastecedores de Cebada integrantes de su organización sobre su actuación, y el alcance de los programas y acciones en beneficio de sus agremiados, y

XI Las demás que esta Ley y sus propios estatutos les señalen.

Artículo 30.- Las Organizaciones o asociaciones cebaderas locales que se constituyan con apego a esta Ley, se podrán integrar o adherir a cualquiera de las organizaciones cebaderas nacionales legalmente registradas.

CAPÍTULO III

De las Organizaciones Nacionales de Abastecedores de Cebada

Artículo 31.- Para la mejor atención y defensa de los intereses de sus agremiados las Organizaciones o asociaciones locales de Productores y Abastecedores de Cebada podrán constituirse en organizaciones cebaderas nacionales en los términos de la presente Ley.

Artículo 32.- Las Organizaciones nacionales de Productores y Abastecedores de Cebada deberán estar debidamente inscritas ante el Registro. Para su debido registro, deberán presentar dos copias del padrón de Productores o Abastecedores de Cebada asociados que deberán actualizar anualmente. La certificación del padrón se basará en el registro de afiliaciones de sus organizaciones locales, sancionadas por el Comité de cada una de las Regiones.

Artículo 33.- Las Organizaciones nacionales, entre otros, tendrán por objeto:

I. Representar los intereses de sus afiliados ante cualquier autoridad u organismo de carácter público o privado;

II. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones o asociaciones locales afiliadas;

III. Fomentar la modernización del campo cebadero nacional y la adopción de mejoras tecnológicas;

IV. Promover la instrumentación de políticas que impulsen el desarrollo equilibrado de la Agroindustria de la cebada en nuestro país;

V. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias, seminarios y en general toda clase de actividades que redunden en beneficio de la actividad cebadera;

VI. Impulsar e instrumentar programas de capacitación y adiestramiento para la profesionalización de los cuadros de Productores, Abastecedores, técnicos y directivos de las Organizaciones cebaderas;

VII. Fomentar la constitución y operación de organismos auxiliares de crédito y servicios relacionados con la actividad agropecuaria;

VIII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cebaderas del país y promover el desarrollo rural sustentable de la Agroindustria de la Cebada;

IX. Participar en representación de los intereses de sus agremiados en las instancias contempladas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la presente Ley;

X. Prestar los servicios públicos que les sean autorizados o concesionados por los Gobiernos Federal, de las entidades federativas o municipales;

XI. Informar con periodicidad a sus Organizaciones o asociaciones locales y los Abastecedores de Cebada afiliados sobre su actuación, y el alcance de los programas y acciones en beneficio de sus agremiados, y

XII. Las demás que le señale esta Ley y sus propios estatutos.

CAPÍTULO IV

Del Padrón Nacional de Abastecedores de Cebada

Artículo 34.- El Padrón Nacional estará conformado por el listado de Productores de cebada del país, especificando los Centros de Acopio con los que tengan celebrado un convenio y la Organización local y/o nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación.

Artículo 35.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 25, 27 y 30 de la presente Ley, corresponde al Registro la verificación del padrón de Productores de Cebada de cada Centro de Acopio y la certificación, en su caso, de las afiliaciones y renuncias a las Organizaciones o asociaciones locales y/o nacionales que les sean presentadas.

Artículo 36.- Para efectos del artículo anterior se establece el siguiente procedimiento:

I. Los Abastecedores de Cebada que tengan interés en constituir una Organización o de renunciar a la que pertenezcan, deberán presentar la solicitud de afiliación y/o renuncia que deberá contener lo siguiente:

a) Nombre del Productor de cebada;

b) Clave del Productor del Centro de Acopio de que se trate;

c) Nombre del predio, parcela, ejido o congregación, municipio y entidad federativa a la que pertenezca;

d) Volumen de cebada entregada en la cosecha inmediata anterior;

e) Manifestación expresa de la Organización o asociación local y/o nacional a que desee pertenecer o renunciar, y

f) Firma o huella digital del solicitante, de ser este último el caso, se requerirá la firma de dos testigos.

II. En caso de renuncia a la Organización a la que pertenezca, deberá ser presentada por escrito a la misma, con copia para el Comité, para el Registro, y para la Organización o asociación a la que desee pertenecer en su caso.

Artículo 37.- Una vez recibida por el Registro la documentación a la que se hace referencia en el artículo anterior, procederá a su análisis, evaluación y aprobación, en su caso; de ser procedente, aceptará la misma para los fines legales a que haya lugar.

Artículo 38.- Los Centros de Acopio tendrán la obligación de entregar al Comité y al Registro la relación de la totalidad de sus Productores y Abastecedores de Cebada anualmente o cuando así se les requiera, especificando la agrupación a que correspondan.

Artículo 39.- Cuando exista duplicidad de una afiliación, el Registro pedirá al Comité que cite al Productor o Abastecedor de Cebada para que, de manera personal, manifieste a qué Organización desea pertenecer, certificando tal decisión.

En caso de que el Productor o Abastecedor de cebada no atienda el citatorio sin causa que lo justifique, se le considerará no afiliado a Organización o Asociación alguna.

Artículo 40.- Las solicitudes de afiliación y/o renuncia que se presenten antes del inicio del ciclo cebadero, surtirán efecto a partir del inicio del mismo. Si se presentaran una vez iniciado el Ciclo cebadero tendrán efectos jurídicos hasta el inicio del siguiente.

Artículo 41.- Los padrones de Productores o Abastecedores de cebada por Centro de Acopio se actualizarán anualmente; de no presentarse

modificación alguna una vez iniciado el ciclo cebadero, prevalecerá el padrón del ciclo anterior.

Artículo 42.- Las afiliaciones que hayan sido certificadas se incluirán en el registro del Padrón Nacional cuando cuenten con la aprobación de la Organización o asociación a la que deseen pertenecer.

Artículo 43.- El Padrón Nacional servirá de base para fomentar y fortalecer los programas y acciones de Gobierno orientados a la modernización y desarrollo de las Regiones cebaderas.

TÍTULO CUARTO

DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO I

Del Sistema de Pago

Artículo 44.- En el precio de la cebada convenido en los contratos particulares, se tomará en cuenta la norma de calidad mexicana vigente de la cebada, publicada por la autoridad competente y así como el precio internacional de la cebada y la malta equivalente en zonas productores y consumidoras de México.

Artículo 45.- Los Centros de Acopio pagarán la cebada recibida de la siguiente manera:

I. Una liquidación del 100% del producto, que deberá pagar al precio convenido en el momento de la recepción de la cebada.

CAPÍTULO II

De las Características de la Cebada como Materia Prima para la Industria Maltera, Cerealera y de Alimentos Balanceados

Artículo 46.- Por cebada como materia prima para la industria maltera, cervecera, cerealera y de alimentos balanceados se entiende la parte del grano comprendido entre la espiga, adherido o no de otras porciones, así como de los objetos extraños de cualquier naturaleza que sean, teniendo las siguientes características:

I. El grano aparente es en sí lo que da valor a la cebada como materia prima de la agroindustria maltera, cervecera, cerealera y de alimento, y se distribuye en su mayor proporción en la espiga que ha alcanzado su total desarrollo fisiológico;

II. Quedan comprendidos dentro de la denominación derivados: las espigas, camisas o paja, puntas o cogollos incluyendo la banderilla, tallos de desarrollo insuficiente, y cualquier otra materia derivada de la cebada.

Artículo 47.- Se entiende por peso bruto el peso de la cebada en báscula sin destara. Se entiende por peso neto el resultado que se obtiene de deducir del peso bruto cualquier cantidad en kilogramos correspondiente a los derivados.

Artículo 48.- Al momento de su recepción en el silo del centro de acopio, la cebada deberá tener la condición y las características siguientes:

I. Estar comprendida dentro de las cosechas oportunamente establecidas, de acuerdo a su índice de madurez;

II. Ser fresca en el momento de su entrega;

III. En caso de cebadas afectadas por sequía, granizo, inundación, ciclones y plagas, merecerán consideración especial, debiéndose llevar a cabo una investigación técnica por parte del Comité respectivo, a fin de conocer el grado de deterioro de esa cebada y proteger al Productor para que no sufra daño en su patrimonio;

IV. Estar constituida por los elementos propios con color, grano vestido y completo.

Artículo 49.- Cuando el deterioro de cebada por demoras en su entrega sea por causas no imputables al abastecedor de producto-cebada, tales como fenómenos meteorológicos, el Comité

respaldará al Productor y lo apoyará en términos que le permitan resolver su entrega.

CAPÍTULO III

De las Cebadas Contratadas no Industrializadas

Artículo 50.- Las cebadas contratadas no comercializadas en la producción de que se trate, se considerarán como cebadas reservas, excepto las que convengan el Centro de Acopio y el Abastecedor de cebada en diferir para el siguiente ciclo agrícola y comercialización.

Artículo 51.- Cuando por causas imputables al Centro de Acopio, resulte cebada sin comercializar, éstas deberán ser pagadas al abastecedor por dicho centro de acopio, en los términos establecidos en el presente capítulo.

Artículo 52.- Se entenderán por causas imputables al Centro de Acopio las siguientes:

I. La disminución de la capacidad de comercialización y transformación, debidamente verificada y sancionada por el Comité;

II. La suspensión de las labores por conflictos obrero patronales;

III. La imprevisión del Centro de Acopio en el aprovechamiento o utilización de equipo, materiales, refacciones y sustancias necesarias que afecten la operación normal de la comercialización y transformación;

IV. La insuficiencia en la capacidad de comercialización y transformación en el Centro de Acopio, en relación con la cebada contratada y programada para su comercialización y transformación;

V. Por deficiencia en la cosecha y acarreo de las cebadas, cuando estas operaciones sean organizadas y ejecutadas directamente por los Abastecedores de Cebada o del Centro de Acopio;

VI. Cuando se ocasione disminución en la capacidad de recepción de la planta industrial, por no lograr adecuada fluidez en el movimiento de la cebada en báscula, grúas y silos del Centro de Acopio, ya sea por mala organización administrativa o carecer del equipo necesario;

VII. Cuando el Centro de Acopio no acate los acuerdos del Comité y afecte directamente la comercialización y transformación, y

VIII. Cuando no se notifique oportunamente al Comité la posibilidad de excedentes, a fin de que se tomen las providencias necesarias para que se comercialice y transforme la cebada en otra región.

Artículo 53.- Se entenderán por causas imputables a los Abastecedores de Cebada de una región las siguientes:

I. Cuando sin motivo justificado se opongan a la cosecha y recepción de su cebada;

II. Cuando no realicen oportunamente las labores y obras necesarias que permitan la cosecha y transporte de la cebada;

III. Cuando por conflictos de los propios Abastecedores de cebada, obstaculicen parcial o totalmente la entrega de cebada;

IV. Cuando sin causa justificada los Abastecedores de Cebada obstaculicen parcial o totalmente la entrega de la cebada;

V. Cuando no acaten los acuerdos dictados y notificados oportunamente por el Comité y afecten directamente la comercialización y transformación, y/o

V. Cuando no atiendan oportunamente la cosecha y el acarreo de su cebada producida.

Artículo 54.- En caso de cebadas afectadas por fenómenos climatológicos, el Comité podrá acudir en auxilio del Abastecedor de Cebada afectado para facilitar la entrega, con el fin de que

se comercialice e industrialice el mayor volumen posible sin lesionar los intereses de otros cebaderos cuyas cebadas estén en proceso de cosecha.

Artículo 55.- Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como fenómenos meteorológicos ajenos al Centro de Acopio y a los Abastecedores de Cebada, se queden cebadas sin comercializar en la producción de que se trate, en beneficio de los Abastecedores de Cebada afectados se establece el compromiso con la Secretaría de procurar que la superficie de siembre de cebada quede cubierta con los fondos de aseguramiento.

Artículo 56.- Una vez concluida la producción, el Abastecedor de Cebada al que se le hayan quedado cebadas sin comercializar e industrializar, en pie o almacenadas, deberá acudir dentro de los diez días siguientes a la conclusión oficial de la producción de que se trate ante el Comité, a fin de que éste sancione y haga constar en acta lo siguiente:

I. La cuantificación del volumen de cebada considerada como no comercializada e industrializada, incluyendo nombre del Abastecedor de Cebada, superficie neta, rendimiento estimado por hectárea y toneladas de cebada, y

II. La calificación de la procedencia de la reclamación del Abastecedor de Cebada en los términos de la presente Ley.

Artículo 57.- El valor de la cebada no comercializada e industrializada imputable al Centro de Acopio, será calculado con base en el precio de liquidación de la cebada comercializada e industrializada deduciendo el promedio de los costos totales de cosecha y demás deducibles que le correspondan cuando la cebada no ha sido comercializada. El saldo será cubierto por el Centro de Acopio en un término de treinta días naturales a partir de la fecha de terminación de la cosecha del Centro de Acopio correspondiente.

Cuando se trate de cebada, en pie o cosechada, se agregará al valor anterior el monto de los trabajos de cosecha, según corresponda, de acuerdo con las tarifas sancionadas por el Comité.

CAPÍTULO IV

De la Normatividad y de la Supervisión del Proceso de Selección de Semilla

Artículo 58.- El procedimiento de toma, manejo y análisis de muestras se efectuará con base en la normatividad aplicable a la Agroindustria de la Cebada expedida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

Artículo 59.- Para la toma de muestras representativas y la realización de los análisis en el laboratorio, los Industriales dispondrán de un laboratorio funcional y exclusivo para ello, con espacio y mobiliario suficientes para el personal representante de Abastecedores de Cebada e Industriales, dotado de todos los materiales, equipos, aparatos y reactivos contemplados en las especificaciones de las Normas Mexicanas respectivas. Para tal efecto, el Gobierno Federal se obliga a verificar, calibrar y certificar los instrumentos de medición, materiales, reactivos y demás elementos que se requieran en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 60.- Los Abastecedores de Cebada por conducto de sus Organizaciones tienen derecho a participar conjuntamente con el personal del Centro de Acopio, únicamente hasta la parte del proceso que interviene para la determinación de los parámetros comprendidos en el producto de su cebada, que son:

a) Peso de la cebada al ser entregada en el silo fábrica o silo acopio del Centro de Acopio;

b) Peso electrolítico;

c) Humedad;

d) Toma, manejo y conservación de muestras;

e) Determinación de almacenaje o transformación;

f) Determinación de control de calidad;

g) Determinación de derivados;

h) Cálculos para obtener los datos promedio ponderados de la pureza, y

i) Verificación de la instalación en los Centros de Acopio de los equipos necesarios y su correcta operación, así como de la aplicación debida de las Normas Mexicanas vigentes y disposiciones que correspondan emitidas por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

En caso de que las Organizaciones nombren representantes para vigilar y participar en la determinación de los parámetros utilizados de la producción de la cebada industrializada, deberán firmar conjuntamente con el personal del Centro de Acopio encargado de dichas actividades, los resultados diarios obtenidos. En caso de divergencia, las partes manifestarán su inconformidad levantando el acta respectiva que harán del conocimiento inmediato del Comité de la región de que se trate.

TÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN, LA DIVERSIFICACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD

CAPÍTULO I

De la Investigación y Desarrollo Tecnológico

Artículo 61.- Para los efectos de mejorar la productividad y la eficiencia del cultivo de la Cebada, se dispondrá de los Centros de Investigación y Desarrollo de la Secretaría, con el propósito de orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la producción y transformación de la cebada.

Artículo 62.- En coordinación con las instituciones de investigación y educación superior participantes, se dará prioridad al establecimiento de un inventario nacional de proyectos de investigación y recursos materiales en campos de experimentación, a efecto de optimizar las investigaciones y sus resultados obtenidos y aprovechar los campus existentes para el desarrollo de nuevos proyectos.

Artículo 63.- Se promoverá el apoyo en cuerpos colegiados formados por investigadores de reconocido prestigio, y que serán convocados de las diferentes instituciones públicas que realizan investigación científica y tecnológica en el país en proyectos relativos a la cebada.

Artículo 64.- La estrategia en materia de investigación y desarrollo tecnológico para los sectores integrados por Productores e Industriales de la cebada, tendrá como propósito fundamental los siguientes:

I. Desarrollar nuevas variedades de cebada con elevados contenidos de maltas, tolerantes a plagas y enfermedades, sequía e inundaciones y otras adversidades climatológicas;

II. Generar paquetes tecnológicos regionales que incrementen sustancialmente la productividad agrícola e industrial;

III. Diseñar y evaluar los sistemas de cartografía y geoposicionamiento satelital y los programas de cómputo que aseguren una aplicación y uso estandarizado en los Comités, con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Información para la toma de decisiones que permitan la elevación de la productividad y competitividad de cada una de las Regiones de abastecimiento cebadero;

IV. Establecer los mecanismos de vinculación y coordinación de todas las instancias que participan en el desarrollo tecnológico de la gramínea y en particular, retomar el control de las estaciones de hibridación para proyectar el programa de nuevas variedades a largo plazo, evitando duplicidades y abaratar los costos;

V. Promover las investigaciones que diversifiquen y optimicen el aprovechamiento de la cebada

atendiendo a su rentabilidad, mercado y disponibilidad de inversiones;

VI. Elaborar el inventario de investigación aplicada y sus productos en el mercado a efecto de medir sus ventajas y su costo beneficio, poniéndola a disposición de Abastecedores de Cebada e Industriales;

VII. Profundizar en la evaluación de los rendimientos de fábrica y campo del proceso de fabricación de cerveza, cereales y alimentos, para definir los mecanismos de mejorarlos;

VIII. Promover para cada región de abastecimiento de cebada, el sistema de cartografía y geoposicionamiento satelital estandarizado para todos los Comités, con el propósito de facilitar la reconversión productiva y lograr el pleno aprovechamiento de la tierra;

IX. Determinar mediante estudios e investigaciones, la contribución a la competitividad del territorio rural de cada una de las Regiones de Abastecimiento cebadero que permitan consolidar la producción, el empleo y los servicios rurales; e

X. Inventariar la investigación y sus resultados en materia de subproductos y derivados, y promover las nuevas investigaciones para maximizar el aprovechamiento y diversificación de la cebada.

CAPÍTULO II

Diversificación Productiva de la Cebada

Artículo 65.- Se considera como diversificación productiva no sólo la obtención de malta, cerveza, cereal y alimento en todas sus presentaciones, sino el incremento de Subproductos y Derivados de la cebada, es decir:

I. Los Subproductos son productos colaterales a la producción cebadera.

II. Derivados son aquellos productos que se obtienen a partir de los Subproductos de la cebada.

Artículo 66.- La Secretaría propondrá a la Comisión Intersecretarial, las políticas Y el marco legal y administrativo tanto público como privado, que permita el aprovechamiento diversificado de la cebada, a efecto de que procedan las adecuaciones de Ley y reglamentación respectiva.

Artículo 67.- La Secretaria y los actores comprometidos con el cultivo y desarrollo de la cebada, propondrán los estudios y proyectos que tengan como prioridad el aprovechamiento de la Agroindustria, y cuyos resultados deben incorporar la rentabilidad financiera, social e institucional, para que, de resultar favorables, la Comisión Intersecretarial implemente la reglamentación e iniciativas de Ley que permitan el aprovechamiento de los productos y bienes estratégicos para la soberanía alimentaría del país.

Artículo 68.- La Secretaría y los diversos participantes en el cultivo de la cebada, promoverán el desarrollo de los Subproductos y Derivados vinculándolos a los programas de riesgo compartido y riesgo de inversión, a las alianzas productivas y a las instituciones de educación superior existentes dentro del territorio de la Regiones de Abastecimiento cebadero donde se promueva, mediante módulos demostrativos, la viabilidad de este desarrollo.

Artículo 69.- Los apoyos que el Gobierno Federal otorgue para la agricultura e industria sustentable de la cebada, así como para la diversificación productiva de la Agroindustria de la cebada, se preverán cada año en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que incluya el Presupuesto de Egresos de la Federación.

CAPÍTULO III

De la Sustentabilidad

Artículo 70.- La Secretaría identificará las actividades innovadoras, tanto en el área agrícola como industrial cuya implementación coadyuve al desarrollo sustentable de dichos sectores.

Artículo 71.- Se promoverán sistemas de agricultura sustentables basadas en la conservación del medio ambiente y el eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles, para mejorar la calidad de vida de los productores y de la sociedad en general.

Artículo 72.- Se promoverá y apoyará la instrumentación de programas que reduzcan la fuente contaminante de la industria en el suelo y al agua, incluyendo lo relativo a la solución del tratamiento de las aguas residuales de las industrias y de los molinos de alimentos.

Artículo 73.- Se promoverá y apoyará la adopción de prácticas de manejo sustentable del suelo, estableciendo un sistema de registro por la región.

Artículo 74.- Se impulsará el aprovechamiento de la biomasa residual de la cebada, particularmente en los procesos y con el apoyo de aquellos proyectos que demuestren la rentabilidad sustentable.

Artículo 75.- Se desarrollarán propuestas de estímulos a la inversión para aquellos Industriales que realicen y pongan en marcha proyectos sustentables de alta eficiencia, enfocados a su propio abastecimiento y venta de productos y Subproductos o Derivados. La Secretaría propondrá a la Comisión Intersecretarial la aprobación de esta propuesta para los efectos jurídicos, administrativos y presupuestales que sea necesario instrumentar.

TÍTULO SEXTO

DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE EN LA AGROINDUSTRIA DE LA CEBADA

CAPÍTULO I

De las Controversias

Artículo 76.- Son controversias cebaderas las que, con motivo del incumplimiento en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, el Convenio y disposiciones derivadas, se susciten entre:

a) Abastecedores de Cebada e Industriales;

b) Abastecedores de Cebada;

c) Industriales, y

d) Cualquiera de los sujetos anteriores y los Comités.

Serán aplicables de manera supletoria, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo 77.- El sistema de solución de conflictos de la Agroindustria de la Cebada se conformará con:

a) Comités, como instancia de conciliación, y

b) Junta Permanente, en procedimiento conciliatorio o en procedimiento arbitral.

Artículo 78.- En la tramitación de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, la Junta Permanente y los Comités se sujetarán al procedimiento previsto en esta Ley, debiendo dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones en los expedientes respectivos.

CAPÍTULO II

Del Procedimiento Conciliatorio

Artículo 79.- Los Comités tendrán la jurisdicción que les corresponda en razón del Centro de Acopio donde se constituyan.

Artículo 80.- Los Comités, para los fines de conciliación, se integrarán en los términos que dispone esta Ley.

Artículo 81.- Los Comités, en su función conciliatoria, tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

I. Actuar como instancia conciliatoria potestativa en las controversias cebaderas surgidas entre Abastecedores de Cebada, entre éstos, de ellos con los Industriales o entre estos últimos;

II. Procurar un arreglo conciliatorio de las controversias cebaderas;

III. Recibir las pruebas que los Abastecedores de Cebada o los Industriales juzguen conveniente rendir ante ellos, en relación con las acciones y excepciones que pretendan deducir ante la Junta Permanente. El término para la recepción de pruebas no podrá exceder de diez días;

IV. Llevar a cabo los trámites necesarios de inscripción en el Registro de las constancias de lo actuado en su función conciliatoria, y

V. Las demás que les confieran las leyes.

Adicionalmente a petición de parte podrán recibir las demandas que le sean presentadas, remitiéndolas a la Junta Permanente. Asimismo complementar los exhortos y practicar las diligencias que le solicite la Junta Permanente.

Artículo 82.- El procedimiento conciliatorio se sujetará a las siguientes reglas:

I. El órgano conciliatorio, una vez recibida la solicitud de su intervención en tal carácter citará a las partes a una audiencia de avenimiento señalando el lugar, la fecha y la hora para su celebración, así como el motivo de la audiencia;

II. El día de la audiencia de avenimiento, el órgano conciliatorio exhortará a las partes a que resuelvan amigablemente sus diferencias, proponiendo para el efecto las alternativas de solución que a su juicio considere pertinentes;

III. Si las partes llegaren a un arreglo, el conflicto se tendrá por terminado en forma conciliatoria, asentándose lo pactado en un convenio que deberá ser firmado por aquellas, el cual producirá todos los efectos jurídicos de un laudo y llevará aparejada su ejecución, y

IV. Si alguna de las partes no asiste a la audiencia convocada se tendrá por inconforme con cualquier arreglo, o habiendo asistido las partes no se llegare a él, se dará por concluido el procedimiento conciliatorio.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que contravenga a esta Ley, con excepción de lo dispuesto en los artículos Transitorios TERCERO, QUINTO y SEXTO de la presente.

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren pendientes de resolver en los Comités de Producción Cebadera y en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias cebaderas, a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán seguir tramitándose y resolverse conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento de su inicio.

CUARTO.- La Junta Permanente y las organizaciones de los cebaderos deberán quedar debidamente instalados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Para la instalación de uno y otra la Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados en un término máximo de 15 días después de la entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- Los programas, proyectos y las acciones que se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley, así como los apoyos, subsidios y beneficios que se ejerzan con recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad de recursos que se hayan aprobado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y deberán observar las disposiciones aplicables en materia presupuestaria.

Dado en el salón de pleno de la H. Cámara de Senadores el 07 del mes de Diciembre del año 2009

SENADORA ROSALÍA PEREDO AGUILAR

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS SENADORES

DEL SEN. LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR SE LES CONDONEN LOS ADEUDOS PENDIENTES A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, EN BAJA CALIFORNIA SUR.



SEN. LUIS COPPOLA JOFFROY

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE

LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, Senador de la República de la LX Legislatura por el Estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente; **PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ANALICE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE SI ES POSIBLE QUE POR ÚNICA VEZ, SE LES CONDONEN LOS ADEUDOS PENDIENTES A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR QUE POR EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO PARA EL USO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COMONDÚ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR FUERON SANCIONADOS Y NO SON SUJETOS DE RECIBIR RECURSOS FEDERALES:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Después de muchos años de sobreexplotación del acuífero del Valle de Santo Domingo, usuarios y autoridades del Distrito de Riego 066 Valle de Santo Domingo, en el Estado de Baja California Sur, se han propuesto la meta de llegar a un nuevo equilibrio entre la recarga y la extracción real del vital líquido.

Para entender la magnitud de esta situación, hay que remontarse al año 1949, con la llegada de los pioneros que, a invitación del Presidente Manuel Ávila Camacho, arribaron a estas inhóspitas tierras con la promesa de recibir tierra y apoyo para crear un área de cultivo próspera. Sin embargo, tan sólo cinco años después, en 1954, se llegó a la necesidad de declarar por decreto presidencial la veda de perforación de nuevos pozos, ya que un descontrolado incremento ocasionó rápidamente los primeros síntomas de abatimiento del acuífero.

Aunque la medida sirvió para frenar el incremento del número de pozos, se siguió dando una descontrolada explotación por parte de los productores agrícolas, quienes deslumbrados por el bienestar económico alcanzado en poco tiempo, no previeron la importancia de un uso sustentable de los recursos.

El acuífero del Valle de Santo Domingo es la única fuente de abastecimiento de agua en la región (se destina un 97% en el uso agrícola y un 3% en otros) y ésta a su vez es el principal centro de producción agropecuaria del Estado, de ahí la importancia de las acciones

realizadas para revertir los niveles de abatimiento anual, que en 1985 llegó a su nivel histórico (20 metros por debajo del nivel del mar).

Durante el ciclo agrícola 2002-2003, gracias a una cada vez mayor coordinación entre las autoridades del sector (Conagua, Sagarpa, Firco, Financiera Rural, etc.) y los usuarios del agua de la zona, se disminuyeron las extracciones a 181.6 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el objetivo al concluir el ciclo agrícola 2003-2004 será llegar no sobrepasar los 170 millones de metros cúbicos.

Esta acción, que pareciera sencilla, representa un gran esfuerzo, para no permitir que desaparezca un acuífero que por 50 años ha dado vida y sustento a una región y por el contrario, con el esfuerzo de todos, se logre un nuevo equilibrio entre la recarga y la extracción real.

Es relevante hacer patente que, de 1981 a 1991, las extracciones para uso agrícola fluctuaron entre los 353 y 453 millones de metros cúbicos, cuando la recarga se valora en tan sólo 188 millones de metros cúbicos; es decir, durante diez años se sobre explotó más del doble de lo autorizado; sin embargo, a partir de la publicación del reglamento del acuífero en 1992, y sobre todo a través de un proceso de concientización de los usuarios, se logró disminuir las extracciones a un promedio de 200 millones de metros cúbicos, sin embargo alrededor de un diez por ciento de los usuarios, violó dicho reglamento haciéndose acreedores a fuertes sanciones que al día de hoy después de más de diez años no han logrado solventar, ya que el mismo reglamento no contempla soluciones a dichas infracciones.

En tal sentido, el artículo décimo octavo del Reglamento para el Uso, Explotación y Aprovechamiento de las Aguas del Subsuelo del Valle de Santo Domingo, Municipio de Comondú, se establece que no será autorizada la reposición, rehabilitación o profundización de pozos a los usuarios que se hayan excedido en su extracción autorizada, siendo reincidentes; en tal virtud, a la fecha no se han autorizado apoyos para reponer y rehabilitar los pozos a través de los Programas Hidroagrícolas a cargo de CONAGUA, a 120 usuarios que fueron reincidentes en la sobreexplotación del acuífero.

Una posible solución a esto, sería que se publique la propuesta del nuevo Reglamento del Acuífero, que se encuentra en la Subdirección General Jurídica y/o Subdirección General Técnica, en el cual, se plantea una modificación al artículo décimo octavo, que permitiría que no se condicione la autorización para reponer, rehabilitar o profundizar los pozos, y de esta manera, pudieran ser apoyados a través de los Programas Hidroagrícolas a cargo de CONAGUA.

Pero este planteamiento que se puede proponer, no es la solución al problema que aqueja a aquellos infractores que no han sido recurrentes y que con más de diez años con la sanción a cuestas algo ilógico, dicho castigo- al que se hicieron acreedores por violar las reglas- ya deberían de habérseles retirado mediante algún mecanismo. Por lo tanto, creo en estos momentos que ya es tiempo de dar definitividad al problema.

Nosotros tenemos la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos, tengan la denominación que tengan, por tal motivo demando respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal dicte una solución definitiva que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto en el cual se indique que queda abolida la sanción **por una sola vez** y si hay la necesidad de que paguen un tributo al fisco, este se realice en un pago de una sola exhibición al órgano recaudador, ya que los sancionados ya cumplieron demasiado tiempo de castigo. Es tiempo más que suficiente de sanción impuesta, a lo que han respondido con un comportamiento ejemplar ya que no se encuentran nuevamente sancionados por el órgano responsable, CONAGUA.

Solicitud de devolución de volúmenes de agua a usuarios que fueron sobre explotadores como parte de procedimientos de sanciones

En este Distrito de Riego existe la situación particular que una doble titulación derivada de que, al entrar en vigor la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la Comisión Nacional de Agua inició un proceso de Transferencia de la Infraestructura Hidráulica de los Distritos de Riego y Unidades de Riego a las Asociaciones Civiles de Usuarios de todo el país, y conforme a la normatividad vigente, en el caso específico del Distrito de Riego N°. 066 Santo Domingo, se otorgó un **título de concesión global por 170,000 millares de m^3** que ostenta la Asociación de Usuarios de Agua con Fines Agropecuarios del Distrito 066 A.C.

Sin embargo, los títulos de concesión individuales, con que contaban los usuarios no fueron cancelados y a la fecha, la suma de éstos que continúan vigentes, comprende un volumen total de **166,026.00 millares de m^3**.

Por otra parte, mediante el Programa de Adquisición de Derechos de Uso de Agua (PADUA) se canceló un volumen **1,551.3 millares de m^3** del título de concesión global, con lo cual, éste cuenta con un volumen actual de **168, 448.7 millares de m^3**.

Con relación a la reducción o la cancelación definitiva de volumen a usuarios sancionados como resultado de procedimientos de imposición de sanciones, siete fueron sancionados con la reducción del 50% de su dotación (**125.2 millares de m^3**) y uno con la cancelación de su aprovechamiento (**250.4 millares de m^3**), haciendo un total **1,126.8 millares de m^3**; estas sanciones se aplicaron sobre sus títulos individuales.

El volumen actual del título global, es superior a la suma de volúmenes de los títulos individuales vigentes, en **2,422.7 millares de m^3**, mismo que alcanza a cubrir los volúmenes correspondientes a las sanciones ya referidas.

Finalmente deseo plantear con sumo respeto a quienes pueda agredir con dicha propuesta cuyo espíritu se basa en solucionar esta problemática demandada hace ya muchos años y que es tan sencillo remediar ya que, en plena crisis mundial, nacional, local y sobre todo municipal, daría como resultado ordenar nuestros sistemas agrícolas con mejores rendimientos.

No pretendemos borrón y cuenta nueva con los deudores, sino todo lo contrario. Creo profundamente que hoy día la cultura del agua se ha arraigado en los mexicanos sobre todo en los productores agrícolas sudcalifornianos, reconocimiento que el propio Titular del ejecutivo Federal a través de las instituciones responsables lo han manifestado públicamente por los niveles de recuperación de los mantos acuíferos de la región .

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ANALICE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE SI ES POSIBLE QUE POR ÚNICA VEZ, SE LES LEVANTE LA SANCION ADMINISTRATIVA A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, BAJA CALIFORNIA SUR QUE POR EFECTOS DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO PARA EL USO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE COMONDÚ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, FUERON SANCIONADOS POR LO QUE NO SON SUJETOS DE RECIBIR RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE OPINIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE EXPIDA DECRETO Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,

POR EL QUE SE ANULAN LAS INFRACCIONES A LOS USUARIOS DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ QUE FUERON SANCIONADOS POR EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO PARA EL USO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA CONOCIDA COMO VALLE DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUE DE UNA BUENA VEZ LES SEA ASIGNADOS RECURSOS FEDERALES COMO LO ESTIPULAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 3 de diciembre de 2009.

Atentamente,

Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy

DEL SEN. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL UN INFORME CON RESPECTO AL STATUS Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO ECONÓMICO Y REGULATORIO QUE GUARDA EL "ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA".



SEN. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL INSTRUYA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE SE RINDA UN INFORME PRONTO Y EXPEDITO ANTE ESTA SOBERANÍA, CON RESPECTO AL STATUS Y MANIFESTACIONES DE IMPACTO ECONÓMICO Y REGULATORIO QUE GUARDA EL "ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA", POR LO QUE SE REFIERE A LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA; COMO PARTE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBERÁN SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO Y A LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES.

El que suscribe Senador **ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,** integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el presente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que se rinda un Informe pronto y expedito ante esta soberanía, con respecto al status y manifestaciones de impacto económico y regulatorio que guarda el ***"Anteproyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería"*** por lo que se refiere a la operación y explotación de los servicios de Paquetería y Mensajería; como parte de los instrumentos jurídicos que deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a los Tratados Internacionales suscritos por México y a las Normas Oficiales vigentes.

CONSIDERANDOS

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 1993, establece en el artículo 58 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe expedir un reglamento de paquetería y mensajería, lo cual no ha ocurrido hasta esta fecha. De cara a la elaboración del Anteproyecto del Reglamento del Servicio Auxiliar de Paquetería y Mensajería,

es fundamental mencionar que en materia de carga, servicios auxiliares, paquetería y mensajería, al no existir actualmente el reglamento de paquetería y mensajería que el artículo 58 de dicha ley expresa que debe expedir la SCT, la paquetería y mensajería se rigen solamente en relación con los conceptos ya mencionados en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo que consideramos necesario esclarecer las dudas y confusiones que pudieran dar pie a violaciones flagrantes de la legislación mexicana, en torno a la expedición del *"Reglamento del Servicio Auxiliar de Paquetería y Mensajería"*, pendiente de expedición por la SCT.

La ley vigente define como servicio de carga "el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal". Asimismo, describe como servicio de mensajería y paquetería "el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal".

No obstante lo anterior, se resume que, bajo nuestra legislación y reglamentación, el servicio auxiliar de paquetería y mensajería es conexo al de autotransporte de pasajeros, que incluye el porte de bultos que por su naturaleza, peso y volumen, pueden ser fácilmente trasladados en el espacio de equipaje de los autobuses de pasajeros. Asimismo se concluye que quien lleve a cabo el trasporte de bienes sobre puentes y caminos de jurisdicción federal en vehículos de autotransporte de carga, está prestando el servicio de carga debiéndose sujetar a la legislación vigente.

La confusión antes descrita ha dado lugar a que inversionistas extranjeros pretendan sorprender a las autoridades mexicanas dando por hecho que existe apertura en el servicio de transportación de carga de bienes en el ámbito nacional, cuando dicho servicio está reservado exclusivamente en la Ley de Inversión Extranjera y el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) a nacionales mexicanos.

El interés de las empresas con capital extranjero es el de participar en el mercado nacional del transporte de carga, mediante la interpretación de la Ley de Inversión Extranjera consistente en considerar a la Mensajería y Paquetería como una actividad distinta e independiente de la carga, dicha incertidumbre jurídica propiciada por las instituciones encargadas de velar y coadyuvar por la seguridad jurídica de los nacionales, puede ocasionar una simulación de actos los cuales vulneran los lineamientos jurídicos referentes a la transportación de bienes en carreteras de jurisdicción federal.

La Ley de Inversión Extranjera en México reserva a los habitantes y empresas nacionales con cláusula de exclusión de extranjeros las actividades de trasporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, y establece que los servicios de mensajería y paquetería no están incluidos en dicha restricción; es decir, que la participación extranjera está permitida en dicha actividad.

La Ley de Inversión Extranjera expone en su artículo 6º.

> **Artículo 6o.** Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:
>
> **I.** Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería;
>
> …

La Ley de inversión extranjera no define las actividades económicas que menciona sino que simplemente trata de establecer limites y formas de participación extranjera en dichas actividades, pero para lograr determinar los elementos que conforman dichas actividades las autoridades deben remitirse forzosamente a las disposiciones sobre la materia especifica.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México se reservó para habitantes y compañías mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros los servicios de transportación de carga de bienes entre dos puntos en el territorio de México. El TLCAN, no contempla la actividad de mensajería y paquetería.

Este argumento se ha visto fortalecido recientemente a través de una tesis jurisprudencial

emitida por la **S**uprema **C**orte de **J**usticia de la Nación donde se estableció claramente que el TLCAN, como tratado internacional, se encuentra jerárquicamente por encima de las leyes federales y se equipara a la supremacía de la Constitución, como sustenta el artículo 133 constitucional que dice:

> **"Artículo 133.** Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".

Por lo anterior, no se debe perder de vista que el espíritu del Reglamento que se expida por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, no debe estar por encima de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ya que de lo contrario se estaría violentando el artículo 133 constitucional y diversas tesis jurisprudenciales identificadas con la existencia del orden jurídico superior jerárquico de carácter nacional integrado por la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y las Leyes Generales.

Así mismo, y de manera importante es el impacto económico que de dar entrada a empresas extranjeras, sufrirían los sectores nacionales del autotransporte federal de Pasaje, Turismo y Carga, por una apertura unilateral que ni siquiera tiene el beneficio de la participación en un mercado externo *por falta del principio de reciprocidad; principio fundamental en la salvaguarda de garantías jurídicas determinantes en la suscripción de Tratados Internacionales, que permite proteger las industrias y servicios nacionales sobre los extranjeros y que constitucionalmente se garantizan en la Carta Magna y leyes que de ella emanan.*

De acuerdo al Censo Económico del INEGI realizado en el 2004, existen en el país más de 3,100 empresas de mensajería y paquetería, de las cuales el 91% corresponden a microempresas, 6% empresas pequeñas, 2% empresas medianas y 1% empresas grandes.

Dichas unidades económicas generan más de 32 mil empleos directos y cerca de 350 mil empleos indirectos en el país. Manteniendo unos ingresos del sector que en el 2003 reflejaron $ 8 mil 272 millones de pesos, manteniendo ingresos que en el 2008 fluctuaron en los 13 mil 208 millones de pesos.

Los resultados nos reflejan en los últimos 9 años una variación anual del sector, lo que da un 81% de crecimiento por encima del crecimiento del PIB.

El servicio de paquetería y mensajería en México es un servicio postal, que en otros países se conoce como "servicio courier" y que debe respetar la legislación postal, incluyendo los tratados de la Unión Postal Universal, que definen el paquete e imponen un límite máximo a su tamaño.

El gobierno federal que es el encargado de salvaguardar las garantías jurídicas de los servicios nacionales sobre los extranjeros, deben constitucionalmente considerar que los servicios de paquetería y mensajería se auxilian de un servicio principal para la transportación de paquetes en caminos de jurisdicción federal, ya que de lo contrario estaríamos hablando de un servicio de carga, por lo que tanto el servicio auxiliar de paquetería y mensajería complementa la operación y explotación de un servicio de recolección, el límite está en el peso del paquete y el tamaño de los vehículos.

La errónea interpretación de la legislación y de la definición del servicio auxiliar de paquetería y mensajería, y la consecuente violación de la reserva en materia de *carga cabotaje*; *provocaría una afectación severa e inequitativa al mercado nacional.*

Derivado de las necesidades de que exista un Reglamento que regule la paquetería y mensajería, el Estado debe tomar en cuenta que los servicios de paquetería y mensajería son servicios "auxiliares", que dependen de un servicio principal que es el "Pasaje y Carga", tomando como base los artículos 2 fracción VII y 52 fracción V de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el Pleno de esta soberanía el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se me tenga por presentada la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que se rinda un Informe pronto y expedito ante esta soberanía, con respecto al status y manifestaciones de impacto económico y regulatorio que guarda el "Anteproyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería" por lo que se refiere a la operación y explotación de los servicios de Paquetería y Mensajería; como parte de los instrumentos jurídicos que deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a los Tratados Internacionales suscritos por México y a las Normas Oficiales vigentes.

Segundo. Que la reserva nacional de la Carga en México, es considerada como una actividad estratégica y de carácter esencial, por lo que se requiere un informe detallado que demuestre la situación jurídica y el status del Reglamento de Paquetería y Mensajería, con respecto a los ajustes y apertura a empresas extranjeras con acceso a las vías generales de comunicación nacionales.

Tercero: Se solicita que se presenten ante esta soberanía, los costos y en su caso beneficios que el Estado recibe de las actividades realizadas en territorio nacional por empresas extranjeras en uso de las vías generales de comunicación así como el trato que reciben las empresas mexicanas en los países de origen de la inversión extranjera.

Dado en la Cámara de Senadores, Ciudad de México, el _____ de_____ del 2009.

SENADOR. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

DE LOS SENADORES RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, ANTONIO MEJÍA HARO, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA Y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL PARA LAS ADICCIONES.



SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ



SEN. ANTONIO MEJÍA HARO



SEN. JOSÉ LUIS MÁXIMO GARCÍA ZALVIDEA



SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL PARA LAS ADICCIONES.

Los suscritos, **RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, ANTONIO MEJÍA HARO, JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA** y **FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA** senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente **Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones.**

PUNTO DE ACUERDO

1. El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Arturo Chávez Chávez, para que en ejercicio de la facultad consagrada en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos analice la atracción de la investigación ante la comisión del delito de trata de personas, en contra de los 105 individuos sometidos a diversas prácticas de explotación laboral y abuso sexual, quienes fueron rescatados el pasado 3 de diciembre del Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Hospital Santo Tomás de los Elegidos de Dios.

2. El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Arturo Chávez Chávez, para que instruya al Ministerio Público Federal competente a solicitar la reparación del daño de las 105 víctimas del delito de trata de personas, según lo establece la fracción IV del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud, Mtro. José Ángel Córdova Villalobos a coordinarse con las Secretarías de Salud de los gobiernos locales para verificar el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones de todo el país, así como actualizar la normatividad en materia de adicciones que procure en todo momento el respeto de los Derechos Humanos.

4. El Senado de la República solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice una investigación en torno a las presuntas violaciones cometidas en el Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Hospital Santo Tomás de los Elegidos de Dios y en su caso, emita las recomendaciones correspondientes; así como, integrar un Programa de Inspección a los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones a efecto de prevenir futuras violaciones de los Derechos Humanos de los pacientes.

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE ESE ESTADO A ESCLARECER EL ASESINATO DEL CIUDADANO, MARIANO ABARCA ROBLERO.



SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A QUE ESCLAREZCAN EL ASESINATO DEL CIUDADANO, MARIANO ABARCA ROBLERO.

Los problemas que las personas físicas, o las personas morales, con una participación considerable de inversión extranjera, que ostentan concesiones mineras en el país, han generado en las comunidades, ejidos, pueblos o municipios que cuentan con importantes yacimientos minerales como Chiapas, se han agravado a raíz de acontecimientos como el reciente asesinato del líder civil Mariano Abarca Roblero; férreo opositor a la explotación de minas de barita en la sierra de Chiapas, por parte de la empresa canadiense Black Fire.

El movimiento de activistas que encabezaba Abarca, perteneciente a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), llevaba a cabo una intensa actividad en contra de la empresa antes mencionada por las constantes violaciones en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y el saqueo que ésta ha llevado a cabo en la comunidad; demandas

que fueron constatadas en el mes de septiembre por el Gobernador Juan Sabines, en una visita que realizó a Chicomuselo, municipio afectado por toda esta problemática y que el gobierno estatal ah estado pendiente de la situación que se guarda en la zona.

Así, el pasado viernes 27 de noviembre el lider opositor contra la minera canadiense Black Fire en Chiapas, Mariano Abarca Roblero fue asesinado por un sicario que, le disparó en el pecho y en la cabeza afuera de su casa mientras platicaba con su compañero Orlando Velásquez, quien resultó herido.

Su muerte es sitomática de los arreglos existentes entre las mafias políticas y las chequeras de las grandes corporaciones, que mediante procedimientos turbios, quitan del camino a quienes estorben o entorpezcan el libre desarrollo de sus intereses capitalistas. De modo que los compromisos con las condiciones sociopolíticas y ecológicas de la población quedan en segundo término para las autoridades federales encargadas de otorgar este tipo de concesiones.

Los pobladores de la comunidad de Chicomuselo han denunciado en la prensa que el presidente municipal Julio César Velázquez Calderón, ha estado involucrado en la compra de favores por parte de la empresa Black Fire, actos aceptados públicamente por el representante legal Horacio Culebro, y por el director general de la empresa, Artemio Ávila.

Tres meses antes de ser asesinado, Abarca Roblero fue detenido ilegalmente por policías estatales -al salir de una escuela primaria donde pretendía llevar a cabo un encuentro nacional de la REMA- y fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, todo esto orquestado desde la mas altas esferas de las empresas mineras asentadas en la entidad.

Con base en la Averiguación previa 033/FS10/2009, Abarca fue acusado por la empresa Black Fire representada en su gerente de relaciones públicas Luis Antonio Flores Villatoro, quien interpuso una denuncia en la que se le acusaba de los delitos de ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y delincuencia organizada. El activista aseguró que mientras se encontraba arraigado, el gobierno del estado estuvo pendiente en todo momento de la situación que se manejaba dicho asunto, varios grupos ajenos al gobierno del estado y a las organizaciones opositoras a la explotación minera en la entidad, intentó negociar con él su liberación a cambio de que abandonara la lucha de resistencia contra la minería, pero prefirió quedarse preso.

Tras ocho días de arraigo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberó al lider, por no existir sustento legal para su detención y arraigo. Es inaceptable que la ambición de grandes corporaciones transnacionales, permita la violación de los derechos de luchadores sociales y activistas que defienden a la comunidad de prácticas que dañan su nivel de vida como la explotación minera desmedida y al margen de la legalidad.

La política gubernamental neoliberal de los últimos años ha entregado el territorio y las riquezas naturales a empresas trasnacionales, mediante concesiones que dañan a la ciudadanía a cambio de la generación de una falsa modernidad y desarrollo. El saqueo y la corrupción de las autoridades federales y las encargadas de otorgar y facilitar todo tipo de concesiones y facilidades, se lleva a cabo mediante el aprovechamiento de la obsoleta Ley Minera, así como la debilidad y las lagunas jurídicas que hay en ella y en la legislación ambiental, dejando pueblos desplazados; manantiales, ríos y lagos contaminados; sembradíos destruidos; enormes tiraderos de desechos; y enfermedades en la población.

En el estado de Chiapas se han otorgado un total de 97 concesiones desde el año 2000 hasta agosto del presente, dando un total de 115 mil 130.447 hectáreas que representan el 15.21% del territorio estatal. De las 97 concesiones, 37 de ellas vencen en la década del 2050 y de éstas últimas, 14 están localizadas en Chicomuselo. Según los datos

de la REMA, la empresa Black Fire cuenta con 10 concesiones para la extracción de barita, oro y antimonio.

Es importante recalcar que estos sucesos se dieron a sólo unos días de haberse llevado acabo en la entidad, el "Foro sobre la Explotación Minera en Chiapas", organizado por el Gobierno del Estado, donde se hablo de la conservación y de la explotación de la zonas mineras a través de un modelo ecológicamente sustentable, y de un padrón en el que al día de hoy existen 734 empresas mineras en el país, de las cuales 200 son extranjeras.

En México se mantiene un esquema, en el que se considera que todos los recursos minerales son del dominio exclusivo de la nación, según lo dispone el artículo 27 constitucional, el cual en su primera parte manifiesta: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada…".

Sin embargo, en la actualidad, la industria minera se ejerce en su mayoría, por grandes corporaciones que están en manos de extranjeros y que han sido los verdaderos beneficiarios, de la política neoliberal y privatizadora de los recursos de la nación. Estas prácticas en materia minera, fueron consolidadas por las reformas llevadas a cabo por los gobiernos ambiciosos y corruptos que manejan las leyes a favor de las grandes corporaciones.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El senado de la República, exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, para que intervenga ante el Procurador General de Justicia del Estado, el Lic. Raciel López Salazar, para que inicien las investigaciones sobre el asesinato del líder opositor a la Empresa Minera Blackfire del municipio de Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, para que se esclarezca y se finquen responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

SEGUNDO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través del titular de la Secretaría de Economía, envíen un informe detallado sobre las empresas que han sido beneficiadas con este tipo de concesiones y el otorgamiento de la exploración explotación de las zonas mineras en el estado de Chiapas y de que forma se les puede revocar las concesiones otorgadas a dichas empresas.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República al 1 día del mes de Diciembre de 2009.

DE LOS SENADORES LUÍS ALBERTO COPPOLA JOFFROY Y SANTIAGO CREEL MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LA PRÁCTICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA DE "LA CHARRERÍA" Y LAS CABALGATAS EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA.



SEN. LUIS COPPOLA JOFFROY



SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA

SEN CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

LUÍS ALBERTO COPPOLA JOFFROY y SANTIAGO CREEL MIRANDA, Senadores de la República de la LX Legislatura por los Estado de Baja California Sur y Distrito Federal , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo **58** del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente **Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de La Secretaria de Turismo y la CONADE, se fortalezca la practica en toda la República Mexicana de nuestro Deporte Nacional "La Charrería" y las cabalgatas en los Estados de la República**. Lo anterior, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

"Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorarlo". Este pensamiento de uno de los poemas más hermosos de Delfín Sánchez Juárez, –poeta de la charrerías, en el nos muestra el sentir colectivo de los charros de México por esta antigua tradición, la cual se empeñan en salvaguardar como un valioso legado que la historia ha puesto en sus manos. Los charros son hombres y mujeres que en la actualidad tienen en la práctica de este deporte una forma de vida, en ocasiones es una herencia de generaciones que los precedieron. Son charros porque el padre lo es, como lo fue el abuelo y tal vez el bisabuelo. Su formación es generalmente desde su niñez, siguiendo el ejemplo paterno en una actividad que no sólo es el **deporte nacional de México desde 1933**, sino que tiene profundas raíces en la formación de nuestro pueblo.

Asimismo el deporte de la Charrería no es solo servirse de las fuerzas del caballo o de domesticarlo, sino de educarle y describir la forma más bella de realizar, con creatividad individual cada una de las faenas del campo; se puede decir que es deporte-arte, porque es una actividad que se practica al aire libre y se debe estar en forma, y porque está rodeado de tradiciones mexicanas.

Para ellos debemos conocer mejor este orgullo por el único deporte nacional en México, es fundamental saber su historia y evolución a través de las diferentes épocas que marcaron la idiosincrasia de los mexicanos.

La Charrería, nace en las Haciendas, estas majestuosas construcciones del siglo XVI hasta el XIX; fueron mudos testigos del desarrollo de la ganadería y la agricultura, dando como resultado la evolución, trascendencia y crecimiento del hombre del campo para así convertirse en el charro mexicano. En sus extensos pastizales y potreros surgieron las suertes charras, estas nacen del trabajo rudo y continuo del campo hermanando, tanto a los ricos hacendados como a los caporales y mozos en el arte de florear la reata, o colear y lanzar un novillo, es así como se empieza a escribir la historia que en nuestros días conocemos como la Charrería.

Posteriormente al culminar la Revolución Mexicana, los hacendados y la gente del campo se trasladan a las grandes ciudades extrañando las faenas campiranas buscando sitios para practicarlas.

Es por eso que el 14 de Septiembre de 1919, nace en Guadalajara la Asociación de Charros de Jalisco y el 4 de Junio de 1921 la Nacional de Charros en la capital de la República, y es así que se convierten en las primeras asociaciones dando paso poco a poco a más en toda la República Mexicana

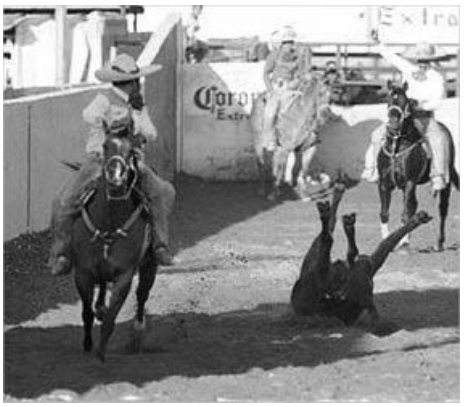
.



Tal importancia tuvo la presencia del charro mexicano como figura tradicional que el entonces presidente de la República Ing. Pascual Ortiz Rubio en 1931 estableció el "14 de Septiembre como Día Nacional del Charro" en honor de la Asociación de Charros de Jalisco. Asimismo hizo el decreto oficial, que el traje de Charro adquiriera el título del atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad. Para la Charrería el año de 1933 fue trascendental, ya que se emite un decreto presidencial por el General Abelardo L. Rodríguez, dándole el título de único deporte nacional.

Es así como el Charro se convirtió en un símbolo viviente de la mexicanidad, ya que a finales del siglo XIX, los charros se dieron a la tarea de perfeccionar y depurar las faenas, tratando siempre de ejecutar los lances con mayor grado de dificultad y con más estética, sin perder sus raíces.

Con los acontecimientos sucedidos, se empiezan a crear numerosos asociaciones en todo el país, se establece la Federación Nacional de Charros para garantizar la práctica organizada de este deporte, actualmente cuenta con colegio de jueces varonil y femenil, coordinación de locutores, delegada de escaramuzas, así como leyes, estatutos y reglamentos que rigen a los deportistas guardianes de esta tradición.



Es por eso que todas las innovaciones contribuyeron a hacer de la Charrería un espectáculo, el cual se transforma en deporte y hoy se practica como tal después de la Revolución Mexicana.

Actualmente la Federación forma parte de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), contando con 11,600 charros federados, quienes conforman las más de 668 asociaciones, además de las 1,750 integrantes de 177 escaramuzas hablando de un universo de 14,000 deportistas que hacen Charrería en México sin contar con los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México e Illinois, en donde también se practica la Charrería.

Como cualquier otro deporte, la Charrería tiene estatutos y reglamentos para que las suertes se ejecuten con precisión, belleza y se obtengan puntos y su misma Federación es la que vigila todo evento competitivo.

Pero fue hasta 1996, que se incorpora a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), y dando paso a formar parte del Fondo Nacional del Deporte, dejando asentadas la bases y firmando el convenio para iniciar las operaciones en beneficio de los socios de la Asociación.

La Charrería es catalogada como uno de los deportes más completos, puesto que se practica al aire libren, se divide en 9 suertes, llamadas así porque el éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad de la bestia con la cual se van a ejecutar, siendo una actividad en la que se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el movimiento del caballo, o al aplicar la fuerza de poder a poder con los animales que están siendo sometidos. Es un deporte que forja disciplina, se requiere dedicación, concentración y esfuerzo; y esto da como resultado un deporte limpio.

Asimismo es uno de los deportes más nobles ya que los Charros no reciben sueldo por actuar, y tienen que recorrer grandes distancias para hacerlo, y la aportación que el público da por presenciar una charreada, subsidia parcialmente los gastos de la misma, siendo que el saldo lo pagan los integrantes del equipo o a veces toda la asociación. Ahí estriba también la nobleza del deporte, pues arriesgan su integridad siempre, desde que comienza su relación con el caballo, quien no tiene palabra de honor por nada y menos en cuestión de temperamento. Por lo cual se dice que, en el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la eternidad.

Pero a pesar de todo lo que representa la Charrería para nuestro pueblo, en la actualidad no ha tenido la difusión y promoción para que se siga llevando a cabo este deporte, que a nivel internacional es muy apreciado.

No podemos permitir que los jóvenes de ahora, pierdan el sentido de la mexicanidad, debemos de fomentar la práctica con el fin de preservar nuestras raíces, tradiciones, usos, costumbres, idiosincrasia y nuestro acervo cultural.

Es por ellos que autoridades competentes deben impulsar nuevamente la Charrería, que en centros deportivos tengan cursos como cualquier otro deporte que se enseñe desde la niñez y que no solo se quede en un sector como en las Asociaciones Charras que son grupos más delimitados, que

realmente la Charrería pueda estar al alcance de todos.

Es tan importante la Charrería para los mexicanos por ser un gran atractivo para el público nacional y que por descuido no ha sido promocionado como debería serlo, de igual forma para los visitantes extranjeros que nos visitan en los principales centros turísticos. El deporte nacional por excelencia debe ser política pública por lógica, la federación en conjunto con los estados y municipios deben ser garantes de la promoción para que de una vez por todas se arraigue de forma tal que en lo futuro renazca ese mexicanismo que se nos extravía por causas de una globalización hoy imperante en el mundo entero.

Fomentar la Charrería, en todo el país como deporte nacional debe ser premisa de la CONADE, en primer lugar y del CPTM debe difundir en el mundo entero que la charraría es un atractivo a gozar. Además debe ser materia de innovación como atractivo a los turistas que nos visitan en las regiones de mayor influencia de visitantes internacionales.

Pero no solo es mantener y reforzar nuestra cultura de la Charrería ahí está ya de nueva cuenta renaciendo las cabalgatas por todo el país como símbolo de nuestra mexicanidad, pues sin las cabalgatas como lo registra bien la historia la revolución jamás habría triunfado.



Difundir y preservar nuestras más caras tradiciones y valores legados por nuestros ancestros; Cabalgar se ha convertido en un deporte nacional y en todo México es YA una de las grandes pasiones, por 10 que hoy orgullosamente ostentamos el privilegio de contar con la: la Gran Cabalgata Villista, es la cabalgata más grande y mejor organizada de la República Mexicana que año con año se lleva a cabo para conmemorar la fundación de Hidalgo del Parral y a la vez un aniversario más de la muerte del C. general de división Francisco Villa, todo dentro del marco de las ya famosas Jornadas Villistas que organiza la Presidencia Municipal de Parral en coordinación con Gobierno del Estado de Chihuahua, siendo esta Cabalgata la que inspiro a los hombres de a caballo en casi todos los estados de la república



En las cabalgatas se exalta el trabajo en equipo, se honra a nuestros símbolos patrios, se ama el entorno ecológico que nos rodea, así como la solidaridad y fraternidad que deben prevalecer en las filas. Estamos conscientes de que hay mucho por hacer en este evento deportivo-cultural turístico; por ello, nos hemos comprometido a trascender las

No es solo el atractivo marino o de playas lo que debemos mostrar a los que nos visitan, de igual forma los visitantes requieren atractivos extremos como el deporte de la Charrería, deporte blanco netamente mexicano, deporte de sumo grado de dificultad muy diferente a lo cuestionado por los ambientalistas en referencia a la fiesta brava.

Hoy en referencia a la Ley de la Administración Pública Federal le solicitamos a la CONADE y al CPTM que en la proyección del Presupuesto de Egresos de la Federaron con base en la Ley de Presupuesto Cuneta Publica y Responsabilidad Hacendaría Sustentable (PEF) destine en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 los recursos necesarios para el fomento de la Charrería, como deporte nacional sobre todo en aquellas regiones en las cuales el deporte de la Charrería se encuentra en pañales.

Es por eso que no podemos dejar a un lado la Charrería, que hoy por hoy sigue siendo la imagen de México y es el único Deporte Nacional por excelencia.

PUNTO DE ACUERDO

PREMERO.- Se exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Educación Publica y la Comisión Nacional del Deporte para que en base a la Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, destinen una partida especial en el Proyecto de Egresos de la Federación a partir del año 2010 para la construcción de la Escuela Nacional de Charraría.

SEGUNDO.- Se exhorta a las Comisión del Deporte, de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión para que en base a sus facultades constitucionales, analicen discutan y en su caso aprueben destinar recursos necesarios para fomentar en todo el país el deporte nacional "La Charrería" y las cabalgatas por ser estas, actividades de fomento al turismo para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

TERCERO.-Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a los gobernadores y presidentes municipales a conmemorar fielmente el día 14 de septiembre como Día Nacional de la Charrería.

CUARTO.- Se exhorta a los Congresos de los Estados a que destinen recursos económicos en la discusión y aprobación de sus Presupuestos Anuales recursos necesarios para el fomento y práctica del deporte nacional "La Charrería" y las cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad.

Atentamente,

SENADOR LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY

SENADOR SANTIAGO CREEL MIRANDA

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 10 de diciembre del 2009

DE LA SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AQUELLAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE PADECEN ALCOHOLISMO O FARMACODEPENDENCIA.



SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de la Directora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, informen a esta soberanía sobre las acciones realizadas en materia de supervisión y vigilancia de aquellas instituciones de asistencia social dedicadas a la atención de personas que padecen alcoholismo o farmacodependencia.

A t e n t a m e n t e,
SEN. MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA QUIROZ

Salón de la Cámara de Senadores,8 de Diciembre de 2009.

DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR Y SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL FRENE EL ALZA INDISCRIMINADA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA.



SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA EXHORTAR Y SOLICITAR A EL EJECUTIVO FEDERAL, FRENE EL ALZA INDISCRIMINADA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA, Y EXHORTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A APLICAR UN PLAN ESTABILIZADOR DE PRECIOS.

La manera de actuar del Gobierno Federal es un insulto a la población, han sido muchas promesas no cumplidas y a tres años de un gobierno impuesto, aún no se pueden percibir resultados; más aún si vemos la forma en que se manejan con los programas sociales que supuestamente son para todos los mexicanos, pero en realidad terminan siendo artimañas electoreras para un grupo ganarse la confianza de un grupo social en específico.

Esto en torno a los programas sociales como Oportunidades, que en la cobertura sé que son selectivos y los apoyos no llegan a los más pobres, además de que los programas son manejados de manera partidista, como se ha demostrado hasta el cansancio.

Sabemos que los factores son muchos como la recesión económica mundial, es verdad que fue provocada por factores externos y que fue iniciada en Estados Unidos, sin embrago, no se puede olvidar que nuestro país es uno de sus principales socios comerciales, razón primordial que ocasionó que los productos de la canasta básica elevaran sus precios de manera desmedida, golpeando fuertemente a la familia mexicana.

Esto lo podemos ejemplificar con los siguientes alimentos; la tortilla aumentó en un 8.22 por ciento en noviembre de este año en comparación con el mismo mes de 2008; el huevo 6.36 por ciento; y el pollo en piezas 8.66 por ciento. Es ya bien sabido por todos, que año con año la primera quincena del mes de enero, no solo sufrimos la ya famosa "cuesta de enero" sino también el alza en los precios de los productos.

Se espera un incremento en los precios de los artículos de la canasta básica, pero el Gobierno Federal no hace nada para frenar esta avalancha que se nos viene encima comenzando el próximo año, y a todo esto tendremos que sumar el aumento también de los impuestos y cargas tributarias que solo provocaran una mayor inflación para el pueblo mexicano.

Tan solo en el primer año del gobierno del señor Calderón, la canasta básica integrada por 42 productos ha subido de precio en 35 por ciento. Así, mientras en diciembre de 2006 una familia requería de $ 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos $ 1, 544.63 pesos.

En un reporte de julio de este año se encontró que entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza patrimonial en el país se incrementó de 42.6 %a 47.4%. [20] Desde que Calderón, llegó al poder, los mexicanos deben trabajar más para subsistir.

Pero el ejecutivo hace alarde de sus logros con un informe de los tres años al frente de uno de

[20] Milenio Calderón, tres años de desastre. 03-12-2009

los peores gobiernos que ha tenido este país, festejando con toda la oligarquía como tienen al país sumido en la pobreza. Es indignante que en la actualidad el 47.4% de la población vive en pobreza patrimonial; es decir, esos mexicanos tienen un nivel de ingreso menor a mil 900 pesos mensuales en las ciudades y menor de mil 200 en las zonas rurales.

En el país existe 18.2 % de personas que se encuentran en el nivel de "pobreza alimentaria"; es decir, que carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación diaria, mientras 47 % vive en situación de "pobreza patrimonial". Estas cifras son la realidad más cotidiana de un reflejo del declive del país y de cómo se viene a pique, con el que se demuestra la incapacidad del gobierno de resolver los problemas que tiene México.

En lo que va de estos gobiernos de derecha, México no sólo perdió liderazgo regional, sino que extravío el rumbo. Ya no somos potencia en nada, más que en corrupción, debido que la pobreza no se ha reducido, los servicios públicos no han mejorado, y tampoco se han creado empleos suficientes, dignos y bien remunerados.

Los siguientes productos son un claro ejemplo de que cada vez estamos peor, el precio de algunos de los productos que conforman la canasta básica:

PRODUCTO	2006	2007	(%)2006/2007	2008	2009	(%)2008/2009
ACEITE 1litro	$17.60	$25.90	47.16%	$18.00	$25.26	105.5%
ARROZ 1kg	$7.75	$10.89	40.52%	$12.00	$17.87	90%
AZUCAR 1kg	$22.46	$24.90	10.86%	$23.00	$25.00	9.25%
FRIJOL 1kg	$9.60	$18.00	87.50%	$12	$18.85	85%
HUEVO 1kg	$9.90	$15.99	60.54%	$19.50	$22.00	6.36%
TORTILLAS DE MAIZ 1kg	$6.00	$8.00	33.33%	$7.65	$9.00	8.22%
LECHE PASTEURIZADA 1 Litro	$7.90	$10.23	29.49%	$10.00	$11.00	1.3%
JAMON DE CERDO 1kg	$52.55	$53.00	0.86%	$56.00	$60.00	2.34%
CAFÉ SOLUBLE	$26.70	$27.50	43.33%	$29.00	$32.00	4.44%
PAN DE CAJA	$13.90	$21.10	51.80%	$21.00	$23.00	5.33%

Todas estas cosas son las que prometió el señor Calderón, al llegar, en el 2006 con una serie de promesas, que pareciera que en verdad cumpliría, o al menos eso pensaron quienes salieron a votar por él, las cuales son:

- Crear empleos bien pagados
- Reducir impuestos (ISR, IVA)
- Transparentar los impuestos que pagan
- Inversión del dinero (va a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo inversión en escuelas e universidades, inversiones en salud)
- Garantizar la estabilidad económica (para que los ciudadanos, puedan adquirir una casa, automóvil)

De lo anterior, nada se ha cumplido y por el contrario tenemos problemas serios con este tipo de aumentos que afectan cada vez más la economía de todos los mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente,

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades responsables, frenen el alza indiscriminada a todos los productos que conforman la canasta básica.

SEGUNDO.- Se solicita al Ejecutivo Federal haga un llamado a todos los partes que son responsables del aumento de precios de la canasta básica, frenen este aumento sin medida de dichos productos.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de Noviembre de 2009.

DE LOS SENADORES LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO Y HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPLICAR EL DECRETO PUBLICADO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN EL QUE SE INDICA EL CAMBIO DE TOPÓNIMO DE "ISLA CERRALVO" POR "ISLA JACQUES COUSTEAU".



SEN. LUIS COPPOLA JOFFROY



SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO



SEN. HUMBERTO ANDRADE QUEZADA

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E.

Los que suscriben, **Luis Alberto Coppola Joffroy**, **Sebastián Calderón Centeno y Humberto Andrade Quezada**, Senadores de la República a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, expliquen ampliamente el decreto publicado en el diario

Oficial de la Federación del 17 de noviembre del 2009 en el que se indica el cambio de topónimo de "Isla Cerralvo" por "Isla Jacques Cousteau" de igual forma recordamos los 150 años del Tratado McLane-Ocampo que México y los Estados Unidos de Norteamérica firmaron el 14 de diciembre de 1859 en el Puerto de Veracruz; y finalmente se exhorta a la Secretaría de Gobernacióna que envíe a esta Soberanía, la lista de islas, islotes y cayos que conforman el territorio insular mexicano y que se encuentran bajo la jurisdicción federal. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos encontramos en la antesala de grandes conmemoraciones sobre importantes sucesos históricos que han marcado un "parteaguas" en la vida jurídica y política de México: el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, que representan espacios para la crítica y la reflexión sobre las metas logradas y los retos que aún enfrentamos en todos los ámbitos sociales.

Este 14 de diciembre se conmemoran 150 años de haber celebrado el famoso y legendario Tratado McLane-Ocampo el cual se suscribió en el año de 1859, en el puerto de Veracruz, formalmente conocido como Tratado de Tránsito y Comercio en el que fue un acuerdo entre los Estados Unidos y México.

Robert McLane era Ministro enviado por el Gobierno de James Buchanan Presidente de los Estados Unidos y Melchor Ocampo, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Liberal Mexicano que dirigía Benito Juárez. Dicho Tratado contiene 11 artículos y dos convencionales**.**

Se debe tener presente que los Tratados Internacionales que ha realizado México, independientemente del contexto que se esté viviendo, siempre deben ser productivos y benéficos para el bienestar y desarrollo del País.

No es deseable que nuestro país acceda a este tipo de Tratados como el Acuerdo McLane-Ocampo, en cuya exposición de motivos quedó especificado que se concesionaba por tiempo indefinido, el sistema insular de Bahía Magdalena en la cual pretendían guardar estratégicamente sus flotas marinas.

Este Tratado otorgaba a "perpetuidad" derechos de tránsito, es decir derechos permanentes que cedía el Estado Mexicano a los Estados Unidos de Norteamérica. Por fortuna, este documento jamás fue ratificado por el Senado estadounidense y por lo tanto, no se llevó a cabo.

En efecto, se está cumpliendo el 150 aniversario de lo que pudo significar la anexión por parte de los EE.UU. a su territorio, la Península de Baja California en la que se encuentran más de cuatro mil Km de litoral, sumando por supuesto lo que significa la riqueza marina del mar de Cortes y el Océano Pacifico.

Pero ese no es el único intento por atacar la soberanía mexicana, con el consentimiento de los propios mexicanos. El Estado de Baja California Sur tiene un sin número de Islas tales como: Cerralvo -*hoy isla Jacques Cousteau*-, Coronado, Danzante, Del Carmen, Espíritu Santo, Monserrat, La Tortuga, San José, San Benito, San Esteban, San Marcos, Magdalena y Margarita, entre otras. Respecto a las Islas Magdalena y Margarita, el Gobierno de Baja California Sur pretende enajenarlas. Tiempo atrás, el Presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras "Puerto San Carlos ", Filiberto Beltrán Peralta denunció que el Inversionista Luis Raymundo Cano Hernández pretendía adueñarse de la Isla Magdalena, municipio de Comondú, Baja California Sur, mediante "argucias legaloides y en contubernio con las autoridades estatales y municipales".

En El año 2008, el hoy Diputado Federal Marcos Covarrubias Villaseñor, en ese entonces alcalde del municipio de Comondú, Baja California Sur, apoyaba para que se vendiera la isla. Puesto que ésta es considerada como la tercera zona productiva de enormes potenciales pesqueros en el mundo, ya que posee especies marinas riquísimas, además de una reserva natural

impresionante.

No es posible que se concesionen dichas Islas toda vez que son exclusivamente de administración federal y no están contempladas para la administración estatal, mucho menos por un municipio.

En efecto, el artículo 48 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que: "Las Islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados." Gracias a este artículo ninguna persona poseerá títulos privados de las islas, porque pertenecen a la Nación.

Un caso muy reciente fue el pasado 26 de agosto de 2009, cuando el político y empresario Gastón Alegre López, se hizo dueño de la isla Tizikipal, Tizipal o Ziquipal ubicada en el Estado de Quintana Roo, con una superficie de 91 mil 803 m^2 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo al legislador, es decir se la quitó porque éste reclamaba la propiedad y la cedió a favor del Gobierno Federal. Por lo tanto, las Islas son propiedad de la nación y dependerán directamente del Gobierno Federal.

En otro hecho inédito, el 17 de noviembre de 2009, se publica en el Diario Oficial de la Federación el cambio de nombre de la "Isla Cerralvo" de Baja California Sur por el de "Isla Jacques Cousteau", sin justificación alguna, por lo que manifestamos nuestro rechazo rotundo.

Si bien es cierto que el Oceanógrafo de origen francés Jacques-Yves Cousteau realizó importantes expediciones a lo largo y ancho del Mar de Cortés, al cual definió como "*el acuario del mundo"* debido su gran biodiversidad, "Isla Cerralvo" es sinónimo de identidad para el pueblo sudcaliforniano.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, por conducto de las Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, de acuerdo a sus competencia remitan a esta Soberanía, de manera veraz, precisa y expedita las motivaciones que generaron el cambio de topónimo de "Isla Cerralvo" a "Jacques Cousteau", isla localizada en el Golfo de California y/o Mar de Cortés anulando el Tratado o convenio que generó dicha denominación.

SEGUNDO.- Se formula atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, con el objeto de que envíe a esta Soberanía, la lista de islas, islotes y cayos que conforman el territorio insular mexicano y que se encuentran bajo la jurisdicción federal, así como aquéllas que se encuentren bajo la jurisdicción de alguna Entidad Federativa.

Dado en el pleno del Senado de la República a los 7 días del mes de diciembre de 2009.

ATENTAMENTE

Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy

Presidente de la Comisión de Turismo

Sen. Sebastián Calderón Centeno

Presidente de la Comisión de Marina

Sen. Humberto Andrade Quezada

Presidente de la comisión de Población y Desarrollo

DEL SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE CHIAPAS A TRANSPARENTAR Y GARANTIZAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y EL APEGO A LA LEGALIDAD EN EL CASO DE DIVERSAS PERSONAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS.



SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE, A TRAVÉS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA ESTATAL, TRANSPARENTE Y GARANTICE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y EL APEGO A LA LEGALIDAD EN EL CASO DE DIVERSAS PERSONAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

El que suscribe, **ADOLFO TOLEDO INFANZÓN**, Senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Senado de la República, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La seguridad pública es un servicio de carácter público, cuya prestación debe realizarse en el marco del respeto de las garantías individuales establecidas en la constitución. Tiene por objeto mantener el orden público, proteger la vida e integridad de las personas, así como sus bienes y derechos; investigar, perseguir los delitos y administrar justicia para la sanción.

La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con procedimientos claros y eficaces. La necesidad de certidumbre social acerca de la aplicación de la ley nos circunscribe a asegurar la transparencia en los procedimientos por parte de las autoridades encargadas.

En este sentido, traemos a esta tribuna, el caso de Jaime Sántiz Gómez, Andrés Reyes Cruz, Horacio Sánchez, Onésimo López Sánchez y Tito Sántiz Gómez, mexicanos, avecindados y funcionarios del municipio de Oxchuc, Chiapas; quienes enfrentan acusaciones por delitos de orden constitucional, rebelión, acopio de armas, asociación delictuosa y que están a cargo de la Fiscalía Especial para Asuntos Relevantes de la Procuración de Justicia del Estado de Chiapas.

El caso pudiese ser uno más, sin embargo lo reviste de importancia el hecho de que pareciera ser que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas intenta fincar sanciones y acciones penales teniendo como base jurídica un panfleto anónimo. Para ejercer acción penal, debe acreditarse el cuerpo del delito y necesariamente ajustarse a los requisitos esenciales del procedimiento jurídicos.

Se exigen criterios de legalidad, de objetividad, imparcialidad, certeza equidad e independencia de intereses particulares. Hasta el momento, la integración de la Averiguación Previa carece de elementos materiales y formales y los acusados desconocen el origen de las atribuciones de la presunta conducta ilícita.

La Procuraduría Estatal está obligada a probar los hechos para no corresponder y alimentar la incertidumbre y desconfianza de que el actuar de la entidad encargada de procuración de justicia en Chiapas, sigue y responde a fines meramente políticos.

La Sociedad necesita instrumentos institucionales de garantía de justicia, de no haber claridad en este proceso, el retroceso a la marcha del Estado de Derecho concurriría a una realidad y un hecho consumado.

Sin duda alguna el acto aquí planteado sugiere violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Por tal razón, con el objeto de fortalecer y dar claridad a la impartición de justicia, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas para que, a través de la Procuraduría General de Justicia estatal, transparente el caso de Jaime Sántiz Gómez, Andrés Reyes Cruz, Horacio Sánchez, Onésimo López Sánchez y Tito Sántiz Gómez, mexicanos, avecindados y funcionarios del municipio de Oxchuc, Chiapas, acusados de manera irregular por diversos delitos; al tiempo de garantizar la impartición de justicia y el apego a la legalidad.

A t e n t a m e n t e,
SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZÓN

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 08 de diciembre de 2009.

DEL SEN. RICARDO TORRES ORIGEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A NO INCLUIR A LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN LA NEGOCIACIÓN DE UN EVENTUAL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.



SEN. RICARDO TORRES ORIGEL

SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores
de la LXI Legislatura
Presente:

RICARDO TORRES ORIGEL, Senador de la República e integrante del **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional** en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con **Punto de Acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía de la Administración Pública Federal, a no incluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil**, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como todos sabemos, los tratados internacionales, incluyendo los que son en materia económica, son convenios celebrados por nuestro país con otro. Dichos tratados deben ser aprobados por el Senado y se convierten en Ley Suprema de toda la Unión, cuando estén de acuerdo con la misma.

En este sentido, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, inicia una serie de negociaciones con su contraparte. Precisamente, esta Cámara le requiere al inicio de cada periodo ordinario un informe sobre el inicio y otro sobre el

resultado final de las negociaciones formales de un tratado.

Los objetivos generales que esta Cámara debe observar para la aprobación de un tratado, de acuerdo con el artículo 3º. de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, son:

I.- Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana;

II.- Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país.

III.- Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV.- Contribuir a la diversificación de mercados;

V.- Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país, y

VI.- Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de nuestro país.

Asimismo, la fracción VI del artículo 4º. de la misma Ley, contempla que en la aprobación de un tratado, se tendrá que prever que las normas de los mismos consideren las asimetrías, diferencias, desequilibrios así como las medidas correspondientes para compensarlas.

En este momento, la Secretaría de Economía está consultando a diversos sectores industriales del país para iniciar negociaciones de un eventual tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil. Por lo que se deben analizar los beneficios y ventajas que se esperan obtener, en especial en la industria del calzado.

Brasil es una economía dinámica que está enfrentando frontalmente a la crisis económica internacional. Como parte de sus políticas de crecimiento, se encuentra el alza de aranceles y la disminución de impuestos como medidas contracíclicas.

En el caso particular de la industria del calzado, existen fuertes asimetrías entre la industria brasileña y la mexicana:

- El tamaño de cada industria.
- La importancia de las exportaciones.
- La diversidad de mercados.
- La diversificación de mercancías exportadas.
- La penetración en los mercados internacionales.
- El grado de penetración de las importaciones en el mercado doméstico.
- La existencia de incentivos.
- Las subvenciones para la exportación.

Brasil ya tiene una fuerte presencia en nuestro mercado. Mientras que México, por otro lado, apenas tiene una muy, pero muy discreta presencia en el mercado brasileño del calzado.

Con base en un ejercicio de estática comparada ordenado por los industriales del Calzado con cifras de la Secretaría de Economía, un tratado de libre comercio con la República Federativa de Brasil daría, con relación a la industria del calzado, resultados como los siguientes:

Brasil incrementaría sus exportaciones a México, debido a una mejora competitiva de sus precios con relación a los de los otros exportadores, dándose desviaciones en los flujos de comercio. Esto favorecería a los industriales brasileños respecto a los demás exportadores y a los fabricantes mexicanos.

Por el contrario, México no incrementaría sus exportaciones a Brasil como resultado de una baja arancelaria. Sí en cambio agravaría la tendencia actual en la que México está disminuyendo sus exportaciones, aumentando las importaciones y disminuyendo la producción nacional.

Como apoyo de lo anterior, doy los siguientes ejemplos:

a) Con relación a la partida 6401 – Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por

medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera - , los precios mexicanos no son competitivos;

b) Respecto a las partidas 6402 – Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico - y 6404 – Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil -, los precios mexicanos sí son competitivos, pero hay razones ajenas a los mismos que limitan las exportaciones mexicanas y;

c) Finalmente, en lo tocante a la partida 6403 – Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural -, México podría exportar, pero requeriría establecer precios similares a los observados hace cuatro años.

Una política de apertura comercial indiscriminada, multilateral o bilateral, que no se acompaña de una política industrial sectorial, ocasionará efectos negativos para la industria. Por lo que antes de realizarla, se debe acordar, definir y aplicar una política industrial de desarrollo que enfrente y aproveche dicha apertura.

Tienen que realizarse negociaciones sectorizadas que reconozcan las características particulares de cada industria, no una negociación general.

La industria del calzado no mejorará sus condiciones con este Tratado. Pero sí podrá agravarlas, dadas las condiciones económicas del país pudiendo generar un incremento del desempleo en este sector de la industria nacional, que da empleo a un número considerable de mexicanos.

Es así que propongo que esta Cámara exhorte respetuosamente a la Secretaría de Economía de la Administración Pública Federal, para que la industria del calzado quede fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía de la Administración Pública Federal, a no incluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil, por las fuertes asimetrías que existen entre ambas industrias, que causarían un impacto negativo en la industria del calzado nacional.

México Distrito Federal, a 7 de diciembre del 2009

SENADOR RICARDO TORRES ORIGEL

DEL SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR LOS HECHOS DE AGRESIÓN OCURRIDOS EN CONTRA DE UN GRUPO DE EXTRANJEROS CUBANOS ASEGURADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.



SEN. FRANCISCO HERRERA LEÓN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS DE AGRESIÓN OCURRIDOS EN CONTRA DE UN GRUPO DE EXTRANJEROS CUBANOS ASEGURADOS EN LA DELEGACIÓN MIGRATORIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

El suscrito **FRANCISCO HERRERA LEÓN**, Senador de la República en la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución con base en los siguientes:

Antecedentes

El pasado veintisiete de noviembre, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro (CEDH), denunció las agresiones violentas cometidas por los custodios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como del Delegado Estatal de ese órgano descentralizado, hacia un grupo de cubanos indocumentados asegurados en la Estación Migratoria de esa Entidad.

Los hechos provocaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibiera una llamada y se presentaran en el lugar, constatando que uno de los extranjeros cubanos fue severamente golpeado por un funcionario del Instituto, otro fue trasladado al hospital un día después, por intento de suicidio, toda vez que ante el temor de ser deportado se cortó las venas, y una mujer embarazada por sufrir una crisis nerviosa fue trasladada también un día después de los hechos al Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer del Estado.

Por otra parte la visitadora de la CNDH, denunció en una entrevista para medios públicos, que el día dos de diciembre, el personal del Instituto Nacional de Migración de Querétaro, no le permitió ponerse en contacto con los extranjeros cubanos, pese a existir un Convenio que permite el libre paso de la Comisión.

De ser ciertos los hechos se estarían transgrediendo todas sus garantías de derechos humanos, por lo que la siguiente propuesta tiene la finalidad de que se realice la investigación correspondiente, y poder determinar cual fue la situación que orilló a que se presentaran los acontecimientos, que hasta el momento es difícil determinar si se trata de un acto de abuso de autoridad de parte de los encargados de la Delegación Migratoria de ese Estado.

Compañeros legisladores,

Este tipo de actos, violaciones, agresiones y vejaciones hacia migrantes, no es nuevo, y son del conocimiento público por testimonios, entrevistas periodísticas que dejan de manifiesto la brutalidad de la que son objeto, de tal manera que resulta indignante que ante reiteradas recomendaciones al Instituto Nacional de Migración, se sigan presentando estas situaciones.

Por lo antes expuesto se pone a consideración de esta Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta los hechos ocurridos el pasado 27 de noviembre en la Delegación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Querétaro, y exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración, se investiguen los hechos de agresión y de presunta violación a las garantías individuales y derechos humanos de un grupo de cubanos asegurados en la Delegación migratoria en el Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través del Instituto Nacional de Migración, para que emita un informe puntual sobre el resultado de las investigaciones de los hechos señalados en el anterior resolutivo.

Senador Francisco Herrera León

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 8 de Diciembre de 2009.

DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD, EN PARTICULAR EN LA REGIÓN COSTERA E INSULAR DEL ESTADO DE CAMPECHE.



SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE SE ADOPTEN MEDIDAS INMEDIATAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD, EN PARTICULAR EN LA REGIÓN COSTERA E INSULAR DEL ESTADO DE CAMPECHE, A CARGO DE LA SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

La suscrita, C. **CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ**, Senadora de la República de la LXI Legislatura por el Estado de Campeche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El calentamiento del sistema climático es un fenómeno antropogénico, sobre el cual sólo algunos aún ponen en duda su veracidad y gravedad. La evidencia científica disponible advierte que el calentamiento global significará un aumento en la temperatura del planeta, con mayor probabilidad, de entre 1.1 a 4.5 grados centígrados, y consecuencias múltiples en los sistemas físicos y biológicos.

Se trata de un fenómeno global que implica un nivel de riesgo elevado ahí donde existe una probabilidad de eventos catastróficos y de efectos de retroalimentación negativa. Los expertos advierten que el cambio climático tiene impactos significativos, crecientes y no lineales en el tiempo; y, por ello, es necesario evitar pérdidas irreversibles y administrar apropiadamente el riesgo de un evento catastrófico, e identificar los niveles de riesgo aun cuando algunos de estos eventos tengan una probabilidad relativa de ocurrencia.

Las consecuencias para México son ciertamente heterogéneas por regiones, pero todas las estimaciones muestran que las consecuencias económicas negativas superan el valor de cualquier ganancia temporal en el corto y largo plazo, y que existen claros límites de tolerancia a los efectos del fenómeno climático.

Se trata, entonces, de un fenómeno continuo y de largo plazo, y que representa un nivel elevado de incertidumbre y riesgos inherentes, en particular para las regiones del país de mayor vulnerabilidad como son las zonas costeras.

En concordancia, con lo anterior, reciente pero también tardíamente, el gobierno federal ha reconocido en el marco del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, que “el cambio climático constituye el principal desafío ambiental global de este siglo, y que representa, a mediano y largo plazos, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano…, (así como) una oportunidad para impulsar el desarrollo humano sustentable”.

El problema, sin embargo, es que en éste como en otros temas, el futuro ya nos alcanzó, sin que hasta el momento tengamos un diagnóstico claro de cual será la afectación en diversos ecosistemas costeros e insulares del país, y que medidas debieran tomarse frente a eventuales riesgos.

México tiene un litoral de más de 11 mil 500 km2, con una superficie de 357,795 km2 de plataforma

continental y una zona económica exclusiva de 21 millones 946 mil 825 km2. Las lagunas costeras tienen una extensión de 1 millón 500 mil hectáreas[21]. En esa vasta extensión se asientan poblaciones, desarrollos turísticos y actividades económicas de diverso tipo, respecto a las cuales ya deberíamos tener una evaluación al menos aproximada del impacto que tendrá el cambio climático sobre ellas y lo que habría que hacer para contrarrestarlo.

Quienes vivimos en zonas costeras sabemos de la preocupación de la gente por fenómenos que se han recrudecido y que causan inquietud, como el ascenso del nivel del mar, que se asocia a la incidencia en la erosión, la inundación y la salinización de las tierras, de aguas superficiales y del manto freático, además de conllevar la pérdida de áreas de playas, e implicar costos más elevados para proteger y mantener las fronteras marítimas.

No sabemos aún con suficiente nivel de certeza cuales serán los efectos del cambio climático en la producción y la seguridad alimentaria, pues la combinación de cambios en la temperatura y el declive en las precipitaciones pluviales, está repercutiendo en la productividad agrícola y la actividad pesquera de muchas regiones del país. ¿Nos estamos acercando al tiempo en que los cambios ambientales tengan repercusiones en los sistemas sociales y políticos, en tanto que se afecta los medios tradicionales de subsistencia de la población, así como las capacidades de los gobiernos locales para promover condiciones que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de la población?

No parece que se estén realizando las acciones que vayan preparando las respuestas del Gobierno Federal, y en consecuencia de los gobiernos locales, ante el advenimiento del cambio climático, que constituye una creciente preocupación mundial. No sabemos, por ejemplo, cuales podrían ser los efectos en la salud pública, dado la mayor presencia de agua por las inundaciones cada vez más frecuentes, con el consecuente aumento de las enfermedades que ya parecían estar erradicadas, como las epidemias de malaria y dengue, recientemente han recrudecido en el país.

[21] Datos del Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT.

O si la alta incidencia de enfermedades respiratorias pueden atribuirse a las variaciones de temperatura, así como las enfermedades vinculadas a la contaminación del agua, e impactos indirectos que se manifiestan en enfermedades infecciosas, estomacales y de la piel, así como casos de deshidratación.

Se sabe que existe una fuerte correlación entre el alza de la temperatura, la elevación del nivel del mar y un aumento en la intensidad y multiplicación de los huracanes, con consecuencias devastadoras para la infraestructura urbana y rural, y las condiciones de vida de la población, en las zonas costeras.

Eso trae aparejados daños a la arquitectura histórica y cultural, y a la infraestructura turística de muchos destinos del país, como consecuencia del aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, así como cambios en la biodiversidad terrestre y marina de las regiones que, entre otros efectos, implica la pérdida de atractivos naturales.

Este alarmante panorama ambiental, exige una acción inmediata y de mediano y largo plazo que reduzca el impacto económico, social y ambiental del cambio climático; a través de estrategias de mitigación y adaptación al fenómeno ambiental y sus diversas consecuencias.

Por ello, se propone urgir al gobierno federal a apurar el cumplimiento de los diversos objetivos y metas considerados en el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012; en particular en lo relativo a los estudios locales sobre “disminución de riesgos y amortiguamiento de impactos de los ecosistemas acuáticos continentales, costeros y marinos”; la elaboración de Atlas de Riesgos de las entidades federativas; los mapas de la estructura regional de la población expuesta a riesgo; el fortalecimiento de las acciones en materia de protección civil que se desarrollan en sistemas insulares, entre otros aspectos de relevancia inmediata para los estados costeros del país.

En aquellas entidades donde es y ha sido intensa la actividad de la industria hidroeléctrica o de los hidrocarburos –como es el caso de Campeche, y en especial de Ciudad del Carmen- deben realizarse acciones inmediatas de mitigación por

parte de PEMEX y CFE, así como el cumplimiento estricto de las atribuciones que legalmente corresponden a la Profepa, Sedesol, Semarnat, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), en la observancia de las normas y leyes ambientales.

Debo referirme es especial a la zona de Ciudad del Carmen, por una razón primordial: De su zona costera, en la Sonda de Campeche, aún se extrae más del 70 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos y hoy, que esa producción esta en franco declive, es necesario que desde una perspectiva nacional, se prevea qué va a suceder con esa región cuando el petróleo se acabe.

No solo en términos de remediación ambiental, sino por los efectos que el cambio climático podría traer a una zona que ha sido afectada por partida doble: primero, por la febril actividad petrolera, misma que durante muchos años restringió la actividad pesquera -que antes fue la principal actividad económica de la región- y hoy, con el declive, se retirará en una circunstancia en que las cosas no podrán volver a su estado anterior.

Por eso considero que no se trata únicamente de un problema local, sino que tiene que enfocarse en la dimensión nacional que tiene, como seguramente otras entidades y localidades de la costa del Golfo de México, en situación similar. Es por esa razón que es necesario que, en el ámbito de las estrategias de adaptación local al fenómeno del cambio climático, se considere el financiamiento de acciones para desarrollar infraestructura de mitigación de los impactos climáticos; así como estrategias de reubicación de actividades económicas y núcleos de población que se encuentran en riesgo potencial.

En el sector agrícola, se propone la adopción urgente de sistemas de control de plagas y enfermedades; la promoción de esquemas de riego para regiones áridas cultivadas, y hacer accesibles a los productores los seguros agrícolas y pecuarios basados en índices meteorológicos.

Asimismo, en materia de salud pública se sugiere reducir el riesgo de la población más sensible a los impactos climáticos.

En suma, esta proposición con punto de acuerdo urge al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, se adopten medidas inmediatas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad**.** Porque, efectivamente, el futuro ya nos alcanzó también en materia de vulnerabilidad del país y sus regiones costeras e insulares a los efectos del cambio climático. Cuestión que subraya el valor de la participación de México en la próxima conferencia internacional sobre cambio climático a celebrarse en Dinamarca, e imprime un sentido de urgencia a las políticas públicas que se implementen a nivel nacional y de las entidades federativas para revertir los efectos económicos, sociales y ambientales del cambio climático.

Es por las razones expuestas, que solicito a esta asamblea la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya la creación de un Fondo Especial para la Investigación y Diagnóstico de la situación del cambio climático en México, a fin de desarrollar políticas públicas coordinadas entre las diferentes dependencias y organismos del Gobierno Federal, con el propósito de prevenir, planear y, es su caso, modificar los planes de desarrollo en las zonas susceptibles de afectación por el cambio climático, en coordinación con los gobiernos locales.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en coordinación con los gobiernos de los estados con litoral marítimo, se adopten medidas inmediatas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad.

A t e n t a m e n t e,

_____

SEN. CARMEN GUADALUPE FONZ SÁENZ

Salón de Sesiones del Senado de la República, 7 de diciembre de 2009.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE FEDERALISMO

CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN A CELEBRARSE EL PRÓXIMO JUEVES 10 DE DICIEMBRE.



SEN. MELQUIADES MORALES FLORES

COMISIÓN DEL FEDERALISMO
SEN. MELQUIADES MORALES FLORES
PRESIDENTE

LXI - CF/PC/1-027

Diciembre 7 del 2009

Dr. Arturo Garita Alonso
Secretario General de Servicios Parlamentarios
del Senado de la República
P r e s e n t e

Por instrucciones del Sen. Melquiades Morales Flores, Presidente de la Comisión del Federalismo, me permito informar a usted que por cuestiones de agenda, la 2ª Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, programada para el día 9 de diciembre del presente, **fue diferida para el próximo jueves 10 de diciembre del presente, a las 8:45 hrs, en la Sala 4, ubicada en el 5° piso de la Torre del Caballito.**

De ahí mi atenta súplica de que se sirva tomar nota del cambio de fecha y horario, así como las previsiones necesarias para que, como lo habíamos solicitado, se incluya en la Gaceta del Senado del próximo martes 8 de diciembre, la siguiente:

CONVOCATORIA

El Sen. Melquiades Morales Flores, Presidente de la Comisión del Federalismo, convoca a todos los integrantes de la Comisión a la **"2ª Sesión Ordinaria de Trabajo"** que tendrá lugar en la **Sala 4, del 5° piso de la Torre del Caballito, el próximo jueves 10 de diciembre del presente, en punto de las 8:45 hrs.**

Agradecido por su gentileza le protesto mi consideración atenta y distinguida.

Lic. Eliseo Rangel Gaspar
Secretario Técnico

AV. PASEO DE LA REFORMA # 10, TORRE CABALLITO, PISO 5, OFICINA 15,
COL. TABACALERA, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06030 MÉXICO D.F.
TELÉFONO: 5345-3000 EXT. 3305



Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.